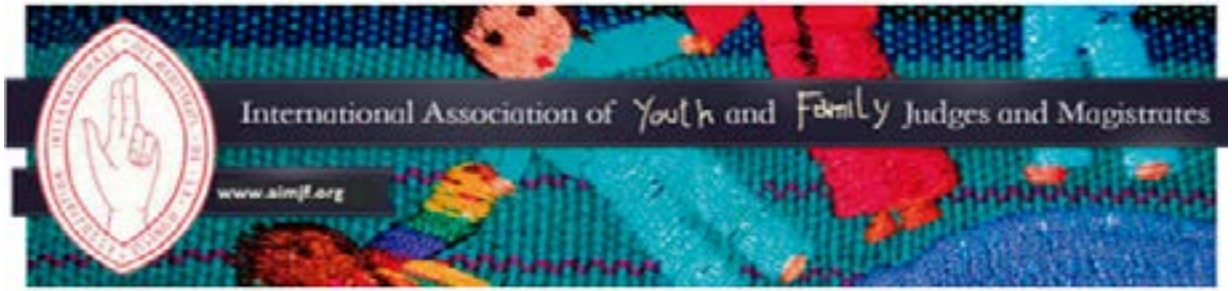


INTERNATIONAL ASSOCIATION OF YOUTH
AND FAMILY JUDGES AND MAGISTRATES

THE CHRONICLE

2020 | #1

ESPAÑOL FRANÇAIS ENGLISH

SUMARIO

1. EDITORIAL – Eduardo Rezende Melo, Editor en Jefe

2. ESTUDIO PROFUNDIZADO: BUENAS PRACTICAS EN JUSTICIA JUVENIL Y RESTAURATIVA

2.1 ABORDAJES TEÓRICOS

2.1.1. Debido proceso y justicia para adolescentes, avances y agenda pendiente en México. Por Alicia Azzolini – México

2.1.2. Conferencias de facilitación: un medio alternativo de resolución de conflictos para la justicia criminal aplicada a niños y niñas. Por Nancy Moreau – Canada

2.1.3. Cuando un/a joven compensa su ofensa involucrándose en la comunidad a través de un "enfoque justo. Por Marie-Eve Lamoureux y Mathilde Martin, Equijustice – Canada

2.1.4 La práctica de socio-educación con adolescentes y jóvenes en Jardim Angela /SP, Brasil. Por Alcimar Neves Antônio, Claudineia Rodrigues Marques Silva, Gabriela Benedicto de Morais, Joel Costa Rodrigues, Sandro Alves Dias, Suzana Gomes dos Santos – Brasil

2.1.5. Aplicación de la aproximación restaurativa en la práctica judicial macedonia en procedimientos criminales contra niños y niñas. Por Olja Ristova – República de Macedonia del Norte

2.1.6. Justicia Restaurativa Juvenil: Sudáfrica, Namibia Y Zimbabue. Por Julia Sloth-Nielsen (Sudáfrica)

2.1.7. Comentario General número 24 del Comité de los Derechos del Niño, de septiembre 19 de 2019. Reemplazando el Comentario General número 10 del 2007. Por Marta Pascual – Argentina

2.1.8. Estudio global sobre jóvenes privados/as de su libertad

2.2 COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

2.2.1. ¿Por que causa polémica la decisión del Supremo Tribunal Federal - STF que impide el hacinamiento en la reclusión de menores? Por Brigitte Remor De Souza May – Brasil

3. TEMAS DE INTERÉS GENERAL

3.1. Evidencia forense en procedimientos de protección de niños/as. Por Peter Johnstone - Australia

3.2. Consideraciones sobre vínculos de parentesco en casos de custodia juvenil. Por Ken Lewis - EUA

3.3 El laboratorio interdisciplinario de investigación en derechos del niño/a: una plataforma para el intercambio y la reflexión. Por Mona Paré - Canadá

4. ACCIONES DE PERFECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA DE JUVENTUD Y FAMILIA

4.1. La importancia de la formación judicial sobre el Derecho de la UE como solución no legislativa para la protección de los derechos de los niños. Por Wojciech Postulski – Unión Europea

4.2. Encuesta sobre la formación especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes – resultados preliminares. Por Eduardo Rezende Melo (Brasil)

5. EXPERIENCIA ASOCIATIVA DE JUECES Y MAGISTRADOS Y SU IMPACTO EN LA GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES

5.1 Fortaleciéndose y moviéndose adelante juntas: el rol de las asociaciones judiciales en la era moderna. Por John Lowndes - Australia

5.2 La Actividad de la Asociación de Jueces de Familia en Polonia. Por Magdalena Arczewska - Polonia

6. NUEVAS PUBLICACIONES BIBLIOGRÁFICAS

6.1. Derechos fundamentales y el interés superior del niño/a en familias transnacionales

6.2. Pluralidad y diversidad de las relaciones de familia en Europa

6.3. Derechos constitucionales del niño/a en países nórdicos

6.4. Derechos del niño/a y obligaciones en la ley canónica

6.5. Violencia contra jóvenes en el sistema de justicia juvenil

7. NOTICIAS DE LA AIMJF– LAS ACCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO

7.1. México – Congreso de la Red Nacional de justicia penal para adolescentes. Septiembre 2019

7.2. Visita de Estudio a San Pablo, Brasil – 4 a 6 de Noviembre de 2019

7.3. Celebración de los 30 Años de la Convención en Ginebra, Suiza – 18 a 20 de Noviembre de 2019. Por Andrea Santos Souza

7.4. Organización de visita de estudios a Londres, Inglaterra – junio de 2020

8. NOTICIAS REGIONALES DE LA AIMJF

8.1. Reunión de la sección europea de la AIMJF - 4 de Octubre de 2019, Skopje, Macedonia del Norte. Por Aleksandra Deanoska

8.2. Fortaleciendo alianzas en África – Por una Sección Regional de la AIMJF – Conferencia en la Ciudad del Cabo – Sudáfrica – Sudáfrica – marzo 2020

9.AGENDA DE EVENTOS

9.1 Master en derecho - estudios avanzados en derecho internacional de la infancia y adolescencia - Universidad de Leiden

9.2. Escuela de verano sobre fronteras de los derechos de los niños - Universidad de Leiden

9.3. ESPECIALIZACIÓN Y CURSO INTERNACIONAL INFANCIAS Y JUVENTUDES – CLACSO

9.4. Especialización y curso internacional infancias y juventudes – CLACSO

10. RUBRICA DE LA TESORERA

11. RUBRICA DE CONTACTOS

12. LA CRÓNICA - EL COMITÉ EDITORIAL

1. EDITORIAL

Eduardo Rezende Melo[1]
Editor en Jefe de la Crónica

Esta edición de la Crónica llega un mes después como una estrategia deliberada para garantizar una mejor participación de los miembros. Percibimos que la distribución de la Crónica en julio, con una llamada por nuevos artículos en pleno verano norteño, limitaba la participación de muchos miembros. Por su parte, la difusión en enero coincidía con las vacaciones de verano del hemisferio sur. Decidimos, así, cambiar las fechas límite para envío de artículos, para mediados de mayo, con publicación prevista en agosto; y para fin de octubre, con publicación prevista para febrero. Esperamos que esto facilite la participación de todos y todas!

El tema de profundización de estudios de esta edición son las buenas prácticas en la justicia juvenil y en la justicia restaurativa.

En este campo tenemos tres grupos de artículos. El primero es más dedicado a la justicia juvenil y estrategias de perfeccionamiento inter-institucional.
La profesora Alicia Azzolini, de México, analiza el impacto de la nueva legislación de su país, con una impresionante reducción en el número de adolescentes privados de libertad en consecuencia de la adopción del sistema acusatorio oral y de diferenciación de grupos etarios y de las medidas que se les puede aplicar. Analiza, también, la agenda pendiente de perfeccionamientos por realizar.
Tenemos acá también el interesante artículo de la jueza Nancy Moreau, de Canadá, que presenta la experiencia de las conferencias de facilitación como estrategia para disminuir el tiempo de duración de los procesos, antes inclusive de las audiencias de negociación (plea bargaining) con elevados índices de solución.
Marie-Eve Lamoureux y Mathilde Martin presentan el trabajo de la organización Equijustice, también en Canadá, dedicada a implementar las medidas de reparación a la comunidad y trabajos benevolentes por los adolescentes, exponiendo las estrategias y metodologías que les llevan a sus buenos resultados.
El equipo de medidas socioeducativas de Jardín Angela, un barrio en la periferia de la ciudad de San Pablo, Brasil, expone los retos y las estrategias metodológicas para el trabajo con adolescentes en cumplimiento de medidas, su interacción con la comunidad en que se insieren, y la necesidad de crear otras perspectivas de vida para ellos, siempre acompañadas del cuidado con el profesional que actúa en la comunidad.
El segundo grupo de artículos está más centrado en la justicia restaurativa.
La jueza Olja Ristova, de la República de Macedonia del Norte, discute los retos de aplicación del abordaje restaurativo en la práctica judicial de su país, aunque esté incorporada en la legislación nacional.

La profesora Julia Sloth-Nielsen, de Sud-África, analiza el descenso del entusiasmo con la justicia restaurativa en su país, mientras, al revés, es altamente empleada en su vecino Zimbabue, creando un panorama regional con las propuestas en estudio para su implementación en Namibia.

Por fin, la presidente de la AIMJF y jueza en Argentina, Marta Pascual, analiza el Comentario General 24 del Comité de Derechos del Niño, que remplaza el anterior, de número 10, y publicamos la referencia del Estudio Global sobre niños/as privadas de libertad.
En el campo de la jurisprudencia, la Jueza Brigitte May comenta una decisión de la Suprema Corte de Brasil – y la reacción social, inclusive jurídica –en un habeas corpus colectivo en contra la sobrepoblación de unidades de privación de libertad de adolescentes en aquél país.

En la sección de temas de interés general, contamos con dos interesantes artículos sobre las pruebas periciales en el campo de la protección de los niños.
El juez Peter Johnstone, de Australia, discute la síndrome de niño sacudido y criterios de evaluación de la prueba por los jueces. El Profesor Ken Lewis, de Estados Unidos, discute los parámetros legales y criterios periciales para la separación de hermanos en los procesos de familia.

Además, la profesora Mona Paré, de Canadá, presenta las actividades del Laboratorio de investigación interdisciplinaria en derechos de los niños, que realizará en Mayo de este año una conferencia en Ottawa (confiera la agenda) sobre acceso de niños a la justicia.

Las acciones de perfeccionamiento de la justicia son de particular interés en nuestra Asociación. La colaboración de la Comisión Europea en su sección de formación judicial trae la importante discusión que la AIMJF hizo en su congreso de 2018 sobre la necesidad de perfeccionar la aplicación efectiva de las leyes, por lo tanto la necesidad de involucrar a los profesionales en el conocimiento, comprensión y respecto a los derechos de los niños. Wojciech Postulski, oficial responsable por la organización de esta tarea formativa, presenta los contenidos, procedimientos y métodos utilizados para perfeccionar la actuación de jueces y fiscales en Europa en su actuación en relación a los derechos de los niños.

Como saben, iniciamos una encuesta internacional sobre la formación especializada de los magistrados que actúan en juzgados especializados. Seguimos colectando datos – y les invitamos a informar datos de sus países, pero les presentamos desde luego algunos resultados parciales.

Esta edición trae otra novedad. Buscaremos presentar en cada edición las acciones específicas de miembros muy importantes de la AIMJF, las asociaciones nacionales. Son ellas que, en el ámbito de cada país, trabaja por el perfeccionamiento de la justicia, por la mediación de la discusión internacional con los temas locales y que traen nuevas experiencias para el debate global.
Principiamos en esta edición con una discusión sobre la importancia de asociaciones de magistrados con un texto del expresidente de la Asociación de Magistrados de la Commonwealth, John Lowndes, y contaremos, en cada edición, con la exposición de una asociación nacional sobre sus actividades para perfeccionar el sistema de justicia. Polonia, el país que propuso a Naciones Unidas la elaboración de una Convención, tendrá el honor de inaugurar este espacio que, esperamos, sea un modo de acercar aún más la AIMJF de sus congéneres nacionales, creando una red más sólida de intercambios.

1. Eduardo Rezende Melo es el Editor en Jefe de la Crónica. Juez en Brasil, tiene grado de doctorado en derechos humanos por la Universidad de San Pablo y coordina la formación pedagógica de magistrados en el area de derechos de niños y adolecentes en la Escuela de Magistrados de San Pablo.

Seguimos en nuestra sección de novedades bibliográficas con el apoyo de las casas editoriales Brill e Insentia, y con un destaque especial al libro de organizado por nuestro colaborador de Terre des Hommes, Cédric Foussard, y Wendy, sobre la Violencia contra niños en el sistema de justicia criminal. Recomendamos la lectura.

Como siempre, estamos abiertos a otras colaboraciones de casas editoriales para difusión de la producción científica en nuestro campo. Invitamos a los miembros que nos comuniquen la publicación de sus obras para que la difundamos en la Crónica!
El Comité Ejecutivo de la AIMJF presenta sus actividades en este semestre, buscando compartir sus resultados con los miembros y estimular la reflexión sobre acciones por desarrollar.

La participación de nuestra presidenta Marta Pascual en congreso en México, preparando eventos internacionales futuros y ayudando en la constitución de movimientos asociativos nacionales; la organización de programas de visitas en cada país, como hubo en San Pablo, Brasil, en noviembre, habrá en Sudáfrica en marzo y en Londres en junio, y la discusión internacional del rol de la justicia en la garantía de derechos de niños, como ocurrió en la celebración de los 30 años de la Convención en Ginebra – Suiza, de la cual la secretaria general Andrea Santos Souza nos brinda con una presentación de un sumario de las principales discusiones.

En nivel regional, la sección europea presenta un sumario de su encuentro en la República de Macedonia del Norte sobre la formación de magistrados en derechos de los niños y la movilización para la conferencia en Sudáfrica para organizar una sección regional de la AIMJF. Realizaremos en la Ciudad del Cabo la próxima reunión del Comité General de la AIMJF, en un esfuerzo de proximidad con miembros de todo el mundo.
En nuestra agenda de eventos, destacamos dos actividades de la Universidad de Leiden, en Holanda, la maestría en derechos de niños y un curso de verano; una conferencia Canadá sobre acceso a la justicia por niños y una especialización y curso internacional en infancias y juventudes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO (ambos virtuales).

La invitación a asociarse y a escribir y contribuir para la Crónica son expresión de nuestro deseo y búsqueda por convertir esta Asociación y este espacio en un campo proficuo de debates, de aprendizaje, de conocimiento, de encuentros entre profesionales comprometidos con la defensa de los derechos de los niños . Les deseo a todos y a todas una excelente lectura.

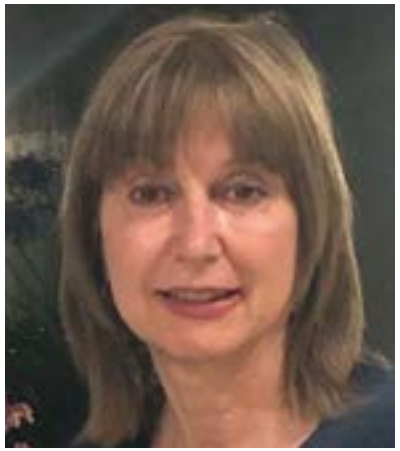
Mis saludos cordiales.

2. ESTUDIO PROFUNDIZADO: BUENAS PRACTICAS EN JUSTICIA JUVENIL Y RESTAURATIVA

2.1. ABORDAJES TEÓRICOS

2.1.1. "DEBIDO PROCESO Y JUSTICIA PARA ADOLESCENTES" "AVANCES Y AGENDA PENDIENTE EN MÉXICO"

Por Alicia Azzolini[2]



I. Los avances

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 2005 trajo consigo el cambio de modelo de justicia para adolescentes vigente en el país adecuándolo a los contenidos de la Convención de los Derechos del Niño (CDN). El proceso de transformación del modelo tutelar al de la protección integral se desarrolló en forma desigual en las diversas entidades federativas pero la entrada en vigor de una ley nacional ha favorecido que el sistema se esté consolidando en todo el país de manera cada vez más homogénea.

Adolescentes titulares de derechos

La CDN marcó el parteaguas en el tema de derechos de infancia. El nuevo paradigma adoptado en la CPEUM y en Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) que entró en vigor en 2016 modifica sustancialmente la forma y el modo de abordar la problemática de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. Los niños –personas menores de 18 años de edad- dejan de constituir un objeto de protección estatal para ser sujetos de derecho. Se deja de lado la ficción de la inimputabilidad penal propia de la doctrina de la situación irregular, para construir un modelo en el que los adolescentes son responsables de sus actos, aunque en forma diferenciada, con respuestas menos drásticas que los adultos.

Reducción de la privación de la libertad

El logro más relevante del nuevo modelo es que se redujo significativamente el número de adolescentes privados de la libertad. En 2005, antes de la reforma constitucional, había números redondos de 37,000 personas menores de edad en internamiento, en 2013 la población de adolescentes internos fue de alrededor de 5,000, mientras que 7,000 cumplieron diversas medidas en libertad.[3] La concepción del modelo de protección integral para las niñas, niños y adolescen-

2. Profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, profesora de INACIPE y Miembro de Número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.

3. Azaola, Elena, Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México, México, Unicef, 2015, p.13. Ver asimismo Instituto de Justicia Procesal Penal, Ac, Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México; Estado actual después de las reformas constitucionales de 2005, 2008 y 2011, México, 2013, p. 41–43. Citado en Azzolini Bincaz, Alicia Beatriz, Los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM; México, Porrúa, 2017.

tes privilegia los derechos, entre ellos uno de los más trascendentes para su desarrollo, la libertad. La aplicación de salidas alternas y de medidas no privativas de libertad ha sido determinantes para que la mayoría de los adolescentes en conflicto no la ley no haya sido apartada de su vida cotidiana; con ello disminuye n las probabilidades de que queden atrapados en una carrera delincuencial.

Diseño procesal acusatorio y oral

La LNSIJPA diseña un modelo procesal acusatorio y adversarial en el que se reconocen los principios del debido proceso. En ella se mencionan expresamente, en el artículo 22, que el "Sistema estará basado en un proceso acusatorio y oral en el que se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación con las adecuaciones y excepciones propias del sistema especializado".

Está claro que a los adolescentes se les reconocen todos los principios y derechos del sistema penal de adulto, presunción de inocencia, por ejemplo, como aquellos propios de su calidad de personas en desarrollo, autonomía progresiva e interés superior, entre otros.
La aplicación supletoria, prevista en el artículo 10, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley de Mecanismos Alternativos, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley General de Víctimas, confirma la oralidad y el carácter adversarial del sistema.

Duración de las sanciones

La LNSIJPA unificó las sanciones –medidas de sanción- aplicables a los adolescentes responsables de la comisión de un hecho delictivo.

La ley, atendiendo al principio de autonomía progresiva distingue tres grupos etarios. De 12 años cumplidos a menos de 14; de 14 años cumplidos a menos de 16, y de 16 años cumplidos a menos de 18 años. La medida de internamiento se puede aplicar a los últimos dos grupos. Los adolescentes que tengan entre 14 años cumplidos y menos de 16 podrán cumplir un máximo de tres años de internamiento, aquellos que tengan entre 16 y menos de 18 podrán ser sancionados a un término máximo de 5 años. Se tiene en cuenta la edad al momento de la comisión del delito.

La ley no sólo creo intervalos de sanción uniformes en todo el país, sino que dejó sin efecto las medidas desproporcionadas que preveían algunas legislaciones de hasta 20 años de privación de la libertad.

Etapa de ejecución

Un avance de la LNSIJPA es haber regulado con mayor detalle la etapa de ejecución. Establece las facultades del juez de ejecución y de la Autoridad Administrativa encargada de la ejecución. También diseña los procedimientos a seguir ante una u otra instancia.
Resalta la inclusión de la justicia restaurativa en la etapa de ejecución, con ello se busca la reinserción social y familiar del adolescente y se atiende a las pretensiones de la víctima.

II. Los pendientes

Existen aún muchos pendientes por atender en el sistema de justicia juvenil mexicano. Algunos de ellos podrían solucionarse con modificaciones legislativas, la mayoría, sin embargo, tienen que ver con la implementación de las normas, con las prácticas institucionales y con los operadores del sistema.

Aplicación de los principios

La LNSIJPA contempla los principios rectores del sistema. Quienes intervienen en el sistema de justicia para adolescentes no siempre aplican a cabalidad los principios que lo rigen. Las reglas emanadas de la ley se imponen frente a las directrices que orientan al sistema. Los operados son, en su mayoría, personas formadas en el antiguo modelo procesal rígido y formal y en una concepción legalista. Los agentes del Ministerio Público siguen solicitando casi invariablemente como medida cautelar el internamiento preventivo en todos los casos de delitos que así lo permiten, sin analizar la situación concreta y sin atender el principio de que la privación de la libertad debe ser excepcional y por el menor tiempo posible. A lo largo del procedimiento se obliga al adolescente a concurrir al juzgado en casos innecesarios, sin atender que ello implica que no acuda a la escuela o a su trabajo. Algo similar ocurre en el ámbito sustantivo. No se ha entendido que de acuerdo al principio de autonomía progresiva las categorías del delito deben aplicarse e interpretarse conforme al desarrollo de la persona adolescente y no con los parámetros del sistema penal de adultos. Esto mismo ocurre en los delitos de omisión, en los que no es posible exigir a las personas que están en desarrollo que prevean posibles resultados o actúen para proteger bienes en la misma medida que se le exige a un adulto. Cada caso debe analizarse individualmente en atención al principio de autonomía progresiva y presunción de inocencia.

Así como el proceso penal de adolescentes tiene características propias que lo distinguen del de adultos, el derecho penal sustantivo en materia de adolescentes también debe adecuarse a las particularidades de los sujetos que dan razón de ser al sistema, los adolescentes.

No se exige la especialización de todas las partes. La LNSIJPA establece que todas las autoridades del Sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes en el ámbito de sus atribuciones. Dispone que las instituciones u órganos que intervengan en la operación del Sistema, deberán proveer la formación, capacitación y actualización específica a sus servidores públicos, de acuerdo a su grado de intervención en las diferentes fases o etapas de dicho Sistema. Ordena que, desde el inicio del procedimiento, todas las actuaciones y diligencias estarán a cargo de órganos especializados en el Sistema de justicia para adolescentes. La ley se limita a los servidores involucrados en el sistema, no hace referencia a los abogados particulares que pudieran intervenir en el proceso como defensores de la persona adolescente imputada o como asesores jurídicos de la víctima.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ido un poco más allá de los criterios internacionales al pronunciarse en el sentido que todos los que intervienen en la procuración e impartición de justicia para adolescentes cuenten con la suficiente capacitación en la materia.[4] Esto ha provocado que los tribunales de adolescentes exijan que los defensores particulares acrediten especialización en la materia. Sin embargo, esta exigencia no se extiende a los asesores jurídicos de la víctima. Es común que los asesores de la víctima desconozcan los fines del sistema e impulsen un litigio vindicativo orientado a la penalización por sí misma y a la reparación del daño. El litigio se convierte en un procedimiento muy semejante al de adultos, pierde sus rasgos distintivos.

Por ello, es importante que todas las partes estén especializadas para que entiendan la finalidad del sistema y tengan la sensibilidad para entender las características que lo definen. La LNSIJPA debería exigir la especialización de todos los abogados que intervienen en el

4. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. SUJETOS OBLIGADOS A LA ESPECIALIZACIÓN. Registro: 168768.

proceso.

Perfil de los funcionarios.
Al referirse a la especialización de los operadores del sistema de justicia para adolescentes, la SCJN ha entendido que ella abarca tres aspectos: a) Organización del trabajo: especialización orgánica. b) Asignación de competencia: especialización por materia, y c) Perfil personal: el perfil de los operadores del sistema.[5]

Nuestro tribunal supremo ha puesto énfasis en la capacitación de los operadores del sistema como algo necesario para alcanzar los fines que éste persigue[6] así como en el perfil de los mismos necesario para el trato con los adolescentes.[7]

Lamentablemente, los servidores públicos que intervienen en el sistema de justicia de adolescentes no siempre tienen el perfil, la sensibilidad ni la capacitación necesarios para interactuar con adolescentes. La ausencia de perfiles adecuados se hace más patente en las Deberían regularse candados para que esto no ocurra.

La justicia penal para adolescentes es especializada y requiere de jueces y magistrados especializados y con un perfil que les permita entender la complejidad que caracteriza a las personas en desarrollo. En algunos estados los jueces son mixtos, son jueces penales que se ocupan de adultos y de adolescentes. Ello es contrario a la especialización exigida en la LNSIJPA.

Regulación e implementación de la ejecución

El talón de Aquiles del sistema es sin duda la ejecución de las medidas, en especial la de internamiento. En este ámbito poco han hecho las entidades federativas, la mayoría ha conservado las instalaciones y el personal del sistema tutelar.

Quizás es en el ámbito de ejecución donde se hacen más visibles vicios que perduran a lo largo de todo el sistema. El carácter penalizador que persiste en muchos operadores, que no acaban de comprender la diferencia entre el sistema penal de adolescentes y el de adultos, se pone en evidencia al momento de ejecutar la medida sancionadora privativa de la libertad.

La mayor parte de los adolescentes que han sido condenados están sujetos a medidas no privativas de la libertad y este es el aspecto menos regulado y desarrollado, que requiere un mayor número de acciones estatales para ofrecer programas efectivos para la reinserción social y familiar. Los problemas que se han detectado con más frecuencia es la ausencia de instalaciones adecuadas, la mala calidad de los servicios, como la comida, la falta de capacitación del personal de seguridad que llega a maltratar a los jóvenes internos, la carencia de programas educativos a niveles más avanzados (preparatoria) y la ausencia de programas e instancias que les permitan prepararse para afrontar a vida en libertad.

Las demás medidas sancionadoras previstas en las leyes locales no aplican en su totalidad. Es común que los organismos encargados de la ejecución de sanciones de adolescentes no cuenten con los recursos humanos y materiales para su implementación. Es necesario enfocar francamente las medidas sancionatorias a la educación y a la reinserción de los jóvenes en la comunidad. Por ello es importante privilegiar las que no son privativas de libertad. Se debe apelar a la justicia restaurativa y no a criterios punitivos. Ello implica que existan programas —y personal especializado para aplicarlos— orientados a reconciliar a los jóvenes con su pasado y su presente y a acercarlos con las víctimas (cuando ello sea posible) y con la comunidad.

IV. Reflexiones finales
Para cerrar este somero análisis sobre el sistema de justicia para adolescentes en México es necesario señalar que, si bien la LNSIJPA es perfectible, en este momento el mayor desafío es su adecuada implementación. El respeto al debido proceso en materia de justicia juvenil sólo será posible cuando las instituciones y las personas que están involucradas en el sistema se organicen y actúan en el marco de los principios que lo inspiran. Instituciones adecuadas, personal capacitadas y con el perfil necesario y buenas prácticas deben conjugarse para que la operación del sistema conlleve a alcanzar los objetivos para los que fue creado.

2.1.2. CONFERENCIAS DE FACILITACIÓN: UNA MEDIO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA LA JUSTICIA CRIMINAL APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS.

Por Nancy Moreau[8]

Durante mucho tiempo hemos desestimado la importancia de los medios alternativos de resolución de conflictos en la justicia criminal, particularmente por la naturaleza contradictoria del proceso en Canadá.

De hecho, dado que la presunción de inocencia es un principio fundamental y que es tarea del fiscal el probar la culpabilidad del imputado “mas allá de la duda razonable”, sin la necesidad del acusado de probar su inocencia, las autoridades deben enfocarse en maneras de ofrecer otras vías de acuerdo a las partes, y hacerlas aceptables.

Hoy en día, dadas las iniciativas, cam-

5. Registro: 168773, Tesis: P./J. 63/2008.

6. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. EL TÉRMINO "ESPECIALIZADOS" UTILIZADO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN SE REFIERE AL PERFIL DEL FUNCIONARIO Y A LA COMPETENCIA LEGAL EXPRESA DEL ÓRGANO PERTENECIENTE A ESE SISTEMA. Registro: 168773.

7. SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES. VERTIENTES DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SU ACEPCIÓN COMO PERFIL DEL FUNCIONARIO QUE FORMA PARTE DE AQUÉL. Registro: 1011758.

8. Admitida por el BAR en 1980, la Jueza Nancy Moreau Trabajo como Abogado Adjunto General y luego como Abogado Jefe en la Oficina de Dirección de Fiscalías Criminales y Penales de Justicia Juvenil de Montreal. Fue luego designada Juez en la Corte de Justicia Juvenil de Quebec, en 2007.

bios legislativos y jurisprudencia, los jueces hacen mas uso de su poder de resolución para sugerir modos más efectivos a la hora de manejar los casos, reduciendo los retrasos de la justicia. Toman parte en la discusión con los consejos de la fiscalía y defensoría para así llegar a resoluciones parciales o definitivas con respecto al veredicto de culpabilidad o la sentencia de los casos. Se utilizan a tal fin conferencias de Facilitación o manejo.

Las medidas adoptadas deben proveer al/la joven con una respuesta significativa, que tenga en cuenta sus necesidades y nivel de desarrollo. Deben incentivar a una readaptación social y la reinserción del niño/a, comprometiendo a su familia, miembros de su comunidad y de agencias sociales, y promover un sentido de responsabilidad a través del reconocimiento del daño causado.

Vale la pena notar que esta Ley llama a la integración de diferentes géneros, etnias o lenguajes, en particular a la población de jóvenes aborígenes.

Aun mas, dada la percepción del/la joven del tiempo, es sugerido que la persona responsable de aplicar dicha ley actúe de manera pronta y veloz.
Otros factores pueden influenciar la discusión durante las Conferencias de Facilitación, como el largo de la detención preventiva, previos autos de responsabilidad, así también como circunstancias que agraven o atenúen la situación, basadas en las circunstancias particulares del/la joven.

Finalmente, debemos tener en cuenta que la sentencia debe ser lo menos opresora posible para lograr nuestros objetivos. Una sentencia privativa de la libertad debe ser utilizada en última instancia y las medidas de integración no deben ser sustituidas.

Al adentrarnos en tema, las Conferencias de Facilitación representan un medio voluntario iniciado por los representantes de las partes de un proceso criminal. En este ámbito, se le solicita al juez intervenir para ayudar a las partes a llegar a una solución a su disputa, tomando parte en el proceso legal. Esta herramienta de administración de justicia sirve a un buen funcionamiento de la misma.

En la Corte de Quebec, las Conferencias de Facilitación se aplican a procesos del fuero de adultos y de menores. Debe tenerse en cuenta que la situación de un/a menor que comete una ofensa penal pero no ha llegado a la edad minima de imputación (12 años) es manejada por una ley provincial (por la ya mencionada Youth Protection Act)

Antes de exponer los detalles las reglas operativas de la conferencia de Facilitación, vale la pena recalar en el contexto que llevo a su implementación.

Durante los años 90, al provincia de Ontario enfrentaba un recurrente problema de retardos en los procesos penales. El Gobierno implementó un grupo de trabajo numeroso para rever las reglas de exposición de evidencia y acuerdos.

Inspiradas por las recomendaciones del reporte presentado en 1993 por el Juez G. Arthur Martín "Visualización de cargos, Discusiones de exposición y resolución" (Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions) la idea de la Facilitación en materia penal emerge, y comienza un trabajo de colaboración entre las autoridades judiciales de Quebec, representantes de la Corte de Apelaciones y la Suprema Corte, como también miembros del BAR, actuando tanto en Fiscalías como en Defensorías.

En 2004 las 3 principales cortes con competencia Penal (Corte de Apelaciones, Suprema Corte y Corte de Quebec) lanzan un piloto de Facilitación en asuntos penales con una duracion de 18 meses. Con el paso del tiempo y luego de su revision, el programa es implementado en diferentes Cortes.

Actualmente, las Reglas de la Corte de Quebec, permiten al juez a cargo implementar las reglas que definan los objetivos y el acceso a dicha practica.

En resumen, este proceso implica que el juez tome parte en la discusion entre partes (fiscalía y defensoría) en pos de facilitar la busqueda de una solución a la disputa, incluida la sentencia y su eventual ejecución.
Las Conferencias de Facilitación pueden ser llevadas a cabo en cualquier tipo de casos, independientemente de la naturaleza o gravedad de la acusación.

Todo comienza con la firma de un pedido conjunto de las partes al juez, requiriéndole asignar a un juez a cargo de la Facilitación. Solo jueces entrenados pueden ser asignados.
Al llenar este formulario las partes se comprometen a entregar al juez designado, con un mínimo de 7 días de anticipación, un resumen del caso, incluyendo la acusación, un sumario de los hechos e información relevante para llevar a cabo la Conferencia.

Ya que las reglas de al Conferencia no modifican en nada a las reglas de la solicitud de mediación, las partes pueden dar detalles sobre discusiones previas y, entonces, evidenciar de manera efectiva las necesidades particulares durante la Conferencia.

Al firmar el formulario las partes se comprometen a permanecer disponibles y respetar la naturaleza confidencial de las discusiones que tomen parte en la Conferencia. Naturalmente, el representante de la Defensa podrá reportar a su cliente para confirmar su posición y mandato, y el representante Fiscal hará lo mismo con la victima y/o el particular damnificado, pero ninguno de los puntos discutidos o expuestos serán llevados ante la Corte, ya que correrían el riesgo de llegar a una encrucijada que termine irremediablemente en juicio. Esto refleja la dimensión del privilegio asignado a la confidencialidad.

Las discusiones son generalmente mantenidas a puertas cerradas, en una sala de conferencias, sin grabaciones. Esto alienta a conversaciones libres y francas.

La Conferencia es normalmente llevada acabo en presencia de los representantes legales. Sin embargo, la Corte puede permitir la presencia de un tercero con acuerdo de las partes y por varios motivos. Por ejemplo, puede requerirse la opinión de un profesional que haya asesorado previamente al acusado a la hora de comprender la resolución, o puede pedirse a un trabajador social intervenir para validar la viabilidad de una resolución cuando implica a terceros (sanciones extrajudiciales, programas de control de ira, etc.)

Es esencial remarcar que la presencia de un tercero requiere la firma del acuerdo de confidencialidad.

Al abrir la Conferencia, el juez expresa su mandato y las reglas operativas aplicables a la misma. Luego verifica si las partes han firmado el pedido y enfatiza sobre la importancia de la confidencialidad. Es entonces que valida con los representantes de las partes la dimensión de sus respectivos mandatos y, de ser necesario, adopta reglas operativas particulares. La Conferencia toma lugar en un entorno amigable y respetuoso.

Cuando el/la juez aborda el problema en particular, invita a los representantes a

exponer su punto de vista del caso y su posición en torno a una resolución del mismo.

Este ejercicio permite identificar el problema en cuestión, reconocer las diferencias, discutir la posición de cada parte y trabajar en específicamente en una propuesta de solución.

Durante las audiencias el/la juez puede requerir una reunión separada con una de las partes para organizar una llamada "caucus" (Reunión particular)

De esta manera, el/la juez podrá tratar un punto en particular para comprender mejor la perspectiva de esta parte e intentar resolver algún obstáculo. Esta reunión es confidencial, queda en cabeza de la parte el revelar o no lo que se dijo, siempre en pos de resolver la disputa.

Si tratamos con un caso grave o que implique a mas de un acusado el/la juez puede conformar un sumario de la posición de cada una de las partes y de este modo asegurarse de tener cada punto de vista.

Si de estas posiciones surgen problemas (por ejemplo acceso a documentos específicos, extradiciones, etc.), el/la juez puede establecer una lista de "discusiones en progreso".

Si dichas discusiones arribana un acuerdo, el/la juez que condujo la conferencia puede, con el acuerdo de las partes, recibir una declaración de culpabilidad.

Un acuerdo puede resolver una disputa de manera integral, incluyendo los autos de responsabilidad y sentencia. También puede resolver los aspectos previos pero no la sentencia. En este caso, el/la Juez Facilitador u otro, de acuerdo a pedido de parte, escucha a las partes en la Corte y aplica una sentencia.

Cuando un acuerdo es concretado, el/la juez facilitador requiere a las partes escribir un sumario de hechos correspondiente a las discusiones mantenidas y las resoluciones arribadas en las reuniones.

La importancia de este sumario no es solo la de recopilar los hechos luego del pedido efectuado en la Corte, sino también para la imposición de sentencia, ya sea un pedido conjunto o no.

También vale la pena notar que este sumario de hechos servirá a cualquier profesional que deba preparar un reporte o un experto en vistas de imponer una sentencia.

Ya que el Sistema Penal es publico, el acuerdo es presentado al Juez Facilitador, o cualquier otro Juez, en los tribunales. Es importante que dicho Juez explique al público el proceso que llevo a dicho acuerdo antes que el consejo registre los mismos.

Al actuar de este modo, el público no tiene la sensación de que el caso fue resuelto detrás de puertas y esta al tanto de las decisiones y el trasfondo de dicho acuerdo. La transparencia es un prin cipio primordial en asuntos de facilitación.

Si, para el final del ejercicio, la disputa no fue resuelta y encuentra un obstáculo infranqueable, el Juez Facilitador es excluido de las audiencias y los otros miembros de la Corte no son anoticiados del proceso. Como hemos dicho la confidencialidad goza de privilegios.

En tal caso, antes de finalizar las audiencias, el Juez Facilitador puede transformar la Conferencia de Facilitación en Conferencia de Administración.

Una vez mas, este ejercicio permite a las partes y al/la juez identificar las cuestiones a ser resueltas en el momento del juicio, para así encontrar maneras de examinar las aplicaciones y pedidos legítimos de manera mas efectiva.

Una vez mas, este ejercicio permite al/la Juez identificar las cuestiones a ser resueltas al momento del juicio, para examinar maneras de evaluar las legitima aplicaciones y pedidos de manera efectiva (pedidos con mayor posibilidad de adoptarse positivamente, admisiones de grabación, limitar numero de testigos, etc.), todo en pos de reducir el tiempo que el juicio demore y lograr una administración de justicia mas eficiente.

La experiencia sumada en los últimos años en asuntos de Facilitación demuestran las ventajas al usar estos medios de resolución para las partes y la justicia en general. De hecho, en más del 90% de los casos traídos ante un Juez Facilitador, se llego a un acuerdo y, en la mayoría de ellos, al dictado de una resolución. ¡Queda en ustedes ahora el probar esta experiencia!

2.1.3. CUANDO UN/A JOVEN COMPENSA SU OFENSA INVOLUCRÁNDOSE EN LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE UN "ENFOQUE JUSTO"

Por Marie-Eve Lamoureux y Mathilde Martin[9], Equijustice[10], Quebec

El objetivo de este articulo es mostrarles a ustedes que es una conferencia de Facilitación y como funciona. Debe mencionarse que dicho procedimiento es similar al utilizado en el fuero ordinario de adultos, pero su implementación es modificada, dadas las particularidades de la Ley de Justicia Penal Juvenil Canadiense (Youth Criminal Justice Act# (YCJA).)

Ya que la conferencia de Facilitación toma lugar en un proceso criminal, debe notarse primero, cierto aspecto de este acto que enfoca directamente a los jóvenes. De hecho, estos aspectos van a, inevitablemente, influenciar el contenido de la discusión que será mantenida durante la conferencia.

9. Marie-Eve Lamoureux, Directora de Justicia Criminal Juvenil y servicios de mediación civil y Mathilde Martin, directora adjunta de la red Equijustice.

10. Nacida en 1989, Equijustice es una asociación provincial de Quebec de 23 miembros alrededor del territorio. Equijustice provee conocimientos en justicia restaurativa y mediación civil (www.equijustice.ca).

En Canadá, dentro de los procedimientos contenidos en el Código Penal, es la Ley Penal Juvenil la que establece los principios, reglas especificas y sentencias aplicables a los/las jóvenes quienes, al momento de cometer un ilícito, tienen entre 12 y 17 años inclusive.

Esta ley incluye un preámbulo, una declaración de principios generales que brinda a la ley de marco interpretativo, y declaraciones especificas de reglas que aplican a secciones especiales.

Adoptada en 2003 a través del territorio canadiense, la Ley de Justicia Criminal define el marco de intervención judicial y extrajudicial a ser adoptado cuando un/a joven de entre 12 y 17 años comete una ofensa, medidas.

De esta manera, hay principios aplicables a medidas extrajudiciales de resolución de casos, conteniendo criterios que aplican a la detención, así como también a los sistemas de custodia y control de jóvenes.

Este sistema de Justicia Criminal, distinto al aplicable a adultos, es esencialmente basado en el principio que un/a joven es menos responsable. Entonces, la sentencia apunta a determinar una sanción que sea una respuesta justa y proporcionada a la severidad de la ofensa cometida y el grado de responsabilidad del/la joven. La sentencia debe ser compatible a su nivel de dependencia y madurez.

Adaptadas existen para que ellos puedan reparar el daño causado, tomando en cuenta a la víctima y la comunidad.

Ejemplos de medidas propuestas al/la joven para reparar el daño son: mediación entre víctima y ofensor, talleres de trabajo para generar conciencia o procesos restaurativos a través de la comunidad y trabajos voluntarios. En Quebec, la red "Equijustice" es una de las organizaciones que participan en la implementación de dichas medidas, en particular los procesos restaurativos en la comunidad y trabajos voluntarios.

En los últimos años, la justicia restaurativa se ha enfocado principalmente en la práctica de la mediación. Es real que hay algo significativo en ver a las personas en conflicto, quienes están totalmente en lados opuestos, aceptando encontrarse y establecer un dialogo. Aunque los procesos restaurativos dentro de la comunidad son menos espectaculares que la práctica de la mediación, veremos que estos son muy bien recibidos en el desarrollo de la justicia restaurativa y las buenas prácticas de la justicia juvenil.

Procesos restaurativos en la Comunidad y el trabajo voluntario: definiciones y objetivos.

La filosofía establecida por la justicia restaurativa ha influenciado al sistema de justicia criminal canadiense por 40 años. Como mencionamos antes, los procesos restaurativos y el trabajo voluntario son parte de la Ley de Justicia Criminal Juvenil, basada en los principios de la restaurativa.

Definido como trabajo sin lucro, desempeñado por el ofensor para el beneficio de una organización establecida, apunta a:

• Permitir a un/a joven reparar el daño causado por la ofensa cometida.

• Dar a las partes afectadas la oportunidad de volverse actores del proceso judicial o extrajudicial.

• Apoyar al bien común, ya que el/la joven contribuye a la misión de las organizaciones al colaborar con la comunidad.

• Permitir al padre o responsable participar en el proceso restaurativo y apoyar al/la joven.

• Alentar la rehabilitación y reinserción social del/la ofensor.

Los agentes del sistema de justicia criminal usualmente recurren al trabajo voluntario cuando no hay otra opción viable (como mediación con la victima). Cuando el/la joven no puede estar en contacto directo con la víctima, van a dar tiempo y trabajo a una organización establecida en la comunidad que, a través de su misión, influencie positivamente a la sociedad. De acuerdo con las estadísticas de la red Equijustice, los procesos restaurativos donde el/la joven se involucra en la comunidad y realiza trabajos voluntarios representan el 70% de los casos traídos ante ellos.

A la vista de estas estadísticas, la red considero necesario restaurar la reputación de los procesos restaurativos en la comunidad y del trabajo voluntario, modernizando sus prácticas de acuerdo a los principios de la restaurativa. Dándole forma al mismo en el trabajo realizado por el marco de la mediación victima/ofensor y elaborando nuevos modos de intervención. Estos esfuerzos de modernizar las prácticas profesionales, apuntados a crear adhesión tanto de los/as jóvenes como de organizaciones colaborando en el proceso, aclara los objetivos de los medios restaurativos y trabajos voluntarios con respecto a los ya existentes y enfoca la practica en la idea de reparación en lugar de castigo.

Redefiniendo el rol del/la joven, sus padres y compañeros a través del "enfoque justo"

El "enfoque justo" ha sido conceptualizado por la red Equijustice y ha sido profundamente transformado por las prácticas de las partes interesadas, ya que propone al justiciable una experiencia distinta y una manera alternativa de implementar la justicia.

Buenas Prácticas con jóvenes ofensores/as

La red Equijustice se interesa tanto en la prevención de ofensas como en la reacción a las situaciones que las causan. Prestando mucha atención a la historia personal de cada individuo, Equijustice da la bienvenida a los ofensores evitando prejuicios, etiquetamientos o estigmas. Este compromiso de justicia e imparcialidad permite al/la joven ofensor/a expresar su punto de vista, reconocer la situación vivida y explorar todos los caminos posibles ofrecidos por el proceso restaurativo.

Un punto de vista personalizado, centrado en el cuidado y la escucha, libre de prejuicios moralistas, fue adoptado para crear relaciones de confianza con el/la joven ofensor/a, alentándolos al dialogo y participación activa. Este modo permite al/la joven una oportunidad de entender su rol en el proceso restaurativo y adoptarlo totalmente. Siendo centro del trabajo judicial, el/la joven se vuelve parte esencial del proceso. Más allá de la violación a una norma, es ahora la reparación la que prevalece en el proceso, un proceso al que el/la joven suscribe.

Tomamos este modelo por sentado hoy en día, pero no fue siempre así. Los profesionales en un lugar de poder se pueden tentar a imponer su punto de vista individual de una situación, analizando en lugar de escuchando e imponiendo una línea de conducta sobre un/a joven que es descripto/a como inconstante, irresponsable y descuidado/a. A menudo, los calendarios, lugares y actividades de los/as jóvenes ofensores/as eran controlados por profesionales quienes los sometían a trabajos para responsabilizarlos. Dicha actitud desvía al profe-

sional de su vocación y desprecia tanto al proceso como su función.

A través de los años su posición ha cambiado: al tanto de su rol, los profesionales intentan limitar el impacto negativo que puede reconocerse de su actitud (simplificación, prejuicio, moralización, etc.) focalizándose en la equidad, transparencia y la no imposición. El objetivo es primero acompañar, escuchar y ayudar al/la joven durante su proceso restaurativo y, finalmente, alentarlo/a verbalizar sus decisiones, resultado de su reflexión sobre ellos mismos/as y las discusiones mantenidas sin límites del profesional.

A través de las pruebas de la motivación intrínseca del/la joven, haciéndolos/as reflexionar sobre sus actos, comprenderlos, y finalmente elaborando un proyecto personal y adhiriéndolo que el proceso toma realmente una naturaleza restaurativa.

El sentido de compañerismo

En nuestra red adherimos a la idea sostenida por Lode Walgrave, que el crimen no solo concierne a la víctima que lo sufre. De hecho, el impacto del accionar criminal va más allá del individuo ya que afecta a toda la sociedad. Es entonces primordial reconocer el rol de la comunidad en el proceso restaurativo.

Esta posición ha cambiado radicalmente la manera de concebir el rol y compromiso de las organizaciones comunales con las que colaboramos en el marco de los procesos restaurativos y trabajos voluntarios. Profesionales de la red han enfrentado muchas limitaciones, requiriéndoles a organizaciones accionar de acuerdo a criterios geográficos (proximidad con el lugar de residencia del/la joven) y de disponibilidad (la competencia entre distintos proyectos de voluntariado ha derivado en que menos asociaciones se inclinen a colaborar con profesionales). Restaurar la confianza en las relaciones, redefinir y mejorar el rol de estos compañeros fueron pasos esenciales para cambiar su posición de centros que simplemente recibían jóvenes a actores del proceso y del dialogo con jóvenes ofensores/as.

A través de su misión, dichas organizaciones promueven el bienestar de tanto los individuos como la sociedad. Entonces, al elegir contribuir con la misión de la organización, el/la joven participa en el bien común. Esto permite abrir nuevos canales de comunicación y reestablecer una solidaridad informal y una red de ayuda mutua, que permite trabajar en reconstruir los lazos sociales que se rompieron por la ofensa.

Una investigación realizada en 2012 por la red Equijustice demostró que el 96% de las organizaciones sentían positiva o muy positiva, su relevancia en el proceso restaurativo en la comunidad. Casi el 80% de las organizaciones que respondieron, establecieron que la mayor ventaja de las medidas para el/la joven es la responsabilidad y en el 60% de los caos, la oportunidad de reparar el daño causado. Estos resultados resaltan la suma importancia de tener diferentes compañeros involucrados en la preparación del proceso para que, tanto la organización que colabora como el/la joven entiendan mejor su significado.

Cada vez que un/a joven elige una organización parte, reconoce su misión y las actividades que lleva a cabo. De esta manera, los valores de la organización y del/la joven se encuentran. Es en este encuentro que se permite la reparación al daño causado y se devuelve un sentido a su respectivo trabajo.

Padres como colaboradores de la intervención

Aunque la participación de los padres es anticipada en los principios fundamentales de la ley de Jóvenes Ofensores (Young Offenders Act), tomo un tiempo considerar realmente su colaboración en el campo. Durante muchos años, las partes interesadas de la red Equijustice han considerado a los/as jóvenes ofensores/as como únicos responsables de sus actos y, de hecho, como los únicos interlocutores en el proceso restaurativo. En este contexto, la presencia de padres no era requerida ni promovida. Además, la especialización que las partes interesadas utilizaban no alentaba a padres a expresarse, ya que ellos eran usualmente relegados a observadores. Puede ser paradójico mantener al margen y de forma tan radical a ellos que son todavía pilares en la vida del/la joven.

Hoy en día, las prácticas han sido rediseñadas para poner a los padres otra vez en su lugar adecuado como figuras tutelares. De ser meros intermediarios entre el/la joven y el representante, ellos son ahora interlocutores privilegiados en el proceso restaurativo. Como actores clave en la vida del/la joven, y principales colaboradores de la organización y sus representantes, los padres no son solo alentados a expresarse sobre el acto cometido por si hijo/a sino también a involucrarse en todos los pasos del proceso que son relevantes.

En el marco del proceso restaurativo y trabajos voluntarios, los padres proveen soporte para el niño/a, al mismo tiempo que el representante de Equijustice provee apoyo a ellos, cuya vida familiar se vio afectada por el crimen.

Conclusión

Las transformaciones puestas en marcha en la red Equijustice a través de los años pueden parecer imperceptibles para el observador ajeno, pero han generado cambios profundos en la posición de las partes interesadas, así también como en su relación con el/la joven ofensor/a, sus padres, victimas y organizaciones compañeras. Esta fue una tarea a largo plazo que fue llevada a cabo para generar buenas prácticas en la justicia juvenil. A la luz de nuestra experiencia, parece crucial aprender como evolucionar, actualizar nuestro conocimiento y prácticas como así también poner en duda nuestra forma de pensar.

Gracias al trabajo de las partes interesadas y representantes de la red Equijustice , los procesos restaurativos hacia la comunidad y el trabajo voluntario no son medidas dejadas de lado o relegadas del sistema de justicia, sino que caen en el desarrollo de una justicia restaurativa multifacética.

2.1.4. LA PRACTICA DE SOCIO-EDUCACION CON ADOLESCENTES Y JOVENES EN JARDIM ANGELA / SP, BRASIL

Alcimar Neves Antônio,
Claudineia Rodrigues Marques Silva,
Gabriela Benedicto de Morais,
Joel Costa Rodrigues,
Sandro Alves Dias,
Suzana Gomes dos Santos.

Gabriela B. de Morais Psicóloga

Sandro A. Dias -Pedagogo

Gabriela B. Morais – psicóloga

Claudineia Silva -Trab. Social

Joel Rodrigues –Gerente

Alcimar Antonio – Trab. Social

Presentación

La Política de Asistencia Social de Brasil juega siempre un papel fundamental en el cuidado de jóvenes y adolescentes, cumpliendo así con las medidas sociales y educativas definidas en el Estatuto del Niño y el Adolescente (ECA, Ley Federal n 8069 1990) – y llamada como Provisión de Servicios a la Comunidad (PSC) y Libertad Asistida (AF). La Ley Orgánica de Asistencia Social (OLSA), Ley Federal n. 8742/1993 y revisada por la ley n. 12.435 (2011) – es concebida como una política pública apuntada a aquellos necesitados, por derecho. OLSA tiene dentro de sus ejes estructurales el Sistema Simple de Asistencia Social (SSSA), el Básico Operativo Estándar de SUAS (BOS/SUAS, 2005), la Tipificación Básica de Servicios de Asistencia Social (NTSAS, 2009). Guiando y monitoreando la implementación de las medidas de PSC y AF existe la ley Federal n. 12.594 (2012), que regula y establece el Sistema Nacional de Asistencia Socio Educativa (NSSEA), la que apunta a objetivos de medidas socio educativas, segundo párrafo, art 1ro :

I – la responsabilidad del adolescente con respecto a las consecuencias dañosas de una ofensa deben cuando sea posible alentar a la reparación.;

II – la integración social de adolescentes y la garantía de sus derechos individuales y sociales, a través del cumplimiento de su plan de cuidado individual; y

III – la desaprobación de la conducta disvaliosa, llevando a cabo disposiciones de la sentencia como parámetro máximo de privación de la libertad o restricción de derechos, observando los límites de la ley (BRASIL, SINASE, 2012)

El apego a estos objetivos ha sido posible por la articulación intersectorial e interinstitucional del "Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto no Jardim ngela" (MSE-MA) (Servicio de Medidas Socio Educativas en Medio Abierto de Jardín ngela), considerando el principio de incompleto de lo institucional que vuelve permeable la política socio educativa de adolescentes y jóvenes en relación a una decisión de Corte. Acción técnica, incluyendo a las socio educativas, ha asegurado las practicas multidisciplinarias incluyendo la calidad de relaciones entre sistemas, SUAS, NSSEA y la Justicia

Este texto presenta como la educación

social (practicas socio educativas), sostenidas desde la perspectiva de Derechos humanos, estrategia conceptual y operacional, alineada en bases éticas y pedagógicas ha sido desarrollada por la SMSE-MA en Jardín Ángela, en la zona extremo sur de San Pablo. La práctica socio educativa de la trayectoria SMSE-LA es reconocida como referencia de praxis socio educativa en la orientación y monitoreo de adolescentes y jóvenes en PSC y LA en la Ciudad de San Pablo

SMSE-MA ngela II – trayectoria RAC
La Sociedade Santos Mártires (SSM – Sociedad de Santos Mártires), una ONG basada en Jardín Ángela fue creada en 1998, con motivo de una movilización social en pos de mejoras en la calidad de vida y en contra de la naturalización de la violencia. Un poco antes, sin embargo, en 1997, el Fórum em Defesa da Vida do Distrito no Jardim ngela (Foro de Defensa de la Vida del Distrito Jardín Ángela) lanzo el desafío de abrir espacios para la protección integral de jóvenes en edades desde 14 a 18 años que sean expuestos a situaciones de vulnerabilidad, riesgo y violencia.

Jardín Ángela está en la versión sur y a 30 kms de la ciudad base cero San Pablo. Hay 300.000 habitantes y una densidad poblacional de 7.387 hab/km. De este total, 70.000 son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 19 años y 160 de ellos cumplen medidas sociales y educativas de PSC y AF en los dos MSE/MA de la región. En septiembre, 69 adolescentes o jóvenes atendieron o hicieron seguimiento del servicio. La actividad económica predominante en el distrito es el comercio y la provisión de servicios y la mayoría de residentes trabajan en otras regiones de la ciudad.

SSM, como miembro del Foro, moviliza a la comunidad local sobre violencia y violaciones de derechos del niño/a y busca conocer instituciones, profesionales y activistas conectados a la defensa de derechos humanos presentes en la región. La primer "reunión socio pedagógica" se realizó con el Estado de Bienestar Menor de San Pablo, profesionales con una base técnica en la Región, La Comunidad de Cuidado del Menor División Sur. Al momento, la institución no tenía ningún fondo financiero para desarrollar nuevos proyectos, solo capacidad técnica para guiar comunidades e instituciones locales publicas interesadas en la protección y defensa de adolescentes y jóvenes como acción preventiva.

La posibilidad de asociarse con el Departamento de Estado de San Pablo de Justicia y Defensa de Ciudadanía, a la que la Fundación está conectada, fue logrado para guiar y acompañar a adolescentes y jóvenes sentenciados con medidas no privativas de la libertad (PSC y AF). SSM hizo una propuesta de servicio y obtuvo su primer incentivo financiero para acciones socioeducativas por un periodo experimental de 120 días, para la adquisición de materiales básicos, organización de programas de PSC Y AF, servicios y entrenamiento, y calificación e trabajadores sociales, apuntando a la construcción de metodologías para la socio educación.

La primer propuesta socio educativa fue llamada Reintegración de adolescentes a la vida social y comunal (ARSCL), que fue construida colectivamente (trabajadores sociales, adolescentes, jóvenes, miembros familiares, técnicos de DAMC/Sur). La ARSCL fue implementada luego de ajustes técnicos (pedagógicos y operacionales) a través de la elaboración del Plan de Trabajo de Logros y Acompañamiento entre las partes incluidas (Santos Mártires, DAMC/sur y la Justicia). Sin embargo, durante ese periodo experimental ningún adolescente fue referido por la corte para cumplir con medidas de PSC y AF. Esta aparente llegada de intenciones y gesto causo que la SSM, no conforme con la situación, terminara el debate con sus compañeros en la segunda mitad de 1998. Reuniones con los oficiales públicos responsables por la implementación de políticas socioeducativas fueron, sin embargo, no exitosas.

Mientras que las leyes brasileras y la norma internacional se centran en la atención en adolescentes y jóvenes en cumplimiento con las medidas judiciales tan cerca como sea posible a su lugar de residencia, trabajo o estudio, la coordinación de la ARSCL busca al Ayuntamiento de la Ciudad de San Pablo (SPCH), a través de supervisión regional de bienestar social (RSSW) basado en Jardín Ángela, para la implementación de medidas socio educativas de PSC y AF. En 48 meses de comunicación entre ARSCL y RSSW en Campo Limpo, SSM fue contactada por el Programa Comunidade Solidária (Programa comunidad solidaria), bajo el gobierno federal, abocada al cuidado de adolescentes y jóvenes en contextos de alta vulnerabilidad y violencia. La ARSCL puede entonces trabajar con ese público durante 1999 en el desarrollo de varias actividades. Esta acción fue muy importante para el fortalecimiento del equipo de ARSCL y en la elaboración metodológica socioeducativa. Luego de oír a adolescentes y jóvenes, mesas de trabajo temáticas fueron sostenidas, permitiéndoles acercarse a una educación profesional: computación avanzada, inglés, música, hip hop, peluquería, amasado de pizza, teatro, DJ y productor cultural, con duración de 180 días. Asistentes niños y niñas también gozaron de consejo y guía psicológica y el desarrollo de actividades socioeducativas que favorecieron la ciudadanía, solidaridad y educación para la paz.

En marzo del 2000, SPCH a través de RSSW, firmaron un acuerdo con SSM para asistir y acompañar a 100 adolescentes de acuerdo con medidas aplicadas por el PSC y AF. Otra vez, hubo un obstáculo con el acuerdo firmado: el sistema de justicia discutía que la medida de referir a jóvenes y adolescentes a la ARSCL era posible a través de acciones formales entre instituciones participantes (relaciones tripartitas de responsabilidades) – SPCH/RSSW/Estado de San Pablo Bienestar Menor (actual fundación CASA) – SSM/ARSCL. Obstáculos a las acciones legales públicamente fundadas demostró que las instituciones responsables por el Sistema de Garantía de Derechos (RGS) son incipientes y frágiles al implementar políticas sociales y educativas abiertas (PSC y AF). Para SSM/ARSCL el proceso de implementar los programas de medidas socioeducativas mostro cuan conflictivo es funcionar en la maquinaria de burocracia estatal y coexistir armoniosamente con ello se ha vuelto un desafío mayor. La trayectoria ha, de hecho, demostrado que la ley no cambia realmente. Tomo mucha paciencia, perseverancia y persistencia para que el adolescente, joven y su familia, y sus derechos puedan contar con un programa / servicio público de medidas socioeducativas cercana a su territorio (vivienda, escuela, trabajo).

Desde ese momento y conjunto al proceso de municipalización en curso y con las mejores responsabilidades, comprensión y atribuciones de la municipalidad en la implementación de medidas no privativas de la libertad, los judiciales comienzan la derivación de adolescentes para ser guiados y monitoreados por la ARSCL. Puede decirse que, solo en 2004, el proceso de municipalización de medidas socio educativas comenzó en la ciudad de San Pablo. Todo este reajuste significo una reasignación de más del 60% del equipo de ARSCL de educadores sociales (técnicos, educadores y operadores), forjados y entrenados en este periodo. Mientras el servicio de RAS fue ampliándose, fue necesario re-

ver la propuesta y derivar adolescentes y jóvenes que no fueran parte de medidas socioeducativas (dos centros para jóvenes fueron establecidos para acomodar a ellos).

En el primer semestre de 2002, luego de intensos debates y sugerencias hechas por jóvenes y adolescentes, el nombre de ARSCL fue aprobado y, en este sentido, la palabra "redescubrir" fue la más apropiada para traer la idea de redescubrir este grupo en la comunidad que viven y buscar transformar su realidad y la de sus entornos. El nombre elegido para explicar el cambio fue Redescubrir adolescentes en la Comunidad (RAC) y en 2010 la nueva denominación para SMSE/MA Ángela 2 – RAC. La capacidad de servicio mensual de 2019 es de 75 adolescentes en PSC y AF quienes están involucrados, en orden, en robos, tráfico de drogas, encubrimientos, lesiones, homicidios, asalto, agresiones y tenencia de armas. El servicio se extiende a dar soporte y guía a las familias e incluye un equipo profesional en áreas de asistencia social, psicología, educación social y administración. En adición a su participación en guiar y ofrecer entrenamiento técnico ofrecido por el personal del Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social de M'Boi Mirim (SRCSA), hay horas de supervisión técnica mensuales y entrenamiento con profesionales especializados en policitas socioeducativas.

La práctica socioeducativa

Las actividades ofrecidas en MSE-MA ngela 2 – RAC tienen, como premisa, a la recepción de adolescentes y jóvenes, identificación e habilidades, intercambio de conocimientos y reintegración social en la perspectiva de romper con el crimen y la reincidencia.

La acción social en el espacio socioeducativo se enfoca en entender la familia y su trayectoria, el adolecente y el joven en sus diferentes dimensiones de vida social para la elaboración de proyectos políticas pedagógicas que consideren el proceso de formación de la identidad y subjetividades, contribuyendo a la construcción de una nueva trayectoria y proyecto de vida. Mirando siempre a la historia de los adolescentes asistidos implica la relectura critica de la intervención profesional en sus áreas de conocimiento específico y acción: inter y multidisciplinarios tejidos en línea con asunciones éticas y políticas de cara área y el compromiso con la construcción de un nuevo "know-how" (método), basado en la observación y realidad vivida.

En el desarrollo socioeducativo en la MSE-MA ngela II – RAC, es posible observar que los cuidadores muestran su potencial en la relectura de ellos mismos, entre pares, familiares y comunidad: la práctica de ejercicios éticos en esas relaciones es trabajada bajo la tesis de protagonismo juvenil y autonomía. Esta vista favorece el desarrollo de una serie de acciones psicológicas y pedagógicas en la re significación de esos cuidados por el contexto en el que viven y otros espacios de coexistencia y participación. Por ejemplo, actividades apuntadas a entrenamiento vocacional han demostrado ser relevantes para el descubrimiento y búsqueda de nuevas capacidades y competencias que muchos creían no tener: generar ingresos, práctica laboral e inserción al mundo laboral demuestran causar un mejor entrenamiento educacional, cultural y social para estos jóvenes.

Las referencias teóricas que acompañan el MSE-MA ngela II – RAC y su práctica son de varias áreas, considerando al adolescente y joven en sus diferentes dimensiones de "ser" y "ser en el mundo", y en las que ellos se ven representados y protagonistas en contextos sociales diferentes, personas que son criticas de un mejor mundo y reflexionan de las consecuencias morales y éticas de sus accionar. La concepción del significado de dicho paradigma de doctrina de protección integral, los objetivos de las medidas socioeducativas, la falta de compleción institucional en la ejecución de la política socioeducativa derivan a la búsqueda de diferentes referencias teóricas y prácticas como Vygotsky (2007), Freire (2009), Costa (1994), Iamamoto (2003).

La mirada a las múltiples inteligencias y la validación de la importancia del desarrollo de estas capacidades y competencias han hecho posible el trabajar con los asistidos la aptitud de nuevos estudios, el descubrimiento y expansión de sus potencialidades así como también hacerlos percibirse tolerantes, empáticos, críticos y refractivos en interacción con equipos, entre pares, familias y su comunidad (GARDNER, 1995).

Las actividades grupales como dispositivo para generar cambios y transformaciones en cada uno de ellos, personal y socialmente, ayuda a la construcción de una subjetividad, identidad y su formación con reales posibilidades de reconstruir su trayectoria, esta vez, distante de la practica criminal; la existencia de propósitos grupales en las que hay interacción y experiencia emocional compartida. (SILVEIRA and PREVITALI, 2017; FERNANDES, 2003).

La manera en que estas actividades son planeadas y propuestas permiten a los cuidadores una relación dual que ayuda al desarrollo de su humanidad, porque "si hay un yo, no es nada más que una conciencia de lo que paso en la historia de las relaciones intersubjetivas" (ÁVILA, 2007, p.9).

Con experiencias grupales, se puede observar que los adolescentes, jóvenes, padres y guardianes que pertenecen a los grupos no solo comparten el interés en lo que es transmitido, sino que generan relaciones y vínculos, basados en experiencias emocionales que les permiten identificar procesos como también la posibilidad de vivir la experiencia de ser parte de un grupo. Sin embargo, el cuidado individualizado también gana espacio en la práctica socioeducativa, aun considerando una serie de dificultades en la elaboración de logros y monitoreo de dichos planes.

En la práctica socioeducativa hay sendos límites de orden debido a la complejidad de la atención brindada a adolescentes y jóvenes de acuerdo a las decisiones judiciales y su coexistencia diaria en una marcada realidad socioeconómica y política no igualitaria, así como también recursos culturales que están muy lejos de accesibles, los cuales son muy necesarios dada su condición de persona en formación. El compromiso de los que practican las medidas socioeducativas en MSE-MA ngela II – RAC ha sido vigilante de garantizar los derechos de los adolescentes asistentes, en orden de ajustarse la educación abierta social (PSC y AF). La interlocución y articulación con el SGD ha contribuido a la renovación de esta práctica y el apoyo brindado por SRCSA, para la constante formación de profesionales de servicio han evidenciado que el trabajo con adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley es merecedor de Fe (RODRIGUES and BOSCO, 2005)...

canalítica. Vínculo – In Revista do NESME, Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das Configurações Vinculares. São Paulo, v. 4, 2007. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1394/139420850003.pdf>. Acesso em: 11 de setembro de 2019.

COSTA, A.C. G. da. De menor a Cidadão. In _____(org.) Das Necessidades aos direitos. São Paulo: Malheiros, 121-144, 1994.

FERNANDES, W. J. A importância dos grupos hoje. In Revista da SPAGESP - Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado de São Paulo 2003, Vol. 4, No. 4, pp. 83-91. Disponível em: <file:///C:/Users/Gabriela/Downloads/Dialnet-AImportanciaDosGruposHoje-5599905.pdf> Acesso em: 10 de setembro de 2019.

IAMAMOTO, M. V.. O serviço social e a contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 6 ed. São Paulo, Cortez, 2003.

RODRIGUES, J. C. & BOSCO, S. M. S. (org.). Redescobrindo o Adolescente na Comunidade - Uma outra visão da periferia. São Paulo – SP: Cortez Editora, 2005.

SILVEIRA, M. S.; PREVITALI, F. S. Sociabilidade dos adolescentes em conflito com a lei de Uberlândia (MG). In Revista Katálysis, Florianópolis, v. 22, n. 2, p. 309-319, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802019000200309&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 10 de setembro de 2019.

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009.

GARDNER, H. Inteligências Múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre/RS: Artes Médicas, 1995.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Trad. José Cipolla Neto et.al. , 7ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

2.1.5. APLICACIÓN DE LA APROXIMACIÓN RESTAURATIVA EN LA PRÁCTICA JUDICIAL MACEDONIA EN PROCEDIMIENTOS CRIMINALES CONTRA NIÑOS Y NIÑAS.

Por Olja Ristova[11]

Introducción

La ley de justicia juvenil fue adoptada en 2013 por el Parlamento de la Republica de Macedonia, como un resultado

de numerosos criticas realizadas por expertos legales tanto locales como internacionales, quienes concluyeron que la Ley de Justicia Juvenil de 2007 no aplicaba a la práctica. De hecho, desde un punto de vista legal, esta ley esta alineada con los instrumentos internacionales de derechos del niño/a, pero el obstáculo para su realización es la pobre implementación.

Al establecer estándares legales, el legislador comenzó por las "libertades fundamentales y derechos garantizados por la Constitución de la Republica de Macedonia, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño (de ahora en mas la CDN) y otros tratados internacionales en el estatus del joven, ratificados de acuerdo a la Constitución de la Republica de Macedonia del Norte".

Los principios básicos de la ley de justicia para jóvenes son el interés superior del niño/a, las garantías legales que están en línea con las garantías del proceso de adultos, las medidas de asistencia y protección, la crianza y re educación del niño/a, la justicia restaurativa con un particular énfasis en el rol, el interés y la posición de la victima, prevención a nivel central y local y protección del niño/a victima de un crimen.

Aproximación Restaurativa

La ley de justicia juvenil esta basada en una aproximación restaurativa, aboga medidas de asistencia y protección para compensar la parte dañada, adopta un modelo diverso para tratar con crímenes menos serios que esquivan el proceso criminal clásico contra el niño/a; también provee un proceso de mediación y resolución que entra en jurisdicción del fiscal y puede ser tratado como estrategia de diversión con aspectos restaurativos.

La ley también estipula el principio de expeditad de acuerdo al cual el fiscal competente puede decidir no iniciar el proceso o pedir terminar uno ya iniciado contra un niño/a cuando considere necesario de acuerdo a la naturaleza del delito, las experiencias de vida o la personalidad del/la joven.

La ley también especifica la posibilidad del fiscal de proponer una sanción sin proceso preparatorio, si es sobre un delito penado con menos de 3 años de prisión, que el caso sea suficientemente claro (que exista suficiente prueba y que los datos recolectados sobre el/la joven y su personalidad provean bases para un dictamen). Como resultado de la Recomendación del Consejo Europeo Nro. R (87) 18 sobre la simplificación de la justicia criminal, algunos nuevos institutos han sido introducidos para el reconocimiento de responsabilidad y negociación de confesión en orden de acelerar el proceso.

El fiscal puede presentar dicha propuesta cuando las condiciones para sentenciar un niño/a en riesgo de mas de 14 años sean satisfechas, cuando haya evidencia que sin lugar a dudas indica que el joven perpetro un crimen, que el/ella es responsable de la comisión del crimen y cuando las condiciones para la imposición de pena se satisfacen.

El texto de la ley conformado de esta manera indica que se ha adoptado de acuerdo a las corrientes modernas de tratamiento de niños/as que han cometido actos que contienen elementos de ofensa criminal y es basado en principios de re educación, integración social, educación y prevención especial de futuros comportamientos desviados.

Más allá de que tipo de proceso se elija y la medida final a ser impuesta, los derechos fundamentales y el interés superior del niño/a debe ser respetado, mientras la estigmatización y discriminación deben evitarse, la duración del proceso debe ser la minima requerida en proporción a las características del joven y por propósitos legítimos solamente.

El propósito de la aproximación restaurativa

La justicia restaurativa apunta a superar el significado retributivo de la pena, promueve un modelo de diversificación pa-

11. Jueza en la Corte Criminal de Skopje, República de Macedonia del Norte

ra evitar el procedimiento criminal centrado en la victima. Las características del tratamiento restaurativo es que todos los esfuerzos son dirigidos a resolver las consecuencias y encontrar una solución para lo que fue hecho. Esta aproximación puede solo aplicarse cuando los hechos rodeando el evento no son discutidos tanto para el perpetrante como para la victima.

Las medidas y actividades que pueden ser categorizadas bajo el termino restaurativas son generalmente divididas en dos grupos: las que constituyen un proceso restaurativo y las que provén objetivos restaurativos (propósitos). El proceso restaurativo requiere compromiso de todas las partes interesadas – victima, perpetrantes y miembros de la comunidad local – en resolver la disputa con respecto a un crimen cometido y encontrar una solución adecuada. El propósito restaurativo significa alcanzar un acuerdo como resultado del proceso restaurativo, incluyendo compensación, servicios comunales y otros programas designados a permitir a la victima y la comunidad una reparación así como reintegrar a la victima y al ofensor.

La restaurativa es basada en 4 principios básicos que son pilares de su definición conceptual. El primero es la personalidad, lo cual es la percepción del crimen inicialmente como una violación a una relación humana e interpersonal. El segundo es el de reparar el daño resultado de ese crimen. El tercero concierne a la participación en la comisión o el llamado principio de participación y, finalmente, el cuarto principio concierne a la reintegración, lo que implica que el ofensor permanezca en la comunidad y no sea separado y estigmatizado; entonces debe haber una simultanea reintegración de la victima también y no una marginalización.

La ley de justicia juvenil sigue las tendencias internacionales modernas, entonces esta basada en una aproximación restaurativa y contiene un rango de provisiones que pueden ser aplicadas al joven en riesgo o en conflicto con al ley, como: compensación a la parte dañada en un Centro de Asuntos Sociales, procesos de mediación y acuerdo, referencia a mediación del caso para el fiscal, el niño/a, los padres, la defensa y la victima o parte dañada.

Aplicación en la práctica

Los procedimientos ante la corte comienzan con la presentación de un pedido para iniciar la preparación ante un fiscal competente, pero antes de decidir si se peticiona o no, la ley requiere que el fiscal convoque y escuche al niño/a en presencia de su defensa y sus padres o guardianes. Mientras esta provisión es imperativa en su contenido, no se aplica en la práctica como el legislador intento. Los fiscales que tratan con jóvenes llevan a cabo la misma práctica que con adultos ofensores, que es aplicar esta provisión a ofensas criminales de tráfico, que requieren el consentimiento de la parte dañada y si se compensa dicha ofensa, el defendido, en este caso el niño/a, no será procesado.

Evitar la aplicación de esta regla significa desviarse del aproximamiento restaurativo de acuerdo al cual el inicio del procedimiento en la corte contra el niño/a es el último recurso provisto por la ley.

Al explicar el porque no se aplica, los fiscales sostienen que el presupuesto de la fiscalía no tiene los fondos para pagar los defensores de oficio, que es por lo cual los abogados en procedimientos juveniles no son llamados a la fiscalía.

Como resultado de dichas acciones, los fiscales que tratan con estos casos de jóvenes que realizaron acciones que son descriptas por la ley como ofensas, ante la notificación por parte de la policía con la evidencia, inmediatamente forman un caso y hacen el pedido para comenzar una investigación preparatoria al juez juvenil, con una propuesta de citar e interrogar a la parte dañada y testigos, lo que es opuesto al espíritu de la ley, que provee una re educación e integración social.

Por otro lado, al recibir el pedido el juez juvenil tiene la oportunidad legal de discrepar y presentar el caso al Consejo Criminal de la Corte para jóvenes, quien decidirá si proceden o no. Los jueces juveniles, guiados por el principio de enjuiciar en tiempo razonable (que el proceso para niños y niñas debe ser completado en el tiempo más breve posible), y que la ley describe que el proceso contra un joven no debe durar más de un año y solo en crímenes graves un año y seis meses de la fecha de recepción del pedido en la corte, no aplican esta provisión para la declaración de discrepancia y deciden comenzar la acción preparatoria inmediatamente (conducir un proceso contra el niño/a).

Tal conducta de ambos, fiscal y juez, es contraria al principio básico de actuar de acuerdo al interés superior del niño/a (los jueces juveniles, que son puestos en esta situación, están eligiendo respetar la urgencia del proceso), opuesto a aplicar provisiones restaurativas que resulten en que el/la joven no sea procesado/a.

Entonces la conclusión es que la aproximación restaurativa no está siendo aplicada en los casos establecidos por la ley, lo cual es de vital importancia para el joven involucrado en el proceso, a través de la cual la ley debe lograr su propósito básico (especial prevención e individualización empatizada, crianza, re educación y mejor socialización) preferentemente a estar sancionando violaciones de ciertas normas legales.

Conclusión

Por estas razones, entrenamiento real y educación es necesaria y no será efectiva si no es aplicada a jueces y fiscales. Entrenamiento para tratar con niños/as en riesgo y en conflicto con la ley penal debe ser comprehensivo (incluir a todos los participantes en el proceso, policía, abogados, trabajadores sociales, fiscales y jueces). Sobre este asunto, la educación debe ser común, designada de manera tal que incluya a todos los operadores que puedan contribuir a que el comportamiento de niños/as sea corregido. Los entrenamientos también deben ser conducidos con inclusión de más ejemplos de buenas prácticas tanto domesticas como internacionales. La manera de aplicar el proceso también debe ser corregida (el fin de lograr es que la ley sea aplicada de manera correcta, y además, debe darse sugerencias sobre correcciones de las provisiones legales que no son eficientes en la práctica).

2.1.6. JUSTICIA RESTAURATIVA JUVENIL: SUDÁFRICA, NAMIBIA Y ZIMBABUE

Por Julia Sloth-Nielsen[12]

La Justicia Restaurativa ha estado en los anales de los procesos de reforma de la justicia juvenil de Sudáfrica desde principios de los 90, cuando, en el amanecer de una nueva democracia, una delegación Neozelandesa visitó Sudáfrica para explicar el funcionamiento de la Restaurativa en su (nueva) legislación. La entusiasta aprobación cayó sobre tierras fértiles aquí: Sudáfrica estaba buscando soluciones innovadoras para la era post apartheid que estaba sobre nosotros y la sanación, enmiendas y el perdón eran el sello distintivo de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, que fue establecida para iluminar la oscura historia de Sudáfrica.

La reforma de la justicia juvenil abarco desde 1995-2008, culminando en la adopción de la Ley de Justicia Juvenil de 2008. Esta ley tomo fuerza en 2010, y ahora ha sido implementada durante casi 9 años. El periodo concerniente a los 90, y a principios del milenio, se vio mucha innovación con diversión en particular. Los programas de diversión comenzaron en 1992, empujados por ONG y, a la fecha, la mayoría de los programas de diversión son ofrecidos por ONG, quienes reciben un subsidio Per cápita del estado para los programas que presentan para niños y niñas en conflicto con la ley. Esta ley estableció un sistema de acreditación nacional de proveedores de servicios y los programas que ofrecen, con criterios mínimos para dichos programas y haciendo responsables a los proveedores de servicio ante el Departamento de Desarrollo Social (que mantiene la responsabilidad por la diversión). Una re acreditación es mantenida periódicamente (cada cuatro años). Mientras los nombres de los programas aprobados son publicados, no puede establecerse hasta que extensión éstos contienen elementos restaurativos, aunque en la ley misma se aclara que varios objetivos legislativos de diversión incluyen principios de la Justicia restaurativa (la diversión debe "alentar al niño/a a responsabilizarse del daño causado por él/ella; la diversión debe "proveer una oportunidad a los afectados por la ofensa a expresar su punto de vista en su impacto en ellos", "la diversión debe impulsar un beneficio simbólico a la víctima o la entrega de un objeto como compensación por el daño"; debe también " promover la reconciliación entre el niño/a y la persona y comunidad afectada por el daño causado por el mismo" (sección 51 (b); (e), (f) y (g)))

La ley provee expresamente derivaciones a conferencias de grupo familiar como forma de diversión (sección 61). Estas conferencias son descriptas como procedimientos informales que juntan al niño/a acusado con la víctima, juntos con el apoyo de sus familias u otra persona apropiada, apuntando al desarrollo de un plan de cómo el/la joven tratara los efectos de su ofensa. Ambos, niño/a y víctima, deben consentir a la realización de esta conferencia. Es obligatorio que un oficial especialista (ejemplo: trabajador social) designado por el magistrado, lleve a cabo la conferencia (ver en sección 61 de la ley). Éste plan debe contener objetivos específicos a ser logrados por el niño/a (y el periodo en el que deben lograrlos) contener detalles de servicios y asistencias que se provean al niño/a y sus padres, especificar qué persona u organización proveerán estos servicios y asistencia, establecer la responsabilidad del niño/a y sus padres, proveer detalles de objetivos personales para el/la joven y sus padres e incluir cualquier otro asunto relacionado al empleo o educación que sea relevante. Debe tenerse un registro escrito de esto.

La ley también provee la mediación entre víctima y ofensor, que difiere de la conferencia familiar ya que incluye solo al ofensor, sin su grupo familiar y de soporte. Por ello, no es la mejor opción para organizaciones no gubernamentales y operadores de la justicia, ya que es preferible tratar con un niño/a de manera holística en el contexto de su familia o comunidad.

La restaurativa puede también ser empleada luego del auto de responsabilidad, antes de la sentencia: en tal caso el plan desarrollado en la conferencia familiar debe ser aprobado por el operador que haya dictaminado (sección 73 (3)), y si el tribunal no aprueba la resolución, podrá imponer otra sentencia, siempre explicando las razones para sustituir el plan en su resolución. El Reporte Anual del Departamento de Justicia 2017-2018 demuestra que solo unas pocas sentencias son impuestas a nivel nacional (1 en 2015-2016, 3 en 2016-2017, y 4 en 2017-2018). El reporte anual de 2016/2017 sobre la implementación de la Ley de Justicia Juvenil provee estadísticas sobre sentencias en justicia restaurativa desde 2011; ellos han achicado de 508 sentencias en 2012 a 1 registrada en 2015-2016. El Reporte anual 2017-2018 (el más reciente disponible) del departamento de Desarrollo Social da una amplia diversión de figuras, pero no especifica a que programa los niños/as en conflicto con la ley penal fueron referidos o derivados. Es así que no es posible determinar si las conferencias familiares fueron aplicadas como medio de diversión específicamente.

El entusiasmo por la Justicia Restaurativa se empeña en las provisiones descriptas de la ley que se han desarrollado. Aunque en el tiempo se hayan demorado. Aunque especulando, algunas razones pueden ser expuestas.

Primero, preparar a los participantes, estableciendo un buen equipo de conferencias familiares, es una tarea ardua. Los operadores de la justicia y trabajadores sociales están desbordados con trabajo notoriamente. Es usual que entonces, favorezcan otras estrategias de diversión menos intensas como la supervisión y guía a través de entrevistas (sección 53(f)), y de hecho, el departamento de Desarrollo Social reporta un numero alto de supervisiones hogareñas basadas en visitas (más de 3000) que tienden a respaldar la teoría.

Segundo, el compromiso de ONG en proveer programas restaurativos permanece obscuro: la única organización nacional con expertos dedicados a dicha área cerró por falta de fondos hace unos años., luego de 20 años de existencia. Ésta organización también estaba capacitada para dar entrenamiento y tutorías, cosa que ya no es posible. Para los proveedores de servicios de diversión acreditados, es usual que la presentación de proyectos a grupos de niños/as sea menos costosa y eficiente que dedicarse a conferencias uno a uno para cada niño/a ofensor/a y sus víctimas.

Tercero, con el paso del tiempo desde que se estableció la Comisión de Verdad y Reconciliación y la reforma en justicia

12. Julia Sloth-Nielsen es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad del Cabo del Oeste, Ciudad del Cabo, y profesora de derechos del niño/a en el mundo en desarrollo en la Universidad de Leiden, Países Bajos. Ha trabajado en reformas de legislación juvenil en muchos países incluyendo Lesoto, Kenia, Tanzania Namibia, Zimbabue, Botsuana y Mozambique y en su natal Sudáfrica. Ha publicado más de 200 artículos y varios capítulos de libros sobre justicia juvenil y derecho de familia.

juvenil, la justicia restaurativa ha desaparecido de la vista de la población. Aún más, se han perdido herramientas del sector.

Parece que será necesario un esfuerzo significativo para que las provisiones de justicia restaurativa de la Ley de Justicia Juvenil tomen fuerza.

Namibia

El proceso de reforma de justicia juvenil de Namibia ha estado en marcha por mucho tiempo (desde 1994 cuando el primer proyecto fue preparado; una versión incompleta es de 2012) y todavía no está completo. El autor actuó como consultor del Ministerio de Justicia en 2018 para preparar una versión actualizada del proyecto que está siendo tratada ahora en el parlamento. Todas las versiones previas, y la actual, contienen elaboradas provisiones sobre justicia restaurativa. El entusiasmo por la restaurativa fue predicado a través de reuniones entre Sudáfrica y Namibia en los 90, y en la receptiva población que recibió a la restaurativa y sus principios y objetivos a cuenta del objetivo de armonizar con la justicia.

La versión actual del proyecto elabora particularmente los beneficios de las partes – niño/a, victima, y comunidad – en la justicia restaurativa. La segunda parte del capítulo 7 está basada enteramente al proceso de la justicia restaurativa como opción de diversión, y permite derivar a este proceso al operador de justicia, al fiscal o al juez. El proceso de derivación y acuerdo de una conferencia familiar es detallado, y su presunto objetivo concretamente es la formulación de un plan escrito apropiado para una solución para el conflicto, el/la niño/a (incluyendo la derivación a programas alternativos), su familia y circunstancias específicas que sean relevantes para la comunidad y relativas a los principios derivados de la ley. Este plan debe establecer responsabilidades del Niño/a, su padre (o guardián designado como referente); establecer los objetivos personales del joven, su referente, e incluir cualquier otro asunto relacionado a la educación, empleo, recreación, y bienestar del niño. Las indicaciones para el monitoreo de su implementación y su logro deberán ser detalladas.

Si bien el proyecto todavía no ha sido terminado, es muy probable que estos principios se mantengan, ya que la restaurativa goza de gran apoyo.

Zimbabue

La diversión previa al juicio fue lanzada en el 2009. Inicialmente fue sostenida por donantes, pero desde 2016 el Ministerio de Justicia; Legales y Asuntos Parlamentarios ha tomado control de los oficiales de diversión, con 16 empleados actualmente por dicho ministerio en los 5 programas piloto. Hoy en día hay 12 distritos que lo aplican, y 5 más a ser comenzados en el verano, con 6 más para el fin de 2019. De acuerdo a una evaluación de 2016, 1.728 niños/as en conflicto con la ley penal fueron derivados del sistema de justicia criminal de Zimbabue entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de Septiembre de 2016 (Penal Reforma International, 2016:8). Durante ese periodo, solo 429 jóvenes fueron sometidos al sistema de justicia formal, o sea que el 80% de los niños/as en conflicto con la ley fueron derivados. En 2018, 595 de 805 niños/as fueron derivados. (74%).

Otra vez, la capacidad se construyó desde los vecinos de Sudáfrica durante el periodo previo a la implementación de la diversión, lo que significó que la restaurativa fue un objetivo establecido de diversión (Comité Nacional de diversión Pre Juicio: Guías en la diversión Previa al Juicio, sin fecha, capitulo 4). El dialogo Victima-Ofensor es descripto como opción clave de diversión, promoviendo la restaurativa. Como consultora, relacionarse con partes interesadas en establecer una nueva ley de justicia juvenil es importante, sin embargo, el autor observo que muchos casos de diversión no eran finalizados por la falta de habilidad del representante del niño/a y su familia a la hora de compensar a la víctima. A mi parecer, la restaurativa no es únicamente sobre compensar a la víctima, y en un país con tantas necesidades como Zimbabue, no debería ser un elemento esencial sino que debe buscarse otras formas de restauración – como la disculpa o restauración simbólica.

El proyecto de ley de Justicia Juvenil de Zimbabue está en un estado avanzado de preparación antes de ser elevado al parlamento – probablemente en 2020. Un objetivo clave, de acuerdo a su preámbulo, es "establecer la noción de rehabilitación y justicia restaurativa como parte integral del sistema de justicia juvenil". En el mismo camino que Sudáfrica y Namibia, la diversión y la justicia restaurativa son establecidas en capítulos concretos con detalles suficientes para que los operadores a implementar dichas provisiones. Un oficial de diversión o de medidas alternativas debe ser responsable de organizar una mediación víctima-ofensor u otro proceso restaurativo, y servir como facilitador o designar a alguien calificado para llevar a cabo la audiencia entre el/la joven y otras personas involucradas. El proyecto establece que, en la conferencia familiar, la ofensa sea discutida y se forme un plan sobre qué debe hacerse para llegar a una reconciliación.

Todavía hay un camino hasta que la legislación sea finalizada y aprobada para ser operativa en el parlamento, pero se ha realizado un considerable trabajo hacia su establecimiento, y hay un gran consenso sobre la necesidad de esta nueva legislación y su forma.

2.1.7. COMENTARIO GENERAL NÚMERO 24 DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, DE SEPTIEMBRE 19 DE 2019. REEMPLAZANDO EL COMENTARIO GENERAL NÚMERO 10 DEL 2007.

Por Marta Pascual[13]

El comentario general 24, que contiene 126 artículos, trata sobre el estado de la justicia penal juvenil durante más de una década, donde se desarrollaron diferentes resoluciones y medidas para jóvenes haciendo el Comité críticas negativas sobre el permanente uso de penas privativas de libertad para jóvenes, como así mismo hacia las tendencias en los diferentes países para bajar la edad de punibilidad de los mismos.
En su desarrollo final de este largo documento marca su preocupación y alienta la implementación de medidas para neutralizar la captación de niños y niñas por parte de grupos armados, terroristas o extremistas. Dado que los niños/

13. Marta Pascual es jueza en Argentina y presidente de la AIMJF

niñas se convierten en víctimas de múltiples violaciones, tales como la conscripción, entrenamiento militar o ser usados en actos terroristas, incluyendo ataques suicidas.

De las referencias periodísticas con asombro se ha visto la utilización de éstos como escudos humanos o víctimas de secuestro, venta, tráfico u obligados a realizar tareas peligrosas tanto como espías, actuar de "campanas" o portar equipamiento militar.

Así, el Comité exhorta a los Estados a tratar a esos niños/as como víctimas, absteniéndose de su persecución e imputación como parte de estos grupos armados y así mismo, que dichos estados se enfoquen en prácticas restaurativas tales como la diversión o medidas alternas a la detención.

El comentario 24 dedica un acápite hacia la justicia de costumbre, que es un proceso informal y tiene ventajas de celeridad y bajo costo, con una adaptación cultural al entorno de los niños/as.
El Comité destaca que es prioritario reconciliar o amalgamar la costumbre con el sistema de justicia estatal integrando aspectos formales e informales en el ejercicio de la administración de justicia.

En referencia al sistema de justicia juvenil, compatible con la Convención de Derechos del niño/a, el Comité reconoce los esfuerzos de algunos estados y aunque ha sido poco el camino recorrido en las áreas de prevención e implementación de medidas alternativas como así también una apropiada edad mínima de imputación, también nos advierte sobre un uso indebido de la privación de libertad para jóvenes y la extensión de los periodos de prisiones preventivas.

A partir de su artículo 7mo, comienza a desplegar los principios rectores de la justicia juvenil.

Así, al mencionar la no discriminación, hace referencia a la especial atención que debe prestarse a los llamados "ofensas por condición", que no son considerados delitos si son realizados por adultos. Así los castigos son enfocados a los grupos de niños/as vulnerables, como aquellos en situación de calle, pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas, niños/as aborígenes, discapacitados o reincidentes.

Los niños/as en esta situación, como así también como aquellos deambulando en las calles o escapados de sus hogares deberían ser tratados con la implementación de medidas que los protejan, incluyendo el apoyo a progenitores u otros responsables, trabajando en las causas que provocan estos comportamientos.

En referencia al interés superior del niño, menciona la prioridad de este principio rector o guía para los niños y niñas, que difieren de los adultos en su desarrollo y necesidades y son estas diferencias las que sustentan una responsabilidad diferente para los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Estas son también las razones de la especialidad del fuero juvenil, por cuanto sin perder la seguridad pública ha de alejarse del objetivo tradicional de la justicia criminal (que es la retribución), dando paso a la rehabilitación de los jóvenes apoyados en los principios de la justicia restaurativa.

Refiriéndose al derecho a ser oído, el Comité expresa que la voz del niño o niña en el sistema juvenil es una herramienta y un enfoque en la satisfacción de sus derechos.

En cuanto el respeto a la dignidad, se refiere a que el trato esté acorde con los derechos humanos enfatizando la reinserción del niño o niña e incentivando su autodeterminación, para que asuma un rol constructivo en la sociedad y una ciudadanía plena.

La resolución numero 24 a partir del enunciado 17 describe los elementos esenciales de una amplia política de justicia juvenil, estos son:

a. La prevención del delito juvenil, promoviendo la formación de los jóvenes para vivir responsablemente en su comunidad asumiendo un rol constructivo.

b. Los programas de prevención deberán estar enfocados a ayudar a las familias, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad y pobreza, comprometiendo a las escuelas en la enseñanza de valores básicos para los jóvenes, focalizando sus programas educativos en aquellos en riesgo y en la capacidad de retenerlos en los centros educativos.

Intervención o Diversión: la recomendación despliega dos clases de intervención a utilizar por los estados miembros en el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley que son:

• Diversión como medida fuera del proceso judicial.

• Medidas alternativas dentro de un procedimiento judicial.

En cuanto a la primera, se menciona la efectividad de aquellos programas alternativos basados en la comunidad, tales como servicios comunales, supervisión o guías de trabajadores sociales, consejeros familiares o prácticas restaurativas como forma de reacción del estado con jóvenes ofensores.

Refiriéndose a la segunda clase de medidas, dentro del procedimiento judicial, observando las reglas de juicio justo y debido proceso, resaltando la bondad de aquellas medidas sociales o educacionales por fuera de un contexto de encierro.

c. En referencia a la edad mínima de imputación, punto neurálgico de las reformas en américa latina ya que han centrado los debates en dicho objetivo, habiendo obstaculizado el desarrollo de un sistema penal juvenil acorde a los principios de la Convención siendo que muchos países, como Argentina, sigue en vigencia a nivel nacional una ley vetusta de la época del proceso militar y que no se ha adecuado a los estándares del derecho internacional.

Así, el Comité recomienda que la edad mínima de imputación no esté en un número muy bajo teniendo en cuenta la madurez emocional, mental e intelectual.

En el comentario original del 2007 el Comité había considerado los 12 años como edad mínima absoluta, sin embargo, en esta nueva redacción considera dicha edad como baja, mencionando que por lo menos debería elevarse a 14 años, elogiando a los estados que la estandarizaron en 15 o 16 años.

Se denota la preocupación del Comité en cuanto a la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal por debajo de la edad de imputación y la forma en que son tratados, pidiendo en los informes que los estados miembros realizan ante el Comité que los mismos sean exhaustivos y detallados en la información.

d. Garantías de un juicio justo: de la lectura de esta nueva recomendación, surge la preocupación del Comité en cuanto a la calidad y capacidad de las personas designadas en la adminis-

tración de la justicia juvenil para implementar un trato especial y un juicio justo para los jóvenes que hayan cometido delitos.

Refiriéndose a las niñas, que en número escaso pasan por el sistema juvenil, y dejando de lado lo cuantitativo de los casos, debe dárseles a ellas especial atención a sus necesidades tales como salud, tratamiento psicológico o psiquiátrico y tomar muy en cuenta aquellos casos que denoten abuso.

Referido a la presunción de inocencia, el presente documento pone en cabeza del fiscal la carga probatoria y puntualiza el beneficio de la duda para el joven infractor, asimismo, cuando los jóvenes llevados al proceso, por su inmadurez, miedo u otras razones sean observados de manera sospechosa, ello no dará motivo a que el juez o tribunal asuma su responsabilidad en el hecho más allá de cualquier duda que pudieran tener las autoridades.

Desarrollando el derecho a ser oído, principio que todo especialista diferencia con la escucha o simple procedimiento de grabar o escribir lo que el niño formule en el proceso, y teniendo en cuenta que este derecho conlleva un entendimiento de la situación personal del joven y una especial empatía por aquellos llevados a su juzgamiento o tratamiento, éste derecho es fundamental para un juicio justo. Así, ha de tratar al joven como un participante en lugar de como un objeto pasivo, y esto ha de contribuir a dar una respuesta efectiva a su comportamiento, incrementando la posibilidad de su integración barrial o comunitaria. Para esto es necesario que durante el proceso todas las partes se desenvuelvan con un lenguaje claro y comprensivo para los jóvenes.

El Comité reitera la necesidad de plazos exiguos, no solo en cuanto a la duración del proceso sino también en cuanto a la notificación de cargos, urgiendo a los estados deberán implementar límites de tiempo desde la comisión de un delito, durante el término de la investigación, la acusación fiscal y en la resolución final, debiendo estos plazos ser mucho más cortos que las de los adultos.

Así mismo el Comité lamenta la tendencia moderna de aplicar sanciones a los padres cuyos hijos han cometido delitos ya que esto opera en detrimento del joven y no ha de contribuir a que los responsables asuman un compromiso en la reinserción de los jóvenes.

e. En éste acápite, se enfatiza la aplicación de medidas alternativas que tanto pueden utilizarse antes del juicio o continuar durante todo el transcurso del mismo. Refiriéndose al daño que causa la privación de libertad a niños, niñas y adolescentes, el Comité recomienda a los Estados establezcan una pena máxima en los casos de delitos juveniles, enfatizando que la reacción siempre debe estar dada por el delito cometido y nunca basada en la situación personal del joven, dedicando dos artículos a la prohibición de la pena de muerte como así mismo a las sentencia de prisión perpetua sin beneficio para jóvenes ofensores.

f. Referido a la privación de libertad, el presente documento hace referencia a que en muchos países los niños/as permanecen por largos periodos de tiempo sufriendo prisiones preventivas, siendo que la utilización de este recurso procesal viola el principio de inocencia. La duración de las prisiones preventivas debe ser por corto tiempo y sujetos a revisión periódica.

El Comité recomienda que los estados dicten reglamentaciones estrictas referidas a la revisión regular de la prisión preventiva, preferentemente de manera semanal.

En cuanto al tratamiento y condiciones de la privación de libertad se enfatiza que debe ser en lugares especiales para jóvenes y siempre separado de los adultos. Y en cuanto a los jóvenes condenados, al llegar éstos a su mayoría de edad, no sean automáticamente trasladados a cárceles para adultos.

Hacia el final del extenso comentario, el Comité resignifica la importancia de recopilar información sistemática relevante para la administración de justicia juvenil y de vital importancia para el desarrollo e implementación de políticas tanto de prevención como de aquellas destinadas a dar respuestas a la delincuencia juvenil, recomendando la investigación y las evaluaciones periódicas de las prácticas llevadas a cabo con jóvenes tendientes a medir la efectividad de las medidas adoptadas, en especial, aquellas dedicadas a cuestiones alternativas o de justicia restaurativa.

2.1.8. ESTUDIO GLOBAL SOBRE JÓVENES PRIVADOS/AS DE SU LIBERTAD

En la resolución 69/157 del 19 de diciembre de 2014, la Asamblea General invito al Secretario General a realizar un profundo estudio sobre niños y niñas privados de su libertad. En Octubre del 2016, Manfred Nowak (de Austria) fue designado como Experto Independiente a cargo del proyecto, el cual es el primer intento científico, basándose en información global, de comprender la magnitud de la situación de los niños/as privados de libertad, su posible justificación y causas raíz. Así como también las condiciones de detención y su impacto negativo en la salud y desarrollo del niño/a.

Dicho estudio también identifica las mejores medidas alternativas a la detención aplicadas en los Estados en relación a las siguientes seis situaciones: (a) detención de niños/as en la administración de justicia; (b) niños/as viviendo en prisiones con sus principales responsables; (c) detenciones relacionadas a la migración; (d) privación de la libertad en instituciones; (e) detenciones en el contexto de conflictos armados y; (f) en campos de seguridad nacional. La investigación propone recomendaciones para asesorar a los Estados y las Naciones Unidas al lidiar con este fenómeno. El reporte recopila los detallados hallazgos del Estudio Global sobre jóvenes Privados/as de su Libertad, que estará disponible en publicaciones impresas, electrónicas y versiones amigables con los/as jóvenes. Fue preparado a través de procesos participativos, que incluyeron consultas temáticas regionales, sub regionales y nacionales, axial como reuniones de expertos. Muchos Gobiernos, Agencias de las Naciones Unidas y otras partes interesadas previeron respuestas amplias a los cuestionarios transmitidos a ellos en Febrero de 2018.

https://undocs.org/A/74/136

2.2. COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA

2.1.1.¿POR QUE CAUSA POLÉMICA LA DECISIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF QUE IMPIDE EL HACINAMIENTO EN LA RECLUSIÓN DE MENORES?

Por Brigitte Remor De Souza May[14]

En mayo del 2019, el Ministro Fachin tuvo repercusión nacional por los efectos de la orden judicial concedida en el HC colectivo 143.988. La decisión limita en 119% la tasa de ocupación en las unidades socioeducativas y determina la transferencia del excedente de los adolecentes para otras unidades que no tengan su capacidad de ocupación superior a esta tasa establecida.

¿Puede un adolecente ser privado de su libertad? Si, por actos análogos a crímenes y en los términos del Art. 122 del Estatuto de la Infancia y de la Juventud, que sean practicados con violencia y grave amenaza (Art. I)

Cada Estado federado tiene, bajo la responsabilidad del Poder Executivo Estadual, unidades para el cumplimiento de medidas privativas de la libertad, al mismo tiempo que las medidas no privativas de libertad son de responsabilidad de los Municipios donde el adolescente reside.

¿Qué tan grande es la privación de libertad de los adolescentes en el país? Los datos publicados en el 2018, relativos al 2015, informan que 26,000 adolescentes están con algún tipo de privación o restricción de libertad. De este total, 18.381 jóvenes serían reclusos, lo que equivale al 68%.

En el país, fueron encontradas 484 unidades para la ejecución de la medida socioeducativa de reclusión, según "la encuesta anual" del Sistema Nacional de Servicios Socioeducativos (SINASE) de 2015.

En 2012, el Consejo Nacional de Justicia ya hizo presente no solo la precariedad en las unidades socioeducativas en algunos estados, sino también el hacinamiento, destacando que la tasa de ocupación promedio en Brasil es del 102%.
En 2019, el Consejo Nacional del Ministerio Público dio a la publicidad un documento con el título de "Panorama de la ejecución de los programas socioeducativos de reclusión y semi-libertad en los estados brasileños", que destaca el hacinamiento en varios estados, así como el déficit de vacantes.

¿Situados? Vamos al punto. En mayo de 2019, el Ministro Fachin hizo público, con repercusión nacional, los efectos de la orden judicial ya concedida el 16/08/2018 en el Habeas Corpus colectivo (HC 143.988 AGR / ES).[1]

La decisión delimita la tasa de ocupación de las unidades socioeducativas en un 119% y determina la transferencia de adolescentes excedentes para otras unidades que no tengan una capacidad de ocupación superior a la tasa establecida.

Además, si la transferencia no es posible, el juez de ejecución de medidas socioeducativas debe analizar quién puede ser incluido en el programa semi abierto (Art. 49, ítem II, de la Ley N ° 12.594 / 12), hasta alcanzar el porcentaje de ocupación máxima establecida.
Desde entonces, se produjo una controversia, pero sin "negar la validez constitucional de la decisión atacada", como lo declaró Márcio da Silva Alexandre.

Lo que se puede observar fácilmente de la decisión es que no hubo una "determinación de liberación masiva", como creen los medios sensacionalistas y los fundamentalistas de turno, ya sea en 2018 o 2019.

El relator ofreció varias alternativas.
Si los Estados no tienen una red adecuada de atención socioeducativa de reclusión de adolescentes, ¿de quién es la omisión histórica?

El Estatuto de la Infancia y la Juventud fue creado en el año de 1989. La ley que regula la implementación de medidas socioeducativas (Ley de SINASE) es del 2012, sin olvidar siquiera toda la legislación internacional sobre el tema.

La inercia del ejecutivo solo se entiende por el incumplimiento constante y diario del principio de prioridad absoluta por parte de los gobernantes.

Además, no se puede argumentar que los propios estados no conocían la realidad de la ejecución de las medidas de privación de la libertad en sus territorios, ya que la crisis en el sistema socioeducativo, en especial en la privación de libertad, ha sido larga.

Todas las encuestas nacionales, visitas a las unidades, informes y estudios han puesto al descubierto durante mucho tiempo el estado inconstitucional de esta situación.

El propio relator menciona, en el cuerpo de la votación, la existencia de acciones civiles públicas.

He llegado a la convicción de que la "controversia" ocurrió solo porque no estamos acostumbrados a reacciones más contundentes en lo que se refiere al sistema socioeducativo de privación de la libertad.

A menudo, los problemas relacionados con el sistema socioeducativo se alivian, por ejemplo, para no "desorganizar" el sistema[2] o "permitir el hacinamiento, si se demuestra que es lo mejor para los adolescentes recluidos"[3] o incluso la reacción a las interdicciones de las unidades.[4]

¿Será que las "voces contrarias" a la decisión del Ministro Fachin fueron sorprendidas por el reconocimiento de que los adolescentes que se encuentran afectos a la Justicia Juvenil que están privados de libertad tienen sus derechos reconocidos?

El Ministro analiza muchos factores, desde las condiciones mínimas de higiene, hasta "la ocupación por encima de la capacidad proyectada y los límites de razonabilidad" y concluye:

"Los derechos fundamentales de los adolescentes reclusos sufren graves violaciones motivadas por el hacina-

14. Brigitte Remor De Souza May Máster en Ciencia Jurídicas de la Universidad del Vale do Itajaí. Juez de la Corte de la Infancia y la Juventud del Distrito de Florianópolis. Socia fundadora del Instituto Brasileiro de Direito da Criança e Adolescente (IBDCria- ABMP) Miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia.

miento, razones por las cuales no pueden permanecer en su degradante situación."

También se fundamenta en el principio constitucional de dignidad de la persona humana (Art. 1º, III, CF y art. 124, V, Ley 8.069 / 1990) que se basa en:

"El respeto abarca la obligación del Estado de proporcionar las condiciones necesarias para la ejecución de medidas socioeducativas a los adolescentes en conflicto con la Ley (art. 1, § 3, Ley 12.594 / 2012 - SINASE)."

Invoca las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada por medio del Dec. 99.710/1990, en el Art. 3º y el Art. 37, que también aporta una novedad al sistema socioeducativo, a saber, el principio "numerus clausus", que es "identificado como el principio o el sistema organizativo por el cual cada nueva entrada de una persona en el sistema penitenciario debe corresponder al menos a una salida, de modo que la relación "recluso-vacante siempre permanezca estable o disminuya".

El distinguido Ministro menciona que "la solución, a saber, la aplicación del principio numerus clausus, es por el momento la más adecuada para minimizar y estabilizar el marco preocupante".

Y complementa:

"Como fue indicado al inicio, el principio numerus clausus se ha aplicado recientemente en el ámbito internacional, y en la acción civil pública que involucra a otra unidad de detención (UNAI), la decisión del Juez de primera instancia que estableció, entre otras medidas, la observancia del número máximo de reclusos, en un total de 68 adolescentes, bajo pena de una multa diaria, fue mantenida en el STF, en el posicionamiento anticipado de la sentencia 823/ES, Relator Min. Lewandowski."
La sentencia del Ministro trae la centralidad del sujeto en desarrollo, en la cuestión de privación de libertad y la misma indignación que ya ocurre con el sistema penitenciario:

"Es en esta dimensión, entiendo que en el ambiente del adolescente en conflicto con la ley, que las medidas socioeducativas de privación de libertad deben llevarse a cabo en establecimientos que ofrezcan condiciones dignas, respetando su situación peculiar como persona en desarrollo."

También afirma que "la tutela protectora, así, deriva de la efectividad directa e inmediata de la previsión explícita de la Constitución".

El Ministro Fachin ha llegado, más allá de la teoría de la Protección Integral, "al deber del juez de armonizar el orden con los derechos humanos universales".
El mandato trajo a la luz pública la intolerancia al hacinamiento, a partir del 119% en las unidades socioeducativas, como lo ha estado haciendo la Corte Suprema (Superior Tribunal Federal-STF) durante algún tiempo en relación con el tema de los presidios.

Veamos: con respecto al sistema penitenciario, que alberga a una de las poblaciones penitenciarias más grandes del mundo, en una lectura rápida, existen varios precedentes en la Corte Suprema, que van desde nombrar el sistema de "estado inconstitucional" en 2015 (ADPF 347 MC / DF, rel. Min. Marco Aurélio), incluso declarando casos de "violación de los derechos fundamentales que causan lesiones personales a los detenidos" (RE 580.252, rel. Min. Alexandre de Moraes).

En una votación, el relator Ministro Alexandre de Moraes menciona el informe final de la comisión de investigación parlamentaria de la Cámara de Diputados, que concluye: "El hacinamiento es quizás la madre de todos los demás problemas en el sistema penitenciario. Las celdas superpobladas causan insalubridad, enfermedades, disturbios, rebeliones, muertes, degradación de la persona humana" (RE 580.252, rel. Min Alexandre de Moraes).

Y en otro fallo del Ministro Marco Aurélio: "Además de no servir a la resocialización de los prisioneros, fomentarían el aumento de la delincuencia, ya que convertirían a los pequeños delincuentes en 'monstruos del crimen'" (ADPF 347 MC / DF, rel. Min. Marco Aurélio).

En su voto, en el mencionado Recurso Extraordinario nº. 580.252, el Ministro Teori Zavascki declara: "Considerando que es el deber del Estado, impuesto por el sistema normativo, mantener en sus cárceles los estándares mínimos de humanidad previstos en el sistema legal, es su responsabilidad, bajo el artículo 37, párrafo 6, de la Constitución, la obligación de indemnizar los daños, incluidos los daños morales, comprobadamente causados a los detenidos debido a la falta o insuficiencia de las condiciones legales de prisión".

En la misma votación, el Ministro Teori Zavascki se pronuncia sobre la "disfuncionalidad del sistema de seguridad pública, la indigencia carcelaria representa solo una parte - importante, pero solo una parte - de un todo más amplio, que es el sistema de seguridad pública ofrecido por el Estado brasileño".

La Corte Suprema, en el Recurso Extraordinario nº. 580.252, también reconoce el papel del poder judicial en el tema del hacinamiento en las cárceles del país: "El poder judicial también sería responsable, ya que aproximadamente el 41% de los presos estarían bajo custodia provisional y la investigación demostraría que cuando se juzga, la mayoría sería absuelta o sentenciada a penas alternativas".

Sin lugar a dudas, según las encuestas nacionales, la falta de estructura del propio sistema judicial, que tiene un número reducido de Tribunales de la infancia y la juventud en el país y, mucho menos, de Tribunales de ejecuciones de medidas socioeducativas, por ejemplo.

No se olvida, sin embargo, que desde 2016, el Precedente Vinculante número 56 de la Corte Suprema determina, para el preso adulto, que la falta de un establecimiento penal adecuado no autoriza el mantenimiento del condenado en un régimen penitenciario más severo.

Además, en 2018, la Corte Suprema declaró de forma clara que el mencionado precedente vinculante se aplica expresamente en el sistema socioeducativo (HC 157228 / SC - Apelación ordinaria en HC, Min. Gilmar Mendes).

Aún así, la decisión fue consistente con la Resolución del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que tiene como política institucional del poder judicial la promoción de la aplicación de alternativas penales, con un enfoque restaurativo, reemplazando la privación de libertad (Resolución No. 288/2019).

En este contexto, como se muestra mas arriba, la decisión del Ministro Fachin cumple con la Constitución Federal, la ley, los tratados internacionales y no contradice el tratamiento dado al asunto penitenciario por parte de la Corte Suprema.

La decisión debería ser una lectura obligada para todos nosotros.

Como recuerda Márcio da Silva Alexandre, la ley establece que es "el derecho del adolescente, peligroso o no, santo o

impío, violento o no, realizar su 'pena' en una unidad de privación de libertad en la que haya una vacante. Por lo tanto, si no hay vacante, la ley ordena que se transfiera a un programa de régimen semi abierto. Y esto a pesar de que el delito se haya cometido con una grave amenaza o violencia para la persona".

Pero hay otras críticas a la decisión, por varias razones, entendiendo que establecer el porcentaje por encima de la capacidad también sería una violación de los derechos.

Sin embargo, debe considerarse que la discusión sobre la capacidad y su porcentaje en las unidades socioeducativas no es nueva, ni siquiera puntual.

En 2015, el Ministro Dias Toffoli mantuvo la ley reguladora del Estado de São Paulo, que permitió un exceso del 15% del límite de las vacantes proyectadas en las unidades de ejecución de medidas socioeducativas en el estado de São Paulo (Disposición No. 1.436 / 07, del Consejo Superior del Poder Judicial del Estado de São Paulo, artículos 6 y 7, párrafo único RE 405267).

Allí, el criterio fue la organización del sistema y la garantía de la permanencia del adolescente cerca de su familia, destacando que "no hay 'buenos frutos' resultantes de la ilegalidad declarada por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en relación con los artículos 6 y 7, párrafo único, de la Disposición No. 1.436 / 07, del Consejo Superior de la Judicatura del Estado de São Paulo".

El Ministro consideró que "por el contrario, el cumplimiento efectivo de tal orden está desorganizando el sistema de gestión de la administración de las unidades para el cumplimiento de las medidas socioeducativas de detención en el Estado de São Paulo, minando efectivamente los mejores intereses de los adolescentes sometidos a este tipo de medida".

Al criticar la decisión del ministro Fachin, Assis da Costa Oliveira y Luanna Tomaz de Souza analizan tres puntos que consideran relevantes y resumen:

"Esta lógica naturaliza lo absurdo y ratifica la violación de los derechos de los adolescentes que permanecen en esta condición. Autoriza que el estado pueda operar ilegalmente, pero con autorización judicial para hacerlo. El poder judicial ahora legitima la negligencia del estado al resolver no solo el problema del hacinamiento en el sistema socioeducativo, sino que lleva a que haya cada vez mas adolescentes ingresando a él."

Los autores Assis da Costa Oliveira y Luanna Tomaz de Souza defienden como el mejor criterio objetivo el uso no negociable de la capacidad máxima del establecimiento y el principio de numerus clausus.

Las críticas con respecto al ajuste porcentual son extremadamente pertinentes.

Pero independientemente de este tema, la decisión del Ministro Fachin fue un hito y un paso importante en la visibilidad y en la situación del sistema socioeducativo nacional.

¿Por qué la controversia entonces? ¿Será porque volvemos rutina la "invocación selectiva de razones estatales para negar, específicamente a una determinada categoría de sujetos, el derecho a la integridad física y moral"? (Voto del Ministro Teori Zavaski, en RE 580.252).

¿Será debido a la internalización de nuestro autoritarismo? ¿De la deshumanización del otro, de la naturalización del caos del sistema socioeducativo?

¿De la ilusión de que "en el neoliberalismo el estado penal dará cuenta del conflicto social juvenil" a través de la "criminalización de las consecuencias de la miseria"?[5]

Para mí, la controversia solo puede explicarse por la perpetuación de un estado que viola los derechos y debilita nuestra abatida democracia.

Taiguara Libano Soares y Souza nos advierte que fragilizando la democracia, ocurre una expansión del Estado policial (Foucault) o del Estado criminal (Wacquant) y hay un recrudecimiento de las medidas de control social, "porque la búsqueda de seguridad supera la lucha por la libertad, el discurso de la seguridad pública toma el lugar del discurso de los derechos humanos, la protección de unos pocos es privilegiada en lugar de la protección de la colectividad".

Al fortalecer el sistema de garantías de derechos, tenemos el deber de respetar la Constitución, los tratados internacionales, la legislación específica sobre el tema y conocer la realidad del sistema socioeducativo de privación de libertad. Como Norberto Bobbio defendía en su libro La Era de los Derechos, "el problema fundamental con respecto a los derechos humanos hoy en día no es tanto justificarlos como protegerlos. Este no es un problema filosófico sino político". Y el ejercicio concreto de estos derechos es lo que lo hace vivo.

Notas:

[1] La decisión original determinó la liberación en unidades ubicadas en Espírito Santo. Estados de Bahía, Ceará, Pernambuco y Río de Janeiro.

[2] "[...] no hay 'buenos frutos' derivados de la ilegalidad declarada por el CNJ con respecto a los Artículos 6 y 7, párrafo único, de la Disposición No. 1.436 / 07 del Consejo Superior de la Magistratura del Estado de São Paulo. Por el contrario, el cumplimiento efectivo de tal orden está desorganizando el sistema gestor de la administración de las unidades de cumplimiento de las medidas socioeducativas de reclusión, en el Estado de São Paulo, afectando efectivamente los mejores intereses de los adolescentes sometidos y este tipo de medida [...]" Informativo n. 698. Suspensión de la decisión del CNJ: traslado de delincuentes juveniles y unidades de detención (MS 31902 MC / DF)

[3] "Por lo tanto, la persona más capaz de determinar o determinar (sic) la transferencia del adolescente para cumplir con la medida socioeducativa en otra unidad es el Juez responsable del Tribunal de Infancia o Juventud, que incluso puede permitir el hacinamiento si se prueba que está en el mejor interés de los adolescentes reclusos. [...] Por lo tanto, la transferencia de unidades de los adolescentes en conflicto con la ley debe ser decidida por el Juez de la Corte de la infancia y la juventud, caso a caso, con la intervención del Ministerio Público, para que sus derechos no sean vulnerados".

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28SUPERLOTA%C7%C3O++E+ADOLESCENTE+E+ATO+E+INFRACIONAL%29&base=baseInformativo&url=http://tinyurl.com/y2wg4438

[4] En 2015 - Rcl 22618 / RJ, Min. Marco Aurélio, donde había solicitado a la Oficina del Defensor Público "interdicción o, sucesivamente, la observancia de la capacidad máxima de una determinada unidad", destacando la Corte de Río de Janeiro que "está buscando la solución de los problemas reportados y que supuestamente asolaron la resocialización de los adolescentes reclusos durante años, no siendo la interdicción, en

este momento, incluso parcial, o incluso la limitación a un cierto número de reclusiones, en resumen, la mejor respuesta para ser dada por el poder judicial".

[5] Loic Wacquant. Castigar a los pobres: la nueva gestión de la miseria en los Estados Unidos. RJ: Freitas Bastos, 2001

3. TEMAS DE INTERÉS GENERAL

3.1. EVIDENCIA FORENSE EN PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE NIÑOS/AS

Por Peter Johnstone[15]

Los casos relativos a niños con "Síndrome de Niño Sacudido" se encuentran entre los más emotivos, controversiales y complejos dentro de la jurisdicción tutelar de la Corte Juvenil de NGS.

La toma de decisiones en procedimientos de cuidado y protección es compleja, y necesita que los operadores judiciales entren en la difícil tarea de evaluar y considerar los múltiples factores que combinan el impacto en la seguridad futura del niño/a y su bienestar. Este proceso es especialmente complejo en casos de lesiones no accidentales donde generalmente no hay una evidencia directa del supuesto abuso, y las explicaciones ofrecidas por los tutores son inconsistentes con las pruebas físicas.

Este trabajo busca explorar el rol de la evidencia forense en procedimientos de cuidado y protección relativo a lesiones craneales no accidentales.

Procedimientos de cuidad y protección

Estos procedimientos son conducidos por la Corte Juvenil de NGS a la luz de la Ley de Cuidado y Protección de Niños y Jóvenes de 1998.

El principio más importante de esta ley es que en cualquier acción o decisión concerniente a un niño/a, o su seguridad o bienestar es importante. Este principio prevalece sobre cualquier otra consideración, aun cuando conflictúa con derechos o intereses de los padres.

Las decisiones criticas bajo la ley, relacionadas a problemas de restitución, contacto, responsabilidad parental y cuidada, debe aplicar el concepto del "inaceptable riesgo de daño al niño/a", como fuera establecido en el fallo de la Corte Suprema MvM (1998) HCA 68.

Evidencia en el proceso de cuidado y protección

La Corte Juvenil tiene una amplia discreción al admitir evidencia en estos procesos, como evidencia "de oído", que no seria admisible en la Corte ordinaria. Sin embargo debe configurar sus conclusiones de material que sea suficiente, en sentido de prueba, para evitar que la toma de decisiones parezca caprichosa, arbitraria o sin material fundamental. Cuando se tenga delante un caso de supuesta lesión craneal no accidental, le es requerido usualmente a la corte el considerar y evaluar evidencia de expertos, particularmente testigos médicos. Su evidencia es del tipo de opinión.

Independientemente de esta amplia discreción de la Corte Juvenil al aceptar evidencia, en asuntos concernientes a evidencia científica, suelen aplicar las reglas usuales de evidencia relacionada a testimonio experto.

En Makita (Australia) Pty Ltd v Sprowles Justice Dyson Heydon, un Juez de la Corte de Apelaciones de NGS sumarios la ley aplicable en relación a la admisibilidad de evidencia de expertos

(1) debe haber un campo de "conocimiento especializado" donde el testigo demuestre a razón de sus estudios, entrenamientos o experiencia, se ha convertido en un experto.

(2) la opinión expresada debe ser "completa o sustancial, basada en el conocimiento del testigo experto";

(3) ya que la opinión es basada en hechos observados por el experto, ellos deben ser identificados y probados por el experto;

(4) si se basa en hechos asumidos o aceptados, deben ser identificados y probados de algún modo.;

(5) debe establecerse que los casos en Loos que la opinión se basa forman una base apropiada para ella y que la evidencia del experto debe explicar en que manera el campo de "conocimiento especializado" en el que se maneja, o que se basa la opinión aplica a los hechos asumidos u observados al producir este dictamen.

Los doctores no deberían desviarse de su área de expertise. Por ejemplo, un medico clínico no debería aventurarse a expresar puntos de vista sobre psiquiatría, o al menos debería aclarar que esa visión esta basada en un nivel de conocimiento de medicina general, derivado de estudios clínicos. El experto debe establecer claramente cualquier material escrito considerado y todo lo que forma la opinión. Los expertos médicos deben identificar cualquier trabajo o estudio en los que se basaron, y deben articular el proceso de razonamiento que han usado para llegar a una opinión o conclusión, y poder defenderlo.

Lesiones craneales no accidentales

No es posible analizar el rol de la evidencia forense en procesos de cuidado y protección que incluyan supuestas lesiones craneales no accidentales sin realizar un intento de estudio sobre las realidades de trauma craneal en infantes.

Este problema fue objeto de álgidas discusiones.

El sacudón como mecanismo para generar lesiones intracraneales en infantes fue descripto en un articulo del Diario de Medicina Británica en 1971. El estudio se basaba en uno previo, donde se había sometido a monos a un experimento donde se los sentaba en sillas de fibra de vidrio sobre vías, entonces, con la cabeza libre, eran sometidos a aceleraciones similares a las sufridas en choques de automotores. Algunos animales sufrieron lesiones intracraneales y otros una concurrente lesión de cuello. El resultado de que una aceleración de suficiente magnitud puede causar lesiones intracraneales sin necesidad de impacto, y entonces sin evidencia externa de lesiones, apareció como una explica-

15. Juez Presidente de la Corte Juvenil de Nueva Gales del Sur, Australia

ción a ciertas lesiones en infantes que antes no podían explicarse.
Sin embargo en 1987, un estudio en 48 niños/as de un mes a dos años de edad con supuestas lesiones similares fue publicado en el Diario de Neocirugia. El experimento concluyó que la intensidad de las aceleraciones establecidas a los sacudones eran 50 a 1 en comparación con las producidas por impactos. El estudio concluyó:

"es nuestra conclusión que el síndrome del niño sacudido, al menos en su forma mas severa, no es solo causado por el sacudon. Aunque este accionar puede, de hecho, ser parte del proceso, es mas probable que el niño/a también haya sufrido impactos. El escenario mas probable es que el niño/a que ha sido sacudido, luego haya sido arrojado a una cuna u otra superficie, golpeando su nuca, de esta manera sufriendo una bruta desaceleración".

Lesiones craneales no accidentales en procesos de proteccion

En asuntos con supuestos casos de lesiones no accidentales, la Corte Juvenil es encomendada con la tarea de decidir si el niño/a ha sufrido una lesión significante, o si hay una posibilidad real de sufrirla. Algo crítico a la hora de tomar esta decisión es establecer si hay un riesgo de daño al niño o un hermano del mismo.

Probar en el espectro de posibilidades de que las lesiones se hayan producido por abuso no accidental es difícil. Aun en los casos en que la Corte puede tener hallazgos de que las lesiones son producto de abusos, definir el autor es difícil, sino imposible, ya que las circunstancias de los crímenes imputados no son determinadas precisamente por los hallazgos patológicos y los perpetrantes declaran de manera poco clara e inconsistente.

Evidencia forense en procedimientos de proteccion de niños/as

Los Procedimientos de protección y cuidado en supuestos casos de lesiones no accidentales se basan enteramente en evidencia forense.

Una revisión de principios legales, como estableciera Re JS [2012] EWHC 1370 (Fam), enfatiza lo central de la evidencia de expertos en dichos casos.

Primero, la carga de la prueba esta en cabeza del Departamento de Comunidades y Justicia.

Segundo, el estándar de las pruebas es el balance de las posibilidades: Briginshaw v Briginshaw [1938] HCA 34. Si el Departamento logra probar en este balance de posibilidades que un niño/a ha sufrido una lesión no accidental de algún padre, la Corte Juvenil tratara este hecho como real, y todas las futuras decisiones se basaran en el mismo.

Tercero, los descubrimientos de hechos en lesiones no accidentales deben basarse en evidencia. Según Munby LJ observó en Re A (A Child) [2011] EWCA Civ 12:

"es una propuesta elemental que los descubrimientos de hechos estén basados en evidencia, incluyendo deducciones que pueden ser obtenidas de evidencia y no de sospecha o especulación".

Cuarto, cuando se considera casos de supuestos abusos de niños/as la Corte debe tomar en cuenta toda la evidencia y, aun mas, considerar a cada pieza en el contexto de la totalidad de la misma. Como Dame Elizabeth Butler-Sloss observo en Re T [2004] EWCA Civ 558, [2004] 2 FLR 838 at 33:

"la evidencia no puede ser evaluada y tratada en compartimientos separados. Un juez avocado a estos difíciles casos debe referirse a la importancia de cada pieza en relación a toda evidencia y ejercitar una visión total de la misma en orden de llegar a una conclusión sobre si el caso formado por la autoridad local fue hecho siguiendo los estándares apropiados de prueba."

Quinto, la evidencia recibida en procesos que incluyan supuestas de lesiones craneales no accidentales, es evidencia de médicos expertos y de una variedad de campos.

Mientras una apropiada atención debe prestarse a los expertos médicos, esas opiniones deben tenerse en cuenta en el contexto de toda la evidencia. Los roles de la Corte y el experto son distintos. Es la corte la que esta en posición de dar magnitud a la experiencia de expertos frente a otra.

Sexto, al evaluar esta evidencia experta debe tenerse en cuenta que casos de sacudones requieren análisis multidisciplinarios de la información medica aportada por un grupo de especialistas, cada uno trayendo su expertise al problema. La Corte debe ser cuidadosa de asegurarse de que cada experto se mantenga dentro de los límites de su campo y se refiera, si es necesario, al conocimiento de otros.

Séptimo, la evidencia de padres y otros tutores es de mayor importancia. Es esencial que la Corte forme un análisis claro de su credibilidad y confianza. Ellos deben tener la oportunidad de participar de las audiencias y la Corte da mucho peso a la impresión que forman de ellos.

Octavo, es común que los testigos de estos casos mientan durante la investigación y las audiencias. La Corte debe ser cuidadosa de tener en cuenta las razones por las que un testigo puede mentir, ya sea vergüenza, lealtad (mal utilizada), miedo, pánico, stress y el hecho de que el testigo haya mentido en algo pero que no necesariamente en toda su declaración.

Noveno, como fuera observado por Hedley J en Re R [2011] EWHC 1715 Fam:

"debe incluirse en cada caso concerniente una disputada etiología, una consideración de si el mismo es desconocido. Esto no afecta la carga ni el estándar de prueba. Es simplemente un factor a ser tenido en cuenta al decidir si la acusación avanzo por uno tener la carga de la prueba o si la misma se estableció en el balance de probabilidades".

La corte debe resistir la tentación de creer que es siempre posible identificar la causa de una lesión al niño/a

Finalmente, al buscar la identidad del autor de este tipo de lesiones, debe probarse la posibilidad de que una persona sea responsable o si es realmente posible que haya sido el perpetrante, como fuera establecido por North Yorkshire County Council v SA [2003] 2 FLR 849. En orden de establecer si una persona fue responsable de una lesión no accidental la Corte debe ser satisfecha en la balanza de posibilidades. Es siempre deseable, si es posible, que éste sea identificado tanto para el interés publico como del niño/a, aunque sea imposible para el juez definir en las posibilidades si, por ejemplo, un padre es mas probable que otro de causar dicha lesión, ninguno debe ser excluido del proceso y el oficial judicial no debe hacerlo.

Los testigos expertos son puestos únicamente para asistir a la Corte en casos de supuesto abuso de niño/as, pero no abogan por una parte. Tienen una tarea inmensa, dejando de lado cualquiera de la parte u otra persona experta, de asis-

tir a la Corte imparcialmente en asuntos relevantes al área de su expertise. Estos testigos asisten al juez en asuntos que determinan la seguridad y bienestar de un niño/a.

Conclusión

La evidencia forense juega un rol central en los procedimientos de cuidado y protección que incluyan lesiones craneales no accidentales. Es critico establecer las pruebas a la luz de la ley, para saber si un niño/a esta en estado de necesidad de cuidado y protección, y si hay una real posibilidad de restauración.

Los operadores judiciales confían en profesionales de la medicina para conducir investigaciones clínicas prontas y de alta calidad en casos de bebes sacudidos para facilitar la toma de decisiones en la corte.

La toma de decisiones en dichos casos en complejo, y requiere que la corte entre en la difícil tarea de considerar y evaluar los múltiples factores que se combinan al impactar en la futura seguridad del niño/a y su bienestar. Este proceso es especialmente complicado en casos de lesiones craneales no accidentales donde generalmente no hay testigos del alegado abuso y los tutores dan declaraciones inconsistentes con los hallazgos físicos.

Mientras debe prestarse apropiada atención a la opinión de expertos médicos, esas opiniones necesitan ser consideradas en el contexto de toda la evidencia. Los roles de la corte y el experto son distintos. Es la corte la que esta en posición de pesar la evidencia de expertos contra toda la restante. Aunque haya casos, si la opinión medica indica que no hay diagnostico de lesión no accidental, donde el operador judicial, considerando toda la evidencia, llegue a una conclusión discrepante de la llegada por el medico.

Espero que este trabajo haya aportado claridad, especialmente a aquellos que puedan estar en contacto con jurisdicción de cuidado y protección de la Corte Juvenil de NGS

3.2. CONSIDERACIONES SOBRE VÍNCULOS DE PARENTESCO EN CASOS DE CUSTODIA JUVENIL

Por Ken Lewis[16]

Parte 1 – Definiciones de afinidad y lazos

Mientras términos como "afinidad" o "vínculo" son relacionados a conexiones emocionales entre seres humanos, técnicamente son términos diferentes. Mientras la genética influencia la mayor parte de los aspectos del desarrollo humano, no influencia la afinidad. Ésta es un proceso basado en experiencia. Los padres y otros tutores dan forma a la afinidad de los niños/As. Ellos pueden tener afinidad por los padres pero no al revés. Esta afinidad se equivale con seguridad. Cuando un niño/a esta asustado o en necesidad, expresara una variedad de pistas verbales y no verbales para indicar dicho nivel de stress o necesidad. Continuas y constantes respuestas satisfactorias por parte de un tutor crean el fenómeno de la afinidad.

En una adopción, vista en la Corte Suprema de DC, un testimonio experto fue expresado que diferencio estos términos. Se describió a la afinidad como:

"…un fenómeno psicológico que comienza temprano en la edad de un niño/a donde percibe a su cuidador como... su "padre" psicológicamente. Ésta persona es, básicamente la referencia que el niño/a percibe como en quien puede contar para satisfacer sus necesidades. Esta afinidad es esta conexión profunda que solo se logra con la constancia, estabilidad y continuidad en el tiempo....T.W.M. v T.B., 18 A. 3ro 815 en fn. 4 (2011).

La "teoría de la afinidad" postula que la misma comienza en la 2da mitad del primer año de vida. Desde este momento, si el niño/a tiene un tutor regular (generalmente los padres, aunque no necesariamente), en quien puede confiar para satisfacer sus necesidades emocionales, este infante comenzara a ser "afín" a ese tutor. El experto postuló como los "vínculos" son diferentes:

"Los vínculos reflejan un fenómeno totalmente diferente. Al crecer, el vínculo se refiere a la conexión que el joven establezca con personas con las que no tiene una conexión más profunda"

Resumiendo, afinidad es un fenómeno único de los infantes, mientras que los vínculos se refieren a relaciones afectivas que niños/as mayores y adultos tienen con otros/as.

Parte 2 – Vincularse taxonómicamente al Derecho de Familia

Dentro del campo del derecho de familia "afinidad" y "vinculo" tienen una importancia significativa. Por ejemplo, en leyes adoptivas, las cortes prestan atención a la fuerza de la afinidad de un joven, y al potencial daño que puede resultar de su ruptura. Hace mucho tiempo la Corte Suprema de Nueva Jersey expresó que:

"una relación filiar tiene sus raíces en la etapa más temprana del desarrollo de un infante y ésta no puede romperse o cambiarse sin riesgos de daño emocional al niño/a" Sees v Baber, 377 A. 2do 628; 74 N.J. 201 at 222 (1977). Opinión del Juez Handler.

Ejemplos vistos en custodias de niños/as expresadas a menudo en casos de modificación, particularmente cuando conllevan una relocalización. Por ejemplo, cuando una madre solicita una modificación en la custodia para mudarse junto a su hijo de 7 años de Washington DC a Virginia Beach, el padre se opuso. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia afirmó, sobre el asunto vincular, que:

"el tribunal notó que, aunque el trabajo del padre le haya requerido viajar largas distancias regularmente, él ha podido mantener una relación firme y cercana con su hijo. También notó que el vínculo entre padre e hijo era fuerte y continuaría si el hijo se mudara, ya que la madre creía que su relación era importante y ella quería mantenerla así"

Estopina v O'Brian, 68 A. 3ro 790 en 794-795 (2013)

En resumen, mientras los términos "afinidad" y "vinculo" en el lenguaje llano pueden referirse a la mera relación, en el derecho de familia toman una importancia específica.

Parte 3 - Evaluación disponible en un estudio vincular
Un estudio vincular comprende una evaluación de la conexión emocional entre

16. Ken Lewis, Dr. Durante los 70, Ken fue profesor de Trabajo Social en varias Universidades (KANSAS, CAROLINA DEL NORTE, TUSKEGEE) y fue Profesor de Estudios Interculturales en la Universidad Central de Washington. En los últimos 30 años ha trabajado a tiempo complete en el área de custodia juvenil, y ha sido designado guardián at-liten por la Corte así como también evaluador de tenencias en más de dos docenas de Estados en Canadá. Su especialidad es la alienación parental y otros conflictos en casos de custodia de niños y niñas.

el niño/a y sus padres, pariente, no pariente o hermanos.
La historia de los estudios vinculares se extiende a principios de los años 30 cuando Mary Ainsworth y otros comenzaron a analizar la interacción entre madre e hijo. En los 60 condujo experimentos observando la conducta de infantes cuando otros investigadores entraban a la sala. De estos comportamientos, ofreció una opinión referida a la relación de un infante y sus padres. Sus experimentos se volvieron la base de los actuales estudios vinculares.

Cuando los trabajadores sociales son requeridos para un estudio vincular, relacionado a un caso de adopción se utilizan los siguientes instrumentos entre otros:

AAQ cuestionario de afinidad prenatal

IBM Medida de vínculos íntimos

MAI Inventario de afinidad maternal

MCRE evaluación madre/hijo

MIRI instrumento de respuesta materno infantil

PAI inventario de afinidad prenatal

SMIBD proyección de desorden de vínculos materno infantiles

Una evaluación vincular también puede ser importante en un caso de custodia infantil, cuando el caso está en litigio, en su etapa final. Evaluar y comparar los vínculos y su fortaleza entre padres e hijo y entre hermanos puede proveer de útil información para el juez del caso. Ente las áreas de interés en la mayoría de evaluaciones de custodias se encuentran la "calidad de la afinidad parental del niño/a y la relación del niño/a con sus hermanos/as". Un instrumento especifico empleado frecuentemente para evaluar la percepción del niño/&a de cada uno de sus padres es la Escala de Percepción de Bricklin, para niños/as mayores de 6 años.

Algunos escritores han logrado identificar a la evaluación vincular como un instrumento de medida importante en la evaluación de casos de custodia. Por ejemplo O'Donohue desarrollo un modelo forense para evaluaciones de custodia. Especifico 5 factores relevantes de acuerdo a criterios legales y psicológicos que mitigan el compromiso substancial con un padre. Una "pobre afinidad" fue listada como el primer factor importante.

Quizás el más importante de los instrumentos para evaluar un vínculo es el profesional experimentado. En evaluaciones de custodia infantil, los evaluadores experimentados se basan en observaciones directas en entornos familiares.
"ver a los padres y al niño/a en la intimidad de su hogar provee una perspectiva del caso que no puede ser duplicada de otra manera"

La Asociación Psiquiátrica Norteamericana ha reconocido a la observación directa como un valioso instrumento para medir vínculos. En su reporte de trabajadores dice:

"… es sugerido que cuando se evalúe vínculos parentoinfantiles, el psiquiatra observe la interacción entre el niño/a y el padre y mida si el padre es capaz de empatizar y comunicarse con el niño/a" Id. at 6.

Hay un vasto inventario de literatura profesional sobre custodia de niños/as referida a evaluaciones. Para determinaciones judiciales de ubicación de niños/as, ya sea en hogares adoptivos o litigaciones de custodia, una evaluación de la fortaleza o debilidad del vínculo emocional entre dos personas debe ser información útil. El vínculo puede ser entre el/la joven y el padre, o un pariente, no pariente o hermanos. El último generalmente es el que más tiempo dura.

Parte 4 – Vínculos fraternales en la literatura profesional.

La literatura fraternal expone varios tipo de "hermanos" como los que comparten ambos padres, hermanastros (de otros casamientos) y medio hermanos (dos o más niños/as que comparten un padre). Hasta parientes y no parientes que conviven eventualmente se llaman hermanos. El término "hermano" puede referirse a una realidad biológica, legal o coloquial, pero generalmente, a una emocional.

El vínculo fraternal es significante gracias a su durabilidad. Los hermanos generalmente comparten experiencias familiares, prácticas culturales, interacciones relevantes con sus relativos mientras crecen; y generalmente, sobreviven a sus padres. En 1982, un psicólogo de la Universidad de Cambridge público un libro sobre relaciones fraternales que exploraba las varias facetas de estos vínculos en un periodo vital. El libro fue bien llamado "Relaciones Fraternales: su naturaleza y significancia a través de la vida"

En 1992, dos psicólogos juveniles publicaron una colección comprensiva de artículos sobre la vinculación fraternal. Se llama "Relaciones fraternales juveniles: problemas de desarrollo y clínicos". Examina estos vínculos como una conexión emocional distintiva de la infancia en curso. Contiene 10 capítulos, los primeros 5 se basan en el aspecto de desarrollo de los vínculos fraternales: los últimos en preocupaciones clínicas.

La literatura profesional vincular no está restringida a un campo de estudio en particular. Lo contrario, en realidad. John Bowlby, creador de la teoría de vínculo de afinidad, fue un psiquiatra británico; y Mary Ainsworth, quien luego desarrollo la teoría, una Psicóloga canadiense. Pero además de psiquiatras y psicólogos, la literatura sobre este tópico se abre a varios campos profesionales, como:

Sociología
Marilyn Ihinger-Allman[17]
Trabajo Social Ellen Ryan[18]
Enfermería Marsha. Marecki[19]
Desarrollo Juvenil Jean Piaget[20]
Psicología Social Michael E. Lamb[21]
Estudios Familiares Mark
E.Feinberg, Penn State Univ.

Parte 5 – Vínculos fraternales en la ley
La importancia de la relación entre hermanos/as ha sido reconocida hace mucho por las cortes federales y estatales. Mientras el término "vinculo" no ha sido articulado en el marco legal, la importancia del mismo como concepto ha sido reconocida. Hace 30 años, en el Distrito de Columbia, uno de los factores estatutarios para la terminación de los derechos parentales fue la consideración de la calidad de interacción entre hermanos/as:

"al determinar si,… la relación padre-hijo (debe) ser terminada, el juez debe considerar… la calidad de la interacción e interrelación del niño/a con sus hermanos…" D.C.Code §16-2353(b)(3) (1989).[22]

En la ley federal también se busca evadir la separación de hermanos/as gracias al daño potencial que puede producírseles. El "corte de vínculo" no es un término legal federal pero el concepto es claramente reconocido:

"la corte también determino que porque (hermano y hermana) tienen una relación afectiva y cercana, la separación seria dañosa a ambos, y evadir dicha separación era en pos de cumplir los re-

querimientos de la Convención de La Haya" Ermini v Vittori, 758 F. 3rd 153 at 160 (2014).

El mismo principio de no separar a los hermanos/as es encontrado en la ley adoptiva federal. La "Ley de conexiones adoptivas para incrementar y lograr adopciones exitosas" de 2008 crea ley federal para los estados requiriéndoles "realizar esfuerzos razonables para ubicar a los hermanos/as en la misma casa, familia, u hogares adoptivos, a menos que sea contrario a la seguridad y el bienestar de uno de los hermanos/as" 42 U.S.C. §671(a).

La Ley de Conexiones Adoptivas demostró la importancia de los vínculos fraternales, al imponer obligaciones a los Estados de asegurar un régimen de visitas entre ellos/as mientras estén a cuidado pre adoptivo y después.

El mismo principio de vínculo fraternal es explícitamente establecido en la mayoría de los Estados. Por ejemplo en Pensilvania, la doctrina legal para permitir a hermanos/as ser criados juntos cuando sea posible es llamada la "doctrina de unidad familiar" Wiskoski v Wiskoski, 427 PA Super, 531; 629 A. 2nd 996 (PA Super 1993).

Siempre que no exista razón para lo contrario, es la política de esta comunidad que los hermanos/as sean criados juntos, siempre que sea posible… mientras este factor no pueda ser elevado automáticamente sobre cualquier otro, debe ser tenido en cuenta al mismo tiempo que otros. Esta es la "doctrina de la unidad familiar" Id. at 536

El problema de si esta principio de vínculos fraternales se refiere solo a los biológicos o se extiende a los medio hermanos fue resuelto hace 40 años por la Corte Suprema de Pensilvania. Sobre el argumento, el Juez Nix escribió: "este principio de ninguna manera es disuelto por el hecho de que el tercer niño sea medio hermano" Albright v Fetters, 421 A. 2do 157; 491 Pa. 320 at 328, 1980.
La custodia con separación física de hermanos es generalmente opuesta porque priva a los hermanos del beneficio de la constante asociación entre ellos/as. La regla no es rígida, sin embargo y pueden presentarse situaciones que demuestren que la separación puede ser a favor del interés superior del niño/a. Mientras hay una presunción en contra de separarlos, deben existir buenas y concretas razones para separarse de esta regla.

Concretas razones para separarlos pueden existir en las siguientes situaciones: diferencia etaria sustancial, circunstancias médicas extremas, circunstancias de educación especial o discordia emocional entre hermanos/as. Esta última condición sugiere la existencia de una ruptura en el vínculo fraternal.

Todos los Estados requieren que las determinaciones de custodia estén basadas en el interés superior del niño/a. Para determinar este interés, por lo menos 22 jurisdicciones identifican estatutariamente factores de custodia que incluyen la mención de las relaciones fraternales. En el Distrito de Columbia, el pertinente factor de custodia dice:

"al determinar el interés superior del niño/a el tribunal debe considerar… la interacción e interrelación del niño/a con su hermanos/as" D.C. Code§ 16-914(a)(3)(C).

Este factor fue enfatizado en el caso del Distrito de Columbia Spires v Spires, 743 A. 2nd 186, D.C. Corte de Apelaciones (1999).

El padre, en Spires, apeló el fallo de tribunal ya que otorgaba a la madre la custodia del niño de la pareja. Una de las bases de la apelación era que el tribunal había fallado en dar la adecuada consideración a las relaciones fraternales. La familia tenía 3 hijos entre ellos y el padre tenía un hijo de una relación previa. El asistente social que condujo la ambiental "observo que los niños estaban vinculados y tenían una fuerte relación con su medio hermano Id. 189. La orden del tribunal también determinaba que el medio hermano visitara sus hermanos a la casa de la madre. La Cámara de Apelaciones sostuvo el fallo por mantener y nutrir las relaciones fraternales.

Parte 6 – Consideraciones para el Banquillo

Hay un solo factor estatutario de custodia juvenil que se aboca a las relaciones fraternales. Es reconocido en las leyes de al menos 22 Estados (ante. fn. 21) para determinar el interés superior del niño/a. Debe dársele el peso apropiado a este factor a la hora de resolver una custodia.

La investigación está claramente del lado positivo de los aspectos del vínculo fraternal. Un fuerte vínculo entre hermanos beneficia a ambos; y sus efectos pueden significar una historia de apoyo mutuo y una continua amistad de por vida. "los vínculos Fraternales tienen su raíz en las primeras etapas del desarrollo del niño/a" Juez Handler, ante. p. 4.

Cuando la litigación de la custodia de un niño/a es centrada en el mismo, las determinaciones de tenencia deben ser ventajosas para el niño/a aun cuando sean desventajosas para los adultos.

Referencias

Ainsworth, M. D. S. (1978). The Bowlby-Ainsworth attachment theory. Behavioral and Brain Sciences, 1(3), 436–438.

Ainsworth, M.D., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Bowlby, John (1969). Attachment and Loss, Vol. 1, New York: Basic Books.

Dalton, Clare, et al. (2006) Navigating Custody and Visitation Evaluations…, National Council of Juvenile and Family Court Judges.

Lewis, Ken (2009). Child Custody Evaluations by Social Workers: Understanding the Five Stages Custody, National Association of Social Workers, NASW Press, Washington, DC.

Main, Mary, Hesse, Erik, and Hesse, Siegfried. "Attachment Theory and Research: Overview With Suggested Applications To Child Custody," 49(3) Family Court Review 426-463 (2011).

17. Marilyn Ihinger-Allman, "Sibling and Stepsibling Bonding in Stepfamilies," in K. Pasley (ed.) Remarriage and Step-parenting: Current Research and Theory 54-73, Guilford Press, 1987.

18. Ellen Ryan, "Assessing Sibling Attachments in the Face of Placement Issues," Clinical Social Work Journal, Springer Press, 2002.

19. Marsha. Marecki, "Early Sibling Attachment," Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing Vol 14, 418-423, 1985.

20. Jean Piaget, Origins of intelligence in the child. London: Routledge, 1936. His cognitive theory of development revolutionized how we think about child development.

21. Michael E. Lamb, "Father-Infant and Mother-Infant Interaction in the First Year of Life." 48 Child Development 167-181, 1977.

3.3. El laboratorio interdisciplinario de investigación en derechos del niño/a: una plataforma para el intercambio y la reflexión

Por Mona Paré[23]

El laboratorio interdisciplinario de investigación en derechos del niño/a (IRLRC) es una plataforma para el intercambio y reflexión de derechos del niño/a abierto a la comunidad internacional de profesionales trabajando en campos relacionados a derechos del niño/a. este artículo presenta el IRLRC, que fuera creado en Canadá con el objetivo de desarrollar una red internacional de investigadores, profesionales e instituciones interesadas en niños/as y sus derechos.

¿Qué es el IRLRC?

El laboratorio fue creado en el 2007 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa por los profesores Rachel Grondin, Mona Paré y Marie Pratte (hoy una jueza retirada). El laboratorio es una red de investigadores y operadores que promocionan la investigación interdisciplinaria y la difusión de conocimiento sobre asuntos relacionados al reconocimiento e implementación de derechos del niño/a. Entonces, el IRLRC apunta a la mejora en la protección de derechos del niño/a, a nivel tanto nacional como internacional. Para ello, el laboratorio promueve el desarrollo de entrenamiento interdisciplinario e investigaciones sobre derechos de niños/as y promueve la colaboración a nivel nacional e internacional entre investigadores y operadores de varios sectores y disciplinas. De esta manera, espera estimular la transmisión de conocimiento entre el mundo académico y el práctico, en ambas direcciones. Esto asegura la relevancia e importancia de la investigación y sirve como punto de partida para la creación de investigaciones conjuntas y proyectos educativos con fines prácticos reales. Los miembros del IRLRC representan varias disciplinas. En la Universidad de Ottawa, vienen de la Facultad de Derecho, Educación, Ciencias de la Salud y Sociales. Fuera de la Universidad, algunos colaboradores del IRLRC incluyen instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como instituciones académicas a nivel local, nacional e internacional.

Investigación

Los principales campos de investigación del laboratorio son; 1. El Niño/a: un sujeto de derecho; 2. El niño/a y la familia; 3. El niño/a, el Estado y la Sociedad. Estos temas permiten estudios como la filiación e identidad, protección del niño/a y delincuencia, grupos vulnerables o marginados o hasta la implementación de la Convención de Derechos del Niño/a (CDN).

Proyectos conjuntos de investigación entre académicos de diferentes disciplinas y socios de la comunidad ya han tocado temas como: el problema del bullying en la escuela, la utilización de herramientas de reconocimiento basado en derechos del niño/a; la consideración de los derechos del niño/a en casos de abusos sexuales cometidos por niños/as y los desafíos que se presentan a nivel familiar; la inclusión de niños/as discapacitados en escuelas en contextos incluyendo lenguajes de minorías; y también el rol de la voz del niño/a en procedimientos de protección del niño/a.
Los proyectos de investigación también incluyen a ellos conducidos por estudiantes del curso "Derechos del Niño/a", en colaboración con organizaciones de la comunidad. Por ejemplo, grupos de estudiantes llevaron a cabo un estudio comparativo para la integración de la CDN en Canadá a pedido de UNICEF Canadá. Otros estudiantes llevaron a cabo un trabajo para un grupo local de pediatras sociales.

Además, los estudiantes pueden presentar los trabajos que son resultado de su investigación individual llevada a cabo durante sus estudios de nivel medio y superiores a un concurso de redacciones sobre derechos del niño/a, organizado por el Laboratorio de manera anual. Los ganadores de la edición 2019 fueron Sidra Hashmi, estudiante del programa de Criminología y Estudios de la Mujer con Honores BSocSc, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Ottawa y Amira Maameri, estudiante del Doctorado de Derecho en la Universidad de Ottawa registrada en conjunto con un programa doctoral con la Universidad de Bordeaux. Los invitamos a leer sus trabajos.

Sidra Hashmi gano el primer premio en la categoría "Estudiantes de grado" por su estudio titulado "Mundane Marginalization: A Criminological Analysis of the Immigration Detention of Children in Canada". Su documento reconoce la detención de niños/as en el contexto migratorio. Considera a la inmigración de niños/as como un crimen "mundano" y plantea que la CDN se aplica en contra de los intereses del niño/a y a favor de los intereses de los que detentan el poder, para mantener las estructuras de la marginalización. Sidra Hashmi llama a la adopción de análisis que vayan más allá de los métodos tradicionales en criminología, en pos de crear una nueva infraestructura de sociedad en la que los derechos humanos sean estándares universales. Ella también enfatiza en la necesidad de nuevas investigaciones enfocadas en la expansión de definiciones legales y comunes de conceptos clave, para asegurar que no exista la posibilidad de manipularlos, ya que es el Estado quien tiene el monopolio de interpretación de la CDN. El documento realizado por Sidra Hashmi, como todos los trabajos ganadores en la categoría de Estudiantes de Grado, ha sido publicado en el Canadian Journal of Children's Rights/Revue canadienne des droits des enfants.

Con respecto al trabajo de Amira Maameri, ganó en la categoría de "Estudios de Posgrado" y se titula "L'Enfance autochtone et canadienne : Le Miroir de l'identité – Une quête légitime des mineurs autochtones du droit à la préservation de leur identité culturelle". En su documento, Amira Maameri aborda la situación de niños/as aborígenes en Canada, enfocándose en la preservación

23. Profesora en la Facultad de Derecho, Universidad de Ottawa; mona.pare@uottawa.ca

24. La profesora Mona Paré a la izquierda y su equipo en el Laboratorio, las profesoras Rachel Grondin y Marie Pratte. A la derecha, el logo del Laboratorio.

de su identidad cultural. Al observar esta problemática de manera interdisciplinaria, Amira habla sobre la importancia de intentar superar la dificultad de integrar las tradiciones legales de niños/as aborígenes al sistema legal canadiense que, como resultado, va a dar seguridad a estos niños/as, que tienen un sentimiento de inseguridad cultural. De acuerdo a Amira Maameri, la respuesta se encuentra en tomar a los recursos aborígenes como fuentes de inspiración, que ayudaran a sanar a estos niños/as que tiene fisuras internas. Este estudio es una invitación a crear puentes conjuntamente para la integración de sociedades interculturales.

Transmisión de conocimiento

La transmisión de conocimiento en el IRLRC incluye diferentes actores, incluyendo estudiantes, investigadores y operadores. Los estudiantes participan a través de la publicación de artículos en blogs y presentaciones de investigaciones en conferencias del IRLRC. También tienen acceso a entrenamientos en el marco de un curso de Masters titulado "Derechos del Niño/a: una aproximación interdisciplinaria" llevado a cabo por diferentes profesores de varias facultades. Este año, los estudiantes que asistieron al curso han llevado a cabo talleres prácticos para jóvenes en la iniciativa "Shaking the Movers" (STM). Esta iniciativa se enfoca en la educación y diversidad, enseñarle a los jóvenes participantes sobre derechos del niño/a y permitiéndoles expresarse en asuntos que los conciernen, para que sean oídos por los que toman las decisiones. Esta iniciativa es llevada a cabo en conjunto con el "Landon Pearson Resource Centre for Children's Rights", quien inicio el proyecto STM.

Un aspecto importante en la movilización del conocimiento en términos de derechos del niño/a consiste en organizar conferencias de manera anual, involucrando a las partes interesadas. El Laboratorio organiza "charlas de almuerzo" con expositores del mundo académico u operativo. Aún más, el Laboratorio lleva a cabo una conferencia anual sobre tópicos importantes. Las conferencias anteriores han tocado temas como "Niñas y pandillas: asociación o explotación" 2008; "Niños/as en la era tecnológica: entre el asombro y el pasmo" 2012; "Conferencia Internacional sobre la valoración del impacto en derechos del niño/a" 2013; "Terminar con la violencia escolar: aproximación basada en niños/as" 2014; o "Implicancias en la legalización del cannabis para derechos del niño/a" 2018.

En 2020, la conferencia anual será sobre "El acceso y participación del Niño/a en la justicia: tarea critica". La conferencia tendrá lugar en Ottawa el 21 y 22 de mayo y juntara a profesionales de la justicia, investigadores académicos y expertos de áreas como psicología social y trabajo. La conferencia apoya todo esfuerzo enfocado en promover la participación de niños/as en la justicia y su acceso a la misma a nivel doméstico e internacional, como también incita a tomar acciones para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible n° 16 para niños/as. La conferencia buscara definir el acceso a la justicia de niños/as de manera global, al reconocer los desafíos actuales, formulando preguntas que todavía no han sido preguntadas y trayendo nuevas respuestas a problemas existentes. Un llamado a propuestas ha sido emitido para recopilar estudios que ayuden a abordar una mirada crítica de varios tópicos: la administración de justicia juvenil en diferentes áreas del derecho y sectores relacionados a la vida de niños/as (por ejemplo: educación, salud, justicia penal, asilo, protección de la niñez); la participación de niños/as en la justicia más allá de los procesos judiciales (medidas alternativas de resolución, justicia restaurativa, abogado del niño/a, etc.); el acceso de grupos de niños/as específicos a la justicia (como niños/as privados de la libertad, migrantes, niños/as discapacitados, aborígenes); y la participación de niños/as en definir justicia y el acceso a la misma.

Esta conferencia es el resultado de una investigación conjunta sobre el acceso a la justicia de menores, que incluyó a investigadores de varias universidades: Ottawa, Leiden, Lovaina, Aix-Marseille y Bordeaux, así como también a otros socios como el Centro Interdisciplinario para Derechos del Niño/a (Bélgica), La Asociación de Abogados de habla Francesa de Ontario y el Centro de Investigación y Educación en DDHH de la universidad de Ottawa. En los años venideros, estas sociedades desarrollaran una red de investigación internacional sobre la vox del niño/a y su protección.

¿Una perspectiva con vistas al futuro?
El Laboratorio continúa el desarrollo de tanto sociedades como proyectos de investigación y conocimiento. Esperamos que el dialogo establecido entre representantes de diversas disciplinas, entre los mundos académicos, comunales y gubernamentales, así también como con niños/as, estudiantes y profesionales enriquezca nuestra comprensión de los derechos del niño/a y las situaciones que necesitan resolverse con prioridad.
Deseamos que esta presentación del El laboratorio interdisciplinario de investigación en derechos del niño/a (IRLRC) anime a todas las personas interesadas en derechos de niños/as a encontrar soluciones a problemas que conciernen su implementación y que también ayude a desarrollar programas educativos en derechos del niño/a, así como también a participar en nuestras actividades. Por favor visite nuestra página web, lea nuestros artículos y surfee nuestros blogs, ¡sugiriendo tópicos e involucrándose en nuestra conferencia anual!

4. ACCIONES DE PERFECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA JUSTICIA DE JUVENTUD Y FAMILIA

4.1. LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN JUDICIAL SOBRE EL DERECHO DE LA UE COMO SOLUCIÓN NO LEGISLATIVA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS

Por Wojciech Postulski[25]

Derechos de los niños con arreglo a la legislación de la UE

Los derechos del niño forman parte de los derechos humanos que la Unión Europea y los Estados miembros de la UE deben respetar, proteger y cumplir. La propia Comisión Europea se guía por los principios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño[26] a la que están vinculados todos los Estados miembros de la UE, así como por otras recomendaciones o directrices internacionales (como las Directrices del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los menores).

El artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea establece el objetivo de la UE de promover la protección de los derechos del niño. Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantiza la protección de los derechos del niño por parte de las instituciones de la UE y de los Estados miembros de la UE cuando aplican el Derecho de la UE: el artículo 24 sobre los derechos del niño y el artículo 31 sobre la prohibición del trabajo infantil cubren específicamente los derechos del niño.

El acervo comunitario y los documentos políticos sobre los derechos del niño son extensos.[27] Por lo tanto, reviste especial importancia la posición del coordinador de la Comisión en cuanto a los derechos del niño, que se creó en 2007 como resultado de la Comunicación de 2006 «Hacia una estrategia de la UE sobre los derechos del niño»,[28] que coordina el trabajo entre todos los servicios de la Comisión y garantiza que los derechos del niño se tengan debidamente en cuenta en todas las políticas y acciones pertinentes.

En 2011, la Comisión Europea adoptó una agenda de la UE sobre los derechos del niño, que establece una serie de acciones concretas en las que la UE puede aportar un valor añadido a las políticas para el bienestar y la seguridad de los niños, incluida la promoción de una justicia adaptada a los niños, una mejor información a los niños sobre sus derechos y una mejora en la seguridad de Internet para los niños. Con la nueva Comisión Europea, se ha encargado la vicepresidenta Šuica para la Democracia y Demografía que lidere la elaboración de una estrategia global sobre los derechos del niño, que incluirá una justicia adaptada a los niños.

Cumplimiento eficiente y eficaz

Sin embargo, el problema no es la falta de legislación pertinente,[29] sino más bien que esta legislación no se aplica de manera efectiva. En el contexto de la aplicación del Derecho de la UE en general, la Comisión Europea declaró que «se necesita un sistema de ejecución sólido, eficiente y eficaz para garantizar que los Estados miembros apliquen, implementen y hagan cumplir plenamente la legislación de la UE y proporcionen una reparación adecuada a los ciudadanos». [30] Esto es muy relevante con respecto a la aplicación de medidas que protegen los derechos del niño.

El Congreso Mundial sobre justicia para niños, niñas y adolescentes de 2018, convocado por la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y de la Familia (AIMJF), «declara la imperiosa necesidad e importancia de reforzar y mejorar los sistemas judiciales para los niños», y pide que se adopten medidas para garantizar que los profesionales de la justicia dispongan de las competencias pertinentes.

Esta declaración recuerda el papel fundamental que desempeñan en este ámbito las personas que participan en la prestación de justicia, en su mayoría magistrados, fiscales y abogados, así como otros profesionales de la justicia. El papel de los profesionales del Derecho es comprender y respetar los derechos del niño en el marco de aplicación de la legislación pertinente. Por consiguiente, es claramente esencial que todos los jueces y otros profesionales del Derecho conozcan y comprendan la legislación pertinente, así como que reconozcan que la ley y los principios jurídicos no existen en el vano. Los profesionales de la justicia actúan públicamente en la sociedad e interactúan diariamente con otros seres humanos[32], incluidos los niños. Deben conocer y comprender la posición especial y la posición de los niños en el sistema jurídico y en los procedimientos judiciales[33].

La cuestión es cómo capacitar mejor a los profesionales del Derecho para que puedan cumplir tales expectativas. Una de las herramientas clave es la formación profesional, que perfile la actitud de los profesionales y les dote de los conocimientos y competencias necesarios.

Formación judicial europea

La formación judicial europea es importante para todos los profesionales del Derecho y, en particular, para los jueces y fiscales, a fin de que estén capacitados para la aplicación del marco legislativo europeo. La confianza y la comprensión entre los profesionales de la justicia garantizarán que los derechos de las personas, incluidos los derechos de los niños, se respeten de manera clara y coherente. A la luz de las responsabilidades que el Tratado de Lisboa otorga a la UE, la Comisión publicó en 2011 una Comunicación titulada «Crear confianza en una justicia europea, una nueva dimensión de la formación judicial europea»[34]. El objetivo de esta Comunicación era dar una nueva dimensión a la formación judicial europea y permitir a un número aún mayor de profesionales del Derecho acceder a una formación de calidad sobre el Derecho de la Unión Europea. El logro de este objetivo es responsabilidad conjunta de todas las partes interesadas. Los Estados miembros, los consejos del poder judicial, los organismos

25. Responsable de políticas, formación judicial europea. Dirección General de Justicia y Consumidores, Comisión Europea

26. Convenio sobre los Derechos del Niño, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Resolución de la Asamblea General 44/25 de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.

27. Véase un resumen en JUST.C2/MTF-NCP, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_acquis_rights_of_the_child_april_2019.pdf.

28. Bruselas, 4.7.2006, COM (2006) 367 final. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:en:PDF

29. En los últimos años se ha creado legislación relevante en la UE, por ejemplo, normas de la UE sobre salvaguardias para los menores sospechosos (Directiva (UE) 2016/800 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales, DO L 132/1 de 21.5.2016); sobre las víctimas infantiles (Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, DO L 315/57 de 14.11.2012); sobre la lucha contra el abuso y la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, DO L 335/1 de 17.12.2011); el Reglamento Bruselas II bis (Reglamento 2201/2003, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R2201) en el ámbito del Derecho de familia transfronterizo. El Reglamento se ha revisado, el Reglamento Bruselas II bis (Reglamento (UE) 2019/1111) relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores, que se aplicará a partir del 1 de agosto de 2022), que regula cuestiones relativas a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental.

30. Comunicación de la Comisión, Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación de Bruselas, 21.12.2016, C (2016) 8600 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119 (01) &

31. Declaración de París, 30 de mayo de 2018, http://www.aimjf.org/download//Home/World_Congress_J4C_Paris_Final_Declaration_30_May_2018_EN.pdf.

32. Organización Internacional de Formación Judicial, comentario al principio número 8 de la Declaración sobre los principios de formación judicial, 2017/11/08, Rec. 1, http://www.iojt.org/~/media/Microsites/Files/IOJT/Microsite/2017-Principles.ashx.

33. The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002/11/25-26, p. 5.1, https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.

de formación judicial nacionales y europeos y las profesiones jurídicas a nivel nacional y europeo deben comprometerse a integrar la legislación de la UE y su aplicación en la formación nacional y local, así como a aumentar el número de actividades de formación en el Derecho de la UE, así como el número de participantes que asisten a dichas sesiones.

La Comisión se ha comprometido a seguir financiando proyectos de gran calidad con un impacto europeo significativo. Apoya financieramente a la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), cofinancia proyectos de formación judicial transfronteriza realizados por numerosos proveedores de formación judicial y publica un informe anual sobre la participación de los profesionales del Derecho en la formación sobre el Derecho de la UE en la Unión Europea.La Comisión pretende que los materiales de formación existentes estén disponibles tanto para los profesionales de la justicia para uso propio, así como para los formadores de los profesionales del Derecho como recurso para su trabajo en el ámbito de los derechos del niño. La sección especial del Portal Europeo de e-Justicia dedicada a la formación judicial ya es rica en material didáctico sobre los derechos de los niños[36].

En el marco del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía», la Comisión Europea también ha financiado proyectos destinados a hacer que los procedimientos judiciales que impliquen a los niños estén más adaptados a los mismo[37].En junio de 2018, la Comisión Europea organizó una conferencia sobre justicia adaptada a los niños y sistemas integrados de protección de menores: enseñanzas extraídas de los proyectos de la UE.[38] Entre las prácticas destacadas en la conferencia, el Barnahus proporciona una colaboración multidisciplinar y entre agencias, garantizando que los niños que sufren violencia (víctimas o testigos) se beneficien de una respuesta adaptada a los niños, profesional y coordinada, con el objetivo de prevenir la creación de nuevos traumas.[39]

Además, como actuación consecutiva a la Comunicación de 2017 sobre la protección de los niños migrantes, se ha hecho disponible de una base de datos para recopilar prácticas prometedoras para la protección de los niños migrantes, inclusive algunas para los profesionales del Derecho.[40]

La Comisión Europea evaluó la estrategia europea de formación judicial en 2011-2020 en 2019.El informe anual de 2019 sobre la formación judicial europea, publicado recientemente, complementa esta evaluación y presenta excelentes resultados en términos de participación. El objetivo fijado en 2011 de que la mitad de los profesionales de la justicia asistiera a cursos de formación sobre la legislación de la UE para 2020 ya se había alcanzado en 2017.En total, más de 1 millones de profesionales de la justicia asistieron a cursos de formación sobre Derecho de la UE desde 2011.El número anual de participantes aumentó un 148 % entre 2011 y 2018. Solo en 2018, más de 190 000 profesionales de la justicia participaron en la formación sobre el Derecho de la UE. Entre 2011 y 2017, los intercambios de jueces y fiscales entre tribunales y fiscalías de otros países de la UE aumentaron un 190 %. La ayuda financiera de la UE a la formación judicial casi se duplicó, por un importe de más de 150 millones EUR durante todo el período. La estrategia ha contribuido a aumentar el conocimiento del Derecho de la UE, reforzando al mismo tiempo la confianza mutua entre los profesionales de la justicia. La evaluación incluye un inventario de los objetivos alcanzados y servirá de base para diseñar una estrategia para la formación judicial europea tras el 2020.

Diversidad de la formación judicial

No obstante, debe señalarse claramente que la formación de los profesionales del Derecho se debe impartir en distintos niveles y en muchos ámbitos diferentes.

Los Estados miembros son los principales responsables de la calidad y la escala de dicha formación. Sin embargo, las oportunidades nacionales de formación se complementan con las organizadas a nivel de la UE, y (co)financiadas por la UE.

Los proveedores de formación judicial a nivel europeo están bien situados para impartir formación a participantes de distintas nacionalidades. El principal proveedor de formación judicial a escala de la UE es la REFJ. También debe mencionarse la Academia de Derecho Europeo (ERA), y también recibe ayuda financiera de la Comisión. Otros organismos de formación europeos que participan en la formación de profesionales del Derecho son el Centro Europeo de Jueces y Abogados del Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP) y el Instituto Universitario Europeo de Florencia (IUE). Estas también reciben ayuda financiera de la Comisión. Las redes y asociaciones de profesionales de la justicia, como la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y de la Familia (AIMJF), también podrían desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de las competencias de sus miembros.

Formación judicial sobre los derechos de los niños

Los derechos del niño son uno de los numerosos temas tratados en las actividades de formación impartidas con el apoyo de la Comisión. El objetivo de estas actividades refleja también las prioridades de la UE en este ámbito. Los derechos de los niños se examinan en las sesiones de formación para jueces y otros profesionales de la justicia, bien como un tema de formación específico para formaciones especializadas, bien integrados en otros cursos, tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como del de los derechos penales procesales. Otra formación tiene el objetivo de sensibilizar a la opinión pública y de aprender a aplicar los instrumentos de la UE relativos a una justicia adaptada a los menores. Sin embargo, la mayor parte de la formación tiene y debe tener lugar a nivel nacional.

No cabe duda de que puede y debe hacerse más en este ámbito. Dentro del ámbito de aplicación del contenido de formación de los profesionales del Derecho europeo, es necesario prestar especial atención a los objetivos y el enfoque metodológico de la formación sobre los derechos de los niños. Esto da lugar a numerosas preguntas. ¿Cuál debería ser el papel de la formación en la preparación de los sistemas judiciales para proteger los derechos de los niños de manera eficaz y eficiente? ¿Cómo preparar a los profesionales para tratar con los niños en el ejercicio de sus actividades profesionales?

Contenido de la formación sobre los derechos del niño

Las actividades de formación dirigidas a los profesionales del Derecho deben centrarse principalmente, aunque no exclusivamente, en los siguientes ámbitos:

• hacer que los sistemas judiciales sean favorables a la infancia (magistrados, pero también personal de la administración de justicia y fiscalías y abogados);
garantizar el trato de los niños de manera adecuada a su edad, madurez y nivel de comprensión, teniendo en cuenta sus necesidades especiales;

(programa REC-) sobre los derechos del niño y la violencia contra los niños 2013-2019: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20190401_compilation.pdf

38. Informe de la conferencia:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/chfj_report_dgt_final.pdf
Y otros documentos de referencia: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/child-friendly-justice_en

39. Https://www.childrenatrisk.eu/promise

40. Https://webgate.ec.europa.eu/protecting-children-in-migration/cim/good-practices-search

41.Comisión Europea, Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de la estrategia europea de formación judicial 2011-2020, SWD (2019) 380 final, https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/training-legal-practitioners-and-training-practices_en.

42. Véase la nota a pie de página n.º 9.

• comunicación con los niños en la sala de vistas;

• los derechos del niño en los sistemas de justicia penal, incluido el derecho de acceso a un abogado y asistencia letrada;

• asuntos relacionados con menores víctimas y testigos;

• desvío y alternativas a la detención de menores;

• salvaguardias para menores privados de libertad;

• tráfico humano de niños;

• derecho de familia;

• menores migrantes no acompañados.

La formación jurídica moderna es más que la mera formación jurídica. Esta formación debe ser multidisciplinar y práctica, destinada esencialmente a la transmisión de técnicas y valores profesionales complementarios a una educación jurídica. La formación en el contexto social es un aspecto importante de la formación judicial, que proporciona una apreciación del estado humano y de la sociedad en la que operan los jueces y otros profesionales del Derecho.

En lo que respecta al derecho a ser oído, así como a otros ámbitos relevantes para lograr que los sistemas judiciales sean adaptados a la infancia, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha elaborado varios informes y materiales que reflejan este enfoque.

Procedimiento en materia de enjuiciamiento

En cualquier actividad de formación judicial, los objetivos de aprendizaje deben incluir la comprensión de las condiciones comunes que pueden afectar a la capacidad de un individuo para entender el proceso judicial, o para comunicarse eficazmente con los profesionales del Derecho implicados. Es necesario formar a la hora de adaptar el comportamiento, la lengua y el enfoque de los profesionales a las necesidades de los niños que son parte en un procedimiento, ya sea como víctimas, sospechosos o testigos. Para ello es necesario desarrollar y mejorar continuamente los estilos y técnicas de comunicación adecuados. Estas cuestiones forman parte integrante de un concepto más amplio: el ejercicio de la judicatura. El ejercicio de enjuiciamiento se está haciendo cada vez más solicitado y ofrecido en la formación judicial. El ejercicio de enjuiciamiento incluye temas como la conducta judicial y la ética, la resistencia judicial, los prejuicios inconscientes y el ejercicio de competencias en la sala de audiencias. Esta formación es necesaria porque los profesionales acceden al ejercicio judicial con sus propios valores, opiniones, preconceptos y prejuicios. La formación debe inculcar un grado de flexibilidad y una buena disposición para reconocer y abordar las propias ideas preconcebidas y los prejuicios para garantizar que estos no alteren el proceso judicial.

Métodos de formación

En lo que se refiere a la formación de los jueces en el contexto de la creación de prácticas de justicia adaptada a los niños, la determinación del diseño, el contenido y la impartición de la formación judicial son competencia exclusiva de las autoridades judiciales, de conformidad con el principio de independencia judicial. Sin embargo, la formación liderada por jueces no excluye la intervención de expertos, académicos y otros especialistas que puedan mejorar y complementar la formación, especialmente en un ámbito tan delicado como el de los derechos de los niños.

Al mismo tiempo, la formación entre profesionales debe desempeñar un papel importante en la formación sobre los derechos del niño, ya que se espera una atención y una sensibilidad uniformes de todos los profesionales de la justicia implicados en los procedimientos en los que participen niños.

¿Cuál debe ser el formato exacto de estas actividades de formación en el ámbito de los derechos del niño? La formación judicial debe emplear una serie de metodologías, utilizando una variedad de formatos de formación actualizados, con un enfoque a la medida. Esto supone seleccionar un formato que satisfaga las necesidades de los participantes y tener un conjunto establecido de resultados de aprendizaje.

Conclusiones

Los profesionales de la justicia necesitan reforzar su capacidad para proteger los derechos de los niños, y la formación judicial debe considerarse un instrumento crucial para responder a esta necesidad. La Comisión seguirá apoyando las acciones de formación judicial europea y la formación de los profesionales del Derecho seguirá en lo alto de la lista de prioridades. Se espera que la nueva estrategia de la Comisión para la formación de los profesionales del Derecho sea publicada en 2020.En un futuro próximo, la Comisión también adoptará una estrategia global sobre los derechos del niño, que incluirá acciones para promover en mayor medida la justicia accesible a los niños en la UE.

4.2. ENCUESTA SOBRE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES – RESULTADOS PRELIMINARES

Por Eduardo Rezende Melo[44]

En la edición de julio de la Crónica, propusimos una encuesta internacional sobre la especialización de los jueces y magistrados actuando en juzgados de familia o de adolescentes.

Aún están pendientes las respuestas de muchos miembros, pero presentamos desde luego algunos resultados parciales de siete países europeos y dos sudamericanos. Estados Unidos, aunque no haya respondido a la encuesta, envió estudios sobre la capacitación de jueces. De Francia basamos los resultados en informaciones proporcionadas por la Escuela Nacional de Magistratura hace algunos años.

44. Https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view

45. Eduardo Rezende Melo es juez en Brasil desde 1991, tiene doctorado en derecho por la Universidad de San Pablo, Brasil, coordina la formación de magistrados en derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Escuela de Magistrados de San Pablo y es editor en jefe de la Crónica

LA ENCUESTA

a) La encuesta está estructurada en cinco partes, con preguntas específicas en cada una de ellas:

b) Evaluación de los conocimientos sobre derechos de niños para acceder al Poder Judicial;

c) Capacitación inicial después de acceder al Poder Judicial;

d) Capacitación específica para trabajar en un juzgado especializado:

e) Supervisión o monitoreo de las actividades del juez/magistrado, y

f) Soporte institucional para estos profesionales

EUROPA

Siete países en Europa respondieron a la encuesta: Bélgica[45], Croacia[46], Italia[47], Holanda[48], Polonia[49], República de Norte de Macedonia[50] y Suiza[51]. Aunque Francia no haya respondido, la información investigada fue proporcionada por la Escuela Nacional de Magistrados.

Vamos a destacar los resultados principales de las respuestas en cada una de las áreas analizadas.

a) Evaluación de los conocimientos sobre derechos de niños para acceder al Poder Judicial

En Suiza, la población elige el profesional que se convertirá en juez penal de adolescentes o de familia, por lo tanto se considera que no es necesaria una especialización.

En la República de Macedonia del Norte, en la capacitación inicial en la Academia de Jueces y Fiscales, los futuros magistrados tienen formación teórica y práctica relativa a la justicia para niños. Ellos también son examinados sobre estos temas.

En Italia, la Corte Juvenil (Tribunale per i Minorenni) está compuesta por jueces profesionales y honorarios, trabajando en conjunto en asuntos criminales, civiles, adopción, y administrativo. La estructura de la corte es de dos jueces profesionales y dos honorarios – un hombre y una mujer -, con excepción de los procedimientos criminales en la investigación preliminar, que son conducidos por un juez profesional, y en la audiencia preliminar, en la cual las decisiones son tomadas por tres jueces – un profesional y dos honorarios.

Los jueces profesionales son seleccionados por concurso público basado en exámenes (tres temas escritos y diez orales). Los jueces honorarios son seleccionados por concurso público basado en su conocimiento y experiencia con cuestiones relativas a niños y a sus familias. Aunque los jueces profesionales no sean examinados en su conocimiento sobre derechos de los niños, la experiencia anterior sobre temas de familia y de adolescentes son tomadas en consideración en la selección.

En Francia, para ser juez, los profesionales pasan por una capacitación inicial de 31 meses, que incluyen pasantías en despachos de abogados por 6 meses, cursos con duración de 8 meses (medio día por semana sobre derechos de los niños, en los campos destinados a estudios de derecho civil o penal, incluyendo estudios interdisciplinarios) y 12 meses de pasantía judicial. La formación es interdisciplinaria y incluye desarrollo de competencias comunicacionales y conocimiento de los principales colaboradores institucionales del juez de niños.
En Bélgica, Croacia, Holanda y Polonia no hay exámenes específicos sobre derechos de los niños para quien desea ser juez.

b) Capacitación inicial después de acceder al Poder Judicial

En la República de Macedonia del Norte, según la ley de justicia para niños, los jueces, los fiscales, abogados y profesionales del Ministerio de Interior deben pasar por capacitación especializada en derechos de niños, sea en el país o en el exterior, pero en la práctica no lo hacen debido al insuficiente número de capacitaciones en el país o a la falta de apoyo financiero para participar de capacitaciones en el exterior.

En Italia, las capacitaciones son organizadas por la Escuela Superior de Magistrados, que son fuertemente recomendadas, pero no obligatorios.

En Bélgica, hay un programa de capacitación obligatorio de 8 días. La capacitación en Bélgica es amplia, incluyendo:

• Derecho material y procesal penal juvenil

• Derecho material y procesal de familia
Tratados internacionales

• La función del magistrado penal juvenil y de familia (el juez, la corte, el fiscal)

• Introducción a la psicología infantil

• Introducción a la mediación

• Introducción a los institutos sociales relacionados a la niñez

• Introducción al trabajo de los trabajadores sociales

• Introducción a metodologías de escucha de los niños

En Holanda, el programa obligatorio es de cinco días, con temas semejantes al de Bélgica.

En Francia, después de pasar por exámenes, los profesionales que elijan trabajar en un juzgado de niñez – que trata tanto de lo penal juvenil como la situación de niños en riesgo -, tendrán una capacitación complementaria de 6 semanas en la Escuela Nacional de Magistratura, con un abordaje más profundizado, incluyendo diversidad cultural de inmigrantes y distintas situaciones específicas en las cuales los derechos de los niños puedan estar involucrados. También visitan un centro de detención de adolescentes.

En Croacia hay una capacitación inicial de seis horas, pero no es interdisciplinaria.

Todavía, no hay programa de capacitación específica al acceder al Poder Judicial tanto en Polonia como en Suiza.

c) Capacitación específica para trabajar en un juzgado especializado

En Holanda hay un programa de capacitación complementario para acceder a un juzgado especializado en niñez.
Lo mismo ocurre en Bélgica.

En Italia no hay capacitación específica en esta situación, pero, para los jueces profesionales, algunas cortes organizan un periodo corto de orientación. Para jueces honorarios, algunas cortes organizan un período corto de orientación y/o cursos específicos de capacitación, como en Milán.

En Francia, si un profesional desear cambiar de juzgado y trabajar en un juzgado de menores, es obligatoria una capacitación de 5 semanas, de las cuales 2 destinadas a estudios teóricos y

45. Informaciones por Isabelle Soenen
46. Informaciones por Lana Peto Kujundzic
47. Informaciones por Joseph Moyersoen
48. Informaciones por Margreeth Dam
49. Informaciones por Magdalena Arzcweska
50. Informaciones por Aleksandra Deanoska
51. Informaciones por Anne-Catherine Hatt

3 semanas de preparación práctica en pasantía. Es obligatorio para todos los jueces hacer capacitaciones anuales durante cinco días. Ellos son invitados a hacer sugerencias de temas a la Escuela de Magistratura que pueden ser tanto cursos teóricos como pasantías en otras instituciones.

En la República de Macedonia del Norte, Croacia, Polonia y Suiza no hay capacitación específica para acceder a un juzgado especializado.

d) Supervisión o monitoreo de las actividades del juez/magistrado

En la República de Macedonia del Norte, hay un sistema general de evaluación de todos los jueces realizado por un consejo judicial.

En Italia, los jueces profesionales deben preparar un informe sobre sus actividades y los jueces honorarios deben ser seleccionados cada tres años en un concurso público.

En Bélgica no hay monitoreo, pero los jueces de familia y juveniles tienen un mandato especial que debe ser renovado después de algunos años, y entonces la calidad de su trabajo puede tener, teóricamente, una influencia en la renovación.

En Francia, muchas actividades son ofrecidas, incluyendo una actividad de monitoreo por un psicólogo en 4 sesiones anuales.

No hay monitoreo en Holanda, Croacia, Polonia y Suiza.

e) Soporte institucional para estos profesionales

En la República de Macedonia del Norte hay profesionales legales asociados, como trabajadores sociales y psicólogos, que dan soporte profesional a los jueces.

En Bélgica, hay asistentes legales y criminólogos que dan soporte a los jueces, aunque no en número suficiente.

En Holanda, hay abogados asistentes que prestan servicio de orientación.
En Croacia hay cursos ofrecidos por la Academia Judicial y trabajadores sociales y pedagogos que prestan orientación a los jueces.

No hay soporte a los jueces en Italia, Suiza y Polonia.

AMÉRICA DEL SUR
Dos países respondieron la encuesta en América del Sur, Argentina y Brasil. Los dos son países federales, con singularidades en cada provincia/Estado, resultando difícil presentar un retrato único de cada país. Registraremos las características más generales, considerando ademas que no todos los Estados/Provincias de cada uno de esos países respondieron.

a) Evaluación de los conocimientos sobre derechos de niños para acceder al Poder Judicial

b) En todas las respuestas, tanto en Argentina como en Brasil, se afirma que todos los profesionales que desean ser jueces deben pasar por concursos públicos en los cuales hay preguntas sobre derechos de los niños.
Capacitación inicial después de acceder al Poder Judicial

En Argentina, hay una variedad de situaciones con respecto a esta pregunta. En algunas provincias, hay un curso preparatorio para los profesionales aprobados en concurso público para ser juez antes que empiecen a trabajar, pero la mayoría de las respuestas revela que esta no es una realidad en otras partes del país.

En Brasil es obligatorio un curso inicial para todos los profesionales aprobados en concurso público con duración de 480 horas, parte del cual versa sobre derechos de los niños, normalmente dos días de capacitación.

c) Capacitación específica para trabajar en un juzgado especializado

En Argentina, con excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay capacitación específica para los jueces antes de empezar a trabajar en un juzgado especializado.

En Brasil, los jueces deben participar en programas de capacitación para que sean promovidos en su carrera profesional (40 horas al año) y, si en esta promoción llegan a un juzgado especializado, deben participar de cursos específicos relacionados con los derechos en cuestión en su corte. Cursos regulares son ofrecidos sobre derechos de los niños.

d) Supervisión o monitoreo de las actividades del juez/magistrado
No hay supervisión o monitoreo en Argentina.

En Brasil hay análisis cuantitativo de las actividades, con informes mensuales elaborados por los jueces y chequeados por datos de los procesos electrónicos. No hay monitoreo/supervisión cualitativa.

e) Soporte institucional para estos profesionales

No fue informado algún programa de soporte en Argentina.
En Brasil hay un servicio de soporte en cada Estado (Coordinadorías de Infancia y Juventud), que prestan orientación, tanto en asuntos legales como interdisciplinarios (tanto a los jueces como a los profesionales de los equipos interdisciplinarios), investigación de jurisprudencia y doctrinaria, soporte para proyectos interinstitucionales o para proyectos desarrollados en cada ciudad, además de cursos de capacitación opcionales.

AMERICA DEL NORTE

En Estados Unidos, Linda A. Szymanskl hizo una investigación sobre capacitación específica para jueces trabajando en cortes juveniles. Ella destacó que en Connecticut hay "capacitación específica en cuestiones de competencia cultural y estrategias para enfrentar el confinamiento desproporcionado de minorías étnicas". En Washington, también, "el Administrador de las Cortes, bajo la supervisión del Jefe de Justicia, tiene la obligación legal de desarrollar un currículo para la comprensión general de diversidad étnica y cultural y sus implicaciones en el trabajo con jóvenes y familias negras."[52]

LA ENCUESTA ESTA TODAVÍA ABIERTA A SU CONTRIBUCIÓN

Estos son resultados preliminares de la encuesta. Hay mucha más información a ser compartida por los países y estamos esperando la contribución de nuestros miembros en más de 60 países. Las especificidades de cada país pueden evidenciar importantes cuestiones a ser enfrentadas en este campo y su colaboración será de gran ayuda.

Para participar por favor responda al cuestionario en el siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLENme02RJXxYHfzF-6bx6iMdmZM7poFbP1yEwCCMIr-n0b-mg/

52. Szymanski, L. (2012) Must Judges and Other Court Personnel Receive Special Training with Respect to Preventing and Controlling Juvenile Crime? NCJJ Snapshot, 17(4). Pittsburgh, PA: National Center for Juvenile Justice.

5. EXPERIENCIA ASOCIATIVA DE JUECES Y MAGISTRADOS Y SU IMPACTO EN LA GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES

5.1. FORTALECIENDOSE Y MOVIENDOSE ADELANTE JUNTAS: EL ROL DE LAS ASOCIACIONES JUDICIALES EN LA ERA MODERNA

Por John Lowndes[53]

Introducción

Toda sociedad democrática que respete el principio de independencia judicial y valore la regla de la ley necesita asociaciones judiciales para proteger la independencia del judicial como tercer brazo del estado y preservar la regla de la ley como pilar de la democracia.

El judicial ha siempre sido visto como el más débil y vulnerable brazo del estado – sin embargo se espera que sea el guardián y garante de la independencia judicial y la regla de la ley. Sin embargo, la independencia que busca sostener y proteger (en el interés de preservar la ley) esta siempre en riesgo dado su debilidad y vulnerabilidad en la estructura del estado. Las asociaciones judiciales sirven en función de exponer poder y la falta de balance entre éste y los otros poderes del estado con una vista de igualdad entre los tres. Logran esto uniendo a los judiciales y aumentando el poder e influencia de los mismos como el tercer brazo del estado – un simple y puro caso de "fortaleza a través de la unidad".

Como la activa y publica voz del brazo judicial del estado, las asociaciones judiciales juegan un rol vital en fortalecer y defender la independencia de los judiciales y preservar la regla de la ley en una democracia moderna.

Las Asociaciones Judiciales como entidades legitimas

Las AJ son internacionalmente reconocidas como un fenómeno que tiene una existencia legitima en una sociedad moderna.

Entre otros, el principio 9 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Judiciales establece.

Los jueces deben tener la libertar de formar y unirse a asociaciones de jueces u otras organizaciones para representar sus intereses, promover su entrenamiento profesional y proteger su independencia.

La necesidad de Asociaciones Judiciales

Dada la falta de poder u vulnerabilidad dentro de la estructura gubernamental hay muy pocos mecanismos de defensa para proteger su independencia.

El principal mecanismo de defensa son Los Principios "Latimer House" (o Principios Latimer) y la doctrina de separación de poderes. Estos principios alientan el respeto mutuo entre las tres alas del estado en relación al cumplimiento de sus "respectivos y críticos roles en la promoción de la regla de la ley de manera complementaria y constructiva" (Principio 11 (b)) – así como también reconocer que "cada Parlamento del país de la Comunidad, ejecutivos y judiciales son los garantes en su respectiva esfera de la regla de la ley "(Principio 1) y que "una independiente, imparcial, honesta y competente justicia es integral para mantener la regla de la ley, generando confianza publica y dispensando justicia" (Principio 1V).

Sin embargo, dado que esta doctrina no es siempre respaldada constitucionalmente o realizada, y solo se aplicara por "common law" (jurisprudencia o ley costumbrista) o convención, permanece "un mecanismo incompleto y frágil para asegurar independencia judicial". Como fuera notado por Diana Woodhouse donde la doctrina de separación de poderes esta basada en "entendimientos, convención y guía" su eficiencia depende de "una comunidad de propósitos y valores compartidos a través de varias culturas judiciales, políticas e institucionales". Sin embargo, desarrollos en gobiernos – como el énfasis en gestión publica y eficiencia, cambian en el rol y foco del hacer judicial, haciéndolo parecer mas abierto e incrementando las expectativas publicas aparejando una perdida de confianza publica – significa que las relaciones que habían promovido compartir valores están cambiando y "la comunidad de propósitos ya no puede ser asumida" (Woodhouse en 158).

No obstante la fundamental importancia de los Principios Latimer y la doctrina de separación de poderes como garantías institucionales de independencia judicial son mecanismos frágiles que pueden quebrarse en un instante - aun en un estado moderno y de democracia estable.

El pensamiento tradicional sostiene que la justicia y el publico deben observar al Procurador General (en Australia) o al Lord Canciller (la oficina equivalente en el Reino unido) para defender las cortes y a los judiciales de amenazas a su independencia e injustificadas e irresponsables criticas. Sin embargo, en las ultimas 3 décadas el rol del Procurador general y el Lord Canciller como defensor del judicial han disminuido progresivamente, y se han minimizado tanto que el brazo judicial del estado no puede depender de ellos proteger la independencia judicial.

Las razones históricas para el surgimiento de la organización fueron la percepción que la independencia judicial no estaba garantizada por que:

- La falta de independencia Per se
- La fragilidad del principio de independencia judicial
- La ausencia de garantías institucionales fuertes para la independencia judicial

En una publicación fundamental, la jueza McGarvie discute que el brazo judicial del estado necesita organizarse y reconocerse "de manera necesaria para la preservación de su independencia en el mundo democrático moderno"; y

53. Este trabajo es una versión resumida del publicado en el Volumen 24, 1 de Junio de 2019 del Diario Judicial de la Comunidad, que fue basado en la Conferencia de Brisbane de la CMJA en Australia en Septiembre 2018 y es reproducido con el permiso de la CMJA.

54. El Dr. John Lowndes es ex Presidente de la Corte Local del Territorio Norte y ex presidente de la CJMA.

demostrar "compromiso a hacer lo necesario para lograr los desafíos hacia una independencia judicial" (ver Historia Breve, pp. 2-3)

Como ex jefa, la jueza Gleeson de la Corte de Australia reconoció "de vez en cuando será necesario para los jueces jefe responder a criticas de jueces cuando responder será necesario, y el Procurador General no responda. O hasta publicar extendiéndose a los judiciales en general. Publicaciones de este tipo pueden requerir una respuesta institucional a través de asociaciones judiciales nacionales.

Como fuera observado por el Honorable David Malcolm AC KCSJ, "la independencia de los judiciales y la profesión legal es reconocida internacionalmente como elemento clave de una sociedad civilizada", y "la independencia de los judiciales y de la profesión legal es para la protección de las personas, y su columna vertebral de una sociedad democrática libre". Como fuera enunciado por las Latimer "una profesión legal independiente y organizada es un componente dentro de la protección de la regla de la ley" (Guía V111)

El Rol de las Asociaciones Judiciales
Es obvio de la discusión precedente que el principal rol de las AJ es fortalecer y defender la independencia de los judiciales y preservar la regla de la ley.

Sin embargo, el rol de las AJ no esta encerrado en una defensa "al frente" de estas cosas.

La reciente Declaración Brisbane sobre la independencia e Integridad de los Oficiales de la Justicia de las Cortes Ordinarias establece entre otras cosas:

Consistentemente con sus derechos fundamentales, todos los judiciales deben ser libres de formar y unirse a asociaciones u organizaciones para:

a) Asegurar el mantenimiento de un poder judicial fuerte e independiente dentro de una sociedad democrática que se adhiere a la regla de la ley.

b) Promover y alentar el continuo de estudios legales, judiciales e interculturales por los miembros judiciales.;

c) Promover y alentar el intercambio de información educacionales, legales o profesionales sobre mejores practicas entre judiciales y otras personas u organismos incluyendo, dentro de lo posible, asistencia a conferencias relevantes dentro o fuera de la jurisdicción, para lo que fondos apropiados deben estar disponibles para asistentes judiciales.

d) Promover un mejor entendimiento y apreciación del rol adecuado de los judiciales en la administración de justicia y la importancia de una fuerte e independiente justicia en la protección de derechos humanos fundamentales y acercando buenas practicas, y hacer lo mismo con los brazos ejecutivos y legislativos del estado.

e) Buscar mejoras en la administración de justicia y el acceso al sistema judicial.

f) Llevar a cabo investigaciones que lleven mas allá el logro de estos objetivos.

Entonces, las AJ pueden desarrollar un rol legítimo en comentar o presentar informes sobre propuestas legislativas y acciones ejecutivas en pos del interés de preventivamente proteger la independencia judicial, la regla de la ley y la administración de justicia en una sociedad democrática.

La CMJA ha establecido una base de guías para tratar con pedidos de miembros gubernamentales, a través de su Ministerio de Justicia o equivalentes, la Secretaria de la Comunidad y las asociaciones miembro y Jueces Jefe (también como oficiales judiciales) deben responder a consultas o reformas legislativas o constitucionales: ver "Los procedimientos para tratar con los problemas de independencia judicial de la CMJA"

La Conferencia Judicial de Australia también ha desarrollado guías con respecto a las circunstancias en las que seria apropiado para ella comentar o publicar con respecto a propuestas de cambios legislativos, sugiriendo que "en lo importante, las declaraciones de la CJA en relación a cambios legislativos, será dirigida a; asuntos afectando la independencia de la justicia; que afecten el funcionamiento de cortes; el mantenimiento, promoción y mejora del sistema judicial; y asuntos que podrían afectar de alguna forma de administración de justicia".

Como regla general, la CJA hará "declaraciones publicas sobre asuntos de esa índole solo si son sostenidos directamente en funciones centrales judiciales"

Sin embargo, al realizar dichas declaraciones, cualquier AJ – y los judiciales en si – deben operar dentro del marco de las reglas Latimer y su subrayado teórico, la doctrina de separación de poderes. Ambos requieren las 3 ramas del estado respetar mutuamente sus funciones en una sociedad democrática. Al hacer estas declaraciones una AJ debe cuidarse de no violar la doctrina de separación de poderes y de ninguna manera menospreciar el principio de soberanía parlamentaria.

Otro rol de las AJ se relaciona al deseo de "comunicación institucional para explicar el trabajo de jueces y tribunales".

De hecho, dicha comunicación institucional es una absoluta necesidad ya que el sistema judicial esta bajo obligación ética de involucrarse en la educación cívica. No hay mejor vehiculo para la comunicación institucional que las AJ.

Como fuera remarcado por Lowndes, los judiciales tienen "una obligación social de involucrarse en la comunidad en la manera sugerida por Bokman porque como una importante institución social, el judicial necesita impartir información al publico sobre su rol, funciones y actividades para sostener su legitimidad – lo que es derivado de la comunidad a la que sirve – y mantener confianza publica como brazo del estado. Las AJ proveen medios por los cuales el judicial es una institución que puede cumplir semejante obligación fundamental.

Finalmente, pero no menos importante, debe ser obligada a proveer "entrenamiento y continuo desarrollo profesional para el judicial", lo cual es "esencial para asegurar estándares éticos altos y jueces competentes". Oficiales judiciales incompetentes o poco éticos son los archi enemigos de la independencia judicial y la imparcialidad. Una continua educación fortalece la independencia y al regla de la ley.

El Funcionamiento de las Asociaciones Judiciales y Avanzando Juntos

Para ser efectivas, las AJ deben ser maquinarias bien organizadas, entonadas y aceitadas.

Es esencial que las AJ tengan políticas apropiadas y procedimientos para sus roles.

Las AJ permiten a los judiciales "volverse mas fuertes juntos" y reconocerse como un brazo igualitario del estado.

¿Pero que hay del futuro? ¿Cómo el judicial avanza como un igual pero separado brazo del estado?

La estructura y asociación de AJs es critica para el grado de unidad institucional engendrado por una AJ.
A mayor unidad institucional (o solidaridad judicial) que una AJ cree, la mayor probabilidad de efectividad.

Dichas asociaciones son mas posibles de crear unidad institucional necesaria para los judiciales estar firmes contra acciones legislativas o ejecutivas que desafíen la independencia del poder judicial y al regla de la ley.

Finalmente, dichas redes permite a las AJ aprender entre ellas las mejores formas de defender y fortalecer la independencia judicial y preservar la regla de la ley en un mundo cambiante que presenta nuevos desafíos.

5.2. LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE JUECES DE FAMILIA EN POLONIA

Por Magdalena Arczewska[53]

Los Tribunales de Familia fueron creados en Polonia como parte de los cambios introducidos por el Ministerio de Justicia a fin de los 70. Los Jueces de Familia conforman un grupo profesional especializado. Cuentan con un fuerte sentido de pertenencia a la comunidad que representan. Dada la naturaleza de conflictos con los que lidian día a día, cuentan con una gran vocación y sentido de misión.

En conformidad con la Ley de Asociaciones, la Asociación de Jueces de Familia de Polonia, como cualquier otra persona jurídica que representa un grupo de ONG, es una entidad voluntaria, permanente, autárquica y sin fines de lucro que determina sus objetivos, programa de actividades y estructura orgánica de manera independiente. También adopta formas internas para sus actividades, las que se basan en el trabajo voluntario realizado por sus miembros. En este momento, la Asociación cuenta con 240 miembros (lo que significa que de cada 4 Jueces de Familia de Polonia, 1 está asociado). Cualquier Juez, incluso jubilado, puede pertenecer a la agrupación. Los miembros extraordinarios son, particularmente, investigadores abocados a cuestiones de familia o guardianes designados en el fuero de familia, por ejemplo.

Las máximas autoridades de la organización son la Asamblea General, La Junta, el Panel de Revisión y el Panel Arbitral. Sus miembros son designados/as cada 4 años y son electos en sufragios abiertos o secretos, dependiendo en la resolución de la Asamblea General. El trabajo de la Asociación es conducido por la Junta, la cual está compuesta por 12 personas.

Preexistente al período entre guerras en Polonia, la Asociación de Jueces de Familia fue reactivada en 1987, gracias al compromiso del Juez Józef Musił, Ministro de Justicia entonces y Ex Juez de la Corte Suprema el día de hoy. En 1987, Gerard Bajger, presidente de la Corte Regional de Bielsko-Biała fue nombrado presidente de la Asociación. Desde el principio la organización fue apoyada por Henryka Veillard-Cybulska, una Jueza Juvenil que estableció la Fundación Veillard-Cybulski en 1988 y donó 50 mil francos suizos para la implementación de sus estatutos. La siguiente presidente fue Barbara Skoczyńska-Soroko, una Jueza de la Corte Regional de Varsovia. Luego, durante muchos años, la organización fue presidida por la Jueza Ewa Waszkiewicz (Desde 1988), Jueza de la Corte Regional de Varsovia. En 2015 la Jueza Dorota Hildebrand-Mrowiec, una persona enérgica y llena de carisma, jueza por verdadera vocación, fue electa presidente.

La Asociación es miembro fundador de la Asociación Internacional de Jueces y Magistrados de la Juventud y Familia. En 2013, cambió su nombre a Asociación de Jueces de Familia dadas las reformas orgánicas de la justicia polaca (las divisiones del fuero de familia en las Cortes Regionales se volvieron optativas). Debe mencionarse que los casos designados a jueces de familia en Polonia son extremadamente diversos. Pasan de categorías como familia y guardias, actos inmorales y castigables de menores, tratamiento de adicciones y muchos otros.

De acuerdo con su estatuto, el objetivo de la Asociación es reforzar la independencia e imparcialidad de los jueces de familia, así como también el reconocimiento de su autoridad. De esta manera apoyar y fortalecer a la familia y mejorar el conocimiento y competencia de jueces y profesionales colaborando con Cortes de Familia.

La Asociación también promueve y maneja el intercambio de información sobre asuntos como la lucha contra la delincuencia juvenil, la protección de la familia, el apoyo y desarrollo de la mediación, formación de opinión publica, defensa de la comunidad a través de Jueces y su integración, colaboración en el proceso legislativo en conjunto con organismos ejecutivos y otros cuerpos dentro del Sistema judicial de familia.

La Asociación persigue sus objetivos a través de la implementación de tareas de desarrollo de la protección de la familia y el interés superior del niño/a, la prevención de actos ilegales o inmorales de niños/as; actividades educativas; organización de reuniones; Conferencias científicas, exhibiciones y lecturas; colaboración con otras asociaciones de perfiles similares en Polonia y el extranjero promoviendo los logros del Sistema polaco de familia, el intercambio de información y material en los asuntos de interés de la Asociación; la organización de congresos, seminarios, conferencias nacionales e internacionales, trabajo en conjunto con estudiantes de derecho, pedagogía y psicología como parte de programas de voluntariado y a través de su página de internet (http://www.sss-rwp.pl/index.php) y perfil de Facebook (Seguida por 2800 personas) y contacto con medios.

En 1999-2004 la Asociación publicó su "FamiliJant" trimestral, dirigido a los jueces abocados a casos de juventud y familia. Este diario incluyo información sobre el funcionamiento de los Tribunales de Familia en Polonia y nuevas normativas. El "FamiliJant" también sirvió como plataforma de intercambio de ideas y discusión. El jefe de edición fue la Jueza Eleonowa Porębiak-Tymecka.

Representantes de la Asociación participaron en el trabajo de la AIMJF y la sección europea de la misma. La jueza Katarzyna Kościów-Kowalczyk es miembro de la Junta de la AIMJF y la Dra. Magda-

55. Magdalena Arczewska is a sociologist and lawyer with a PhD in social sciences. She works as an assistant professor at the Institute of Applied Social Sciences of Warsaw University. Ms Arczewska's research interests focus on social policy and collaboration between public administration and NGOs at the national and local government level. She is Member of the Board of the Association of Family Judges in Poland.

lena Arczewska, participa del trabajo del Comité General en nombre de la Asociación. Ellas representaron a la misma en la reunión más reciente, el 18 de Octubre pasado. La Asociación reúne jueces que son miembros activos de su sociedad, cuyo compromiso cívico es alabado. Dos miembros de la Junta, Katarzyna Kościów-Kowalczyk en 2016 y Dorota Hildebrand-Mrowiec en 2018, fueron reconocidas con el título de Jueces del Año en la encuesta realizada por el comité de Vigilancia de la Justicia de Polonia.

La idea de dicha encuesta fue reconocer a los jueces con mayor compromiso cívico. Este galardón ha sido entregado desde 2015 a aquellos cuyo compromiso traspasa el simple manejo y comprende un esfuerzo más allá de los tribunales para crear puentes entre la corte y la sociedad. La Jueza Dorota Trautman, Presidenta Adjunta de la Asociación, y el Profesor Henryk Haak, miembro de la misma, han sido reconocidos por la Defensoría del Niño/a con Medallas de Honor por su protección de los derechos del niño/a. la Asociación de Jueces de Familia de Polonia se involucre en actividades con el fin de promover a jueces remarcables. Ya ha organizado seis ediciones de estos galardones para jueces de familia, que incluye un trabajo sobre asuntos propios del derecho de familia, leyes o experiencias profesionales. El objetivo de esta competencia es promover a estos jueces, cuyo compromiso y accionar son superiores y que, al mismo tiempo, demuestran un sentido de servicio en pos del bienestar de los niños/as y la familia.

La competición también busca promover a jueces que marcan y combaten problemas legales, culturales o sociales importantes para la familia y los niños/as y están listos para compartir sus experiencias, reflexiones y dudas con otros. El documento presentado para dicha competición es evaluado por representantes académicos y jueces. Los autores galardonados reciben premios monetarios, diplomas y material bibliográfico. Algunos de los tópicos presentados son “El derecho de Niños/as a ser criado por ambos padres”, “Mi visión del Sistema de justicia de familia”, “El interés superior del niño/a según el Sistema de justicia de familia”, “El trabajo de un Juez de familia – ¿Trabajo o vocación?”. La última edición de éste premio fue en 2018.

En 2016, la Asociación anuncio una competición para identificar la mejor Tesis enfocada en asuntos de familia, que atrajo un interés significativo entre los estudiantes de grado.

Además, la Asociación realiza esfuerzos enfocados en el desarrollo e integración profesional de la comunidad de jueces de familia. El Congreso de Jueces de Familia, una iniciativa educativa y de entrenamiento, reunión 170 jueces de Polonia en su edición número 21 mantenida en Zakopane durante este año. El lema del Congreso de este año fue “La crisis de la familia en el siglo XXI”. El objetivo de la reunión fue brindar a los participantes una visión amplia de los problemas relacionados a la ley, psiquiatría y psicología dirigida a examinar casos de familia y también unificar criterios.

Un componente importante de este programa educativo fue la discusión de las enmiendas al Código de Procedimiento Civil y el Código de Familia y Guardas. Entre numerosas exposiciones, la brindada por la Dra. Ewa Woydyłło-Osiatyńska, psicóloga y terapeuta, quien trato de responder la pregunta de por qué las relaciones se rompen y hasta cuándo puede salvarse una, y la presentación de Bogdan de Barbaro, una eminencia de la psiquiatría de la Universidad de Jagiellonian, sobre la crisis de la familia, fueron las que atrajeron el mayor interés de la audiencia.

La profesora Katarzyna Kłosińska, una lingüista de la Universidad de Varsovia y presidente del Consejo Lingüístico de Polonia, hablo sobre la importancia del lenguaje polaco en el trabajo de un juez. Debe remarcarse que dicho congreso fue asistido por el Defensor General de Polonia, el Defensor de niños, el Presidente de la Corte Suprema y el Presidente de la Corte Civil de la Corte Suprema. La información sobre próximos congresos es brindada a los medios.

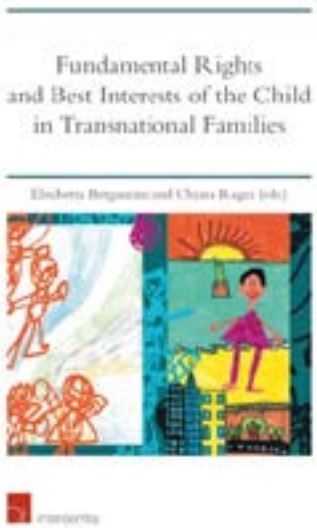
En 2018, la Asociación organizo la conferencia “El interés superior del niño/a como tópico de interés de la sociedad”, llevada a cabo en Zamość. El objetivo de la conferencia fue informar a los jueces sobre los resultados de los estudios enfocados en el concepto del interés superior del niño/a y discutir varios tópicos traídos a colación.

Aun más, la conferencia incluyo talleres sobre como oír al niño/a y los aspectos psicológicos del comportamiento en los tribunales.

Los miembros de la Asociación también tuvieron la oportunidad de ser supervisados por un psicólogo. La Asociación colabora con muchas instituciones y organizaciones, incluyendo la Fundación del Niño/a “Dajemy Dzieciam Siłę”, asociaciones de Guardadores designados por la Corte y asesores legales. Sus representantes tienen lugar en conferencias nacionales e internacionales de varios asuntos, por ejemplo “Síndrome de alcoholismo fetal – desafíos médicos, psicológicos, educacionales y legales”, “La colaboración entre guardadores y unidades de bienestar como parte del trabajo del Juez fuera de su Tribunal” o “Bienestar y daño como conceptos similarmente inclusivos. La protección legal del niño/a. Declaraciones y realidades”

6. REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

6.1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO/A EN FAMILIAS TRANSNACIONALES



Es un trabajo durante el tiempo en la implementación del interés superior del niño/a en la Unión Europea y cubre los tópicos más importantes emergidos de la veloz internacionalización de la ley de familia y juvenil y del incremento de la movilidad de las familias.
Libro | publicado | 1ra edición
Septiembre 2019 | xxviii + 322 pp.

Las familias en Europa están cada vez mas amoldándose a la movilidad de las personas y los orígenes multiculturales. Este libro se enfoca en la protección de

los niños/as en situaciones que cruzan las fronteras. ¿Cuales son los derechos de los niños/as en familias transnacionales? ¿Cual es su interés superior? ¿Como puede protegerse estos intereses? Hay mucha controversia en sus derechos y la acompañante inseguridad ha resultado en dificultades prácticas considerables para ellos intentando implementarlos.

En orden de proveer una vista más clara e interiorización en la naturaleza de los derechos fundamentales de niños y niñas y su interés superior, este libro examina soluciones provistas por la Unión Europea y el derecho internacional a las preguntas emergidas por la incidencia creciente de las familias transnacionales en la protección de menores. Cubre tanto reglas sustantivas como en conflicto con la ley. Diferencias en leyes de familia sustantivas de Estados Miembro todavía imposibilitan la efectiva protección del niño/a y su familia. Se incluye también casos de migración, asilo, casamiento forzado, kafalah, pero también familias arco iris. Además, el rol de los derechos humanos (reconocimiento mutuo de estatus y acuerdos de subrogación, adopción) y derechos procedimentales (secuestro de niños/as, re estructuramiento de Bruselas II) en casos con cruce de fronteras debe ser considerado cuidadosamente.

Dra. Elisabetta Bergamini es una Profesora asociada de Derecho Internacional en la Universidad de Udine, Italia. Enseña y escribe sobre derecho internacional, con particular énfasis en derecho de familia. Desde 2014 a 2016, coordinó un modulo Jean Monnet sobre Derecho de Familia de Europa co-financiado por la Comisión de la Unión Europea.

Dra. Chiara Ragni es una Profesora asociada de Derecho Internacional en la Universidad de Milán, Italia donde coordino un modulo Jean Monnet sobre Derecho de Familia y Derechos Humanos. Su área de expertise incluye derecho internacional de familia, derecho criminal internacional y derechos humanos.

6.2. PLURALIDAD Y DIVERSIDAD DE LAS RELACIONES DE FAMILIA EN EUROPA

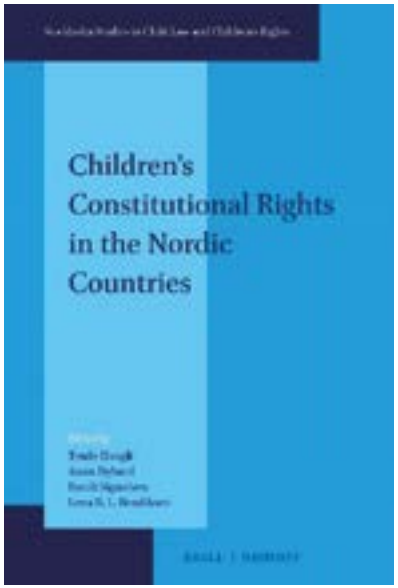
Este volumen contiene las contribuciones entregadas en la sexta conferencia internacional de la CEFL, que se focalizo en derecho comparado e internacional de familia en Europa y su respectivo contexto cultural.
EDITORE(S):
Katharina Boele-Woelki, Dieter Martiny
SERIES:
Derecho Europeo de Familia
VOLUMEN: 45
Libro | publicado | 1ra edición
Agosto 2019 | xii + 388 pp.

Este volumen contiene las contribuciones entregadas en la sexta conferencia internacional de la CEFL, que se focalizo en derecho comparado e internacional de familia en Europa y su respectivo contexto cultural. Entre otras cosas en este libro, expertos de la CEFL y otros estudiosos legales tratan la CEFL y sus principios, la interrelación de derecho de familia y la sociología familiar, migración familiar, derechos fundamentales de jóvenes y mujeres axial como también desarrolla el concepto de paternidad, el rol de los jóvenes en los procesos, divorcios extrajudiciales y otros.

Mientras se desarrollan modernas tendencias en la ley Europea de familia, algunos nuevos desafíos se levantan y otros antiguos permanecen. La conciencia de más pluralidad y diversidad en las relaciones de familia incrementa. Ambos proponen problemas. Nuevas soluciones deben integrarse al sistema de familia existente. Por otro lado, existen tensiones entre los valores fundamentales modernos y las soluciones religiosas tradicionales. Para ambos se debe un análisis profundo.

La conferencia, y por ende el libro, apuntan a activar el intercambio de ideas y argumentos en derecho comparado e internacional de familia en Europa.

6.3. DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL NIÑO/A EN PAÍSES NÓRDICOS



Editado por TrudeHaugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen y Lena R. L. Bendiksen, Universidad de Tromsø

https://brill.com/view/title/39188

Diciembre 2019
Tapa Dura (aprox. 450 pp.)
ISBN 9789004382800
E-ISBN 9789004382817
Precio € 193 / US$ 232
Estudios de Estocolmo en Ley Juvenil y Derechos del Niño/a, 5
Impresión: Brill | Nijhoff

Este libro presenta un estudio comparativo sobre los derechos constitucionales de niños y niñas en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Los autores discuten el valor de consagrar los derechos del niño/a en una constitución nacional, además de implemen-

tar la Convención de Derechos del Niño/a (CDN). El problema central es si consagrar dichos derechos en la constitución nacional mejora su implementación y fortaleza al proveer herramientas y obligar a Cortes, legisladores, políticos y operadores a tomar estos derechos en serio. El estudio aborda si las constituciones están en la línea con la CDN a nivel tanto general como particularmente en 3 aspectos: el interés superior del niño/a, derecho del niño/a a participar y el derecho al respeto por la vida familiar.

Lectores: todo aquel interesado en derechos del niño/a, derechos humanos y ley constitucional. Políticos, académicos, investigadores, estudiantes, operadores de la ley.

6.4. DERECHOS CONSTITUCIONALES DEL NIÑO/A EN PAÍSES NÓRDICOS

El contrato del Bautismo
Mary McAleese

https://brill.com/view/title/55914

Noviembre 2019
Tapa Dura (aprox. 590 pp.)
ISBN 9789004411166
E-ISBN 9789004411173
Precio € 160 / US$ 192
Estudios sobre religión, creencias seculares y derechos humanos, 14
Impresión: Brill | Nijhoff

En el primer estudio de éste tipo, Mary McAleese somete a un escrutinio comprensivo al Código Canónico de Ley de 1983 de la Iglesia Católica Romana, ya que aplica a niños/as. La iglesia católica es la organización no gubernamental más grande del planeta abocado a proveer educación y servicios de cuidado a niños/as. Cuenta con más de 300 millones de niños/as miembros alrededor del mundo cuya mayoría se convirtió miembro en su bautismo de bebé. La ley canónica establece sus derechos y obligaciones como miembros. Estos niños/as también cuentan con derechos establecidos en la Convención de Derechos del Niño/a de las Naciones Unidas en 1989. El impacto de la CDN en la ley canónica es examinado a detalle y el análisis muestra un distintivo y preocupante cambio en la actitud de la sede sagrada a sus obligaciones bajo la CDN, ya que sus escándalos de abusos sexuales por parte de clérigos se volvió un asunto de discusión en el Comité de Derechos del Niño/a, la cual funciona monitoreando la CDN.

Lectores: todos los interesados en ley canónica de la iglesia Cristiana y catequesis. Cualquiera interesado en declaraciones internacionales de derechos del niño.

Ganador del premio Alfons Auer Ethics Award:

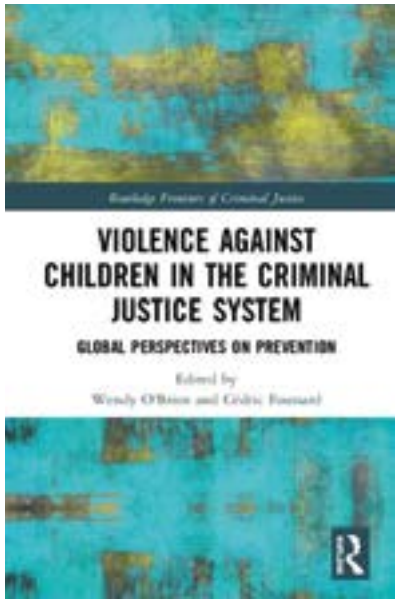
La ex presidente de Irlanda Mary McAleese ha ganado uno de los premios mas prestigiosos del mundo Católico, el Alfons Auer Ethics Award, de la Tübingen University en Alemania por su tesis doctoral en "Derechos del Niño/a y obligaciones en la Ley canónica"

https://www.catholicireland.net/mary-mcaleese-wins-europes-richest-theology-prize-study-canon-law/

6.5. VIOLENCIA CONTRA JÓVENES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA JUVENIL

Perspectiva Global para al Prevención, 1ra Edición
Editado por Wendy O'Brien, CédricFoussard

Routledge
246 paginas



Los jóvenes en conflicto con la ley penal son pasibles de haber experimentado violencia o adversidad que sus pares no ofensores. Exacerbando el deterioro generado por este trauma en la infancia, el contacto de niños/as con el sistema de justicia criminal establece un gran riesgo de violencia física, sexual y psicológica. Este libro examina las formas específicas de violencia que los jóvenes experimentan a través de su contacto con el sistema de justicia criminal.

Con contribuciones comprometedoras por parte de referentes estudiosos y operadores de derechos del niño/a y justicia juvenil, este libro describe estrategias de prevención basada en evidencia y estudios de casos alrededor del mundo. Ilustra la diversidad de contextos en el que varias formas de violencia contra jóvenes se desarrollan. Provee conocimiento avanzado sobre la naturaleza y extensión de la violencia contra jóvenes en la justicia juvenil y las específicos factores situacionales que contribuyen o inhiben la exitosa implementación de estrategias de prevención de la violencia. Demuestra que sistemas de justicia especializados, en los que se respeten los derechos del niño/a, son cruciales en la prevención de la violencia inherente a los regimenes convencionales de justicia criminal.

Escrito en un estilo claro y accesible, este libro será del interés de estudiantes e investigadores compenetrados en estudios de criminología y justicia criminal, justicia juvenil, victimología, prevención del crimen y derechos del niño/a.

7. NOTÍCIAS DE LA AIMJF – LAS ACCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO

7.1. MÉXICO – CONGRESO DE LA RED NACIONAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. SEPTIEMBRE 2019

56

En los días 5 y 6 de septiembre de 2019 se realizó en la Ciudad de México un congreso de la Red Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, con la participación, además de jueces mexicanos, de la presidente de la AIMJF, la jueza Marta Pascual, del editor-jefe de la Crónica, Eduardo Rezende Melo y de la jueza argentina y miembro de la AIMJF, Agustina Días Cordero. El congreso fue organizado por la jueza mexicana Sara Patrícia Orea, quien lideró la constitución de la Red. La Dra. Sara Patricia Orea es miembro de la AIMJF.

La presidente Marta Pascual hizo una conferencia sobre justicia restaurativa, el juez Eduardo R Melo sobre los retos de efectividad de las sentencias y la jueza Agustina Dias sobre el derecho a la participación.

La AIMJF participó también de las actividades de constitución del grupo de jueces que actúan con adolescentes en conflicto con la ley, presentando la AIMJF a los presentes, ofreciendo apoyo para la organización asociativa y abriendo las puertas para colaboraciones institucionales.

La presidente de la AIMJF estuvo además en reunión con representantes de la Justicia Mexicana para organizar un pre congreso mundial en 2021 en colaboración con Terre des Hommes y Penal Reform International.

7.2. VISITA DE ESTUDIO A SAN PABLO, BRASIL – 4 A 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

57

Presentamos un corto informe sobre la visita de estudio realizada en San Pablo, Brasil, organizada por la AIMJF en el seno de un programa que desarrollará a cada semestre en distintos países.

Participaron dos jueces argentinos Elbio Ramos y Gladys Viviana Krasuk y de la investigadora de origen inglesa, pero radicada en Holanda, Kim Enrica Tsai.

El programa tuvo inicio con una formación teórica de cuatro horas. Inicialmente Eduardo Rezende Melo, editor de la Crónica y juez en Brasil, presentó el sistema de garantía de derechos a niños, niñas y adolescentes, la organización del sistema de justicia, el sistema especializado de protección a la niñez y el sistema de atención socioeducativo, destinado a adolescentes en conflicto con la ley. Contamos con la participación del defensor público Giancarlo Vay para exponer la actuación de la Defensoría Pública en la defensa de derechos de niños, fundamentalmente en la justicia juvenil, pero también en el campo de protección. La fiscal Elisa De Divitiis Camuzzo expuso la actuación de la fiscalía, especialmente en la defensa de derechos sociales, y el extenso campo de actuación con acciones colectivas. Finalmente, el juez Egberto de Almeida Penido, que coordina la implementación de proyectos de justicia restaurativa, presentó los campos de diseminación de esta práctica.

Hubo una concentración inicial de actividades en el campo de la justicia juvenil. Visitamos, entonces, un centro de formación profesional de adolescentes en conflicto con la ley, en un servicio de referencia de la industria para automóviles. En la corte, asistieron a audiencias

56. Las conferencias de la presidenta de la AIMJF, del editor en jefe de la Crónica y de la jueza Agustina Díaz. La Jueza Sara Patricia Orea conduciendo los trabajos de constitución de la Red y, al final, todo el grupo de jueces, representando distintos Estados Mexicanos.

57. El encuentro de formación en la Escuela de Magistrados de San Pablo, con la presencia de la secretaria general de la AIMJF, Andrea Santos Souza; la visita a un centro de formación industrial a adolescentes en conflicto con la ley; el encuentro con profesionales locales una vez más en la Escuela de Magistrados. El logo de la Escuela, quien ha dado todo el soporte logístico para la visita

preliminares, anteriores al inicio formal del proceso judicial, en la cual hubo proposición de solución del conflicto por medio restaurativo; una audiencia inicial de instrucción, con el interrogatorio del adolescente; y audiencias de evaluación o revaluación de planes individuales de atención, guías conductoras de la ejecución de medidas socioeducativas.

En el según día, visitamos tres centros de privación de libertad: un provisional, durante el plazo máximo de 45 días, aguardando instrucción procesal y sentencia; un para sentenciados en medio cerrado y un en semilibertad, para niñas adolescentes.

Por la tarde, visitamos otra corte, donde asistimos audiencia de revaluación de un niño privado de libertad.

En el miércoles, último día de la visita, uno un diálogo con jueces y otros profesionales locales sobre las impresiones y diferencias de los modelos, en el cual participaron 180 personas.

La visita prosiguió por la tarde en el campo de protección, cuando se visitó un servicio múltiple con enfoque en niños privados de convivencia familiar. Ellos realizan capacitación de otros servicios para desarrollar álbumes para registro de la historia de estos niños que estén en servicios de internamiento o de familias de acogida; realizan servicios de padrinaje a estos niños; y servicios de familia de acogida.

Por fin, asistimos audiencias concentradas, de revaluación de planes individuales de atención de niños que están en servicios de internamiento, en las cuales participan distintos servicios públicos (salud, asistencia social, habitación, empleo), además del juez, fiscal y defensor, para garantizar los derechos de los niños. Las audiencias fueron todas concernientes a niños refugiados de Haiti y países africanos.

La visita de estudio contó con el valioso apoyo de la Escuela de Magistrados de San Pablo (Escola Paulista da Magistratura), Brasil, que abrió sus espacios para la formación inicial y el diálogo con jueces locales, además de fornecer transporte para la visita.

Las próximas visitas planeadas serán en Cape Town, Sudáfrica y en Londres, Inglaterra, respectivamente en marzo y junio de 2020.

7.3. CELEBRACIÓN DE LOS 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN EN GINEBRA, SUIZA

Por Andrea Santos Souza[58]

59

En noviembre pasado, con motivo de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), Naciones Unidas Celebró un evento oficial en su palacio de Ginebra, durante los días 18 al 20 coincidiendo con la fecha de publicación de éste tratado, que ha sido el de mayor ratificación en la historia de las Naciones Unidas.

Asistieron algunos miembros de la Comisión Directiva de la AIMJF, como la Presidenta, Marta Pascual, la Tesorera, Anne Catherine Hatt y la Secretaria General Andrea Souza. Estuvieron presentes Philip Jaffé, miembro del Comité de los Derechos del Niño y Jean Zermatten, ex Presidente del Comité de los Derechos del Niño/a y Presidente Honorario de la AIMJF.

Dos puntos principales fueron debatidos durante el desarrollo de la conferencia, tal como lo explicara la Defensora de los Derechos del Niño, Dra Gerison Landslow, éstos fueron:

• Difundir las buenas prácticas que se han venido adoptando en sintonía con la CDN al igual que la promulgación de leyes, implementación de políticas y programas y cambios sociales.

• Identificar prioridades para los niños y jóvenes basadas en las experiencias reunidas.

En los últimos 30 años, el CDN ha tenido influencia en las agendas de los organismos internacionales y también en los gobiernos nacionales o locales; sin embargo queda mucho camino por transitar para alcanzar el objetivo máximo de respetar, proteger y cumplir los derechos de los NNA.

La Conferencia tuvo una metodología de trabajo que incluyo la participación de jóvenes en cada panel, como forma de garantizar su escucha y su derecho a ser oídos, así mismo participaron miembros del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, contando con la especial participación de la Sra. Michelle Bachelet, Alta comisionada para los Derechos Humanos, y a quien un grupo de jóvenes pertenecientes a diferentes ONG entregaron un petitorio con demandas específicas que fuera recibido con sumo interés por la Sra Bachelet, comprometiéndose a tratarla en la medida de las concretas posibilidades.

Los temas debatidos en los diferentes talleres fueron:

1. Participación. Este derecho, reconocido a partir de la Convención, fue uno de los pilares de esta reunión que otorgo un amplio espacio para que

58. Andrea Santos Souza es secretaria general de la AIMJF, fiscal en San Pablo, Brasil, tiene una Maestría en Estudios Avanzados en derechos de la niñez – Facultad de Derecho de la Universidad de Friburgo e Instituto Kurt Bösch, Suiza; y una Maestría en Filosofía (Ética) – Pontificia Universidad Católica de Campinas, Brasil

59. El logo de la conferencia; la presidenta Marta Pascual en el momento de su presentación, la tesorera Anne-Catherine Hatt, la presidente de la AIMJF, Marta Pascual, el ex presidente de la AIMJF, Jean Zermatten, y ; la secretaria general Andrea Santos Souza

NNA de diferentes partes del mundo presentaran sus pensamientos y sugerencias a los representantes de los diferentes estados y ONG que asistieron.

• Los derechos del niño son de importancia fundamental y los niños no pueden ejercer esos derechos sin su conocimiento. Se resaltó la vital importancia del conocimiento de los niños/as de sus derechos.

• La escucha de los NNA en los procesos que los involucran es de vital importancia.

• Las decisiones en que los involucren deben tener en cuenta la opinión de los Niños/as y jóvenes, debiendo garantizarse mecanismos prácticos para su aplicación.

2. Acceso a la justicia. Este tema fue debatido tanto en relaciona la justicia Penal como de Protección de derechos, Procesos Familiares y problemas con niños migrantes.

Se trató la problemática de muchos niños/as condenados a cadena perpetua o pena de muerte o cumpliendo largas penas privativas de libertad, colocados en sistemas abusivos o que violentan derechos humanos, como así también los procedimientos burocráticos y rígidos para aquellos niños/as que solicitan asilo fuera de su país como así también la falta de mecanismos amigables en un sistema con formalismos exagerados.

Como aspecto positivo se reconoció que el nuevo Comentario General publicado por el Comité de seguimiento de derechos del niño sobre justicia juvenil establece un marco normativo en los sistemas juveniles de justicia con la implementación de prácticas amigables, donde se incluyen las basadas en la Justicia Restaurativa, centradas en la reparación y resarcimiento de las víctimas que hagan posible un real acceso a la justicia de estos jóvenes.

La Jueza Penal Juvenil Marta Pascual, presidenta de la AIMJF, fue panelista en ésta mesa redonda, donde diserto sobre un sistema de justicia para y con los niños/as presentando experiencias de buenas prácticas sobre la escucha de los Niños/as.

3. Protección del niño – la evolución de éste concepto en los últimos 30 años, desde la implementación de la CDN, fue tópico de discusión en la reunión. Como así también, la utilidad de la CDN a la hora de visibilizar toda la clase de violencias y abusos que enfrentan niños y niñas de todo el mundo.

Algunas cuestiones claves que se plantearon fueron:

• La necesidad de un enfoque integral a la hora de enfrentar la violencia, ya que no podemos asumir la protección de NNA sin oírlos, y ellos no pueden expresarse si no se encuentran en un espacio seguro. Es necesario tratar el temor de que si el niño/a se expresa sobre la violencia vivida, será víctima de nuevos abusos. El acceso a su derecho a la educación y a su desarrollo no será nunca óptimo si se encuentran expuestos a formas de violencia.

• Se puntualizó también la situación de jóvenes incluidos en sistemas de cuidado alternativos y ubicados en entornos que no logran garantizar su protección efectiva. Resaltando la necesidad de invertir en servicios que estén basados en la comunidad, sistemas de apoyo a los progenitores y responsables, y seguimiento de la situación de niños y niñas, para garantizar sus derechos.

• Al tratarse la relación entre los derechos del niño, la familia y el Estado, fue puntualizada la situación de la CDN imponiendo obligaciones explícitas a los Estados de brindar apoyo para que los padres puedan cumplir con los derechos de sus hijos, al tiempo que establece límites a la autoridad parental para evitar su posible abuso o violación de los derechos del niño.

• También se confrontó sobre el uso de la biotecnología y los derechos de los niños y niñas concebidas por sustitución o donantes, en especial el derecho de estos a conocer sus orígenes de genéticos, accediendo a la identidad de sus progenitores biológicos.

• Otra situación abordada fue la de los derechos de los hijos de padres encarcelados, donde el principio del interés superior del niño debe prevalecer en la toma de decisiones cuando uno de los responsables parentales está en el sistema de justicia penal y/o enfrenta encarcelamiento

• Se planteó la necesidad de repensar las normas y creencias sociales, teniendo en cuenta la educación y adecuando los Estados y su funcionamiento a las creencias y los derechos de NNA.

• Fue remarcada la necesidad de recopilación y publicación de datos sobre la situación de niños y niñas alrededor del mundo para estar al tanto de su situación, todo primando el derecho a ser oído de los mismos/as, ya que es la mejor fuente.

4. Cuestiones emergentes - la globalización y los cambios políticos durante las últimas tres décadas han dado espacio a nuevas cuestiones que ahora debemos abordar:

a) Migrantes: la pobreza, el cambio climático y los conflictos políticos han aumentado el número de niños migrantes. Esta población es, por supuesto, más vulnerable a la explotación, la violencia extrema, la separación de las familias, el hambre, el reclutamiento forzoso en la milicia, el tráfico, la detención arbitraria, la negación de la reunificación familiar. Algunos jóvenes migrantes presentaron sus historias y los enormes desafíos que enfrentan. Se discutió cómo mejorar y fortalecer las oportunidades para que se escuchen las voces de éstos niños y niñas, a fin de desarrollar estrategias y servicios que provean de seguridad y sean efectivos. También se señaló la importancia de enfatizar el aspecto positivo de la migración, y su gran contribución a los países receptores.

b) Terrorismo y su impacto en los niños: existe hoy en día una gran cantidad de niños que crecen en situaciones de conflicto y guerra, con todos los daños devastadores y las violaciones de derechos que conlleva dicha situación. Los números varían, pero se estima que alcanza a uno de cada cinco niños/as en el mundo. Un panel específico discutió el riesgo creciente para los niños/as en estos entornos de asedio, reclutamiento y explotación, con los avances tecnológicos emergentes que aumentan el alcance y el potencial de los grupos armados para llegar y reclutar jóvenes. Se concluyó que no existe dicotomía entre seguridad y derechos del niño, siendo necesario un enfoque en la prevención para proporcionar protección a nos NNA, disponer recursos para detener el reclutamiento y además rehabilitar y reintegrar aquellos que hubieran sido captados por el terrorismo.

c) Desarrollos digitales: La internet tiene el mismo aniversario que la CDN y ahora cuatro mil millones de personas están conectadas. Uno de cada tres usuarios es un niño/a. El entorno digital está teniendo un gran impacto en la vida de los jóvenes de todo el mundo y no se trata solo de estar en línea, sino que todos vivimos cada vez más en un mundo digitalizado. Ésta exposición en

el mundo digital plantea una situación distinta en cada uno de los derechos del niño o niña, por ejemplo:

• Participación: éste entorno provee de libertad de expresión y asociación, juego y cultura, educación, salud, acceso a temas para niños con discapacidades y la no discriminación.

• Protección: los riesgos que los niños pueden experimentar usando internet son complejos. Ellos se encuentran expuestos a riesgos en cuanto

- al contenido al que pueden acceder (pornografía, violencia, cultura suicida y odio);

- contacto al que se exponen (acoso, extorsión, reclutamiento extremista); conducta (ciberacoso, hostigamiento, incitación al daño);

- exposición de su privacidad (surgen problemas con el intercambio de datos por parte de los niños, el uso de los padres y el abuso de los datos e imágenes de los niños, la vigilancia en las escuelas y las compañías tecnológicas que recopilan datos).

El desafío es el equilibrio entre el derecho y la protección para no impedir el acceso de los niños y niñas al mundo digital.

Conclusión

En esta síntesis hemos de exponer un resumen de los temas que más interesan a los operadores de la justicia ya que la Conferencia fue sumamente rica y donde se debatieron muchos temas relacionados con los derechos de NNA y su implementación.

Fue la conclusión final que la Convención ha brindado las raíces para establecer los derechos de los NNA pero que aún es largo el camino a recorrer, debiendo además, lidiar con nuevos problemas tales como la tecnología, cambios políticos que se presentan en el mundo y que merecen una especial protección hacia los más vulnerables.

7.4. ORGANIZACIÓN DE VISITA DE ESTUDIOS A LONDRES, INGLATERRA – JUNIO DE 2020

La ex presidente de la AIMJF, Avril Calder, y el editor en jefe de la Crónica, Eduardo Rezende Melo, en conjunto con el Poder Judicial Inglés y Gales, por su equipo de visitas, está organizando una visita de estudios a Londres, en Inglaterra, por cuatro días, a empezar en el día 16 de junio para visitar la Corte de Familia oriental y occidental de Londres, en la Corte Superior y de Apelaciones y en la Corte de Justicia Juvenil.

Se hizo una lista preliminar con manifestación de interés debido al límite de participación a 9 personas. Hubo inscripciones por 20 personas. El proceso de selección se hará en las próximas semanas.

Otros programas de visita serán realizados en el segundo semestre, en lugares a definir.

8. NOTICIAS REGIONALES DE LA AIMJF

8.1. REUNIÓN DE LA SECCIÓN EUROPEA DE LA AIMJF - 4 de Octubre de 2019, Skopje, Macedonia del Norte

Por Aleksandra Deanoska[61]

Presentes: Isa Belle Sornen (Bélgica), Lana PetoKujundzic (Croacia), Joseph Moyersoen (Italia), Margreeth Dam (Países Bajos), Aleksandra Deanoska y OljaRistova (Macedonia del Norte), KatarzynaKosciow-Kowalczyk y Magdalena Arczewska (Polonia), Anne-Catherine Hatt (Suiza).

Tres presentaciones se realizaron por nuestra anfitriona y profesora Macedónica Gordana Lazetic:

- la ley macedónica en justicia para niños/as

- el sistema de justicia juvenil macedonio en practica

- las enmiendas en la ley de justicia para jóvenes.

Quedo en claro la gran grieta entre la teoría y la practica. Hay mucho por ganar en la practica solo con respetar la ley y reglas e invirtiendo en la calidad de educación de los jueces juveniles, fiscales y abogados. Lana sugirió que Macedonia del Norte siguiera el ejemplo de Croacia al crear una asociación de jueces juveniles para fortalecer su influencia en política y gobierno.

También quedo en claro que el juez juvenil tiene un estatus pequeño al lado de otros jueces en este país, y que designar a un juez en este fuero era a veces una forma de degradarlo. Dicha falta de estatus fue reconocida por sendos participantes y fue sugerida como tópico para la reunión del próximo año.

El entrenamiento para jueces juveniles. Todos los participantes llenaron los cuestionarios entregados por la Crónica (y luego de ello nuevamente por Aleksandra y Margreeth). Bélgica es el único país en el que el entrenamiento (básico), con aspectos legales, pedagógicos y psicológicos para jueces juveni-

60. La Corte Superior de Familia en Londres

61. Facultat de derecho « Justinianus Primus », Universidad Saint-Cyrille y Saint-Méthode, Skopje, República de Macedonia del Norte

les es obligatorio. Esto es considerado una buena practica. Otra buena práctica de Bélgica es que su sistema educativo es transparente, así que los abogados y otros participantes del proceso pueden ser informados del curriculum educativo del juez.

Todos los participantes acuerdan que un estándar mínimo debe ser que un entrenamiento multidisciplinario básico debe estar disponible para todo juez juvenil y no debe ser limitado a cierto número de participantes.

Implementación de las guías: los participantes saben que las guías han sido entregadas a oficiales, pero no saben si han sido utilizadas. Croacia e Italia traducido sus versiones así los trabajadores de sus países pueden comprenderlas.

Lenguaje laboral para la sección europea: se decidió que el lenguaje a utilizarse es el inglés para la sección europea, ya que solo un pequeño número de miembros puede comunicarse en francés. Esto requiere una básica comprensión del idioma ingles para los miembros de la sección Europea. En las reuniones siempre hay participantes que comprenden tanto francés como ingles (por ejemplo Isa Belle Sornen y Alice Grunewald) y pueden ayudar a los miembros en necesidad.

Reunión del 2020: la reunión Serra en Varsovia (Polonia) el 2 y 3 de Octubre. Todos están agradecidos que los miembros polacos se ofrecieran a organizar la próxima reunión. Algunos tópicos que son mencionados para el próximo año son las ONG, ¿se puede trabajar juntos? Y de ser así ¿Cómo? Y el estatus del juez juvenil.

8.2. Fortaleciendo alianzas en África – Por una Sección Regional de la AIMJF – Conferencia en la Ciudad del Cabo – Sudáfrica – Sudáfrica – marzo 2020

La organización de la reunión del comité en Sudáfrica representa un doble reto tanto al Consejo Ejecutivo de la AIMJF, como al comité editorial de la Crónica: el establecimiento de una relación más cercana con sus miembros en distintas partes del mundo y los esfuerzos para organizar una estructura más sólida en cada región, capaz de contribuir para las discusiones y actividades de la AIMJF.

Con el apoyo de la Universidad del Cabo Occidental, en especial de la Profesora Julia Sloth-Nielsen, y del despacho de abogados Miller du Toit, la AIMJF participará de la 23ª conferencia anual sobre derecho de familia en la Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 11 al 13 de marzo. En el día 11 habrá una visita de estudios a los juzgados y a centro de detención de adolescentes, como parte de los esfuerzos de la AIMJF para garantizar a los miembros la oportunidad de un conocimiento y experiencia más concreta de los distintos sistemas.

La conferencia ocurrirá en los días 12 al 13, con temas muy variados e importantes: Convención de la Haya, violencia doméstica y secuestro infantil; derechos de LGBTQI, gestación por substitución y reproducción alternativa, derechos de los niños, derecho consuetudinario, reformas procedimentales, derecho matrimonial entre otros.

La AIMJF participará de una sesión sobre justicia juvenil, contará con un espacio para reunión con los miembros de África, quienes son especialmente invitados para construir las bases de una sección regional de la AIMJF.

La reunión del Comité ocurrirá el 13 de marzo, a las 11horas, en el Hotel Presidente.

Para inscripciones, consulte https://www.mdtcinc.co.za/conference/#register

9. AGENDA DE EVENTOS

9.1. ACCESO Y MATRICULA ABIERTA: MASTER EN DERECHO - ESTUDIOS AVANZADOS EN DERECHO INTERNACIONAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA - UNIVERSIDAD DE LEIDEN

Universiteit Leiden
The Netherlands

El Departamento de Derecho de Infancia de la Universidad de Leiden esta recibiendo aplicaciones para su Master en Derecho: Estudios avanzados en Derecho Internacional de la Infancia y Adolescencia para el curso 2020-2021.

Este master oficial ofrece una preparación especializada e internacional y tiene como objetivo educar y preparar a sus alumnos a responder de manera eficaz a los cambios legales relacionados a la infancia y adolescencia a nivel internacional, regional y nacional. Este master universitario esta dirigido a licenciados y graduados en derecho de todas las partes del mundo. Graduados y profesionales de otras areas están bienvenido siempre que cuenten con estudios y/o experiencia en el ámbito legal. Para más información visita nuestra pagina de Facebook y accede a nuestro newsletter aquí.

9.2. APLICACIONES ABIERTAS: ESCUELA DE VERANO SOBRE FRONTERAS DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS - UNIVERSIDAD DE LEIDEN

Universiteit Leiden
The Netherlands

Se aceptan solicitudes para la Escuela de Verano 2020 sobre Fronteras de los Derechos de los Niños, que tendrá lugar del 29 de junio al 3 de julio en Leiden y La Haya. Esta escuela de verano ofrece un curso integral sobre los derechos de los niños, el cual analiza de cerca los pro-

blemas contemporáneos de los derechos de los niños desde una perspectiva legal, acompañado de reflexiones de otras disciplinas académicas, sistemas legales, percepciones y realidades locales. Esta escuela de verano está dirigida a estudiantes de derecho (que hayan completado al menos tres años de su título), jóvenes graduados y profesionales con experiencia en derecho. Los solicitantes con experiencia en otras disciplinas que sean relevantes para el tema de la escuela de verano también serán considerados. La tarifa de matrícula para la Escuela de Verano es de € 950. Ofrecemos una tarifa especial por reserva anticipada de € 800 a los participantes que se inscriban antes del 1 de marzo de 2020.

9.3. El acceso de niños, niñas y adolescentes a la justicia – Universidad de Ottawa, Canada, 21-22 de mayo 2020

El acceso a la justicia es un tema de preocupación en muchos países.
Ya se pasaron cuatro décadas desde que Cappelletti y Garth (1978) distinguieron tres olas de acceso a la justicia y discusiones se siguieron desde entonces para determinar cómo hacer la justicia más cercana de las personas que la necesitan. Cuestiones relativas a la justicia son frecuentemente tratadas de un punto de vista de los costos de los procedimientos judiciales, de la complejidad y de la lentitud de los procedimientos, y de la falta de información disponible. Justicia también es de interés de los niños, niñas y adolescentes, que están involucrados en procedimientos judiciales de distintas maneras.
Todavía, los esfuerzos para mejorar el acceso de las personas a la justicia generalmente ignoran a los niños y a sus problemas específicos. Los problemas están normalmente relacionados a la falta de adaptación del sistema de justicia y de los procedimientos a los niños. Por cerca de diez años, esfuerzos fueron hechos en nivel internacional, incluyendo las Directrices del Consejo de Europa sobre la Justicia Amigable a los Niños (2010), el informe del Alto Comisario de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Acceso a la Justicia por niños (2013), o la Observación General nº 12 del Comité de los Derechos de los Niños sobre el Derecho del Niño a ser Oído (2009). Si hay actualmente nuevas múltiples fuentes de recomendaciones sobre cómo adaptar la justicia a los niños, los esfuerzos actuales de investigadores y practicantes permanecen limitados y más cuestiones necesitan ser planteadas.
Esta conferencia, organizada por el Laboratorio Interdisciplinario de Investigación sobre los Derechos de los Niños (IRLRC/LRIDE) y organizaciones colaboradoras, apoya estos esfuerzos en favor del acceso de los niños a la justicia, como la llamada por acción para acceder al Objetivo de Desarrollo Sustentable nº 16 para niños. Esta conferencia busca definir el acceso de niños a la justicia de una manera global, tratando los retos actuales, planteando cuestiones que todavía no lo fueron y trayendo nuevas respuestas a los problemas existentes. Se hizo una llamada por artículos que serán presentados oralmente y que contribuirán para la ampliación de nuestro entendimiento del acceso a la justicia en lo que toca a los niños.
Para informaciones:
Line C. Bissonnette, M.A.Manager, International and Community Relations Faculty of Law, Civil Law Section University of Ottawa
Fauteux Hall 57 Louis-Pasteur Private, Room 209 Ottawa, Ontario K1N 6N5 Telephone: 613-562-5800 extension 1736 Fax: 613-562-5121

E-mail: lbisson@uOttawa.ca

9.4. ESPECIALIZACIÓN Y CURSO INTERNACIONAL INFANCIAS Y JUVENTUDES – CLACSO

MODALIDAD: VIRTUAL

Especialización: 52 créditos, 480 horas / cátedra Curso internacional: 12 créditos, 120 horas / cátedra

Duración: abril de 2020 a marzo de 2021
La acreditación y certificación de la Especialización y del Curso Internacional será realizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Red de Posgrados en Infancia y Juventud (Red INJU).

Coordinación General: Sara Victoria Alvarado (Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE, Universidad de Manizales, Colombia)
Coordinación Académica: Melina Vázquez (Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Argentina), María Isabel Domínguez (Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, Cuba), María Camila Ospina (Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud del CINDE, Universidad de Manizales, Colombia),

OBJETIVOS
El propósito de la especialización y el Curso Internacional en infancias y juventudes consiste en formar habilidades y conocimientos teóricos y metodológicos para una aproximación crítica al abordaje de las infancias y las juventudes con miras a una incidencia concreta en las políticas públicas y en el trabajo con estos grupos sociales.

Este espacio de formación está concebido para aproximar a los y las estudiantes al conocimiento y sistematización de saberes en torno al estado de la situación de las infancias y las juventudes, las experiencias de trabajo, las organizaciones sociales y las políticas públicas en Latinoamérica y el Caribe; avanzar en la consolidación de redes internacionales de investigadores, actores sociales, referentes de política pública y representantes de organizaciones sociales en torno a las infancias y las juventudes de Latinoamérica y el Caribe, y favorecer la circulación de conocimiento teórico, el intercambio de experiencias y de producciones estéticas y piezas comunicativas en torno y desde las infancias y las juventudes del continente.

DESTINATARIOS/AS

La especialización y el Curso Internacional están dirigidos a estudiantes de grado y posgrado; docentes de todos los niveles; activistas y militantes de organizaciones sindicales, movimientos sociales y partidos políticos; funcionarias

y funcionarios públicos; trabajadoras y trabajadores de prensa; miembros y gestores de organizaciones no gubernamentales y profesionales interesados en temas de las Infancias y las Juventudes en la región, con perspectiva mundial

Para inscripciones:
https://www.clacso.org/formacion/especializaciones-y-cursos-internacionales/

10. RUBRICA DE LA TESORERA

Llamada de pago a las suscripciones 2020

La Asamblea General en París decidió en mayo de 2018 de ajustar las cuotas de membresía de los miembros individuales para GBP 45, Euros 50; CHF 60.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para recordarles las posibles formas de pago:

1. pueden ir a la pagina de internet AIMJF hacer click 'membership' y 'subscribe' y pagar usando PayPal. Se aceptan todas las monedas. PayPal hace la conversión a GBP;

2. por transferencia bancaria a una de las siguientes cuentas:

GBP: to Barclays Bank, Sortcode 204673, SWIFTBIC BRCGB22, IBAN GB15 BARC 2046

7313 8397 45, Account Nr. 13839745
CHF: to St.Galler Kantonalbank, SWIFTBIC
KBSGCH22, BC 781, IBAN CH75 0078 1619
4639 4200 0, Account Nr. 6194.6394.2000
Euro: to St. Galler Kantonalbank, SWIFTBIC
KBSGCH22, BC 781, IBAN CH48 0078 1619
4639 4200 1, Account Nr. 6194.6394.2001

3. o por medio de cheque pagaderos a "International Association of Youth and Family Judges and Magistrates".

Si necesitan asistencia, no duden en enviarme un mensaje al siguiente correo electrónico: treasurer@aimjf.org.

Por supuesto que siempre es posible pagar en efectivo si se encuentran con algún miembro del Comité Ejecutivo.

Sin sus suscripciones no sería posible producir esta publicación.
Muchas gracias por su participación y colaboración!

Anne-Catherine Hatt, Tresorera AIMJF

11. RUBRICA DE LA CONTACTOS

De	Tema	link
OMS (Organisación mundial de la salud	Informe de la OMS sobre discapacitacidades (en inglés)	http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html
Prison fellowship international Centre for Justice and Reconciliation (restorative justice on line)	Análisis del Ministério de la Justicia de Nueva Zelancia sobre reincidencia en casos de justicia restaurativa: 2008 et 2009 (en anglais)	http://www.restorativejustice.org/10fulltext/ministryofjusticenewzealand2011/view
Consejo de Naciones Unidas sobre derechos humanos	Informe del representante especial del secretario general para niños, niñas y adolescentes y conflictos armados	http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/443/70/PDF/N1144370.pdf?OpenElement
	Ninõs y justicia durante y despúes de conflictos armados	http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_1957.pdf
	Resolución sobre orientación sexual e identidad de género	http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G11/141/94/PDF/G1114194.pdf?OpenElemen http://daccess-dds-
	Protocolo facultativo a la CDC sobre procedimiento de comunicación	ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/148/40/PDF/G1114840.pdf?OpenElement t
	Programa preliminar para la 19ª sessión del Consejo de Derechos humanos	http://www.crin.org/docs/Revised%20PROGRAMME%20OF%20WORK%2012-12-2011.pdf
Human Rights for Development	Un curso internacional sobre derechos humanos en desarrollo con enfasis especial en derechos de los niños 30 Julio -24 Agosto 2012 Antuérpia, Belgica	www.hr4dev.be
Centro para estudios de la infancia y juventud, Universidade de Sheffield 16 Mayo 2012	Exploring Childhood Studies in the Global South – Africa in Focus' (Explorando los estudios sobre infancia en el sur global – Africa en foco)	http://www.cscy.group.shef.ac.uk/events/index.htm
The Child Rights Information Network (CRIN)	La página web de CRIN ofrece recursos sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes en 4 lenguas (español, árabe, francés e inglés)	Email: info@crin.org www.crin.org
Interagency Panel on Juvenile Justice (IPJJ)	Newsletter	newsletter@juvenilejusticepanel.org
Observatório internacional de la justicia juvenil (OIJJ)	Página web	http://www.ijjo.org

12.CRÓNICA – LA VOZ DE LA AIMJF. EL COMITÉ EDITORIAL

La Crónica es la voz de la Asociación. Es una revista publicada dos veces al año en los tres idiomas oficiales de la Asociación—inglés, francés y español. El propósito del Comité Editorial ha sido el de convertir la Crónica en un foro de debate para aquellos interesados en la administración de la protección del niño, en los campos del derecho civil concerniente a los niños y los adolescentes

y en la justicia juvenil, alrededor del mundo.

Como expresión de una Asociación con representantes en más de sesenta países, la Crónica es un importante retrato de la diversidad de prácticas en el mundo para garantizar a los derechos de los niños, como también para perfeccionar la Justicia de la Niñez y de la Familia, y la Juvenil, con un horizonte de construcción de reflexiones teóricas que contribuyan para una más grande profundización en este campo del derecho.

Con la participación de los miembros, en una gran red de colaborares, extendida a sus contactos con universidades, investigadores independientes y organizaciones involucradas con la garantía de derechos de los niños, se está creando una red de contribuciones del mundo entero que nos provee, de manera regular, con artículos, buenas prácticas, revisiones bibliográficas, comentarios sobre nuevas leyes y jurisprudencia.

Además de artículos sobre temas de interés general, cada edición dedica un espacio a un tema para estudio comparativo, sugerido por el Comité Editorial, los Consejos Consultivos Regionales o por cualquier miembro.

Por lo tanto, las contribuciones de todos los lectores son bienvenidas. Los artículos para publicación deben ser enviados en inglés, francés o español. La traducción a todos los tres idiomas está a cargo del Comité Editorial, pero nos ayudaría muchísimo poder recibir los artículos desde luego traducidos en estas lenguas.

Los artículos, preferentemente, deberán ser de 1500-2000 palabras de largo. Los comentarios sobre los artículos ya publicados son bienvenidos. Los artículos y comentarios pueden ser enviados directamente al Jefe de Redacción (chronicle@aimjf.org) o, si prefieren, a cualquier de los miembros del Comité, representando cada región del globo, que les presento y a quien agradecemos, siempre, la fundamental colaboración.

Aleksandra Deanoska – Macedonia
(aleksandra_deanoska@yahoo.com)

Andrew Becroft – Nueva Zelandia
(a.becroft@occ.org.nz)

Gabriela Ureta – Chile
(gureta@vtr.net)

Jean Trépanier – Canada
(jean.trepanier.2@umontreal.ca)

Julia Sloth-Nielsen – Sud África
(jsloth-nielsen@uwc.ac.za)

Leonard Edwards – Estados Unidos
(judgeleonardedwards@gmail.com)

Madan Lokur – India (
madanlokur@gmail.com)

Magdalena Arczewska – Polónia
(Magdalena.arczewska@uw.edu.pl)

Mary Beloff – Argentina
(mabeloff@retina.ar)

Nadira Patherya – India
(patherya@gmail.com)

Taghreed Jaber – Jordania
(tjaber@penalreform.org)

Viviane Primeau – Canada
(viviane.primeau@judex.qc.ca)

SOMMAIRE

1. ÉDITORIAL - Eduardo Rezende Melo – Rédacteur en chef

2. ÉTUDE APPROFONDIE SUR UN SUJET SPÉCIFIQUE – BONNES PRATIQUES EN JUSTICE JUVÉNILE ET RESTAURATIVE

2. APPROCHES THÉORIQUES

2.1.1. Procédure régulière et justice pour les adolescents - progrès réalisés et travaux restants au Mexique. Par Alicia Azzolini

2.1.2. Un mode de règlement alternatif en matière de justice criminelle pour les adolescents : la conférence de facilitation. Par Nancy Moreau

2.1.3. Quand l'adolescent répare son geste en s'impliquant dans la communauté grâce à l'approche équitable. Par Marie-Eve Lamoureux et Mathilde Martin

2.1.4. La pratique socio-éducative avec les adolescents et les jeunes à Jardim ngela / São Paulo, Brésil. Par Alcimar Neves Antônio, Claudineia Rodrigues Marques Silva, Gabriela Benedicto de Morais, Joel Costa Rodrigues, Sandro Alves Dias, Suzana Gomes dos Santos

2.1.5. La mise en œuvre de l'approche restaurative dans la pratique judiciaire macédonienne relative aux procédures pénales à l'encontre des enfants. Par Olja Ristova

2.1.6. La justice restaurative pour les enfants en Afrique du Sud, Namibie et Zimbabwe. Par Julia Sloth-Nielsen

2.1.7. L'Observation Générale n° 24 du Comité des droits de l'enfant, datant du 19 septembre 2019 et remplaçant l'Observation Générale n° 10 de 2007. Par Marta Pascual

2.1.8. Étude mondiale sur les enfants privés de liberté

2.2. COMMENTAIRE DE JURISPRUDENCE : pourquoi la décision du Tribunal Suprême Fédéral (STF) qui empêche la surpopulation dans les centres éducatifs fermes pour mineurs crée-t-elle la polémique au Brésil ? Par Brigitte Remor De Souza May

3. SUJETS D´INTERET GENERAL

3.1. APPROCHES THÉORIQUES

3.1.1. Le rôle des preuves médico-légales dans les procédures liées à la protection de l'enfance. Par Peter Johnstone (Australie)

3.1.2. Quelques considérations sur les liens de fratrie dans les affaires de garde d'enfants. Par Ken Lewis (États-Unis)

3.1.3. Un espace d'échange et de réflexion : le Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire sur les droits de l'enfant. Par Mona Paré (Canada)

4. INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES ET METHODOLOGIQUES (LES BONNES PRATIQUES), INCLUANT CELLES CONCERNANT LA FORMATION

4.1. L'importance de la formation judiciaire sur le droit de l'union européenne (UE) en tant que solution non législative pour la protection des droits des enfants. Par Wojciech Postulski

4.2. Enquête sur la formation specialisée en droit des enfants – résultats préliminaires. Par Eduardo Rezende Melo

5. L´EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE ET SON IMPACT POUR LA GARANTIE DES DROITS DES ENFANTS PAR LES JUGES ET MAGISTRATS

5.1. Renforcer le pouvoir judiciaire et avancer ensemble : le rôle des associations judiciaires aujourd'hui. Par John Lowndes (Australie)

5.2. Les activités de l'association des juges aux affaires familiales de Pologne. Par Magdalena Arczewska

6. NOUVELLES PUBLICATIONS

6.1. Droits fondamentaux et intérêt supérieur de l'enfant dans les familles transnationales

6.2. Pluralité et diversité des relations familiales en Europe

6.3. Les droits constitutionnels des enfants dans les pays nordiques

6.4. Les droits et les obligations des enfants dans le droit canonique

6.5. La violence faite aux enfants dans le système de justice pénale, perspectives globales sur la prévention

7. LES ACTIVITÉS DE L´AIMJF– DES NOUVELLES DU BUREAU.

7.1. Mexique - congrès du Réseau National de justice pénale pour les adolescents. Septembre 2019

7.2. Visite d'étude à São Paulo, Brésil, du 4 au 6 novembre 2019

7.3. Célébration du 30ème anniversaire de la convention à Genève, Suisse. Par Andrea Santos Souza

7.4. Visite d´études à Londres, Angleterre – juin 2020

8. LE REGARD REGIONAL SUR LA JUSTICE ET L´ENFANCE- DES NOUVELLES DES SECTIONS REGIONALES OU DES CONSEILS CONSULTATIFIS RÉGIONAUX

8.1. Réunion de la section européenne de l'Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AIMJF). 4 octobre 2019 – Skopje (République de Macédoine du Nord). Par Aleksandra Deanoska

8.2. Renforcement des alliances en Afrique – pour une section régionale de l´AIMJF – Conférence au Cap – Afrique du Sud – mars 2020

9. AGENDA DES ÉVÉNEMENTS A VENIR

9.1. Master (LLM.) spécialisé en droits de l'enfant - Université de Leiden

9.2. Les frontières des droits de l'enfant cours d'été – Université de Leiden

9.3. Accès des enfants à la justice Université d'Ottawa, 21-22 mai 2020

10. RUBRIQUE DE LA TRÉSORIÈRE

11. LA RUBRIQUE DES CONTACTS

12. LA CHRONIQUE, LA VOIX DE L´AIMJF, ET SON COMITÉ DE RÉDACTION

1. ÉDITORIAL

Eduardo Rezende Melo[1]

Cette édition de La Chronique paraît un mois plus tard que d'habitude ; il s'agit d'une stratégie délibérée pour garantir une plus grande participation des membres de l'Association. En effet, nous avons pris conscience que la publication de La Chronique en juillet, précédée par un appel à contributions des membres en plein été dans les pays du Nord, limitait la participation de nombreux membres. D'un autre côté, la diffusion de La Chronique en janvier coïncidait avec les vacances d'été dans l'hémisphère Sud. Nous avons donc décidé de changer les dates limites pour l'envoi des articles : jusque mi-mai pour la publication en août et jusque fin octobre pour celle de février. Nous espérons que ce changement facilitera la participation de toutes et tous.

Le thème d'approfondissement de cette édition porte sur les bonnes pratiques dans la justice juvénile et la justice restaurative.

Trois groupes d'articles se détachent dans cette édition. Le premier groupe s'intéresse avant tout à la justice juvénile et aux stratégies interinstitutionnelles.

La professeure Alicia Azzolini, du Mexique, analyse les effets de la nouvelle législation dans son pays, et notamment l'importante réduction du nombre d'adolescents privés de liberté suite à l'adoption du système accusatoire oral et de la division des adolescents en tranches d'âge, pour lesquelles des mesures différenciées s'appliquent. Elle analyse également les travaux d'amélioration qui restent à accomplir au Mexique.

La juge Nancy Moreau, du Canada, nous offre également un article intéressant qui met en lumière la pratique des conférences de facilitation en tant que stratégie effective pour diminuer la durée des procédures judiciaires et offrir des solutions, avant même la négociation de plaidoyer (plea bargaining).

Marie-Eve Lamoureux et Mathilde Martin présentent le travail de l'organisation Équijustice, également originaire du Canada, consacrée à la mise en œuvre des mesures de réparation envers la communauté et des travaux bénévoles réalisés par des adolescents. Les auteures exposent dans leur article les stratégies et les méthodologies qui donnent les résultats escomptés.

L'équipe chargée de l'application des mesures socioéducatives à Jardín Angela, un quartier situé à la périphérie de la ville de São Paulo, au Brésil, expose les défis liés au travail avec les adolescents faisant l'objet de mesures judiciaires, les stratégies méthodologiques à mettre en place avec ces adolescents, les relations que ces derniers entretiennent avec la communauté dans laquelle ils s'insèrent et la nécessité de créer d'autres perspectives pour eux, avec le soutien continu de professionnels agissant dans la communauté.

Le deuxième groupe d'articles porte sur la justice restaurative.

La juge Olja Ristova, de la République de Macédoine du Nord, met en lumière les défis liés à l'application de l'approche restaurative dans la pratique judiciaire de son pays, bien qu'elle soit incorporée dans la législation nationale.

La professeure Julia Sloth-Nielsen, d'Afrique du Sud, analyse la retombée de l'enthousiasme suscitée par la justice restaurative dans son pays, alors que, à l'inverse, le recours à ce type de justice est élevé dans le pays voisin, le Zimbabwe, et est, de fait, à l'étude en Namibie. Enfin, la présidente de l'AIMJF et juge en Argentine, Marta Pascual, analyse l'Observation générale n° 24 du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, qui remplace l'Observation générale n° 10. Nous publions également un résumé de l'Étude mondiale sur les enfants privés de liberté.

Dans le domaine de la jurisprudence, la juge Brigitte May commente une décision du Tribunal suprême fédéral du Brésil – et la réaction sociale et juridique – faisant suite à un recours en habeas corpus collectif contre la surpopulation des unités de privation de liberté pour adolescents dans le pays.

Dans la section consacrée aux thèmes d'intérêt général, nous disposons de deux articles intéressants sur les preuves d'expert dans le champ de la protection de l'enfance.

Le juge Peter Johnstone, d'Australie, discute du syndrome du bébé secoué et des critères d'évaluation de la preuve par les juges. Le professeur Ken Lewis, des États-Unis, aborde les paramètres juridiques et les critères d'experts qui entrent en jeu lors la séparation de frères et sœurs dans les processus familiaux.
De plus, la professeure Mona Paré, du Canada, présente les activités du Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant, qui organisera en mai prochain un colloque à Ottawa (voir l'agenda) sur l'accès des enfants à la justice.

Les actions visant à l'amélioration de la justice revêtent un intérêt particulier pour notre association. La Commission européenne met en lumière la discussion importante que l'AIMJF a engagée lors de son Congrès en 2018 sur la nécessité d'améliorer l'application effective des lois, et dès lors la nécessité, pour les professionnels, de connaître, de comprendre et de respecter les droits de l'enfant. Wojciech Postulski, chargé d'organiser cette tâche formative, présente les contenus, les procédés et les méthodes utilisés pour améliorer le travail des juges et des procureurs en Europe, en particulier en relation avec les droits des enfants.

Comme vous le savez, nous avons débuté une enquête internationale sur la formation particulière que suivent les magistrats qui agissent en tant que juges spécialisés. Nous continuons de recueillir des données – et nous vous invitons à nous remettre celles qui concernent vos pays. Cependant, nous sommes déjà en mesure de vous présenter quelques résultats partiaux dans cette édition.
Cette édition de La Chronique apporte en outre une autre nouveauté. Désormais, chaque édition présentera les actions spécifiques de membres cruciaux de l'AIMJF, à savoir les associations nationales. Ce sont elles qui, dans leur pays respectif, travaillent à l'amélioration de la justice, en apportant au débat international des thèmes locaux et de nouvelles perspectives.

Nous amorçons donc cette nouvelle

1. Eduardo Rezende Melo est le rédacteur en chef de La Chronique. Juge exerçant au Brésil, il possède un doctorat en droits de l'homme (Université de São Paulo) et coordonne la formation des magistrats dans le domaine des droits de l'enfant et de l'adolescent à l'École de la magistrature de São Paulo.

étape avec une discussion sur l'importance des associations de magistrats, que nous apporte l'ex-président de l'Association des magistrats de la Commonwealth, John Lowndes. Dorénavant donc, dans chaque édition de la Chronique, une association nationale sera invitée à présenter les activités qu'elle mène pour améliorer le système de justice. La Pologne, qui a proposé aux Nations Unies l'organisation d'une Conférence, aura l'honneur d'inaugurer cette espace qui, nous l'espérons, sera un moyen de rapprocher encore davantage l'AIMJF de ses membres, en créant un réseau d'échanges plus solide.

Notre section consacrée aux nouveautés bibliographiques continue de mettre en avant des ouvrages des maisons éditoriales Brill et Insentia, et en particulier un livre écrit par Cédric Foussard, de l'organisation Terre des Hommes, partenaire de l'AIMJF, et Wendy O'Brien, sur la violence contre les enfants dans le système de justice pénale. Nous recommandons vivement la lecture des ouvrages présentés.

Comme toujours, nous sommes ouverts à d'autres collaborations avec des maisons d'édition pour la diffusion d'ouvrages liés aux champs de connaissances qui nous intéressent. Nous invitons les membres à nous communiquer leurs ouvrages pour que nous les publions dans La Chronique.

Le Comité exécutif de l'AIMJF présente les activités réalisées ce semestre, en vue de partager les résultats atteints avec les membres et stimuler la réflection sur les actions à venir.

Parmis ces activités, soulignons : la participation de notre présidente, Marta Pascual, à un congrès au Mexique, en vue de préparer des évènements internationaux futurs et d'aider au développement de mouvements associatifs nationaux ; l'organisation de programmes de visite dans divers pays, telle que la visite organisée à São Paulo, au Brésil, en novembre, et les visites prévues en mars en Afrique du Sud et en juin à Londres ; la discussion internationale sur le rôle de la justice dans la garantie des droits des enfants, organisée à l'occasion des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant, à Genève, en Suisse, dont nous disposons un résumé de la secrétaire générale de l'AIMJF, Andrea Santos Souza.
À l'échelle régionale, la section européenne présente un résumé de sa rencontre en Macédoine du Nord sur la formation des magistrats aux droits des enfants et la mobilisation pour l'organisation d'une conférence en Afrique du Sud en vue d'établir une section régionale de l'AIMJF. La prochaine réunion du Comité général de l'AIMJF aura lieu au Cap, en Afrique du Sud, afin de garantir la proximité avec les membres de l'Association issus d'horizons divers.

Dans notre agenda des événements à venir, nous souhaitons attirer votre attention sur : deux activités en lien avec l'Université de Leiden, aux Pays-Bas, à savoir l'ouverture des candidatures au master de droit spécialisé en droit international des droits de l'enfant et l'Université d'été 2020 ; une conférence au Canada sur l'accès à la justice des enfants ; et, dans la version en espagnol, un cours de spécialisation et un cours dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse organisés par le Conseil latino-américain des sciences sociales (CLACSO) – ces deux cours sont accessibles en ligne.

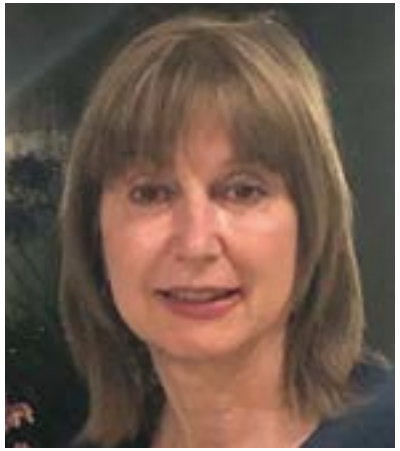
Nous appelons de nos vœux la participation des membres à La Chronique, afin de faire de notre Association et de cette parution un lieu propice aux débats, à l'apprentissage, à l'échange de connaissances et aux rencontres entres professionnels engagés dans la défense des droits des enfants.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente lecture et vous transmets mes salutations les plus cordiales.

2. APPROCHES THÉORIQUES

2.1.1. PROCEDURE REGULIERE ET JUSTICE POUR LES ADOLESCENTS PROGRES REALISES ET TRAVAUX RESTANTS AU MEXIQUE

Par Alicia Azzolini



I. Progrès réalisés

La réforme de la Constitution politique des États-Unis mexicains (CPEUM) de 2005 a modifié le modèle de justice pour les adolescents existant dans le pays en l'adaptant aux contenus de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE). Le passage d'un modèle tutélaire à un modèle de protection intégrale s'est opéré de façon inégale dans les diverses entités fédérées du pays, mais l'entrée en vigueur d'une loi nationale a permis la consolidation du système dans tout le pays de manière plus homogène.

Les adolescents : des êtres humains titulaires de droits

La CDE a marqué un tournant décisif dans le domaine des droits de l'enfant. La CPEUM et la loi nationale relative au système intégral de justice pénale pour les adolescents (LNSIJPA), qui est entrée en vigueur en 2016, ont un adopté un nouveau paradigme qui modifie profondément la façon et le moyen d'aborder la problématique des personnes mineures en conflit avec la loi pénale. Les enfants – soit les personnes mineures de moins de 18 ans – cessent d'être des objets de protection de l'État pour devenir des sujets de droit. La fiction qui entoure la non-responsabilité pénale propre à la doctrine de la situation irrégulière est mise de côté en vue de construire un modèle dans lequel les adolescents sont responsables de leurs actes – bien que de façon différenciée – et en répondent de façon moins drastique que les adultes.

Réduction du nombre d'enfants privés de liberté

Le succès le plus important du nouveau modèle tient dans la réduction signification du nombre d'adolescents privés de liberté. En 2005, avant la réforme constitutionnelle, environ 37 000 mineurs étaient enfermés ; en 2013, le nombre d'adolescents en détention tournait autour de 5000, tandis que 7000 mineurs purgeaient différentes peines en liberté[3]. La conception du modèle de protection intégrale pour les enfants et les adolescents privilégie les droits, et en particulier la liberté, l'un des droits les plus importants pour leur développement. La mise en œuvre de règlements alternatifs des conflits et de mesures non privatives de liberté a été déterminante pour veiller à ce que la majorité

2. Professeure chercheuse à l'Université autonome métropolitaine (UAM) Azcapotzalco, professeure à l'Institut national des sciences pénales (INACIPE) et membre titulaire de l'Académie mexicaine des sciences pénales.

3. Azaola, Elena, Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México (Analyse des adolescent(e)s qui commettent des délits graves au Mexique, non traduit), Mexique, Unicef, 2015, p.13. Voir également Institut de justice procédurale pénale, Ac, Informe sobre la justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal en México (Rapport sur la justice pour les adolescents en conflit avec la loi pénale au Mexique, non traduit) ; Situation actuelle après les réformes constitutionnelles de 2005, 2008 et 2011, Mexique, 2013, p. 41–43. Cité dans Azzolini Bincaz, Alicia Beatriz, Los derechos de las niñas, niños y adolescentes (Les droits des enfants et des adolescent(e)s, non traduit), Programme universitaire des droits de l'homme, UNAM ; Mexique, Porrúa, 2017.

des adolescents en conflit avec la loi ne soit pas mis à l'écart de leur vie quotidienne ; de cette manière, la probabilité qu'ils se retrouvent piégés dans une voie de délinquance est réduite.

Conception de la procédure accusatoire et orale

La LNSIJPA conçoit un modèle procédural accusatoire et contradictoire dans lequel les principes de la procédure régulière sont reconnus. La loi mentionne explicitement, dans son article 22, que le « Système sera fondé sur un processus accusatoire et oral, dans le respect des principes de publicité, de contradiction, de concentration, de continuité et d'intermédiation, en tenant compte des adaptations et exceptions propres au système spécialisé. »

Il est évident que tous les principes et les droits du système pénal pour adultes sont garantis aux adolescents, tels que la présomption d'innocence, tout comme ceux qui sont propres aux adolescents en leur qualité de personnes en développement, comme l'autonomie progressive et l'intérêt supérieur, entre autres.

L'application supplétive, prévue dans l'article 10, du Code national de procédure pénale, de la loi relative aux mécanismes alternatifs, de la loi nationale d'exécution pénale et de la loi générale relative aux victimes, confirme l'oralité et le caractère contradictoire du système.

Durée des sanctions

La LNSIJPA a unifié les sanctions – mesures de sanction – applicables aux adolescents responsables de la commission d'un fait délictueux.
La loi, tenant compte du principe d'autonomie progressive, distingue trois tranches d'âge : de 12 ans révolus à moins de 14 ans ; de 14 ans révolus à moins de 16 ans et de 16 ans révolus à moins de 18 ans. La mesure de détention peut s'appliquer aux deux derniers groupes. Les adolescents qui ont entre 14 ans révolus et moins de 16 ans peuvent purger jusqu'à trois années de détention tandis que ceux qui ont entre 16 et moins de 18 ans peuvent être sanctionnés de peines d'emprisonnement d'une durée maximale de cinq ans. L'âge au moment de la commission du délit est pris en compte. La loi n'a pas seulement établi des sanctions variables selon l'âge qui sont uniformes dans tout le pays, elle a aussi annulé les mesures disproportionnées que prévoyaient certaines lois (jusqu'à 20 ans de privation de liberté).

Exécution des peines

Une avancée de la LNSIJPA est d'avoir réglementé en détail l'étape de l'exécution des peines. La loi établit les compétences du juge d'exécution des peines et de l'Autorité administrative chargée de l'exécution des peines. Elle prévoit également les procédures à suivre devant différentes instances.

Il est intéressant de noter que la justice restaurative est incluse dans l'étape de l'exécution, l'objectif étant de parvenir à la réinsertion de l'adolescent dans la société et sa famille et de répondre aux attentes de la victime.

II. Travaux restants

Beaucoup reste à faire dans le système de justice juvénile mexicain. Certains problèmes pourraient être solutionnés par des modifications législatives. Toutefois, la majorité des améliorations à apporter est liée à la mise en œuvre des normes, aux pratiques institutionnelles et aux praticiens du système.

Application des principes

La LNSIJPA consacre les principes directeurs du système. Ceux qui interviennent dans le système de justice pour les adolescents n'appliquent pas toujours pleinement les principes qui le régissent. Les règles découlant de la loi l'emportent sur les lignes directrices qui orientent le système. Les praticiens du système sont en majorité des personnes formées à l'ancien modèle procédural rigide et formel et à une conception légaliste. Les agents du Ministère public continuent de requérir la détention provisoire à titre de mesure préventive dans presque toutes les affaires de délit où cela est possible, sans analyser la situation concrète et sans tenir compte du principe selon lequel la privation de liberté doit être exceptionnelle et la plus courte possible. Tout au long de la procédure, l'adolescent est obligé de se rendre au tribunal parfois sans que cela soit nécessaire et sans tenir compte du fait qu'il devra dès lors manquer l'école ou le travail.

Il en est de même dans le domaine du droit substantiel. Le principe d'autonomie progressive, selon lequel les catégories de délit doivent être appliquées et interprétées conformément au développement personnel de l'adolescent, et non selon les paramètres du système pénal pour adultes, n'a pas été compris. La même chose se produit avec les délits d'omission, pour lesquels il n'est pas possible d'exiger des personnes en développement qu'elles prévoient les conséquences possibles ou agissent pour protéger des biens de la même façon que cela est exigé des adultes. Chaque cas doit être analysé de façon individuelle en tenant compte des principes d'autonomie progressive et de présomption d'innocence.

De la même façon que la procédure pénale pour les adolescents possède des caractéristiques propres qui la distinguent de celle des adultes, le droit pénal substantiel en matière d'adolescents doit également s'adapter aux particularités des sujets qui sont la raison d'être du système, à savoir les adolescents.

La spécialisation de toutes les parties n'est pas requise

La LNSIJPA établit que l'ensemble des autorités du système devront être formées, qualifiées et spécialisées en matière de justice pour adolescents dans le domaine de leurs attributions. Elle prévoit que les institutions ou organes qui interviennent dans le fonctionnement du système devront fournir à leurs agents des formations et mises à niveau spécifiques, en fonction de leur degré d'intervention dans les différentes phases ou étapes du système. La loi prévoit que, dès le début de la procédure, toutes les activités et enquêtes seront menées par des organes spécialisés dans le système de justice pour les adolescents. Elle se limite aux agents impliqués dans le système sans faire référence aux avocats privés qui pourraient intervenir dans le processus en tant que défenseurs de l'adolescent inculpé ou en tant que conseillers juridiques de la victime.

La Cour suprême de justice de la nation (SCJN) est allée un peu plus loin que les critères internationaux en se prononçant en faveur que tous ceux qui interviennent dans l'administration et l'application de la justice pour adolescents soient suffisamment formés en la matière. En conséquence, les tribunaux pour adolescents exigent que les défenseurs particuliers attestent d'une formation appropriée en la matière. Toutefois, cette exigence ne s'étend pas aux conseillers juridiques de la victime. Il est courant que ces derniers ne connaissent pas les finalités du système et encouragent un règlement vindicatif du litige orienté vers la réparation du dommage et la pénalisation pour le simple fait de pénaliser. Le litige se rapproche dès lors

4. SYSTÈME INTÉGRAL DE JUSTICE POUR ADOLESCENTS. OBLIGATION DE SPÉCIALISATION DE CERTAINS SUJETS. Registre : 168768.

5. Registre : 168773, Thèse : P./J. 63/2008.

6. SYSTÈME INTÉGRAL DE JUSTICE POUR ADOLESCENTS. LE TERME « SPÉCIALISÉS » UTILISÉ DANS L'ARTICLE 18 DE LA CONSTITUTION SE RÉFÈRE AU PROFIL DU FONCTIONNAIRE ET À LA COMPÉTENCE JURIDIQUE EXPLICITE DE L'ORGANE APPARTENANT A CE SYSTÈME. Registre : 168773.

de la procédure pour adultes et perd ses caractéristiques propres.

Dès lors, il est important que toutes les parties soient spécialisées pour qu'elles comprennent la finalité du système et aient la sensibilité requise pour saisir les caractéristiques qui le définissent. La LNSIJPA devrait exiger la spécialisation de tous les avocats intervenant dans le processus.

Profil des fonctionnaires.

Se référant à la spécialisation des agents du système de justice pour adolescents, la SCJN a considéré qu'elle recouvre trois aspects : a) Organisation du travail : spécialisation organique ; b) Assignation des compétences : spécialisation par domaine ; et c) Profil du personnel : profil des agents du système.
Notre cour suprême a mis l'accent sur la formation des agents du système en affirmant qu'elle est nécessaire pour arriver aux finalités que le système poursuit, ainsi que sur le profil des agents, également nécessaire pour les relations avec les adolescents.[7]

Malheureusement, les agents publics qui interviennent dans le système de justice pour adolescents n'ont pas toujours le profil, la sensibilité ou la formation nécessaires pour interagir avec eux. L'absence de profils adéquats est bien présente. Des dispositifs devraient être mis en place pour empêcher cela.

La justice pénale pour adolescents est spécialisée et a en ce sens besoin de juges et de magistrats spécialisés, possédant un profil leur permettant de comprendre la complexité qui caractérise les personnes en développement. Dans certains États, les juges ont deux casquettes : ils s'occupent à la fois des adultes et des adolescents. Cela est contraire à la spécialisation exigée par la LNSIJPA.
Réglementation et mise en œuvre de l'exécution

Le talon d'Achille du système réside sans aucun doute dans l'exécution des mesures, en particulier la mesure de détention. Dans ce domaine, peu a été fait par les entités fédérées, la majorité ayant conservé les installations et le personnel du système tutélaire.

C'est peut-être dans le domaine de l'exécution où sont le plus visible les lacunes qui pèsent sur l'ensemble du système. La tendance à la pénalisation qui persiste chez beaucoup d'agents, lesquels ne parviennent pas à comprendre la différence entre le système pénal pour adolescents et celui pour adultes, se manifeste au moment d'exécuter la sanction privative de liberté.

La majeure partie des adolescents qui ont été condamnés sont soumis à des mesures non privatives de liberté ; il s'agit là de l'aspect le moins réglementé et développé, qui requiert un nombre plus élevé d'actions de la part de l'État, afin d'offrir des programmes d'exécution des peines en milieu ouvert effectifs visant à la réinsertion sociale et familiale. Les problèmes les plus fréquents sont : l'absence d'installations adéquates, la mauvaise qualité des services, comme l'offre alimentaire, le manque de formation du personnel de sécurité qui en vient à maltraiter les jeunes, le manque de programmes éducatifs à des niveaux plus avancées (préparatoire) et l'absence de programmes et instances permettant aux jeunes de se préparer à affronter la vie en liberté.

Les autres mesures punitives prévues par les lois locales ne sont pas appliquées dans leur totalité. Il est commun que les organismes chargés de l'exécution des sanctions des adolescents n'aient pas les ressources humaines et matérielles nécessaires pour leur mise en œuvre. Il est primordial que les mesures punitives soient réellement axées sur l'éducation et la réinsertion des jeunes dans la communauté. Pour cela, il est important de privilégier les mesures qui ne sont pas privatives de liberté. Il importe de recourir à la justice restaurative et non à des critères punitifs. Cela implique qu'il existe des programmes – et un personnel spécialisé pour les mettre en œuvre – orientés à réconcilier les jeunes avec leur passé et leur présent et à les rapprocher des victimes (lorsque cela est possible) et de la communauté.

IV. Réflexions finales

Pour conclure cette brève analyse du système de justice pour adolescents au Mexique, il est nécessaire de souligner que bien que la LNSIJPA soit perfectible, le majeur défi qui existe aujourd'hui réside dans sa mise en œuvre adéquate. Le respect de la procédure régulière en matière de justice juvénile ne sera possible que lorsque les institutions et les personnes impliquées dans le système s'organiseront et agiront dans le cadre des principes qui l'inspirent. Des institutions adaptées, un personnel formé et avec le profil adéquat, ainsi que de bonnes pratiques doivent aller de pair pour que les rouages du système fonctionnent correctement, et ce en vue de parvenir aux objectifs pour lesquels il a été créé.

2.1.2. UN MODE DE RÈGLEMENT ALTERNATIF EN MATIÈRE DE JUSTICE CRIMINELLE POUR LES ADOLESCENTS : LA CONFÉRENCE DE FACILITATION.

Par Nancy Moreaui[8]

On a longtemps sous-estimé l'importance des modes de règlements alternatifs en matière de justice criminelle et pénale, notamment parce que la procédure au Canada est essentiellement contradictoire.

En effet, puisque la présomption d'innocence est un principe fondamental, et qu'il appartient à l'autorité de poursuite de prouver la culpabilité de l'accusé « au-delà de tout doute raisonnable », sans que l'accusé n'ait à prouver son innocence, il a fallu que les autorités réfléchissent sur comment offrir cette opportunité aux parties et que cela soit acceptable.

7. SYSTÈME INTÉGRAL DE JUSTICE POUR ADOLESCENTS. ASPECTS DE LA SPÉCIALISATION QUI RECOUVRE LE PROFIL DU FONCTIONNAIRE FAISANT PARTIE DU SYSTÈME. Registre : 1011758.

8. Admise au Barreau en 1980, la juge Nancy Moreau a oeuvré à titre de substitut du procureur général, puis comme procureure-chef au bureau des poursuites criminelles et pénales, à la Chambre de la jeunesse de Montréal. Elle a été nommée juge à la Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse en 2007.

Aujourd'hui, compte tenu des initiatives, modifications législatives et jurisprudence, les juges utilisent davantage leurs pouvoirs de gestion pour proposer des moyens d'instruire plus efficacement les instances et réduire les délais, ils participent aux discussions avec les avocats de la poursuite et de la défense pour tenter de trouver une solution partielle ou complète à un litige, concernant la culpabilité ou encore la détermination de la peine. Ils utilisent les conférences de gestion, les conférences de facilitation.

L'objectif de cet article est de vous présenter ce qu'est une conférence de facilitation chez les adolescents et vous en exposer son fonctionnement. Notons que cette procédure est similaire à celle utilisée chez les adultes, mais que son application s'en trouve quelque peu modifiée, compte tenu des particularités apparaissant à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents[9] (L.S.J.P.A).

Puisque la conférence de facilitation s'inscrit dans un processus criminel, précisons d'abord quelques aspects de cette loi spécifique aux adolescents, lesquels influenceront, inévitablement la teneur des discussions qui auront lieu lors des séances de facilitation.

Au Canada, dans le cadre de poursuites intentées en vertu du Code criminel, c'est la L.S.J.P.A qui énonce les principes, les règles de procédure spécifiques et les peines applicables à l'égard des adolescents qui, au moment de l'infraction, sont âgés de 12 à 17 ans inclusivement.

Cette législation comprend un Préambule, une Déclaration de principes d'application générale, laquelle constitue le principal cadre interprétatif de la Loi ainsi que des déclarations de principes particulières, lesquelles s'appliquent à certaines sections.

Ainsi, il y a des principes applicables aux mesures extrajudiciaires, à la détermination de la peine, incluant des critères applicables en matière de placement sous garde, ainsi que des principes relatifs au régime de garde et surveillance.

Essentiellement, ce système de justice pénale distinct des adultes est fondé sur le principe de responsabilité moins élevée des adolescents. La détermination de la peine vise donc à déterminer une sanction juste et proportionnelle à la gravité de l'infraction et degré des responsabilités de l'adolescent. Elle doit être compatible avec leur état de dépendance et leur degré de maturité.

Les mesures prises doivent offrir aux adolescents des perspectives positives (meaningful consequences) qui tiennent compte de leurs besoins et de leur niveau de développement. Elles doivent favoriser la réadaptation et réinsertion sociale en faisant participer la famille, les membres de sa collectivité et certains organismes sociaux, elles doivent promouvoir le sens des responsabilités par la reconnaissance des dommages causés.

Notons également que cette loi invite aussi à prendre en compte les différences ethniques, culturelles, linguistiques et sexuelles, notamment pour les autochtones.
Finalement, et compte tenu du sens qu'a le temps dans la vie des adolescents, l'on suggère que les personnes chargées de son application agissent avec diligence et célérité.
À titre de d'autres informations susceptibles d'influencer les discussions lors de la séance de facilitation se trouvent une série de facteurs comme la durée de la détention préventive, les déclarations de culpabilité antérieures, les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la situation de l'adolescent.

Finalement, c'est en ayant à l'esprit que la peine doit être la moins contraignable possible pour répondre aux objectifs, qu'une mesure de placement demeure une peine de dernier recours et que l'on ne doit pas substituer des mesures de protection, que les discussions ont lieu.
Tel que nous le verrons ci-après, une conférence de facilitation est une démarche volontaire initiée par les avocats agissant en matière criminelle et pénale par laquelle l'on requiert l'intervention d'un juge pour aider les parties à résoudre un litige dans le cadre d'une poursuite judiciaire. Cet outil de gestion sert à la bonne administration de la justice.

À la Cour du Québec, les conférences de facilitation s'appliquent aux procédures intentées contre les adultes et les adolescents. Notons ici que la situation d'un jeune impliqué dans une infraction criminelle qui n'a pas encore atteint l'âge de la responsabilité criminelle (12 ans), est plutôt traitée en vertu d'une loi provinciale, la Loi sur la Protection de la jeunesse. [10]

Avant d'exposer plus en détails le fonctionnement d'une séance de facilitation, soulignons brièvement le contexte ayant mené à sa mise en place.

Lorsque dans les années 1990 la province de l'Ontario est confrontée à une problématique récurrente concernant les longs délais en rapport avec la justice pénale, le gouvernement de l'Ontario met en place un vaste comité d'étude pour revoir les règles en matière de divulgation de preuve et règlement de dossier.

Inspiré des recommandations du rapport déposé en 1993 par le juge G. Arthur Martin, intitulé Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions, l'idée de la facilitation pénale émerge et un travail de collaboration entre les autorités judiciaires québécoises, représentants de la Cour d'appel et de la Cour supérieure, membres du Barreau agissant tant en poursuite qu'en défense, s'amorce.

En 2004, les trois principales cours de compétence pénale (Cour d'appel, Cour supérieure, Cour du Québec), introduisent un programme pilote de facilitation pénale de 18 mois. Suite à l'évaluation, et au fil du temps, le programme est mis en application par les différentes cours.

Présentement, le Règlement de la Cour du Québec autorise le juge en chef à établir les règles qui en définissent les objectifs, les modalités d'accès et son fonctionnement.

En résumé, ce processus implique qu'un juge participe aux discussions entre avocats de la poursuite et de la défense pour faciliter la recherche d'une solution à un litige, incluant la détermination de la peine, et possiblement le résoudre. Notons que tous les dossiers sont susceptibles de faire l'objet d'une conférence de facilitation, peu importe la nature des accusations.

Le tout débute par la signature d'une demande conjointe, sollicitant auprès du juge coordonnateur l'assignation d'un juge facilitateur. Notons ici que seuls les juges formés à cet effet peuvent être désignés.
En présentant le formulaire prévu à cet effet, les parties s'engagent à déposer au juge saisi, au plus tard sept jours avant la conférence, un dossier sommaire comprenant la dénonciation (les accusations), un résumé des faits relatifs au litige et tout autre document pertinent à la tenue de la conférence.

Puisque les règles entourant la facilitation ne modifient en rien les règles relatives à la négociation de plaidoyers (plea

9. L.C. 2002, ch. 1

10. RLRQ, chap. P-34.1

barganning), les parties peuvent également faire état des discussions préalables et ainsi mieux cibler les besoins particuliers dans le cadre de la conférence.

En signant ladite demande, les parties s'engagent à être disponibles et à respecter le caractère confidentiel de tous les échanges qui auront lieu durant la conférence. Bien sûr, l'avocat de la défense pourra faire rapport à son client pour vérifier sa position et confirmer son mandat et l'avocat de la poursuite pourra faire de même auprès de la victime et/ou enquêteur, mais rien de tout ce qui s'est dit ou proposé ne pourra être rapporté devant la cour, advenant une impasse et un procès. Cela reflète l'étendue du privilège rattaché au principe de confidentialité.

Les discussions se déroulent généralement dans une salle de conférence, à huis-clos, et sans enregistrement. Notons que la règle de confidentialité encourage des discussions libres et franches.

La conférence se tient généralement qu'en présence des avocats. Le Tribunal peut toutefois, avec l'accord des parties et pour divers motifs, autoriser la présence d'une tierce personne. Il pourrait, par exemple, requérir l'opinion d'un professionnel qui a déjà évalué l'accusé pour obtenir une opinion sur la peine, ou encore demander la présence d'un intervenant social pour valider la faisabilité d'une proposition sur la peine, laquelle impliquerait un organisme tiers (Ex : retour aux sanctions extrajudiciaires, programme de gestion de la colère).

Il est important de souligner que la présence d'un tiers exige qu'il signe à son tour l'entente de confidentialité.

En débutant la séance, le juge rappelle son mandat et le fonctionnement de la conférence. Il vérifie si les parties ont bien signé la demande et rappelle l'importance de la confidentialité. Il valide auprès des avocats l'étendue et les limites de leur mandat et adopte au besoin des règles de gestion particulières. La séance se déroule dans un climat convivial et respectueux.

En entrant dans le vif du sujet, le juge invite chaque avocat à présenter sa conception du dossier et sa position en vue d'un règlement.

Cet exercice permet d'identifier les questions en litige, de mesurer les écarts, de discuter de la position de chacun, de travailler spécifiquement sur des propositions de solution.

Lors des discussions, il est possible que le juge souhaite rencontrer séparément une partie, de consentement des parties, et de faire ce que l'on appelle un caucus.

Il pourra ainsi discuter d'un point particulier, mieux comprendre la position de l'avocat et tenter de dénouer une impasse qui se dessine. Notons que cette discussion demeure confidentielle, qu'il appartiendra à l'avocat de choisir s'il dévoile au non la teneur des propos, toujours dans le but de régler le litige.

Si le dossier est volumineux ou implique plusieurs accusés, il peut dresser un résumé des positions de chacun et s'assurer que cela représente bien l'essentiel de leur position.

Si les positions soulèvent des problèmes connexes (ex. : accessibilité à certains documents ou expertises, extradition), il peut dresser une liste à laquelle il référera au fur et à mesure des discussions.

Si les discussions permettent de conclure une entente, le juge ayant présidé la conférence peut, avec l'accord des parties, recevoir le plaidoyer de culpabilité.

Une entente peut entièrement régler le litige en ce qu'elle couvre les plaidoyers et la peine. Elle peut aussi régler le fond mais pas la peine. Dans ce cas, le juge facilitateur, ou un autre juge selon la volonté des parties, entend les représentations à la cour et impose la peine.

Lorsqu'une entente est conclue, le juge facilitateur demande aux avocats de rédiger une trame factuelle correspondant aux discussions et ententes issues de la rencontre.

Ce résumé s'avère important puisqu'il servira non seulement à résumer les faits suite à l'enregistrement des plaidoyers à la cour, mais aussi à imposer la peine, que celle-ci soit une suggestion commune ou non.

Notons également que cette trame factuelle servira à tout professionnel appelé à préparer un rapport ou expertise en vue de l'imposition de la peine.

Puisque la justice pénale est publique, l'entente est soumise au juge facilitateur, ou autre juge, en salle d'audience. Il importe que le juge explique au public le processus ayant mené à l'accord avant que l'avocat enregistre les plaidoyers.

En agissant ainsi, le public n'a pas l'impression que l'affaire est réglée derrière des portes closes, il connait ce qui a été décidé et les motifs sous-jacents au règlement. La transparence est une considération constante en matière de facilitation.

Si l'exercice ne permet pas de régler le litige et qu'il y a impasse, le juge facilitateur est exclu de l'audition judiciaire et les autres membres de la cour ne sont pas informés de l'existence de cette démarche. Rappelons le privilège attaché à la confidentialité.

Dans ce cas, il est possible pour le juge facilitateur, avant de mettre un terme à la rencontre, de convertir la séance en conférence de gestion.

Une fois de plus, cet exercice permet aux parties et au juge de bien cerner les questions à trancher au stade du procès, de trouver des moyens pour instruire plus efficacement les demandes et requêtes légitimes, c'est-à-dire celles qui ont des chances raisonnables de succès, de consigner les admissions, de limiter le nombre de témoins, ce qui aura pour effet de réduire la durée du procès et de rendre une justice plus efficace.

L'expérience acquise au cours des dernières années permet de constater les avantages pour les avocats et la justice d'utiliser ce mode de règlement. En effet, c'est dans plus de 90% des situations soumises à l'attention d'un juge facilitateur qu'un règlement est survenu, majoritairement avec la détermination de la peine. À vous de tenter l'expérience!

2.1.3. QUAND L'ADOLESCENT RÉPARE SON GESTE EN S'IMPLIQUANT DANS LA COMMUNAUTÉ GR CE À L'APPROCHE ÉQUITABLE.

Marie-Eve Lamoureux et Mathilde Martin[11], Équijustice, Québec[12]

Adoptée en 2003 sur l'ensemble du territoire canadien, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) définit le cadre d'intervention extrajudiciaire et judiciaire à suivre à l'égard des jeunes âgés de 12 à 17 ans ayant commis une infraction au Code criminel et à d'autres lois fédérales. Ainsi, lorsqu'une infraction a été commise par un adolescent, il existe des mesures adaptées qui lui permettent de réparer les torts causés par son acte, en tenant compte de la personne victime et de la collectivité.

Parmi les mesures proposées aux adolescents pour réparer leur geste, citons la médiation avec la personne victime, les ateliers de sensibilisation ou encore les démarches de réparation envers la collectivité et les travaux bénévoles [13](DRTB). Au Québec, le réseau Équijustice est l'un des organismes qui participent à la mise en œuvre de ces mesures, notamment les démarches de réparation dans la communauté et les travaux bénévoles dont il est question ici.

Ces dernières années, le modèle offert par la justice réparatrice s'est essentiellement cristallisé autour de la pratique de la médiation. Il est vrai qu'il y a quelque chose d'édifiant à voir des personnes en conflits, que tout oppose, accepter de se rencontrer et d'entamer un dialogue. Même si les démarches auprès de la communauté sont moins spectaculaires que la pratique de la médiation, nous verrons comment elles s'inscrivent parfaitement dans le développement de la justice réparatrice et des bonnes pratiques en matière de justice juvénile.

Les démarches de réparation dans la communauté et de travaux bénévoles : définitions et objectifs

La philosophie proposée par la justice réparatrice imprègne le système pénal canadien pour mineur depuis une quarantaine d'années. Comme mentionné précédemment, les démarches de réparation et de travaux bénévoles s'inscrivent dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, fondée sur les principes de la justice réparatrice.

En se définissant comme des services non rémunérés qu'un contrevenant accomplit au profit d'un organisme de la communauté, ces démarches visent à :

- Permettre à l'adolescent de réparer le tort causé par l'infraction qu'il a commise;
- Offrir aux parties touchées par un crime l'occasion d'être acteurs du processus judiciaire ou extrajudiciaire;
- Contribuer au bien commun par l'apport de l'adolescent à la mission des organismes venant en aide à la collectivité;
- Permettre au parent de participer à la démarche de réparation et de soutenir son adolescent;
- Favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des contrevenants.

Le recours aux travaux bénévoles est majoritairement la voie retenue par les acteurs du système pénal lorsqu'une autre démarche n'est pas envisageable (notamment la médiation avec la victime). À défaut de s'impliquer directement envers la victime, l'adolescent offrira son temps et son travail à un organisme communautaire qui, par sa mission, exerce une influence positive sur la société. Selon les statistiques internes du Réseau Équijustice, les démarches de réparation prévoyant une implication dans la collectivité et la réalisation de travaux bénévoles représentent près de 70% des cas qui leur sont adressés.

Le recours aux travaux bénévoles est majoritairement la voie retenue par les acteurs du système pénal lorsqu'une autre démarche n'est pas envisageable (notamment la médiation avec la victime). À défaut de s'impliquer directement envers la victime, l'adolescent offrira son temps et son travail à un organisme communautaire qui, par sa mission, exerce une influence positive sur la société. Selon les statistiques internes du Réseau Équijustice, les démarches de réparation prévoyant une implication dans la collectivité et la réalisation de travaux bénévoles représentent près de 70% des cas qui leur sont adressés.

En raison de cette prévalence, il paraissait nécessaire pour les intervenants du réseau Équijustice de redorer l'image des démarches de réparation dans la communauté et les travaux bénévoles par la modernisation de leur pratique, en conformité avec les principes de la justice réparatrice, en s'inspirant des travaux menés dans la cadre des médiations victime/contrevenant et en élaborant une nouvelle approche d'intervention. Ces efforts d'actualisation des pratiques professionnelles avaient pour objectifs de susciter l'adhésion tant des adolescents que des organismes collaborant au processus, de clarifier les objectifs du DRTB vis-à-vis des autres démarches existantes, de recentrer la pratique sur l'idée de réparation plutôt que de punition.

Redéfinir le rôle de l'adolescent, des parents et des partenaires grâce à l'approche équitable

Conceptualisée par le réseau Équijustice, l'approche équitable a profondément transformé la pratique des intervenants en ce sens où elle propose aux justiciables une autre expérience et une mise en œuvre différente de l'activité de justice.

Les bonnes pratiques auprès des jeunes contrevenants

Le réseau Équijustice s'intéresse autant à prévenir la production de torts qu'à la réaction aux événements ayant produit ces torts. Attentif à l'histoire de chacun, Équijustice accueille les contrevenants, sans a priori ni parti pris, en évitant étiquettes et stigmates. Cette volonté d'être équitable et impartial permet au jeune contrevenant d'exprimer son point de vue, de se réapproprier la situation vécue et d'explorer toutes les avenues possibles offertes par la démarche de réparation.

11.Marie-Eve Lamoureux, directrice clinique LSJPA et médiation citoyenne, et Mathilde Martin, adjointe et rédactrice, au réseau Équijustice.

12. Créé en 1989, Équijustice est une association québécoise provinciale à but non lucratif comptant 23 membres à travers tout le Québec. Le réseau Équijustice offre une expertise en matière de justice réparatrice et de médiation citoyenne. www.equijustice.ca

13. Autrement connus sous le nom de travaux d'intérêt général en France ou prestations philanthropiques en Belgique.

Une approche personnalisée, centrée sur l'écoute attentive, libérée de toute morale et tout préjugé a été favorisée dans le but de créer un lien de confiance, d'encourager le dialogue et une participation active du jeune contrevenant. Elle offre à l'adolescent l'occasion de comprendre son rôle dans la démarche de réparation et d'y adhérer pleinement. En étant au cœur des activités de justice, le jeune devient un acteur essentiel du processus. Au-delà du constat de la transgression d'une norme, c'est aujourd'hui le sens de la réparation qui prévaut dans la démarche à laquelle l'adolescent souscrit.

Pourtant, si ce modèle nous paraît aujourd'hui évident, il n'en a pas toujours été ainsi. Il est en effet tentant pour des professionnels en position d'autorité d'imposer leur vision parfois manichéenne d'une situation, d'analyser plutôt que d'écouter, et d'imposer une conduite à un jeune que l'on croit inconstant, irréfléchi et irresponsable. Souvent, l'intervenant était amené à contrôler les horaires et lieux d'implication, à surveiller les activités du jeune contrevenant et à lui imposer des travaux visant à le responsabiliser. Cette attitude éloignait le praticien de sa vocation et dévalorisait tant la démarche que sa fonction.

Avec le temps, la posture de l'intervenant s'est modifiée : conscient du rôle qu'il incarne, le praticien tente de limiter les effets néfastes qui pourraient découler de son attitude (essentialisation, préconception, moralisation…) en mettant l'accent sur la non-directivité, l'équité, la transparence. L'objectif est avant tout d'accompagner, d'écouter, de soutenir le jeune contrevenant dans sa démarche de réparation et, finalement, de l'encourager à verbaliser ses propres choix, issus des réflexions qu'il aura menées par lui-même et sur lui-même, en discutant sans retenue avec l'intervenant.

C'est en sondant les motivations intrinsèques de l'adolescent, en l'amenant à réfléchir sur ses actes, à les comprendre, enfin, à élaborer et à adhérer à un projet personnel que la démarche prend toute sa dimension réparatrice.

Le sens du partenariat

Dans notre réseau, nous adhérons à l'idée, soutenue par Lode Walgrave, qui établit qu'un crime ne concerne pas seulement la victime qui l'a subi. En effet, les répercussions d'un acte criminel vont bien au-delà de l'individu, mais touchent, par ricochet, la société dans son entièreté. Il est donc primordial de reconnaitre le rôle de la collectivité dans le processus de réparation.

Cette position a radicalement changé la façon de concevoir la place et l'implication des organismes communautaires avec lesquels nous collaborons dans le cadre du DRTB. De nombreuses contraintes ont pesé sur les professionnels du réseau, les obligeant à solliciter les organismes partenaires sur des critères géographiques (proximité avec le lieu de résidence de l'adolescent) et de disponibilité (la mise en concurrence des différents programmes de bénévolat ayant entraîné une pénurie des associations enclines à collaborer avec les praticiens). Il aura fallu restaurer les liens de confiance, redéfinir et revaloriser le rôle que ces partenaires avaient à jouer pour que, de simples structures d'accueil, ils deviennent à leur tour des acteurs de la démarche et du dialogue avec le jeune contrevenant.

Par leur mission, ces organisations favorisent le mieux-être des individus et de la collectivité. Ainsi, en choisissant de contribuer à la mission de l'organisme, l'adolescent participe au bien commun. Cela permet aussi d'ouvrir de nouveaux canaux de communication, de créer à nouveau un réseau informel de solidarité et d'entraide, permettant de travailler à la reconstruction du lien social brisé par le délit.

Une recherche, menée en 2012 par le réseau Équijustice, a permis de constater que 96% des organismes ont une opinion très favorable ou favorable sur la pertinence de la démarche de réparation dans la collectivité. Près de 80% des organismes répondants avancent que le principal avantage d'une telle mesure pour les adolescents est la responsabilisation et dans 60% des cas, l'opportunité de réparer les torts causés. Ces résultats mettent en lumière l'importance d'impliquer les différents partenaires dans la préparation de la démarche pour qu'à la fois l'organisation collaboratrice et l'adolescent comprennent davantage le sens de celle-ci.

Chaque fois que l'adolescent choisit une association partenaire, c'est un acte de reconnaissance de sa mission et des activités qu'elle mène. Les valeurs de l'organisme et du jeune contrevenant se rejoignent. C'est cette rencontre qui permet la réparation des torts tout en redonnant un sens à leur travail respectif.

Les parents comme collaborateurs de l'intervention

Bien que la participation des parents était prévue dans les principes fondamentaux de la Loi sur les jeunes contrevenants, il a fallu du temps pour que sur le terrain leur collaboration soit sérieusement envisagée. Pendant de nombreuses années, les intervenants du réseau Équijustice ont considéré le jeune contrevenant comme l'unique responsable de son acte et, de facto, le jugeaient comme leur seul interlocuteur recevable dans le cadre de la démarche de réparation. Dans ce contexte, la présence des parents n'était ni requise ni encouragée. Par ailleurs, l'expertise autrefois ouvertement revendiquée par les intervenants n'encourageait pas la prise de parole des parents relégués à leur simple rôle d'observateurs. Il peut sembler paradoxal de tenir à distance, d'écarter si radicalement ceux qui sont pourtant les piliers de la vie de l'adolescent.

Aujourd'hui, la pratique des intervenants a été remodelée pour remettre les parents à leur juste place de figure tutélaire. De simples intermédiaires entre le jeune et l'intervenant, ils sont aujourd'hui des interlocuteurs privilégiés dans la démarche de réparation. En tant que premiers acteurs dans la vie de l'adolescent et premiers collaborateurs de l'intervenant, ils sont invités non seulement à s'exprimer sur l'acte commis par leur enfant, mais également à s'impliquer dans toutes les étapes du processus qui le concerne.

Dans le cadre des mesures de démarches de réparation et travaux bénévoles, les parents sont un soutien pour leur adolescent autant que l'intervenant du réseau Équijustice devient un soutien pour le parent dont la vie familiale a été affectée, malgré lui, par le crime.

Conclusion

Les transformations qui ont eu cours dans le réseau Équijustice ces dernières années peuvent sembler imperceptibles pour les observateurs extérieurs, mais elles ont pourtant profondément changé la posture des intervenants ainsi que la relation qu'ils entretenaient avec les jeunes contrevenants, les parents, les personnes victimes et les organismes partenaires. C'est un travail de longue haleine qui a été mené pour parvenir à développer de bonnes pratiques de travail en matière de justice juvénile. À la lumière de notre expérience, il nous parait primordial - et ceci est vrai pour tous les acteurs du système de justice- d'apprendre à évoluer, de réactualiser nos connaissances et nos pratiques professionnelles, de remettre en question

nos habitudes de pensées.

Grâce au travail des intervenants du réseau Équijustice, les démarches de réparation envers la collectivité et les travaux bénévoles ne sont plus des mesures négligeables et négligées du système de justice, mais s'inscrivent dans le développement d'une justice réparatrice protéiforme.

2.1.4. LA PRATIQUE SOCIO-ÉDUCATIVE AVEC LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES À JARDIM ANGELA / SÃO PAULO, BRÉSIL

Alcimar Neves Antônio
Claudineia Rodrigues Marques Silva
Gabriela Benedicto de Morais
Joel Costa Rodrigues
Sandro Alves Dias
Suzana Gomes dos Santos

Gabriela B. de Morais -Psychol

Sandro A. Dias -Pedagogue

Gabriela B. Morais – Psychol.

Claudineia Silva –Trav. Social

Joel Rodrigues –directeur

Alcimar Antonio – Trav. Social

Présentation

La politique brésilienne en matière d'assistance sociale joue un rôle fondamental dans la prise en charge des adolescents et des jeunes concernés par les mesures sociales et éducatives en milieu ouvert, telles que définies dans le Statut de l'enfant et de l'adolescent (ECA[14], loi fédérale n° 8069 (1990)) – et nommées « Prestation de services à la communauté » (PSC) et « Liberté surveillée » (LS). La loi organique relative à l'assistance sociale (LOAS)[15], loi fédérale n° 8742/1993, modifiée par la loi n° 12.435 (2011), est conçue comme une politique publique destinée à ceux qui en ont besoin et qui y ont droit. Les axes structurants de la LOAS sont le Système unique d'assistance sociale (SUAS), les Standards opérationnels de base du SUAS (SOB/SUAS, 2005) et la Classification nationale des services d'assistance sociale (CNSAS, 2009). Pour orienter et conduire la mise en œuvre des mesures de PSC et de LS, il existe aussi un guide, la loi fédérale n° 12.594 (2012), qui règlemente et établit le Système national d'assistance socio-éducative (SNASE), poursuivant les objectifs des mesures socio-éducatives, qui sont définis au second paragraphe de l'article premier, comme suit :

I. La responsabilisation de l'adolescent au regard des conséquences de l'infraction, en termes de préjudices, en encourageant leurs réparations à chaque fois que possible ;

II. L'intégration sociale des adolescents et la garantie de leurs droits individuels et sociaux, avec la mise en place de plan individuel de prise en charge ; et

III. La condamnation de la conduite délictueuse, en faisant en sorte que la privation de liberté ou la restriction des droits soient les peines maximales encourues, dans le respect des limites prévues par la loi (Brésil, Système national de service socio-éducatif (SNSSE[16]), 2012).

La réalisation de tels objectifs a été possible grâce à l'articulation intersectorielle et interinstitutionnelle du Service en milieu ouvert de mesures socioéducatives de Jardim ngela (SMO-MSE)[17], compte tenu de l'interdépendance des institutions qui mettent en œuvre la politique socioéducative à l'égard des adolescents et des jeunes en conflit avec la loi. L'action technique, dont l'action des socio-éducateurs, a mis en œuvre des pratiques inter- et multidisciplinaires,

14. ECA : Estatuto da Criança e do Adolescente.

15. LOAS : Loi Orgânica da Assistência Social.

16. SINASE : Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

17. SMSE-MA : Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto.

assurant la qualité des relations entre les systèmes, SUAS, SNASE et le ministère de la Justice.

Ce texte présente la façon dont la socio-éducation (les pratiques socio-éducatives), s'inscrivant dans le prolongement de la perspective des droits de l'homme, et fondée conceptuellement, stratégiquement et opérationnellement sur des bases éthiques et pédagogiques, a été développée par le SMO-MSE à Jardim ngela, à l'extrême sud de São Paulo. La pratique socio-éducative de la démarche du SMO-MSE est reconnue comme l'une des bonnes pratiques socio-éducatives axées sur l'orientation et la surveillance des adolescents et jeunes pris en charge dans le cadre de mesures de PSC et de LS dans la ville de São Paulo.

Le SMO-MSE ngela II :
La trajectoire RAC

La Société des Saints Martyrs (SSM)[18], organisation non gouvernementale basée à Jardim ngela, a été créée en 1998 au cours d'actions de mobilisation sociale pour soutenir l'amélioration des conditions de vie et agir contre la banalisation de la violence. Plus tôt, cependant, en 1997, Le Forum de défense de la vie dans le district Jardim Angela[19] avait lancé le défi d'ouvrir des espaces de protection intégrale pour les jeunes âgés de 14 à 18 ans et exposés à des situations de vulnérabilité, à des risques et à des actes de violence.

Le district de Jardim ngela est situé dans la région méridionale du Brésil, à 30 km de la ville de São Paulo. Il regroupe 300 000 habitants et a une densité de population de 7,387 habitants/km2. Parmi cette population, 70 000 sont des adolescents et des jeunes de 12 à 19 ans, et 160 d'entre eux font l'objet de mesures sociales et éducatives de PSC et de LS dans les deux SMO-MSE de la région. En septembre, 69 adolescents et jeunes étaient présents/suivis dans ce type de service. L'activité économique prédominante dans le district est le commerce et les services, et une majorité de ses résidents travaille hors du district.

La SSM, en tant que membre du Forum susmentionné, mobilise la communauté locale à propos de la violence et des violations des droits des enfants. Elle cherche également à connaître les institutions, professionnels et militants engagés dans la défense des droits de l'homme présents dans la région. La première « rencontre socio-pédagogique » s'est tenue avec le Service d'aide aux mineurs de l'État de São Paulo[20], des professionnels bien implantés dans la région et la division/circonscription Sud de prise en charge communautaire des mineurs. À l'époque, l'institution n'avait aucune ressource financière pour développer de nouveaux projets, mais seulement une capacité technique pour guider les communautés et les institutions publiques locales intéressées par la protection et la défense des adolescents et des jeunes dans une perspective de prévention.

Un partenariat avec le ministère de la Justice et de la Défense des citoyens de l'État de São Paulo, avec lequel la SSM est liée, a été réalisé pour guider et accompagner les adolescents et les jeunes condamnés faisant l'objet de mesures judiciaires non carcérales (PSC et LS). La SSM a élaboré une proposition de service et a obtenu sa première enveloppe financière pour mener des actions socio-éducatives pendant une période expérimentale de 120 jours, pour acquérir le matériel de base, organiser des programmes/services de PSC et de LS, ainsi que former des socio-éducateurs et leur permettre d'obtenir une qualification, dans le but de construire des méthodologies socio-éducatives.

Le premier projet socio-éducatif fut nommé « Réintégration des adolescents dans la vie sociale et communautaire » (RAVSC). Il fut conçu collectivement (socio-éducateurs, adolescents et jeunes, familles, techniciens de la division/circonscription Sud de prise en charge communautaire des mineurs). Le projet RAVSC fut mis en œuvre après quelques ajustements techniques (pédagogiques et opérationnels) à travers l'élaboration du Plan de réalisation et d'accompagnement des activités, entre les partenaires impliqués (Santos Mártires, division/circonscription Sud de prise en charge communautaire des mineurs, Justice). Toutefois, pendant cette période expérimentale, aucun adolescent n'a été orienté par les tribunaux vers des mesures de PSC et de LS. Cet écart apparent entre les intentions et les actes a contraint la SSM, insatisfaite de cette situation, à reprendre la discussion avec ses partenaires dans la seconde partie de l'année de 1998. Les rencontres avec les responsables des agences publiques pour la mise en œuvre de la politique socio-éducative se sont cependant soldées par un échec.

Étant donné que la législation brésilienne et les normes internationales mettent l'accent sur le fait que, dans le cadre des mesures judiciaires prononcées à leur égard, les adolescents et les jeunes doivent rester aussi près que possible de leur lieu de résidence, d'études ou de travail, la coordination du projet RAVSC a par la suite impliqué la municipalité de la Ville de São Paulo (MVSP) à travers la Supervision régionale du travail social (SRTS)[21] implantée à Jardim ngela, pour la mise en œuvre des mesures socio-éducatives de PSC et de LS. Après quatre ans de communications entre le projet RAVSC et la SRTS à Campo Limpo, la SSM fut approchée par le Programme de solidarité communautaire[22] [23], mis en place par le gouvernement fédéral, en charge des adolescents et des jeunes vivant dans des contextes de grande vulnérabilité sociale et de violence. Au cours de l'année 1999, l'équipe du projet RAVSC put ainsi travailler avec ce public au développement de diverses activités. Cette action fut très importante pour le renforcement de l'équipe et l'élaboration de méthodologies socio-éducatives. Après avoir écouté les adolescents et les jeunes, des ateliers thématiques furent menés, leur donnant un aperçu de l'éducation professionnelle qu'ils seraient en mesure de suivre : informatique, anglais, musique, hip-hop, coiffure, cuisine (pizza), théâtre, DJ et production culturelle, pendant trois mois. Les garçons et filles concernés recevaient aussi des conseils et bénéficiaient d'une aide psychologique. Le déploiement des activités sociocommunautaires a également encouragé la citoyenneté, la solidarité et l'éducation à la paix.

En mars 2000, la MVSP, à travers la SRTS, signa un accord avec la SSM pour assister et accompagner 100 adolescents et jeunes gens faisant l'objet de mesures socio-éducatives de PSC et de LS. De nouveau, un autre obstacle s'est présenté avec l'accord signé : le système judiciaire argua du fait que l'orientation des jeunes et adolescents soumis à des mesures socio-éducatives vers le projet RAVSC était déjà possible à travers des actions formelles entre des institutions participantes (relations tripartites de responsabilités) - HVSP/SRTS/Service d'action sociale de l'État de São Paulo (désormais Fondation CASA) – SSM/RAVSC. Les obstacles au développement d'une action publique légale montrèrent que les institutions responsables du Système de garantie des droits (SGD) sont balbutiantes et fragiles lorsqu'il s'agit de mettre en place des politiques sociales et éducatives en milieu ouvert (PSC et LS). Pour la SSM/RAVSC, le processus complet de mise en œuvre des programmes/services de mesu-

18. SSM : Sociedade Santos Mártires.

19. Fórum em Defesa da Vida do Distrito no Jardim ngela.

20. Le Service d'aide aux mineurs de l'État de São Paulo a vu son nom changer en Fundacão Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente/Fundação CASA (Fondation Centre pour l'Assistance socio-éducative pour adolescents - Fondation CASA) en 2016.

20. La Supervision régionale du travail social est maintenant désignée sous le nom de Secrétariat municipal d'assistance et de développement social.

21. Programme mis en place par le pouvoir exécutif fédéral sous le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), et coordonné par la Première Dame, Dr Ruth Cardoso.

22. Programa Comunidade Solidária.

res socio-éducatives a montré combien fonctionner dans une machine d'État bureaucratique est vite conflictuel, et que coexister de façon harmonieuse avec lui est devenu un défi majeur. Ce processus a effectivement montré que la loi ne change pas la réalité. Cela a nécessité beaucoup de patience, de persévérance et de persistance pour que les droits des adolescents, des jeunes et de leurs familles puissent compter sur un programme/service public d'exécution des mesures socio-éducatives, qui soit le plus proche possible d'eux (domicile, école, travail).

À partir de ce moment et avec le processus de municipalisation en cours, ainsi qu'avec une meilleure compréhension des responsabilités et attributions de la municipalité dans la mise en œuvre des mesures non carcérales, la justice a commencé à orienter des adolescents vers le projet RAVSC, chargé de guider et de suivre les adolescents. Ainsi, on peut dire que ce n'est qu'en 2004 que le processus de municipalisation des services d'exécution de mesures socio-éducatives a commencé dans la ville de São Paulo. Tous ces réajustements ont conduit à la démission de plus de 60% de l'équipe de socio-éducateurs (techniciens, éducateurs et animateurs) du projet RAVSC, constituée et formée pendant cette période. Comme l'étendue du service RAVSC était vaste, il fut nécessaire de revoir l'organisation initiale et de toucher ainsi les adolescents et les jeunes qui n'étaient pas couverts par des mesures socio-éducatives (deux centres pour jeunes furent ainsi créés).

Au cours du premier semestre de l'année 2002, après d'intenses débats et des suggestions faites par les adolescents et les jeunes, le nom RAVSC fut approuvé et, en un sens, le mot « redécouvrir » a apparu plus adapté pour mettre en avant l'idée de redécouverte de ce groupe au sein de la communauté où ils vivaient et cherchaient à en transformer la réalité et son environnement. L'appellation choisie pour expliciter ce changement fut « Redécouvrir l'adolescent dans la communauté » (RAC) et, en 2010, la nouvelle dénomination devint « SMO-MSE ngela 2 – RAC ». En 2019, la capacité mensuelle du service est de 75 adolescents et jeunes concernés par des mesures de PSC et de LS et qui sont impliqués, par ordre d'occurrence, dans des vols, trafics de drogues, recels, blessures personnelles, meurtres, agressions, violences et détentions d'armes. Le service est élargi au soutien et à la guidance des familles, et comprend une équipe de professionnels dans les domaines de l'assistance sociale, la psychologie, la socio-éducation, l'administration (support administratif et organisation). En complément de la participation à la guidance et à la formation technique proposée par l'équipe du Centre de référence spécialisé dans l'aide sociale de M'Boi Mirim (CRSAS[24]), des heures sont consacrées tous les mois à la supervision et à la formation avec des professionnels spécialisés dans les politiques socio-éducatives.

Les pratiques socio-éducatives

Les activités proposées dans le cadre du SMO-MSE ngela 2 – RAC posent comme principe de base:

- L'accueil des adolescents et des jeunes ;
- L'identification des compétences ;
- L'échange de savoirs ;
- La réintégration sociale.

Cela, dans la perspective d'une rupture avec les comportements déviants et d'une non-récidive.

L'action sociale dans l'espace socio-éducatif se concentre sur la compréhension de la trajectoire familiale, de l'adolescent et du jeune dans toutes les dimensions de la vie sociale pour élaborer un projet politico-pédagogique qui prend en considération le processus de formation de l'identité et des subjectivités, contribuant à la construction d'une autre trajectoire et d'un projet de vie. Examiner l'histoire des adolescents accompagnés implique une relecture critique de l'intervention sociale des professionnels eux-mêmes dans leurs spécificités de connaissances et d'action : l'inter- et la pluridisciplinarité se tissent ainsi, en lien avec les hypothèses éthico-politiques de chaque domaine et avec l'engagement de construire un nouveau savoir-faire, basé sur la réalité observée et vécue.

Dans le développement socio-éducatif au sein de l'espace du SMO-MSE ngela II – RAC, il est possible d'observer que ceux qui s'occupent des enfants expriment leur capacité de remise en question parmi leurs pairs, la famille et la communauté : dans ces relations, la pratique de l'exercice éthique fonctionne selon la thèse du protagonisme et de l'autonomie des jeunes. Cette vision favorise le développement d'une série d'actions psychosociales et pédagogiques tournées vers la nouvelle définition de ceux pris en charge dans le contexte où ils vivent et dans d'autres espaces de coexistence et de participation. Par exemple, les activités ayant pour but la formation professionnelle se sont montrées pertinentes pour la découverte et la recherche de nouvelles aptitudes et compétences dont beaucoup croyaient manquer : la perception de revenus, la pratique professionnelle et l'insertion sur le marché du travail ont été à l'origine d'une meilleure formation éducative, culturelle et sociale des adolescents concernés.

Les références théoriques qui sous-tendent la pratique du SMO-MSE ngela II – RAC viennent de plusieurs domaines, étant donné que les adolescents et les jeunes ont différentes dimensions d' « être » per se et d' « être » dans le monde, auquel ils se sentent appartenir, en tant que protagonistes singuliers dans des contextes sociaux différents, et en tant que personnes critiques qui souhaitent promouvoir un monde meilleur et réfléchir aux conséquences éthiques et morales de leurs actions. La conception de la signification du paradigme de la doctrine de la protection intégrale, les objectifs des mesures socio-éducatives, et l'incomplétude institutionnelle dans l'exécution de la politique socio-éducative renvoient aux différentes recherches théoriques et pratiques de Vygotsky (2007), Freire (2009), Costa (1994) et Iamamoto (2003).

La réflexion sur les intelligences multiples et la validation de l'importance du développement de ces capacités et compétences ont rendu possible le travail avec les personnes accompagnées sur les aptitudes aux nouveaux apprentissages, la découverte et l'expansion de leurs potentialités, et de faire en sorte qu'ils se perçoivent eux-mêmes comme tolérant, empathique, critique et réfléchi, et interagissent avec les équipes, les pairs, les familles et la communauté (Gardner, 1995).

Les activités de groupe utilisées comme levier de changement et de transformation de chacun membre du groupe, personnellement et socialement, aident à la constitution de la subjectivité et de l'identité, et à sa formation avec de réelles possibilités de reconstruction de trajectoires loin des pratiques délictueuses : l'existence d'un groupe présuppose qu'il existe une interaction et une expérience émotionnelle partagée (Silveira et Previtali, 2017 ; Fernandes, 2003).

La façon dont les activités sont planifiées et proposées permet aux accompagnants une relation duelle, ce qui ai-

24. Centro de Referência Especializado para Assistência Social.

de au développement de leur humanité, parce que, « s'il y a un soi, ce n'est rien de plus que la prise conscience du vécu à travers une histoire de relations intersubjectives » (Avila, 2007, p. 9).

À l'aide d'expériences de groupe, on peut observer que les adolescents et les jeunes, les parents et les tuteurs appartenant aux groupes partagent non seulement un intérêt pour ce qui est transmis, mais peuvent aussi créer des relations et des liens, basés sur une expérience émotionnelle qui permet de s'identifier au processus et de vivre l'expérience de faire partie intégrante du groupe. Toutefois, des prises en charge individualisées ont aussi leur place dans les pratiques socio-éducatives, même s'il faut prendre en considération une série de difficultés qui peut apparaître dans l'élaboration, la réalisation et le suivi du plan individuel de prise en charge.

Dans la pratique socio-éducative, il existe de nombreuses limites dues à la complexité de l'attention portée aux adolescents et aux jeunes soumis à des décisions judiciaires et leur existence dans des contextes socioéconomiques et politiques nettement inégalitaires, et très loin d'un accès aux ressources culturelles qui sont si nécessaires à la condition particulière d'une personne en développement. L'engagement de ceux qui mènent des pratiques socio-éducatives dans le SMO-MSE ngela II – RAC s'est attaché à garantir les droits de ces adolescents accompagnés, afin de se conformer à une éducation sociale en milieu ouvert de qualité (PSC et LS). L'interlocution et l'articulation avec le SGD a contribué au renouvellement de cette pratique et le soutien apporté par le CRSAS, pour la formation permanente des professionnels du service, a été une preuve que le travail avec les adolescents et les jeunes en conflit avec la loi mérite d'être mené (Rodrigues et Bosco, 2005).

Les adolescents en formation professionel

Références (en langue portugaise) :

Notes de la traductrice :
Certains ouvrages, de P. Freire, H. Gardner et L Vigotski, sont accessibles en français ;
Le dernier accès à la plupart des articles cités et disponibles sur internet date de septembre 2019.

ÁVILA, L. A. Grupos: a perspectiva psicanalítica. Vínculo – In Revista do NESME, Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das Configurações Vinculares. São Paulo, v. 4, 2007. Disponible à : <https://www.redalyc.org/pdf/1394/139420850003.pdf>. Accédé le 11 septembre 2019.

COSTA, A.C. G. da. De menor a Cidadão. In _____(org.) Das Necessidades aos direitos. São Paulo: Malheiros, 121-144, 1994.

FERNANDES, W. J. A importância dos grupos hoje. In Revista da SPAGESP - Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado de São Paulo 2003, Vol. 4, No. 4, pp. 83-91. Disponible à : <file:///C:/Users/Gabriela/Downloads/Dialnet-AImportanciaDosGruposHoje-5599905.pdf> Accédé le 10 septembre 2019.

IAMAMOTO, M. V.. O serviço social e a contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 6 ed. São Paulo, Cortez, 2003.

RODRIGUES, J. C. & BOSCO, S. M. S. (org.). Redescobrindo o Adolescente na Comunidade - Uma outra visão da periferia. São Paulo – SP: Cortez Editora, 2005.

SILVEIRA, M. S.; PREVITALI, F. S. Sociabilidade dos adolescentes em conflito com a lei de Uberlândia (MG). In Revista Katálysis, Florianópolis, v. 22, n. 2, p. 309-319, 2017. Disponible à : <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802019000200309&lng=en&nrm=iso>. Accédé le 10 septembre 2019.

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009. Traduit en français sous le titre : l'éducation : Pratique de la liberté, Ed. du Cerf, Coll. Terres de feu, 1973, 154p.

GARDNER, H. Inteligências Múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre/RS: Artes Médicas, 1995. Traduit en français sous le titre : Les intelligences multiples, Ed Retz, 1996 (Réédit. 2004, 2008).

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Trad. José Cipolla Neto et.al. , 7ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Traduit en français sous le titre : Histoire du développement des fonctions psychiques supérieures, traduit du russe par F. et L. Sève. Paris : La Dispute, 2014, 600 p. Ouvrage présenté dans la Revue Française de Pédagogie, n°192, juillet/août/septembre 1995, p. 154-156, par Christophe Joigneaux. Article disponible à l'adresse : https://journals.openedition.org/rfp/4872.

2.1.5. LA MISE EN ŒUVRE DE L'APPROCHE RESTAURATIVE DANS LA PRATIQUE JUDICIAIRE MACÉDONIENNE RELATIVE AUX PROCÉDURES PÉNALES À L'ENCONTRE DES ENFANTS

Par Olja Ristova[25]

La loi sur la justice pour enfants[26] a été adoptée en 2013 par le Parlement de la République de Macédoine du Nord à la suite de nombreuses critiques formulées par des experts juridiques nationaux et étrangers, qui ont conclu que la loi relative à la justice juvénile de 2007[27] n'était pas appliquée dans la pratique. En fait, du point de vue légal, cette loi est en conformité avec les documents internationaux sur les droits de l'enfant, mais sa mauvaise mise en œuvre constitue le principal obstacle à sa pleine effectivité. Pour établir les dispositions de la loi, le législateur est parti des « libertés et droits fondamentaux garantis par la

25. Juge au tribunal pénal de première instance de Skopje République de Macédoine du Nord

26. Loi sur la justice pour enfants (Journal officiel de la République de Macédoine du Nord, n°148 du 29 octobre 2013).

27. Loi sur la justice pour enfants (Journal officiel de la République de Macédoine du Nord, n°87 du 12 juillet 2007).

28. Constitution de la République de Macédoine du Nord (Journal officiel de la République de Macédoine du Nord, n°52 du 22 novembre 1991).

29. Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, 1989, adoptée par la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 44/25 le 20 novembre 1989.

Constitution de la République de Macédoine du Nord[28], la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant [29](ci-après : la Convention) et d'autres traités internationaux sur le statut de l'enfant, ratifiés en accord avec la Constitution de la République de Macédoine du Nord ».

Les principes de base sur lesquels repose la loi sur la justice pour enfants sont : l'intérêt supérieur de l'enfant, les garanties procédurales qui sont conformes à celles des adultes, les mesures d'assistance et de protection, la formation et la rééducation de l'enfant, la justice restaurative avec une insistance particulière sur le rôle, l'intérêt et la position de la victime, la prévention au niveau central et local et la protection de l'enfant – victime d'un délit.

L'approche restaurative

La loi sur la justice pour enfants est basée sur une approche restaurative qui prône les mesures d'assistance et de protection pour compenser les dommages causés à la partie lésée et adopte un modèle alternatif pour traiter les délits les moins importants, évitant ainsi la procédure pénale classique à l'encontre de l'enfant. Par ailleurs, une procédure de médiation est possible et l'affaire, lorsqu'elle relève des compétences du procureur de la République, peut être réglée à l'amiable et être traitée de façon alternative en y introduisant des aspects de justice restaurative.

La loi affirme aussi le principe d'opportunité des poursuites selon lequel le procureur de la République compétent peut décider de ne pas engager une procédure, ou de clôturer une procédure déjà ouverte contre un enfant, quand il considère cela nécessaire au regard de la nature du délit, de l'historique de l'enfant et de sa personnalité.

La loi offre également au procureur de la République la possibilité de proposer une sanction sans procédure préparatoire s'il s'agit d'un délit pour lequel la peine de prison prescrite peut aller jusqu'à trois ans, et que l'affaire est suffisamment clarifiée, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de preuves et de données collectées sur la personnalité de l'enfant pour apporter une assise suffisante à la prise de décision. À la suite de la Recommandation du Conseil de l'Europe N° R (87) 18[30] concernant la simplification de la justice pénale, de nouveaux instituts ont été instaurés pour faciliter la reconnaissance de la responsabilité et la négociation de plaidoyers, en vue d'accélérer la procédure.

Le procureur de la République peut soumettre une telle proposition lorsque les conditions pour condamner un enfant à risque de plus de 14 ans sont remplies, qu'il existe des éléments de preuve qui indiquent sans ambiguïté que l'enfant est l'auteur du délit, qu'il est responsable du délit commis et que les conditions pour imposer une peine sont réunies.

Ainsi, le libellé de la loi indique qu'elle a été adoptée en accord avec le courant de pensée moderne concernant le traitement des enfants qui ont commis des actes qui comprennent des éléments d'infraction pénale, et se fonde sur les principes de rééducation, d'intégration sociale, d'éducation et de prévention des comportements déviants à l'avenir.
Indépendamment du type de procédure qui sera choisie et de la mesure finale qui sera imposée, les droits fondamentaux et l'intérêt supérieur de l'enfant doivent être respectés, tandis que la stigmatisation et la discrimination doivent être évitées, le temps de procédure doit être réduit au minimum requis par rapport aux caractéristiques individuelles de l'enfant et seulement dans un but légitime.

L'objectif de l'approche restaurative

La justice restaurative a pour but de dépasser l'approche rétributive ; elle promeut un modèle alternatif pour éviter la procédure pénale centrée sur la victime. Le traitement restauratif se caractérise par le fait que tous les efforts sont tournés vers la résolution des conséquences et la recherche d'une solution à l'infraction. Cette approche ne peut être retenue que lorsque les faits entourant l'évènement ne sont pas contestés, que ce soit par l'auteur des faits et la victime.
Les mesures et les activités qui peuvent être classées sous le terme de justice restaurative peuvent généralement être divisées en deux groupes : celles qui constituent le processus restauratif et celles qui proposent des objectifs restauratifs (les intentions). Le processus restauratif requiert l'implication de toutes les parties prenantes – victimes, auteur(s) du délit et membres de la communauté locale, afin de résoudre le conflit lié au délit commis et de trouver une solution adéquate. L'intention restaurative implique de parvenir à un accord, entendu comme le résultat du processus restauratif, incluant la compensation, les services d'intérêt général et d'autres programmes retenus pour permettre aussi bien la réparation de la victime et de la communauté que la réintégration de la victime et de l'auteur du délit.

La justice restaurative se fonde sur quatre principes de base qui sont les piliers de sa définition conceptuelle. Le premier principe est le principe de personnalité, c'est-à-dire la perception du délit comme une violation des relations humaines et interpersonnelles. Le second principe est le principe de réparation du dommage résultant du délit. Le troisième principe concerne la participation à la résolution ou le « principe de participation » et enfin, le quatrième principe est le principe de réintégration, ce qui implique que l'auteur du délit reste dans la communauté, et ne soit pas isolé et stigmatisé ; par conséquent, il devrait y avoir réintégration simultanée de la victime, plutôt que sa marginalisation.

La loi sur la justice pour enfants suit les tendances internationales modernes et se fonde donc sur une approche restaurative. Elle contient un large éventail de dispositions qui peuvent être appliquées à un enfant à risque ou à un enfant en conflit avec la loi, telles que : la compensation de la partie lésée, des procédures de médiation et de résolution à l'amiable, le principe d'opportunité des poursuites selon lequel le procureur de la République peut décider de ne pas engager de procédure, le recours à la médiation, où le rôle principal est tenu par le procureur de la République, impliquant l'enfant, le parent, l'avocat de la défense et la victime ou la partie lésée.

L'application en pratique

La procédure devant le tribunal commence par le dépôt d'une requête par le procureur compétent en vue d'ouvrir une procédure de préparation. Toutefois, avant de décider d'introduire une requête, la loi requiert qu'en premier lieu, le procureur de la République convoque et entende l'enfant en présence de son avocat, l'un de ses parents ou gardien. Alors que cette disposition est impérative dans son contenu, elle n'est pas appliquée en pratique comme le législateur l'avait prévu. Les procureurs de la République, lorsqu'ils ont affaire à des enfants, recourent aux mêmes pratiques qu'ils utilisent pour les délinquants adultes, c'est-à-dire qu'ils appliquent cette disposition le plus souvent comme pour les infractions pénales routières, qui requièrent le consentement de la partie lésée, et si le préjudice est indemnisé, l'accusé, dans ce cas-ci l'enfant, ne sera pas poursuivi.

Le fait d'éviter l'application de cette disposition renvoie à contourner l'approche

30. Recommandation du Conseil de l'Europe N° R (87) 18 concernant la simplification de la justice pénale.

restaurative selon laquelle l'ouverture d'une procédure judiciaire contre un enfant doit être une mesure de dernier ressort, conformément à la loi.

Lorsqu'ils expliquent pourquoi ils n'appliquent pas cette mesure, les procureurs de la République déclarent que le budget du ministère public n'est pas suffisant pour payer les avocats commis d'office, ce qui explique pourquoi, dans les procédures relatives aux enfants, les avocats ne sont pas appelés aux bureaux du ministère.
En conséquence, les procureurs de la République ayant affaire à des enfants qui ont commis des actes qui sont considérés, aux yeux de la loi, comme des infractions pénales, dès réception des procès-verbaux de la police et des preuves jointes, forment immédiatement un recours et soumettent une requête en vue d'ouvrir une procédure préparatoire au juge des enfants ; ils joignent également une proposition de convoquer et d'interroger la partie lésée et les témoins, ce qui est à l'opposé de l'esprit de la loi qui prévoit la rééducation et l'intégration sociale.

D'un autre côté, après avoir reçu la requête, le juge des enfants a la possibilité légale d'exprimer son désaccord avec la requête et de s'adresser au Conseil du tribunal pénal pour enfants qui décidera de sa poursuite ou non. Les juges des enfants, guidés par le principe qu'un procès doit se dérouler dans un délai raisonnable (autrement dit, la procédure pour les enfants devrait être terminée dans un délai le plus court possible, plus précisément, la loi prescrit que les procédures qui impliquent des enfants devraient être conclues dans un délai maximum d'un an et dans un délai d'un an et six mois depuis la date de réception de la requête du tribunal pour les délits graves seulement), n'appliquent pas la disposition relative à la déclaration de désaccord et décident de commencer l'action préparatoire immédiatement, c'est-à-dire de conduire les procédures contre l'enfant.

De telles pratiques, tant de la part du ministère public que du tribunal, sont contraire au principe de base selon lequel toute action doit être prise dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Les juges des enfants, dans cette situation, choisissent de respecter le principe d'urgence des procédures, au lieu d'appliquer les dispositions de la justice restaurative qui pourraient conduire à ce que l'enfant ne soit pas poursuivi.

En conclusion, l'approche restaurative est pratiquement inappliquée, alors qu'elle revêt une grande importance pour les enfants impliqués dans les procédures, où la loi devrait atteindre son objectif fondamental, à savoir une prévention particulière et la prise en compte renforcée de l'individu, la formation, la rééducation et une meilleure socialisation, plutôt que la sanction des violations de certaines normes juridiques.
Conclusion

Pour ces raisons, il importe de fournir une formation approfondie dans le domaine, mais elle ne sera pas efficiente et efficace si elle ne concerne que les juges et les procureurs de la République. La formation pour traiter avec des enfants à risque et des enfants en conflit avec la loi devrait être complète, ce qui veut dire inclure tous les participants de la procédure : la police, les avocats, les travailleurs sociaux, les procureurs de la République et les juges. À cet égard, la formation devrait être générale, conçue de façon à inclure tous les participants qui peuvent contribuer à modifier le comportement des enfants délinquants. Elle devrait aussi inclure plus d'exemples de bonnes pratiques du pays ou de l'étranger et la façon d'appliquer la loi devrait également être corrigée. Autrement dit, le but à atteindre est l'application correcte de la loi. Enfin, des suggestions pourraient être avancées pour amender les dispositions légales qui n'ont pas d'efficacité dans la pratique.

2.1.6. LA MISE EN ŒUVRE DE L'APPROCHE RESTAURATIVE DANS LA PRATIQUE JUDICIAIRE MACÉDONIENNE RELATIVE AUX PROCÉDURES PÉNALES À L'ENCONTRE DES ENFANTS

Par Julia Sloth-Nielsen[31]

Afrique du Sud
La justice restaurative figure dans les annales du processus de réforme de la justice pour enfants en Afrique du Sud depuis le début des années 1990 quand, à l'avènement de la nouvelle démocratie, une délégation de la Nouvelle-Zélande s'est rendue dans le pays pour expliquer le fonctionnement de la justice restaurative dans leur – à l'époque nouvelle – législation. Leur adhésion enthousiaste arriva là-bas en terrain fertile : l'Afrique du Sud cherchait des solutions innovantes pour la période post-apartheid qui se profilait à l'horizon ; l'apaisement, la réforme et le pardon étaient les maîtres-mots de la Commission de vérité et de réconciliation qui devait être établie pour apporter de la lumière dans l'histoire sombre de l'Afrique du Sud.

Le processus de réforme de la justice pour enfants s'est étendu de 1995 à 2008 et a culminé avec l'adoption de la loi 75 relative à la justice pour enfants en 2008. Cette loi est entrée en vigueur en 2010 et est appliquée depuis près de 9 ans. La période couvrant les années 1990 et le début des années 2000 a connu de nombreuses innovations, en particulier dans le domaine de la déjudiciarisation. Les programmes de déjudiciarisation ont commencé en 1992, portés par une organisation non-gouvernementale, et à ce jour la plupart de ces programmes sont proposés par des organisations non gouvernementales, qui reçoivent de l'État une subvention per capita pour les programmes qu'elles organisent pour les enfants en conflit avec la loi. La loi sur la justice pour enfants a établi un système d'accréditation nationale des prestataires de services et des programmes qu'ils offrent, les programmes devant respecter des critères minimaux et les prestataires de services devant rendre des comptes au ministère du Développement social (responsable de la déjudiciarisation). L'accréditation est renouvelée à intervalles périodiques (tous les quatre ans). Si les noms des programmes validés sont officiellement publiés dans le journal officiel, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure ces programmes s'inscrivent dans la justice restaurative, bien que la loi elle-même précise que plusieurs objectifs de déjudiciarisation prescrits par la loi englobent les principes de la justice restaurative (la déjudiciarisation doit « encourager l'enfant à être responsable

31. Julia Sloth-Nielsen et professeure à la Faculté de droit de l'Université du Cap-Occidental (Le Cap, Afrique du Sud) et enseigne le droit des enfants dans le monde en développement à l'Université de Leyde, aux Pays-Bas. Elle a travaillé sur la réforme du droit des enfants dans de nombreux pays subsahariens, comme le Lesotho, le Kenya, la Tanzanie, la Namibie, le Zimbabwe, le Botswana et le Mozambique, de même que dans son pays natal, l'Afrique du Sud. Elle a publié plus de 200 articles et chapitres d'ouvrages sur divers aspects des droits des enfants, la justice pour enfants et le droit de la famille.

du préjudice qu'il a causé » ; elle doit « permettre à ceux affectés par le préjudice d'exprimer leurs avis sur les conséquences subis » ; elle doit « encourager la réparation de la victime, sous la forme d'une indemnité ou d'un objet comme compensation du préjudice » ; elle doit « promouvoir la réconciliation entre l'enfant et la personne ou la communauté affectée par le préjudice causé par l'enfant » (section51 (b) ; (e) ; (f) et (g)).
Au-delà, la loi prévoit expressément la mise en place de conférences familiales en tant que forme de déjudiciarisation (section 61). Les conférences familiales sont décrites comme des procédures informelles qui rassemblent l'enfant inculpé et la victime, ainsi que leurs familles ou d'autres personnes appropriées, dans le but d'élaborer un plan indiquant comment l'enfant réparera les conséquences de l'infraction qu'il a commise. L'enfant et la victime doivent consentir à la tenue de la conférence familiale. Un agent de probation (c'est-à-dire un travailleur social) est mandaté par un magistrat pour convoquer la conférence familiale (voir, en général, la section 61 de la loi). Ce plan doit contenir des objectifs spécifiques que l'enfant devra atteindre (et leurs échéances), des informations détaillées sur tous les services et l'assistance à apporter à l'enfant et à l'un ou l'autre de ses parents, spécifier quelle personne ou organisation fournira ces services ou cette assistance, fixer les responsabilités de l'enfant et de ses parents, et inclure tout autre sujet, selon leur pertinence, concernant l'emploi ou l'éducation. Un rapport écrit de l'ensemble doit être établi.

La loi prévoit aussi des programmes de médiation victime-délinquant, qui diffèrent de la conférence familiale en ce qu'ils n'incluent que la victime et l'auteur de l'infraction, sans la famille et d'autres personnes de soutien. C'est pour cette raison que les organisations non gouvernementales et les agents de probation ne privilégient pas cette option, car ils préfèrent traiter avec un enfant de manière plus globale, c'est-à-dire dans le contexte de la famille et de la communauté.

La justice restaurative peut aussi être mise en œuvre après une condamnation, avant l'exécution de la peine : dans ce cas, le plan établi par la conférence familiale doit être approuvé par le juge d'application des peines (section 73(3)), et si le tribunal ne donne pas son approbation, il peut imposer une autre peine, mais doit fournir les raisons de la substitution du plan par la nouvelle peine. Le rapport annuel du ministère de la Justice 2017-2018 démontre que seulement quelques peines de cet ordre sont imposées chaque année à l'échelle nationale (1 en 2015-2016, 3 en 2016-2017 et 4 en 2017-2018). Le rapport annuel 2016-2017 sur la mise en œuvre de la loi sur la justice pour enfants fournit des chiffres sur les peines infligées depuis 2011 : elles sont passés d'un nombre record de 508 peines en 2012 à l'unique peine enregistrée en 2015-2016 comme indiqué plus haut[32]. Le rapport annuel 2017-2018 (le plus récent disponible) du ministère du Développement social donne des chiffres globaux sur la déjudiciarisation, mais ne les ventile pas selon les différents programmes vers lesquels les enfants en conflit avec la loi ont été orientés. Ainsi, il est impossible de savoir si les conférences familiales en tant qu'activité spécifique de déjudiciarisation ont été mises en œuvre sous leurs auspices.

L'enthousiasme suscité par la justice restaurative qui a conduit à l'élaboration des dispositions de la loi mentionnées ci-dessus semble s'être estompé de façon significative au fil du temps. Bien qu'elles soient spéculatives, plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer ce déclin.

En premier lieu, préparer la rencontre des participants et convoquer une conférence familiale requiert du temps. Il est bien connu que les agents de probation et les travailleurs sociaux sont surchargés de travail. Il est probable, de ce fait, qu'ils favorisent des options de déjudiciarisation moins intensives telles que les ordonnances de supervision et d'orientation (section 53(f)) et, de fait, le ministère du Développement social fait état d'un nombre significatif de visites à domicile (plus de 3000), ce qui tend à étayer cette théorie.

En second lieu, la participation des organisations non gouvernementales aux programmes de justice restaurative demeure obscure : la seule organisation nationale ayant une compétence dédiée à ce domaine a fermé ses portes à cause d'un manque de financement il y a quelques années, après 20 ans d'existence. Cette organisation proposait également des programmes de mentorat et de formation, ce qui n'est désormais plus possible. Pour les prestataires de services de déjudiciarisation accrédités, il est probable que l'organisation de programmes à destination de groupes d'enfants sera plus rentable en termes de coût et de temps que la tenue, l'une après l'autre, de conférences dédiées à un enfant délinquant et à la victime.

En troisième lieu, le temps s'est écoulé depuis la Commission de vérité de réconciliation et les beaux jours de la réforme de la justice pour enfants, la justice restaurative étant moins dans le viseur du public. De plus, des compétences ont été perdues dans ce secteur.
Il semble que des efforts particuliers devront être réalisés pour que les dispositions de la loi sur la justice pour enfants relatives à la justice restaurative soient ramenées à la vie.

Namibie
Le processus de réforme de la justice pour enfants en Namibie a été mené sur une très longue période (depuis 1994, date à laquelle le premier projet de loi a été préparé ; une version incomplète plus tardive est datée de 2012) et n'est pas encore terminé. En 2018, j'ai participé, comme consultante auprès du ministère de la Justice, à la préparation d'une version actualisée d'un projet de loi qui est censé être soumis au Parlement à tout moment. Toutes les versions précédentes et la version actuelle contiennent des dispositions élaborées en matière de justice restaurative. L'enthousiasme pour la justice restaurative reposait sur le partage des enseignements entre l'Afrique du Sud et la Namibie dans les années 1990 et sur une population réceptive aux principes et aux objectifs de la justice restaurative du fait même qu'ils sont en harmonie avec les principes de la justice coutumière.

Le projet de loi, dans sa version actuelle, met particulièrement l'accent sur les avantages que peuvent tirer tous les acteurs – enfant, victime et communauté – de la justice restaurative. La partie 2 du chapitre 7 est consacrée entièrement au processus de consolidation de la justice restaurative en tant que possibilité de déjudiciarisation, et permet à un agent de probation, un procureur ou un tribunal de s'y référer. Le processus pour appeler à une conférence familiale et la convoquer est expliqué en détail, ainsi que son résultat attendu, plus explicitement la formulation d'un plan écrit avec une ou des décisions appropriées à l'enfant (incluant la possibilité de l'orienter vers un programme de déjudiciarisation), sa famille et les circonstances locales, et conforme aux principes contenus dans la loi. Le plan doit établir les responsabilités de l'enfant, de ses parents (ou d'un adulte approprié en lieu et place d'un parent, ou un tuteur) ; établir les objectifs personnels de l'enfant, des parents de l'enfant ou de l'adulte approprié ; et inclure tout autre sujet pertinent

32. Il s'agit du dernier rapport interministériel déposé au Parlement. Par la suite, la loi sur la justice pour enfants a été modifiée pour permettre aux ministères de faire individuellement leur rapport.

relatif à l'éducation, l'emploi, les loisirs et le bien-être de l'enfant. Les dispositions permettant de contrôler sa mise en œuvre et le respect de ses conditions sont énoncées.

Bien que le projet de loi n'ait pas encore été déposé et finalisé, il est probable que ces dispositions seront maintenues, la justice restaurative bénéficiant d'un large soutien.

Zimbabwe

Les programmes de déjudiciarisation intervenant en amont des procès ont été instaurés au Zimbabwe en 2009. Si ces programmes de déjudiciarisation ont dans un premier temps étaient soutenus par des donateurs, en 2016, le ministère de la Justice, des Affaires juridiques et parlementaires a pris en charge l'emploi des agents affectés auxdits programmes. Seize agents sont désormais employés à temps plein par le ministère dans cinq programmes pilotes. Il existe actuellement 12 districts complètement fonctionnels dédiés à ce type de programme, et 5 autres dont la mise ne place est prévue pour l'été, avec 6 de plus à la fin de 2019. Selon une évaluation terminée en 2016, au Zimbabwe, 1728 enfants en conflit avec la loi ont été orientés vers des mesures alternatives au système officiel de justice pénale entre le 1er janvier 2013 et le 28 septembre 2016 (Association internationale de réforme pénale, 2016:8). Pendant cette période, seulement 429 enfants ont été déférés devant le système officiel de justice pénale, ce qui signifie que 80% des enfants en conflit avec la loi ont été orientés vers des mesures alternatives. En 2018, 595 sur 805 enfants (74%) ont bénéficié de programmes de déjudiciarisation.

À nouveau, l'Afrique du Sud, pays voisin, a renforcé les capacités du Zimbabwe pendant cette période antérieure à la mise en œuvre des programmes de déjudiciarisation, ce qui signifie que la justice restaurative était un objectif établi (Comité national des programmes de déjudiciarisation avant procès : Lignes directrices sur les programmes de déjudiciarisation avant procès, non daté, chapitre 4).

Le dialogue entre la victime et le délinquant est décrit comme une mesure essentielle de déjudiciarisation, qui promeut la justice restaurative. En tant que consultante, j'ai collaboré avec les parties prenantes dans le processus menant à l'adoption d'une nouvelle loi sur la justice pour enfants durant l'année 2019. J'ai observé que de nombreux cas de déjudiciarisation n'étaient pas finalisés à cause de l'incapacité de l'enfant ou de sa famille à indemniser la victime. De mon point de vue, il n'est pas seulement question de compensation dans la justice restaurative et, dans un pays dénué de ressources comme le Zimbabwe, cela ne devrait pas être un obstacle à la résolution des cas, car d'autres formes de réparation devraient être imaginées, telles que des excuses formelles ou une réparation symbolique.

Le projet de loi sur la justice pour enfants proposé au Zimbabwe[33] est à un stade avancé de préparation et sera certainement soumis au Parlement en 2020. Un objectif clé, selon le préambule, est de « consolider la notion de réhabilitation et de justice restaurative comme faisant partie intégrante du système de justice pour enfants ». Tout comme en Afrique du Sud et en Namibie, la justice alternative et restaurative est décrite dans des chapitres distincts, et suffisamment d'informations sont fournies pour permettre aux acteurs du secteur de mettre en œuvre les dispositions. Un agent chargé de programme de déjudiciarisation ou un agent de probation doit se charger d'organiser une médiation victime-délinquant ou d'autres processus de justice restaurative, et peut agir en tant que facilitateur ou désigner une personne qualifiée pour présider la médiation entre l'enfant et les autres personnes concernées. Le projet de loi, dans sa forme actuelle, prévoit que lors de la conférence familiale, l'infraction est discutée et un plan est élaboré pour aboutir à une réconciliation.

Il y a encore du chemin à faire avant que la loi soit finalisée et approuvée pour être soumise au Parlement, mais un travail considérable a déjà été fait en ce sens, et il existe un haut niveau de consensus quant au besoin et à la forme probable de la nouvelle législation.

2.1.7. L'OBSERVATION GENERALE N° 24 DU COMITE DES DROITS DE L'ENFANT, DATANT DU 19 SEPTEMBRE 2019 ET REMPLAÇANT L'OBSERVATION GENERALE N° 10 DE 2007

Par Marta Pascual[34]

Il y a encore du chemin à faire avant que la loi soit finalisée et approuvée pour être soumise au Parlement, mais un travail considérable a déjà été fait en ce sens, et il existe un haut niveau de consensus quant au besoin et à la forme probable de la nouvelle législation.

L'observation générale n° 24 du Comité des droits de l'enfant, qui contient 126 articles, traite de l'état de la justice pénale pour mineurs des dix dernières années. Au cours de cette période, différentes résolutions et mesures ont été adoptées pour les jeunes. Dans son observation, le Comité formule des critiques négatives sur l'utilisation permanente de peines privatives de liberté, ainsi que sur la tendance à la baisse de l'âge de la responsabilité pénale dans différents pays.

Dans le développement final de ce long document, le Comité fait part de ses préoccupations et recommande la mise en œuvre de mesures pour empêcher l'enrôlement d'enfants par les groupes armés, terroristes ou extrémistes. En effet, dans ces groupes, les enfants sont victimes de multiples violations, telles que la conscription, l'entraînement militaire, et peuvent être utilisés dans des actes terroristes, y compris des attentats-suicides.

Les médias ont relayé avec stupéfaction l'utilisation d'enfants comme boucliers humains ou le fait qu'ils sont victimes d'enlèvement, de vente, de traite, ou obligés de réaliser des tâches dangereuses telles que l'espionnage, les activités de surveillance ou le transport de matériel militaire.

Ainsi, le Comité appelle les États à traiter ces enfants comme des victimes et à s'abstenir de les persécuter et de les assimiler à ces groupes armés. De même, il les exhorte à se concentrer sur les pratiques restauratives telles que la déjudiciarisation ou les mesures alternatives à la détention.

33. Il s'agit d'une partie d'un projet plus vaste destiné à aligner de nombreux textes de loi sur la Constitution de 2013 du Zimbabwe.

34. Marta Pascual est juge en Argentine et présidente de l´AIMJF

L'observation n° 24 dédie une section à la justice coutumière, qui est un processus informel présentant l'avantage d'être rapide et à faible coût, tout en s'adaptant culturellement à l'environnement des enfants.

Le Comité souligne qu'il est prioritaire de réconcilier la justice coutumière avec le système de justice étatique, et de les regrouper en intégrant des aspects formels et informels dans l'exercice de l'administration de la justice.

S'agissant du système de justice juvénile, compatible avec la Convention des droits de l'enfant, le Comité reconnaît les efforts de certains États, mais aussi qu'il reste beaucoup à faire dans les domaines de la prévention et de la mise en œuvre de mesures alternatives, tout comme dans la fixation d'un âge minimum de la responsabilité pénale approprié. Il alerte également sur l'utilisation abusive de mesures de privation de liberté pour les jeunes et sur l'extension des périodes de prison préventive.

À partir de son article 7, l'observation commence à énoncer les principes de base de la justice juvénile.

Ainsi, en mentionnant la non-discrimination, le Comité fait référence à l'attention particulière qui doit être prêtée aux « délits d'état », qui ne sont pas considérés comme des délits lorsqu'ils sont commis par des adultes. Ces délits d'état se focalisent sur les groupes d'enfants vulnérables, tels que les enfants vivant dans la rue, ceux qui appartiennent à des minorités raciales, ethniques ou religieuses, les enfants aborigènes, handicapés ou récidivistes.

Les enfants dans ces situations, tout comme ceux qui traînent dans la rue ou ont fugué, devraient être visés par des mesures de protection, et leurs parents ou tuteurs devraient être soutenus, de sorte que les causes qui provoquent ces comportements soient prises en considération.

En ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant, le Comité souligne le caractère prioritaire de ce principe directeur pour les enfants, qui se différencient des adultes de par leur développement et leurs besoins. Ces différences sous-tendent l'idée d'une responsabilité différente des jeunes en conflit avec la loi par rapport aux adultes.

De ces différences découlent également la spécificité de la justice juvénile qui, sans perdre de vue la sécurité publique, doit s'éloigner de l'objectif traditionnel de la justice pénale (qui est la punition), en mettant en avant la réhabilitation des jeunes grâce aux principes de la justice restaurative.

S'agissant du droit d'être entendu, le Comité déclare que la voix de l'enfant dans le système de justice juvénile représente un instrument et une approche dans la satisfaction des droits des enfants.
En ce qui concerne le respect de la dignité, le Comité précise que la façon dont les enfants sont traités doit être conforme aux droits humains, mettre l'accent sur la réinsertion de l'enfant et promouvoir son autodétermination, afin qu'il assume un rôle constructif dans la société et exerce sa pleine citoyenneté.

À partir de l'énoncé 17, l'observation générale n° 24 décrit les éléments essentiels d'une politique ample de justice pour mineurs, à savoir :

a. La prévention du délit juvénil, en encourageant la formation des jeunes afin qu'ils puissent vivre responsablement dans leur communauté en assumant un rôle constructif.

Les programmes de prévention devraient se focaliser sur l'aide aux familles, en particulier celles qui sont en situation de vulnérabilité et de pauvreté, et inviter les écoles à enseigner des valeurs de base aux jeunes, à centrer leurs programmes éducatifs sur les jeunes à risque et les façons de les retenir dans les centres éducatifs.

b. La déjudiciarisation ou les mesures alternatives : l'observation recommande deux types d'intervention à utiliser dans le traitement des jeunes en conflit avec la loi :

- La déjudiciarisation en tant que mesure hors du système judiciaire ;

- Les mesures alternatives qui s'inscrivent dans la procédure judiciaire.

En ce qui concerne la première intervention, le Comité souligne l'efficacité des programmes alternatifs basés sur la communauté, tels que les travaux d'intérêt général, les activités de supervision ou d'orientation assurées par des travailleurs sociaux, les conférences familiales ou d'autres pratiques restauratives mises en œuvre par l'État à l'intention des jeunes délinquants.

Pour ce qui est de la seconde intervention, soit les mesures s'inscrivant dans la procédure judiciaire, il importe d'observer les principes d'un jugement équitable et d'une procédure régulière, en mettant en avant les mesures socioéducatives et en écartant le recours à l'enfermement.

c. S'agissant de l'âge minimum de la responsabilité pénale, point névralgique des réformes en Amérique latine, étant donné que les débats se sont focalisés sur cet objectif, il faut noter que cette question a représenté un obstacle au développement d'un système de justice juvénile conforme aux principes de la Convention. Dans de nombreux pays, comme l'Argentine, une législation nationale vétuste datant de l'époque militaire continue d'être en vigueur et n'a pas été adaptée aux normes du droit international.

Par conséquent, le Comité recommande que l'âge minimum de la responsabilité pénale ne soit pas fixé à un âge très bas, compte tenu de la maturité émotionnelle, mentale et intellectuelle de l'enfant.

Dans l'observation précédente datant de 2007, le Comité avait considéré que l'âge minimum absolu devait correspondre à 12 ans. Toutefois, dans cette nouvelle observation, il estime que cet âge est bas et précise qu'il devrait s'élever à 14 ans au moins, tout en faisant l'éloge des États qui l'ont fixé à 15 ou 16 ans.

Le Comité fait part de sa préoccupation quant à la situation des jeunes en conflit avec la loi qui se situent en dessous de l'âge de la responsabilité pénale, et la façon dont ils sont traités. Il demande que les rapports que lui présentent les États membres sur la question soient exhaustifs et détaillés.

d. Garanties d'un procès équitable : à la lecture de cette nouvelle observation, il apparaît que le Comité est préoccupé par la qualité et la capacité des personnes chargées, dans l'administration de la justice juvénile, d'assurer un traitement spécial et un procès équitable aux jeunes ayant commis des délits.

Se référant aux filles, qui sont peu nombreuses à passer par le système de justice juvénile, et mettant de côté le nombre de cas les impliquant, le Comité indique qu'il faut prêter une attention particulière à leurs besoins (santé, traitement psychologique ou psychiatrique) et prendre très au sérieux les cas qui révèlent des abus.

S'agissant de la présomption d'innocen-

ce, l'observation indique que la charge de la preuve incombe à l'accusation et précise que l'enfant délinquant jouit du bénéfice du doute. D'autre part, lorsque des jeunes impliqués dans une procédure judiciaire présentent un comportement suspect, qu'il soit dû à leur immaturité, la peur ou d'autres raisons, un tel comportement ne doit pas conduire le juge ou le tribunal à les considérer comme responsables au-delà de tout doute que pourraient déjà avoir les autorités.

L'observation approfondit la question du droit d'être entendu, principe que tout spécialiste distingue de l'écoute ou du simple procédé d'enregistrement ou de compte-rendu des propos de l'enfant dans la procédure. Étant donné que ce droit permet de comprendre la situation personnelle du jeune et de créer une empathie spéciale à l'égard de ceux qui sont jugés ou traités par la justice, il est fondamental pour garantir un procès équitable. Dès lors, il importe de traiter le jeune comme un participant de la procédure et non comme un objet passif, ce qui contribue à donner une réponse effective à son comportement, augmentant par la même occasion les possibilités de sa réintégration dans la communauté. Pour cela, il est nécessaire que durant la procédure, toutes les parties s'expriment dans un langage clair et compréhensible pour les jeunes.

Le Comité réitère la nécessité d'instaurer des délais courts, non seulement en ce qui concerne la durée de la procédure, mais aussi pour ce qui est de la notification des peines. À cette fin, il urge les États de fixer des délais à plusieurs étapes de la procédure : dès la commission du délit, au cours de l'enquête, lors de la décision du procureur et du prononcé du jugement final, ces délais devant être beaucoup plus courts que ceux des adultes.

En outre, le Comité regrette la tendance moderne qui consiste à appliquer des sanctions aux parents des enfants ayant commis des délits, étant donné qu'elle se fait au détriment des jeunes et empêche que les responsables des enfants assument leur rôle dans la réinsertion de ces derniers.

e. Dans ce paragraphe, le Comité insiste sur l'application de mesures alternatives qui peuvent intervenir aussi bien avant le procès que pendant toute la durée de celui-ci. Se référant aux dommages causés par la privation de liberté des enfants et des adolescents, le Comité recommande aux États d'établir une peine maximale dans les cas de délits juvéniles, insistant sur le fait que la réaction doit toujours répondre au délit commis et ne jamais se fonder sur la situation personnelle du jeune. Le Comité consacre deux articles à l'interdiction de la peine de mort et de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les jeunes délinquants.

f. Au sujet de la privation de liberté, l'observation précise que dans beaucoup de pays, les enfants sont détenus pendant de longues périodes de temps, en particulier dans le cas de détention provisoire, le recours à ce dispositif violant le principe de présomption d'innocence. La détention provisoire doit être d'une courte durée et faire l'objet de révisions périodiques.

Le Comité recommande que les États dictent des réglementations strictes en matière de révision de la prison préventive, cette révision devant être régulière et de préférence hebdomadaire.

En ce qui concerne le traitement et les conditions de privation de liberté, il est indiqué qu'elle doit s'effectuer dans des lieux prévus spécialement pour les jeunes et dans des endroits séparés des adultes. Pour ce qui est des jeunes condamnés qui sont sur le point d'atteindre la majorité, ils ne doivent pas être automatiquement transférés dans des prisons pour adultes.

Vers la fin de cette longue observation, le Comité insiste sur l'importance de compiler systématiquement des informations pertinentes pour l'administration de la justice juvénile. Cela est également important pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques tant préventives que répressives. Le Comité recommande que des travaux de recherche et des évaluations périodiques des pratiques menées avec des jeunes soient conduits, afin de mesurer l'effectivité des mesures adoptées, en particulier en ce qui concerne les mesures alternatives ou de justice restaurative.

2.1.8. ÉTUDE MONDIALE SUR LES ENFANTS PRIVÉS DE LIBERTÉ

Dans sa résolution 69/157du 18 décembre 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies a invité le Secrétaire général à faire réaliser une étude approfondie consacrée aux enfants privés de liberté. En octobre 2016, Manfred Nowak (Autriche) a été nommé en tant qu'expert indépendant chargé de conduire cette étude, qui constitue la première tentative scientifique, fondée sur des données mondiales, pour comprendre l'ampleur de la situation des enfants privés de liberté, ses éventuels motifs et ses causes profondes, et appréhender les conditions de détention et leurs effets préjudiciables sur la santé et le développement des enfants. L'étude recense également les meilleures pratiques alternatives à la privation de liberté mises en œuvre par certains États dans les six situations suivantes :

a) détention d'enfants au titre de l'administration de la justice ;

b) enfants emprisonnés avec leurs parents ou responsables ;

c) rétention liée à la migration ;

d) privation de liberté par le placement en institution ;

e) détention dans le cadre de conflits armés ;

f) détention pour des motifs de sécurité nationale.

L'étude propose des recommandations visant à aider les États et le système des Nations Unies à faire face à ce phénomène. Le rapport résume également les conclusions détaillées de l'étude, qui sera disponible en version papier, électronique et sera adaptée aux enfants. Elle a été élaborée dans le cadre d'un processus participatif, à l'issue de consultations régionales, sous-régionales, nationales et thématiques et de réunions d'experts. De nombreux gouvernements, organismes des Nations Unies et autres parties prenantes ont répondu de manière détaillée à un questionnaire qui leur avait été transmis en février 2018.

L'étude en anglais : https://undocs.org/A/74/136

L'étude en français : https://undocs.org/FR/A/74/136

2.2. COMMENTAIRE DE JURISPRUDENCE POURQUOI LA DECISION DU TRIBUNAL SUPREME FEDERAL (STF) QUI EMPECHE LA SURPOPULATION DANS LES CENTRES EDUCATIFS FERMES POUR MINEURS CREE-T-ELLE LA POLEMIQUE AU BRESIL?

Par Brigitte Remor De Souza May[35]

En mai 2019, le juge Fachin a connu un retentissement national suite à la décision du Tribunal suprême fédéral (STF) accordée dans l'Habeas Corpus collectif n° 143.988. La décision limite à 119 % le taux d'occupation des centres éducatifs fermés pour mineurs et oblige le transfert des adolescents des centres en excédent vers d'autres centres dont le taux d'occupation est inférieur au taux limite établi.

Un adolescent peut-il être privé de sa liberté ? Oui, s'il a commis des actes analogues à des crimes et, selon les termes de l'article 122 du Statut de l'enfant et de l'adolescent, en usant de violence et de menace grave (art. I).

Chaque État fédéral possède, sous la responsabilité du Pouvoir exécutif étatique, des centres chargés d'appliquer les mesures de privation de liberté ; quant aux mesures non privatives de liberté, elles relèvent des municipalités où réside l'adolescent.

Combien d'adolescents sont-ils privés de liberté dans le pays ? Les données publiées en 2018 et relatives à l'année 2015 montrent que 26 000 adolescents subissent une forme de privation ou de restriction de leur liberté. De ce total, 18 381 jeunes seraient détenus, soit 68 %.
Il existe dans le pays 484 centres pour l'exécution de la mesure socioéducative de détention, selon l'enquête annuelle du Système national des services socioéducatifs (SINASE) de 2015.

En 2012 déjà, le Conseil national de justice avait fait part non seulement de la précarité des centres éducatifs fermés dans certains États, mais aussi de la surpopulation, soulignant que le taux d'occupation au Brésil s'élevait en moyenne à 102 %.

En 2019, le Conseil national du ministère public a publié un document intitulé « Panorama de l'exécution des programmes socioéducatifs de détention et de semi-liberté dans les États du Brésil », qui met en avant la surpopulation dans plusieurs États, ainsi que le déficit de places vacantes.
Voilà pour le contexte. Allons maintenant dans le vif du sujet. En mai 2019, le juge Fachin a étendu, non sans retentissement national, les effets de la décision judiciaire qui avait été accordée le 16 août 2018 dans l'Habeas Corpus collectif n° 143.988 AGR / ES.[1]

La décision limite à 119 % le taux d'occupation des centres éducatifs fermés et oblige le transfert des adolescents des centres en excédent vers d'autres centres dont le taux d'occupation est inférieur au taux limite établi.

De plus, si le transfert n'est pas possible, le juge d'exécution des mesures socioéducatives doit étudier qui, des adolescents, peut être intégré à un programme semi-ouvert (art. 49, point II, de la loi n° 12.594 / 12), jusqu'à atteindre le taux d'occupation maximum établi.

Depuis lors, une controverse s'est déclenchée, sans pour autant « nier la validité constitutionnelle de la décision attaquée », comme l'a déclaré Márcio da Silva Alexandre.

On peut facilement constater qu'il n'y a pas eu de « décision de libération massive » à la suite de la décision, à l'inverse de ce que croient les médias sensationnalistes et les fondamentalistes de passage, que ce soit en 2018 ou en 2019. Le rapporteur a offert diverses alternatives.

Si les États ne possèdent pas de réseau adéquat pour la prise en charge des adolescents dans les centres éducatifs fermés, à qui la faute?

Le Statut de l'enfant et de l'adolescent a été créé en 1989. La loi qui régit la mise en œuvre des mesures socioéducatives (loi de SINASE) date de 2012, sans oublier toute la législation internationale sur le thème.

L'inertie de l'exécutif ne peut se comprendre que par l'inexécution constante et quotidienne du principe de priorité absolue de la part des gouvernants.

En outre, on ne peut avancer que les États ne connaissaient pas la réalité de l'exécution des mesures de privation de liberté sur leurs territoires, étant donné que la crise du système socioéducatif, en particulier dans le domaine de la privation de liberté, a été longue.

Toutes les enquêtes nationales, les visites dans les centres, ainsi que les rapports et les études ont largement révélé l'inconstitutionnalité de la situation. Le rapporteur lui-même mentionne, au sein des votants, l'existence d'actions civiles publiques.

Je suis arrivée à la conviction que la « controverse » n'a été soulevée que par le fait que nous ne sommes pas habitués à ce type de réactions plus fortes vis-à-vis du système de privation de liberté.

Souvent, les problèmes liés au système socioéducatif se règlent, par exemple, pour ne pas « désorganiser » le système [2], ou « permettre la surpopulation, s'il est démontré qu'il s'agit de la meilleure solution pour les adolescents détenus »[3], ou même la réaction aux interdictions des unités.[4]

Serait-ce que les « voix contraires » à la décision du juge Fachin furent surprises que l'on reconnaisse le fait que les adolescents impliqués dans la justice juvénile qui sont privés de liberté voient leurs droits reconnus ?

Le juge analyse plusieurs problèmes, allant des conditions minimales d'hygiène jusqu'au taux « d'occupation supérieure à la capacité projetée et au-delà des limites du raisonnable » et conclut :
« Les droits fondamentaux des adolescents détenus font l'objet de graves violations en raison de la surpopulation,

35. Brigitte Remor De Souza May, Master en sciences juridiques de l'Université de la vallée de l'Itajaí. Juge au Tribunal pour enfants et de la jeunesse du District de Florianópolis. Membre fondatrice de l'Institut brésilien du droit des enfants et des adolescents (IBDCria- ABMP), membre de l'Association des juges pour la démocratie.

c'est pourquoi les adolescents ne peuvent demeurer dans cette situation dégradante. »

Il se fonde également sur le principe constitutionnel de dignité de la personne humaine (Art. 1º, III, CF et art. 124, V, Loi 8.069 / 1990) :

« Le respect couvre l'obligation de l'État de fournir les conditions nécessaires à l'exécution des mesures socioéducatives qui concernent les adolescents en conflit avec la loi (art. 1, § 3, Loi 12.594 / 2012 - SINASE). »

Il invoque les normes de la Convention sur les droits de l'enfant, promulguée par le décret 99.710/1990, dans l'article 3 et l'article 37, qui apporte également une nouveauté au système socioéducatif, à savoir le principe de « numerus clausus » qui est « défini comme le principe ou le système d'organisation dans lequel chaque nouvelle entrée d'une personne dans un système pénitentiaire doit correspondre à au moins une sortie, de sorte que la relation "entrée-sortie" des détenus demeure toujours stable ou diminue ».

Le distingué juge déclare que « la solution, à savoir l'application du principe de numerus clausus, est, pour le moment, la solution la plus adéquate pour minimiser et stabiliser le contexte préoccupant ».

Il ajoute :

« Comme il a été indiqué au début, le principe de numerus clausus a récemment été mis en œuvre sur le plan international, et au niveau de l'action civile publique qui implique d'autres unités de détention (UNAI), la décision du juge de première instance qui établit, entre autres, l'observation d'un nombre maximum de détenus, soit 68 adolescents, sous peine d'amende journalière, a été maintenue dans le STF, dans le positionnement anticipé de la décision 823/ES, rapporteur juge Lewandowski. »

La décision du juge met l'accent sur le sujet en développement qui est privé de liberté et sur les conditions dignes que doit offrir le système pénitentiaire :

« Dans ce contexte, je reconnais que dans le cas de l'adolescent en conflit avec la loi, les mesures socioéducatives de privation de liberté doivent être mises en œuvre dans des établissements qui offrent des conditions dignes, tout en respectant la situation particulière de l'adolescent en tant que personne en développement. »

Il affirme également que « la tutelle protectrice, dès lors, dérive de l'effectivité directe et immédiate de la prévision explicite de la Constitution ».

Le juge Fachin est allé plus loin que la théorie de la protection intégrale, jusqu'au « devoir du juge d'harmoniser l'ordre avec les droits humains universels ». Ce mandat du juge a mis en lumière l'intransigeance sur la question de la surpopulation (définie à partir du taux limite de 119 % d'occupation dans les centres éducatifs fermés), dont avait déjà fait preuve le STF sur le thème des prisons.
Voyons cela : en ce qui concerne le système pénitentiaire brésilien, lequel abrite l'une des plus importantes populations carcérales au monde, on observe rapidement qu'il existe plusieurs précédents du STF, lequel a comparé le système à un « état inconstitutionnel » en 2015 (ADPF 347 MC / DF, rapporteur juge Marco Aurélio) et est allé jusqu'à déclarer des cas de « violation des droits fondamentaux causant des dommages corporels aux détenus » (RE 580.252, rapporteur juge Alexandre de Moraes).
Lors d'un vote, le rapporteur juge Alexandre de Moraes mentionne le rapport final de la commission d'enquête parlementaire de la Chambre des députés, qui conclut : « La surpopulation est peut-être la mère de tous les autres problèmes dans le système pénitentiaire. Les cellules surpeuplées sont la cause d'insalubrité, de maladies, de troubles, de rébellions, de morts, d'avilissement de la personne humaine » (RE 580.252, rapporteur juge Alexandre de Moraes).

Dans une autre décision rendue par le juge Marco Aurélio, ce dernier affirme : « En plus de ne pas servir la resocialisation des prisonniers, elle favoriserait l'augmentation de la délinquance, en convertissant les petits délinquants en "monstres du crime" » (ADPF 347 MC / DF, rapporteur juge Marco Aurélio).

Dans son vote, lors du recours extraordinaire n° 580.252 mentionné plus haut, le juge Teori Zavascki déclare : « Considérant qu'il est du devoir de l'État, soumis au système normatif, de maintenir dans ses prisons les principes minimaux d'humanité prévus dans le système juridique, il est obligé, en vertu de l'article 37, paragraphe 6, de la Constitution, d'indemniser les dommages avérés, y compris moraux, causés aux détenus en raison du manque ou de l'insuffisance de conformité aux normes juridiques relatives aux prisons. »

Lors du même vote, le juge Teori Zavascki s'exprime sur le « dysfonctionnement du système de sécurité publique, l'indigence carcérale représent[ant] seulement une partie – certes importante – d'un problème plus large qu'est le système de sécurité publique offert par l'État brésilien ».

La Cour suprême, dans le recours extraordinaire n° 580.252, reconnaît également le rôle du pouvoir judiciaire dans le thème de la surpopulation des prisons du pays : « Le pouvoir judiciaire aussi serait responsable, étant donné qu'environ 41 % des prisonniers seraient en détention provisoire et, qu'une fois jugés, la majorité d'entre eux seraient acquittés ou condamnés à des peines alternatives. »

Sans aucun doute, d'après les enquêtes nationales, le manque d'organisation du système judiciaire, lequel possède un nombre réduit de tribunaux pour enfants et de la jeunesse dans le pays, et bien moins encore de tribunaux d'exécution des mesures socioéducatives, joue un rôle.

N'oublions pas, cependant, que depuis 2016, le précédent n° 56 de la Cour suprême, qui a valeur contraignante, prévoit que dans le cas d'un détenu adulte, le manque d'établissements pénitentiaires adéquats n'autorise pas le maintien du condamné dans un régime pénitentiaire plus sévère.

De plus, en 2018, la Cour suprême a déclaré de façon claire que ce précédent s'applique explicitement dans le système socioéducatif (HC 157228 / SC - Recours ordinaire en HC, juge Gilmar Mendes).

Même ainsi, la décision fut conforme à la Résolution du Conseil national de justice, dont la politique institutionnelle est de promouvoir l'application de peines alternatives, s'appuyant sur l'approche restaurative, pour remplacer la privation de liberté (Résolution n° 288/2019).
Dans ce contexte, comme le montrent les propos ci-dessus, la décision du juge Fachin respecte la Constitution fédérale, la loi, les traités internationaux, et ne contredit pas la position de la Cour suprême vis-à-vis des affaires pénitentiaires.

Cette décision devrait être lue par chacun d'entre nous.

Comme le rappelle Márcio da Silva Alexandre, la loi établit que c'est « le

droit de l'adolescent, dangereux ou non, bon ou mauvais, violent ou non, d'effectuer sa "peine" dans une unité de privation de liberté dans laquelle il y a une place vacante. Dès lors, si aucune place n'est vacante, la loi ordonne qu'il soit transféré vers un régime semi-ouvert. Et cela, même s'il a commis un délit en usant de violence ou de menace grave ». Toutefois, d'autres critiques visent la décision. Elles se fondent sur des raisons diverses, par exemple le fait d'établir un pourcentage au-dessus de la capacité prévue, serait une violation des droits. Néanmoins, la discussion sur la capacité d'occupation dans les unités socioéducatives et son pourcentage n'est pas nouvelle, ni même ponctuelle.

En 2015, le juge Dias Toffoli a maintenu le règlement de l'État de São Paulo, qui permettait un dépassement de 15 % de la limite des places vacantes prévues dans les unités d'exécution des mesures socioéducatives dans l'État de São Paulo (disposition n° 1.436 / 07, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de l'État de São Paulo, articles 6 et 7, paragraphe unique RE 405267).

Ici, le critère retenu était l'organisation du système et la garantie de la proximité de l'adolescent par rapport à sa famille, le juge soulignant que l'on ne peut retirer « aucun "bon fruit" de l'illégalité déclarée par le Conseil national de justice en relation avec les articles 6 et 7, paragraphe unique, de la disposition n° 1.436 / 07, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de l'État de São Paulo ».

Le juge a considéré qu'« au contraire, le respect effectif d'une telle décision désorganisait le système de gestion de l'administration des unités chargées de l'exécution des mesures socioéducatives de détention, dans l'État de São Paulo, minant effectivement l'intérêt supérieur des adolescents soumis à ce type de mesure. »

Dans leur critique de la décision du juge Fachin, Assis da Costa Oliveira et Luanna Tomaz de Souza analysent trois points qu'ils considèrent importants et résument leur point de vue de la façon suivante :

« Cette logique a installé de façon durable l'absurde et ratifie la violation des droits des adolescents qui demeurent dans cette situation. Elle autorise l'État à agir de façon illégale en bénéficiant d'une autorisation judiciaire. Le pouvoir judiciaire légitime désormais la négligence de l'État qui, non seulement ne résout pas le problème de la surpopulation dans le système socioéducatif, mais entraîne également de plus en plus d'adolescents dans ce dernier. »

Les auteurs Assis da Costa Oliveira et Luanna Tomaz de Soyza défendent l'utilisation non négociable de la capacité maximale des établissements, ainsi que celle du principe de numerus clausus. Selon eux, il s'agit des meilleurs critères objectifs.

Les critiques portant sur l'ajustement du pourcentage sont extrêmement pertinentes.

Toutefois, indépendamment de ce sujet, la décision du juge Fachin a marqué une étape importante dans la visibilité de la situation du système socioéducatif national.

Dès lors, pourquoi une telle controverse ? Serait-ce que l'on se soit habitué à « invoquer de manière sélective des raisons étatiques pour nier spécialement à une catégorie déterminée de sujets le droit à l'intégrité physique et morale » ? (Vote du juge Teori Zavaski dans RE 580.252). Ou faut-il y voir la cause de l'intériorisation de notre autoritarisme ? Ou bien de la déshumanisation de l'autre, de l'acceptation d'un système socioéducatif chaotique ?

Ou bien de l'illusion du fait que « dans le néolibéralisme, l'État pénal rendra compte du conflit social juvénile » à travers la « criminalisation des conséquences de la misère » ? [5]

Selon moi, la controverse ne s'explique que par la perpétuation des violations des droits par un État qui fragilise notre démocratie fatiguée.

Taiguara Libano Soares et Souza nous préviennent qu'en fragilisant la démocratie, l'État policier (Foucault) ou criminel (Wacquant) se répand, tandis qu'on assiste à une recrudescence des mesures de contrôle social, « car la recherche de sécurité prend le pas sur la lutte pour la liberté, le discours sur la sécurité publique passe avant celui des droits de l'homme, et la protection de quelques-uns est privilégiée, au contraire de la protection de la collectivité. »

En renforçant le système de garantie des droits, nous avons le devoir de respecter la Constitution, les traités internationaux, la législation spécifique en la matière et nous nous devons de connaître la réalité du système socioéducatif de privation de liberté.

Comme Norberto Bobbio l'a défendu dans son livre L'età dei diritti, « le problème fondamental des droits de l'homme aujourd'hui n'est pas tant de les justifier sinon de les protéger. Ce n'est pas un problème philosophique mais un problème politique. »

C'est l'exercice concret de ces droits qui le rend vivant.

Notes :

[1] La décision originale a ordonné la libération d'adolescents dans des centres situés dans les États de l'Espírito Santo, Bahía, Ceará, Pernambuco et Río de Janeiro.

[2] « […] il n'y a pas de "bon fruit" dérivé de l'illégalité déclarée par le Conseil national de justice respectivement aux articles 6 et 7, paragraphe unique, de la disposition n° 1.436 / 07 du Conseil supérieur de la Magistrature de l'État de São Paulo. Le juge a considéré qu'« au contraire, le respect effectif d'une telle décision désorganisait le système de gestion de l'administration des unités chargées de l'exécution des mesures socioéducatives de détention, dans l'État de São Paulo, minant effectivement l'intérêt supérieur des adolescents soumis à ce type de mesure. » Journal n° 698. Suspension de la décision du Conseil national de justice : transfert de délinquants juvéniles et unités de détention (MS 31902 MC / DF).

[3] « Par conséquent, la personne la mieux à même de déterminer ou déterminer (sic) le transfert de l'adolescent dans une autre unité, en vue de respecter la mesure socioéducative, est le juge responsable du Tribunal pour enfants ou de la jeunesse, qui peut également permettre la surpopulation s'il est prouvé qu'elle est dans l'intérêt des adolescents détenus. […] Dès lors, le transfert d'unités des adolescents en conflit avec la loi doit être décidé par le juge du Tribunal pour enfants ou de la jeunesse, au cas par cas, avec l'intervention du ministère public, pour que leurs droits ne soient pas violés. »

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28SUPERLOTA%C7%C3O++E+ADOLESCENTE+E+ATO+E+INFRACIONAL%29&base=baseInformativo&url=http://tinyurl.com/y2wg4438

[4] Dans 2015 - Rcl 22618 / RJ, juge Marco Aurélio, où il a été requis du Bureau du défenseur public « l'interdiction ou, successivement, le respect de la capaci-

té maximale d'une unité déterminée », la Cour de Río de Janeiro soulignant que « la recherche de solution aux problèmes rapportés qui ont supposément isolé la resocialisation des adolescents détenus pendant des années, n'étant pas l'interdiction, à ce moment, même partielle, ou y compris la limitation à un certain nombre de détenus, en résumé, la meilleure réponse à donner par le pouvoir judiciaire. »

[5] Loic Wacquant. Castigar a los pobres: la nueva gestión de la miseria en los Estados Unidos. (Punir les pauvres : la nouvelle gestion de la misère aux États-Unis, non traduit). RJ: Freitas Bastos, 2001.

3. SUJETS D´ INTERET GENERAL

3.1. APPROCHES THÉORIQUES

3.1.1.Le rôle des preuves médico-légales dans les procédures liées à la protection de l'enfance. Par Peter Johnstone (Australie)

Par Peter Johnstone[36]

Introduction

Les affaires de syndrome du bébé secoué font partie des affaires les plus chargées en émotions, controversées et difficiles traitées par le Tribunal pour enfants de Nouvelle-Galles du Sud, qui a compétence pour légiférer dans le domaine des soins et de la protection.

La prise de décision dans les procédures de soins et de protection est complexe et nécessite que les magistrats s'attellent à une tâche difficile, qui consiste à prendre en compte et à évaluer les multiples facteurs qui interagissent et influent sur la sécurité, la santé et le bien-être de l'enfant à l'avenir[37]. Cela est particulièrement complexe dans les cas impliquant des lésions non accidentelles à la tête, où il n'existe généralement pas de preuve directe de l'abus allégué et où les explications avancées par les soignants ne correspondent généralement pas aux constatations physiques[38].

Cet article a pour but d'explorer le rôle des preuves médico-légales dans les procédures de soins et de protection impliquant des lésions non accidentelles à la tête.

Les procédures de soins et de protection
Les procédures de soins et de protection sont engagées au sein du Tribunal pour enfants de Nouvelle-Galles du Sud conformément à la Loi de 1998 de la Nouvelle-Galles du Sud sur l'enfance et la jeunesse (soins et protection) ou « Loi relative aux soins et à la protection » (« Care Act », en anglais).

L'application de cette loi repose sur le principe primordial selon lequel, dans toute action ou décision concernant un enfant, sa sécurité, sa santé et son bien-être sont primordiaux[39]. Ce principe prévaut sur toute autre considération, même dans les cas où il entre en conflit avec les droits ou les intérêts des parents.

Lors de décisions importantes prises dans le cadre de la Loi relative aux soins et à la protection concernant des questions telles que le rétablissement des liens familiaux, la prise de contact, la responsabilité parentale et le placement de l'enfant, le critère approprié à retenir est celui du « risque inacceptable de dommages vis-à-vis de l'enfant », tel que défini par la Haute Cour dans la décision M c. M [1988] HCA 68.

Les preuves dans les procédures de soins et de protection
Le Tribunal pour enfants dispose d'un large pouvoir discrétionnaire pour accepter des preuves dans les procédures de soins et de protection, telles que la preuve par ouï-dire. Dans d'autres tribunaux, de telles preuves ne seraient pas recevables. Néanmoins, il doit tirer ses conclusions à partir d'éléments qui sont satisfaisants, autrement dit probants, pour ne pas prendre de décisions qui pourraient sembler fantaisistes, arbitraires ou sans fondement[40].

Lorsqu'il examine des cas de soupçon de lésions non accidentelles à la tête, le Tribunal est fréquemment tenu de prendre en considération et d'évaluer les preuves issues de témoignages d'experts, en particulier médicaux. Il s'agit de témoignages d'opinion.

Bien que le Tribunal pour enfants ait un large pouvoir discrétionnaire d'accepter des preuves, dans les affaires où il existe des preuves scientifiques d'experts, le Tribunal a tendance à appliquer les règles habituelles en matière de preuves relatives au témoignage d'expert[41].

Dans l'affaire Makita (Australie) Pty Ltd c. Sprowles, le juge Dyson Heydon, alors juge à la Cour d'appel de Nouvelle-Galles du Sud, a résumé le droit applicable en matière d'admissibilité de la preuve d'expert[42] comme suit :

1. il doit exister un champ de « connaissances spécialisées » dans lequel le témoin démontre qu'il est devenu un ex-

36. Juge, Président du Tribunal pour enfants de Nouvelle-Galles du Sud (Australie)

37. Kozlowska, K, et Foley, F, 'Attachment and Risk of Future Harm: A Case of Non-Accidental Brain Injury' (2006) 27(2) Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 75.

38. Department of Family and Community Services (NSW) and the Bell-Collins Children [2014] NSWChC 5.

39. Loi de 1998 sur l'enfance et la jeunesse (soins et protection) de Nouvelle-Galles du Sud, art. 9 (1)

40. JL c. Secretary, Department of family and Community Services [2015] NSWCA 88 at [148]; voir aussi Sudath c. Health Care Complaints Commission [2012] NSWCA 171 at [79].

pert, grâce à une formation spécifique, ses études ou son expérience ;

2. l'opinion proférée doit être « entièrement ou substantiellement basée sur l'expertise du témoin » ;

3. dans la mesure où l'opinion est fondée sur des faits « observés » par l'expert, ils doivent être identifiés et prouvés par l'expert pour être recevables ;

4. dans la mesure où l'opinion est basée sur des faits « assumés » ou « acceptés », ils doivent être identifiés et prouvés de quelque autre manière ;
il doit être établi que les faits sur lesquels l'opinion se base en constituent un fondement approprié ; la preuve de l'expert doit expliquer comment le domaine de « connaissances spécialisées » dans lequel le témoin est expert, et sur lequel l'opinion est « entièrement ou substantiellement fondée » s'applique aux faits assumés ou observés de façon à formuler l'opinion avancée.}

Les médecins ne devraient pas sortir de leur champ d'expertise. Par exemple, un praticien généraliste ne devrait pas se risquer à exprimer un avis sur une question de psychiatrie, ou au moins devrait clairement indiquer que l'avis est basé sur un niveau limité de connaissances en médecine générale acquises à l'issue d'études ou d'une pratique généraliste. L'expert devrait clairement exposer toutes les pièces écrites prises en considération, et toute personne consultée, et préciser les aspects de ces preuves qui ont été retenus pour formuler l'opinion. Les experts médicaux devraient indiquer tout article ou étude ayant mené à leur conclusion, et devraient décrire le processus de raisonnement qu'ils ont suivi pour en arriver à telle opinion ou conclusion, et être à même de la défendre.

Les lésions non accidentelles à la tête

On ne peut analyser le rôle des preuves médico-légales dans les procédures de soins et de protection impliquant des lésions non accidentelles présumées à la tête sans essayer d'étudier les réalités actuelles des traumatismes crâniens chez les nourrissons.

Le problème des lésions non accidentelles à la tête a fait l'objet de désaccords profonds et quelquefois passionnés.

Les secousses pouvant infliger des lésions intracrâniennes aux nourrissons ont pour la première fois été décrites dans un article du British Medical Journal en 1971. La recherche sous-jacente, publiée quelques années auparavant, a porté sur des singes Rhésus. Dans le cadre de l'expérimentation, les singes ont été placés sur des chaises en fibre de verre montées sur des rails, leur tête pouvant librement tourner, puis ont été soumis à des accélérations similaires à celles que l'on retrouve dans les collisions de voitures. Par la suite, il a été découvert que certains des singes avaient souffert de lésions intracrâniennes et que quelques-uns présentaient des lésions concomitantes au niveau du cou. Dès lors, l'accélération rotationnelle d'une intensité significative pouvant causer des lésions intracrâniennes sans impact, et donc sans signes extérieurs de lésions, est apparue comme une explication des lésions chez les nourrissons qui étaient jusqu'alors inexpliquées.

En 1987, cependant, une importante étude sur 48 enfants âgés d'un mois à deux ans ayant des lésions suspectes dues à des secousses a été publiée dans le Journal of Neurosurgery. L'étude a conclu que les accélérations liées aux secousses étaient inférieures d'un facteur 50 par rapport à celles dues à des chocs. L'étude concluait ainsi :

« Nous pouvons conclure que le syndrome du bébé secoué, au moins dans ses formes les plus sévères, n'est pas habituellement causé par les secousses seules. Bien que les secousses puissent, de fait, faire partie du processus, il est plus probable que ces nourrissons souffrent de lésions dues à un impact par objet contondant. Le scénario le plus probable pourrait être celui d'un enfant secoué, puis jeté sur ou contre un berceau ou une autre surface, se cognant l'arrière de la tête, et subissant dès lors une importante et brève décélération. [43]»

Les lésions non accidentelles à la tête dans les procedures de soins

Dans les affaires impliquant des soupçons de lésions non accidentelles à la tête, le Tribunal pour enfants a la charge de décider si l'enfant a souffert d'un dommage significatif, ou s'il existe une possibilité réelle de dommage significatif à l'avenir. Il importe, dans ce processus de décision, d'établir s'il y a un risque inacceptable de dommage pour l'enfant, ou pour les frères et sœurs de ce dernier.

Prouver, selon la prépondérance des probabilités, que des blessures ont été causées par des abus et des actes non accidentels peut être complexe. Même dans les cas où le tribunal est capable de conclure que les blessures ont été causées par des abus, établir l'identité du coupable est souvent difficile, sinon impossible, étant donné que les circonstances des délits présumés ne sont pas précisément définies par les constatations pathologiques, et que les versions des auteurs des faits sont rarement précises et cohérentes[44].

Les preuves médico-légales dans les procédures de protection de l'enfance
Les procédures de soins et de protection impliquant des soupçons de lésions non accidentelles à la tête reposent souvent entièrement sur des preuves médico-légales.

L'examen des principes juridiques, tels qu'énoncés dans le jugement de la Haute Cour (Division de la famille) d'Angleterre et du pays de Galles du 29 mars 2012 (Re JS [2012] EWHC 1370 (Fam)), met l'accent sur l'importance des preuves apportées par des experts dans de telles procédures.

Premièrement, la charge de la preuve appartient au ministère des Communautés et de la Justice.

Deuxièmement, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités (voir Briginshaw c. Briginshaw [1938] HCA 34). Si le ministère prouve, selon la prépondérance des probabilités, qu'un enfant a subi des lésions non accidentelles infligées par l'un de ses parents, le Tribunal pour enfants pourra traiter ce fait comme réel et toutes les décisions futures concernant son avenir seront basées sur cette constatation.

Troisièmement, la constatation des faits dans les cas de suspicion de lésions non accidentelles doit être fondée sur des preuves. Comme l'a observé Lord Justice Munby dans la décision Re A (A Child) [2011] EWCA Civ 12 de la Cour d'Appel d'Angleterre et du pays de Galles :

« Cela va de soi que la constatation des faits doit être basée sur des preuves, y compris les déductions qui peuvent être raisonnablement établies à partir des preuves, et non sur des suspicions ou des spéculations. »

Quatrièmement, lorsqu'il considère des cas présumés de violences envers des enfants, le Tribunal doit prendre en compte toutes les preuves et au-delà considérer chaque élément de preuve dans le contexte de toutes les autres preuves.
Comme l'a observé Dame Elizabeth But-

43. Duhaime, A, et al, 'The Shaken Baby Syndrome: A Clinical, Pathological, and Biomechanical Study' 22 (1987) Journal of Neurosurgery 409.

ler-Sloss dans la décision Re T [2004] EWCA Civ 558, [2004] 2 FLR 838 (paragraphe 33) de la Haute Cour de justice (Division de la famille) de 2013 :

« Les preuves ne peuvent pas être évaluées et estimées séparément. Le juge, dans ces affaires difficiles, doit prendre en considération la pertinence de chaque élément de preuve par rapport aux autres preuves, et avoir un aperçu de l'ensemble des preuves pour conclure si l'affaire portée à sa connaissance par les autorités locales a été établie selon les normes de preuve appropriées ».

Cinquièmement, les preuves recueillies lors des procédures impliquant des allégations de lésions non accidentelles à la tête sont des preuves de l'ordre de l'expertise médicale venant de divers spécialistes.

S'il est vrai qu'une attention particulière doit être portée à l'opinion des experts médicaux, ces opinions doivent être considérées dans le contexte de toutes les autres preuves. Les rôles du tribunal et de l'expert sont distincts. C'est au tribunal qu'il revient de confronter les preuves apportées par les experts aux autres preuves.

Sixièmement, lors de l'évaluation du témoignage de l'expert, il convient de garder à l'esprit que les affaires portant sur des soupçons de syndrome du bébé secoué reposent sur une analyse multidisciplinaire d'informations médicales menée par un groupe de spécialistes, chacun apportant sa propre expertise pour résoudre le problème. Le Tribunal doit faire en sorte que chaque expert reste dans les limites de sa propre expertise et s'en remette, le cas échéant, à l'expertise d'autres experts.

Septièmement, le témoignage des parents et de toute autre personne responsable du nourrisson est de la plus haute importance. Il est essentiel que le Tribunal évalue clairement leur crédibilité et leur fiabilité. Ils doivent pouvoir pleinement participer à l'audience et il est probable que le Tribunal donne beaucoup de poids à l'impression qu'il se fait de ces personnes.

Huitièmement, il est courant dans ces affaires que les témoins mentent au cours de l'enquête et de l'audience. Le tribunal doit être prudent et garder à l'esprit qu'un témoin peut mentir pour des raisons diverses, telles que la honte, une confiance malavisée, la panique, la peur, la détresse, et le fait qu'un témoin a menti à propos de certains faits ne signifie pas qu'il a menti sur tout.
Neuvièmement, comme l'a noté Hedley J dans le jugement Re R [2011] EWHC 1715 Fam du Tribunal du comté de Carlisle :

« La question de savoir si la cause est inconnue doit être prise en compte dans chaque cas où apparaît une étiologie contestée donnant lieu à un dommage important.

Cela n'affecte ni la charge ni le niveau de preuve. Il s'agit simplement d'un facteur à prendre en compte pour décider si le lien de causalité avancé par celui qui supporte la charge de la preuve est établi selon la prépondérance des probabilités ».

Le Tribunal doit résister à la tentation de croire qu'il est toujours possible d'identifier la cause des lésions d'un enfant.
Enfin, lorsque l'on recherche les auteurs des lésions non accidentelles et que l'on cherche à savoir si cette personne se trouve dans le groupe des auteurs possibles, il importe de contrôler qu'il existe une possibilité éventuelle ou réelle qu'elle en soit l'auteure, comme cela a été établi dans North Yorkshire County Council c. SA [2003] 2 FLR 849. Pour pouvoir conclure qu'une personne en particulier est l'auteure des lésions non accidentelles, le tribunal doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités. Il est toujours souhaitable, dans la mesure du possible, que l'auteur des lésions non accidentelles soit identifié, à la fois dans l'intérêt public et dans l'intérêt de l'enfant. Toutefois, dans les cas où il est impossible pour le juge de conclure selon la prépondérance des probabilités, par exemple, que le parent A plutôt que le parent B est responsable des lésions, dès lors, aucun des deux ne peut être exclu du groupe d'auteurs possibles et le magistrat ne devrait pas s'efforcer de conclure à la responsabilité d'un des deux parents.

Les témoins experts sont uniquement là pour assister le Tribunal dans les cas présumés d'abus d'enfants et ne sont pas là pour défendre une partie. Ils ont le devoir primordial, au-delà de toute obligation envers une partie ou une autre personne qui les engage, d'assister le tribunal de façon impartiale sur les questions relevant de leur champ d'expertise. En définitive, les témoins experts assistent le Tribunal sur des questions déterminantes pour la sécurité, la santé et le bien-être d'un enfant ou d'un jeune.

Conclusion

Les preuves médico-légales jouent un rôle central dans les procédures de soins et de protection impliquant des soupçons de lésions non accidentelles à la tête. Elles sont cruciales pour réaliser les évaluations requises conformément à la Loi de 1998 sur l'enfance et la jeunesse (soins et protection), autrement dit pour savoir si un enfant nécessite des soins et une protection, et s'il existe une possibilité réaliste de rétablir les liens familiaux.

Les magistrats comptent sur les professionnels médicaux pour conduire des investigations cliniques opportunes et de haute qualité dans les cas présumés de syndrome de bébé secoué en vue de faciliter le processus de prise de décision au sein du Tribunal.

Prendre une décision dans les procédures de soins et de protection est complexe, et nécessite que les tribunaux accomplissent une tâche difficile, à savoir considérer et évaluer les multiples facteurs qui se combinent pour influer sur la sécurité, la santé et le bien-être de l'enfant à l'avenir[45]. Le processus est particulièrement complexe dans les cas de lésions non accidentelles à la tête où il n'y a généralement pas de témoins des abus allégués et où les explications avancées par les professionnels de santé sont souvent incohérentes par rapport aux constatations physiques.

S'il faut porter une attention appropriée à l'opinion des experts médicaux, ces avis doivent être considérés dans le contexte de toutes les autres preuves. Les rôles du tribunal et des experts sont différents. C'est au tribunal que revient le rôle de confronter les preuves apportées par les experts avec les autres preuves disponibles. Ainsi, il peut y avoir des cas où, bien que les preuves ne permettent pas de diagnostiquer une lésion non accidentelle, un magistrat, après avoir examiné tous les éléments de preuve, en vient à une conclusion différente des experts médicaux.

J'espère que cet article a apporté un éclairage sur ces questions, particulièrement pour ceux qui pourraient être en contact avec les procédures de soins et de protection traitées par le Tribunal pour enfants de Nouvelle-Galles du Sud.

45. Kozlowska, K, et Foley, F, 'Attachment and Risk of Future Harm: A Case of Non-Accidental Brain Injury' (2006) 27(2) Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 75.

3.1.2. QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR LES LIENS DE FRATRIE DANS LES AFFAIRES DE GARDE D'ENFANTS

Par Ken Lewis[46]

1ère partie : Définitions de l'attachement et du lien

Bien que les termes « attachement » et « lien » renvoient tous deux à une relation affective entre des êtres humains, en principe, ils sont radicalement différents. Tandis que le patrimoine génétique influence la plupart des aspects du développement humain, il n'a pas d'incidence sur l'attachement, qui est un processus basé sur l'expérience. Les parents et autres personnes responsables de l'enfant forment l'attachement des enfants. Les enfants peuvent être attachés aux parents, mais non l'inverse. L'attachement est synonyme de sécurité. Quand un enfant est effrayé ou dans le besoin, il va livrer une variété d'indices verbaux et non verbaux qui indiquent son niveau d'inquiétude ou de besoins. Lorsque la personne qui s'occupe de l'enfant lui apporte des réponses satisfaisantes constantes et continues, alors il se produit chez l'enfant le phénomène d'attachement.

Lors d'une affaire d'adoption initialement traitée par la Cour supérieure du district de Columbia, un témoignage d'expert a différencié ces termes. Il décrivait l'attachement comme :
« … un phénomène psychologique, qui commence tôt dans la vie d'un enfant, par lequel il en vient à voir une personne prenant soin de lui… comme son parent psychologique. Le parent psychologique est essentiellement cette personne… l'enfant en vient à voir cet individu comme la personne… sur qui il compte pour satisfaire ses besoins affectifs. L'attachement est cette profonde relation affective qui ne se noue au fil du temps qu'avec la constance, la stabilité, et la consistance… » T.W.M. v T.B., 18 A. 3rd 815 at fn. 4 (2011).

La « théorie de l'attachement »[47] postule que l'attachement commence dans la seconde moitié de la première année de vie du nourrisson. À partir de ce moment, si le nourrisson est pris en charge par une personne (généralement un parent, mais pas nécessairement) sur laquelle il dépend pour répondre à ses besoins affectifs, alors le nourrisson commencera à devenir « attaché » à cette personne. L'expert, dans le jugement T.W.M. cité plus haut, a expliqué comment le lien était différent :

« Le lien reflète un phénomène très différent de l'attachement. Le lien, au fur et à mesure que les enfants grandissent, a tendance à se référer à la relation qu'a un enfant avec les autres personnes envers qui il n'a pas d'attachement profond » Id.

En bref, l'attachement est un phénomène unique qui se produit chez les nourrissons, tandis que le lien se réfère à une relation affective entre les enfants plus âgés et les adultes.

2ème partie : Classification du lien en droit de la famille

Dans le domaine du droit de la famille, « attachement » et « lien » ont une importance significative. Par exemple, en droit de l'adoption, les tribunaux prêtent une attention particulière à la force de l'attachement du nourrisson, et au dommage potentiel qui pourrait résulter d'une rupture de l'attachement. Il y a longtemps, un juge de la Cour suprême du New Jersey s'est exprimé sur le sujet de la manière suivante :

« Une relation filiale s'enracine dans les tous premiers stades du développement de l'enfant et celle-ci ne peut pas être détruite ou modifiée sans risque de blessure affective pour l'enfant. » Sees v Baber, 377 A. 2nd 628; 74 N.J. 201 at 222 (1977). Opinion émise par le juge Handler.

On retrouve dans la jurisprudence cette idée de lien, en particulier dans les affaires de modification de garde parentale, particulièrement lorsqu'il y a déménagement. Par exemple, quand une mère demande à modifier la garde de son fils de sept ans, vivant à Washington DC, afin de le rapprocher d'elle, à Virginia Beach, le père s'y est opposé. La Cour d'appel du district de Columbia a confirmé la décision du tribunal, et s'est exprimée sur la question du lien :

« Le tribunal a noté que même si le travail antérieur [du père] exigeait de lui des déplacements multiples et réguliers, ce dernier avait été capable de maintenir une étroite relation avec [son fils] … Le tribunal a aussi noté que le lien entre [le père et le fils] était fort et serait maintenu si [le fils] déménageait, puisque sa mère était convaincue que [leur fils] devait entretenir une relation étroite avec son père et a indiqué qu'elle souhaitait favoriser cette relation. » Estopina v O'Brian, 68 A. 3rd 790 at 794-795 (2013)

En bref, si les termes « lien » et « attachement » dans le langage profane peuvent signifier une simple relation affective, en droit de la famille, les définitions revêtent une importance particulière.

3ème partie : Les évaluations disponibles dans les études sur le lien

Une étude sur le lien comprend une évaluation des interdépendances affectives entre l'enfant et le parent, ou l'enfant et le proche, ou encore l'enfant et le non-proche, ou enfin entre les membres de la fratrie.

L'histoire des études sur le lien remonte aux années 1930 quand Mary Ainsworth et d'autres chercheurs ont commencé à analyser les interactions entre la mère et l'enfant[48]. Dans les années 1960, elle a mené des expériences et a étudié le comportement du nourrisson quand d'autres chercheurs entraient dans une pièce. En se basant sur son étude, elle a avancé sa théorie de la relation du nourrisson avec le parent. Ses expériences ont posé les fondations des études modernes sur le lien. Id.

Quand des travailleurs sociaux sont sollicités pour conduire une « étude sur le lien » en connexion avec des affaires de placement en famille d'accueil et d'adoption, les outils professionnels à leur disposition sont les suivants :

- Questionnaire sur l'attachement prénatal (AAQ*)
- Mesure du lien intime (IBM*)
- Inventaire de l'attachement maternel (MAI*)
- Évaluation de la relation mère-enfant (MCRE*)

46. Ken Lewis, titulaire d'un doctorat. Durant les années 1970, Ken Lewis a enseigné le travail social dans plusieurs universités (Kansas, Caroline du Nord, Institut Tuskegee) et s'est rendu à la Central Washington University en tant que professeur invité chargé d'études interculturelles. Ces trente dernières années, il a dédié tout son travail à la question du placement d'enfants et a été nommé par des tribunaux tuteur ad litem ou évaluateur en matière de placement d'enfants dans plus d'une vingtaine d'États des États-Unis et au Canada. Ses spécialités sont l'aliénation parentale et les affaires de placements d'enfants entraînant des conflits importants.

47. La théorie de l'attachement a été développée dans les années 1940 et suivantes par John Bowlby et plus tard par Mary Ainsworth. La théorie postule que l'attachement affectif précoce de l'enfant envers un adulte (habituellement un parent) est un mécanisme essentiel pour la santé affective ultérieure de l'enfant et que l'absence d'un tel attachement peut conduire à une carence affective.

48. Voir David E. Arredondo, M.D., et Hon. Leonard P. Edwards, Attachment, Bonding, And Reciprocal Connectedness, 2 Journal for the Center for Family, Children and the Courts 109 at 110 (2000), non traduit. Les auteurs identifient les questions pratiques qu'un juge devrait poser lors de l'évaluation du rapport d'étude sur le lien, p. 121-22.

• Instrument de mesure de la réceptivité de l'enfant envers la mère (MIRI*)

• Inventaire de l'attachement prénatal (PAI*)

• Dépistage des troubles du lien mère-enfant (SMIBD*)

Une évaluation du lien peut aussi être importante dans les affaires de placement d'enfants, et plus précisément lorsqu'il existe un litige à l'une des étapes avancées de ce type d'affaire.[49] Évaluer et comparer la force des liens entre parent et enfant, et entre les membres d'une fratrie, peut fournir des données utiles au juge dans une affaire litigieuse. Parmi les domaines d'enquête de la plupart des évaluations de placement figurent la « qualité des attachements parentaux de l'enfant… [et] les relations de l'enfant avec la fratrie ».[50] L'échelle de perception de Bricklin (BPS*) est un outil fréquemment employé dans le cas de placement d'enfants qui permet d'évaluer la perception qu'a un enfant âgé d'au moins six ans de chacun de ses parents.

Certains auteurs estiment que l'évaluation du lien est un instrument de mesure importante dans les évaluations de placement d'enfants[51]. Par exemple, O'Donohue et al[52]. ont développé un modèle pour les évaluations des placements judiciaires. Ils ont identifié cinq facteurs pertinents selon des critères à la fois légaux et psychologiques qui peuvent limiter de façon substantielle le contact d'un enfant avec un parent. Parmi ces cinq facteurs, « Attachement médiocre » est en première position.[53]

L'outil le plus important pour évaluer le lien est peut-être le professionnel expérimenté. Dans les évaluations de placement d'enfants, des évaluateurs expérimentés se basent sur des observations directes réalisées dans le foyer.

« Voir les parents et les enfants ensemble dans l'intimité du foyer offre une vision de l'affaire qui ne peut pas être reproduite ailleurs ».[54]

L'Association américaine de psychiatrie a reconnu l'observation directe comme un instrument précieux pour évaluer le lien. Dans son rapport,[55] le groupe de travail…

« a suggéré que lors d'évaluation du lien parent-enfant, le psychiatre devrait observer les interactions entre l'enfant et le parent et mesurer si le parent est capable de faire preuve d'empathie et de communiquer avec l'enfant. » id, p.6

De nombreux professionnels ont écrit sur le placement d'enfants et les évaluations du lien. Dans les décisions judiciaires relatives aux placements d'enfants, qu'il s'agisse d'un litige dans le cas de placement familial ou de garde d'enfants contestée, une évaluation de la force ou de la faiblesse du lien affectif entre deux êtres humains devrait constituer une donnée utile. Ce lien peut être entre l'enfant et le parent, entre l'enfant et un proche, entre l'enfant et un non-proche, ou entre les membres de la fratrie. Le dernier lien est généralement le lien le plus durable.

4ème partie : les liens au sein de la fratrie dans les ouvrages spécialisés

Les ouvrages spécialisés sur la fratrie présentent divers types de « fratrie », tels que la fratrie composée de frères et sœurs ayant les mêmes parents, la fratrie recomposée suite à remariage, ou celle[56] où un ou deux enfants, ou plus, ont un parent en commun. Même des proches ou des non-proches qui vivent ensemble dans le même foyer s'appellent quelquefois eux-mêmes « frères » et « sœurs ». Ces termes peuvent être biologiques, juridiques, familiers, mais surtout affectifs.[57]

Le lien de fratrie est significatif à cause de sa durée de vie. Les jeunes frères et sœurs partagent souvent des expériences familiales, des pratiques culturelles et des interactions importantes avec leurs proches à mesure qu'ils grandissent ; et ils survivent généralement à leurs parents. En 1982, un psychologue du développement de l'Université de Cambridge a publié un livre sur les relations au sein de la fratrie qui explore de nombreux aspects du lien de fratrie au cours d'une vie. Le livre s'intitule avec justesse : « Sibling Relationships: Their Nature and Significance Across the Lifespan » (Les relations de fratrie : leur nature et leur importance au cours d'une vie, non traduit).[58]

En 1992, deux psychologues pour enfants ont publié un ouvrage composé d'une série complète d'articles sur des sujets relatifs au lien de fratrie. Cet ouvrage s'intitule : « Children's Sibling Relationships: Development and Clinical Issues » (Les relations entre enfants d'une fratrie : Questions cliniques et de développement, non traduit). Il aborde la relation de fratrie comme une connexion affective spécifique qui débute dans l'enfance et se poursuit tout au long de la vie. L'ouvrage comprend dix chapitres, les cinq premiers portent sur le développement du lien de fratrie et les cinq suivants traitent de préoccupations cliniques.

Les ouvrages spécialisés sur le lien ne sont pas limités à un champ d'étude particulier. C'est plutôt le contraire qui est vrai. John Bowlby, fondateur de la théorie de l'attachement était un psychiatre britannique ; Mary Ainsworth, qui développa la théorie plus avant, était une psychologue canadienne. Au-delà des psychiatres et psychologues, les ouvrages spécialisés sur le lien de fratrie recouvrent plusieurs champs professionnels d'étude, tels que :

Sociologie
Marilyn Ihinger-Allman[60]

Travail social
Ellen Ryan[61]

Soins du nourrisson
Marsha. Marecki[62]

Développement de l'enfant
Jean Piaget[63]

Psychologie sociale
Michael E. Lamb[64]

Études familiales
Mark E. Feinberg,
Université d'État de Pensylvanie

5ème partie : Le lien de fratrie en droit

L'importance des relations de fratrie a été reconnue depuis longtemps à la fois par les tribunaux fédéraux et ceux des États. Alors que le terme « lien » n'a pas encore été défini en droit, l'importance du lien comme concept a été de fait reconnu par la loi. Il y a trente ans, dans le district de Columbia, un des facteurs légaux pour prononcer la déchéance des droits parentaux reposait sur l'examen de la qualité des interactions entre les membres d'une fratrie.

« Pour déterminer si… la relation parent-enfant [devrait] être rompue, un juge devra considérer … la qualité des interactions ou des relations de l'enfant avec sa… fratrie… » D.C.Code §16-2353(b)(3) (1989).[65]

En outre, dans la loi fédérale, la séparation des fratries était quelque chose à éviter à cause du préjudice potentiel qu'elle pouvait causer. La « rupture du lien » n'est pas un terme légal en droit fédéral, mais le concept est clairement reconnu :

« Le tribunal a aussi établi que, du fait

49. Ndt : en anglais.
Voir : Child Custody Evaluations by Social Workers: Understanding the Five Stages Custody, par l'auteur (non traduit). Les étapes deux, trois et quatre impliquent souvent des problèmes de liens

50. Steven Herman, et al. (1997). "Practice Parameters for Child Custody Evaluation, "Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychology," Volume 36, 139 (non traduit).

51. Selon le Conseil national des juges pour enfants et de la famille, « la fonction principale de l'évaluateur est de rassembler et d'interpréter les informations et de restituer ses résultats au tribunal ».

52. O'Donohue, W., Beitz, K.& Cummings, N. (2007). "A Model for Constructs Relevant to Child Custody Evaluations." Journal of Forensic Pathology Practice, Volume 7, issue 4, 125- 139 (non traduit).

53. Les cinq facteurs étaient : (1) attachement médiocre, (2) compétences parentales médiocres, (3) instabilité émotionnelle / trouble mental du parent, (4) instabilité de l'environnement et (5) conflit exacerbé.

54. Dianne Skafte, Child Custody Evaluations: A Practical Guide, p. 73 (non traduit).

55. Andre .P. Derdeyn. Child Custody Consultations: Report of the Task Force on Clinical Assessment in Child Custody, Washington, D.C. American Psychiatric Association, 1982 (non traduit)

56. Dictionnaire Médical Mosby, 9ème édition 2009, Elsevier. Les demi-frères et sœurs se réfèrent eux-mêmes souvent de manière affectueuse en tant que « demi-frère » ou « demi-sœur ».

57. Ainsi, l'expression « frérot » (d'autres termes existent en français) est un terme affectueux pour « frère » dans une situation où il n'y a pas de relation de famille sur le plan juridique.

58. Michael E. Lamb et Brian Sutton-Smith, Sibling Relationships: Their Nature and Significance Across the Lifespan, New York: Psychology Press, 1982 (non traduit).

59 Michael E. Lamb et Brian Sutton-Smith, Children's Sibling Relationships: Developmental and Clinical Issues, Hillsdale NJ: Erlbaum Publishers, 1992 (non traduit).

60. Marilyn Ihinger-Allman, "Sibling and Stepsibling Bonding in Stepfamilies," in K. Pasley (ed.) Remarriage and Step-parenting: Current Research and Theory 54-73, Guilford Press, 1987 (non traduit).

61 Ellen Ryan, "Assessing Sibling Attachments in the Face of Placement Issues," Clinical Social Work Journal, Springer Press, 2002 (non traduit).

62. Marsha. Marecki, "Early Sibling Attachment," Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing Vol 14, 418-423, 1985 (non traduit).

63. Jean Piaget, La naissance de l'intelligence chez l'enfant, Delachaux & Niestlé, 1936, réédition 1977. Sa théorie du développement cognitif a révolutionné notre manière de penser le développement de l'enfant.

64. Michael E. Lamb, "Father-Infant and Mother-Infant Interaction in the First Year of Life." 48 Child Development 167-181, 1977 (non traduit).

65. Ces facteurs légaux ont été invoqués comme motif d'appel par un père dans l'affaire Spires c. Spires, voir infra. p. 10.

que [le frère et la sœur] avaient une étroite relation affective, une séparation serait préjudiciable aux deux membres de la fratrie, et qu'éviter une telle séparation répond aux exigences de la Convention de La Haye ». Ermini v. Vittori, 758 F. 3ème p.153-160 (2014).

Le même principe de non séparation de la fratrie est présent dans le droit de l'adoption à l'échelle fédérale. La Loi de 2008 sur la promotion de liens favorisant la réussite et l'augmentation du nombre d'adoptions[66] a modifié la loi fédérale en exigeant des États qu'ils « fassent des efforts raisonnables pour placer les fratries dans les mêmes familles d'accueil, de parenté ou adoptives, à moins que cela ne soit contraire à la sécurité ou au bien-être de quelque membre de la fratrie » 42 U.S.C. §671(a), telle que modifiée.

La Loi de 2008 susmentionnée a démontré l'importance des liens de fratrie, en imposant aux États l'obligation de s'assurer que les visites entre les membres de la fratrie aient bien lieu pendant et après le placement en famille d'accueil. Elle a conditionné le versement des crédits fédéraux aux États à leurs efforts raisonnables pour assurer les contacts au sein de la fratrie après qu'un enfant a été retiré de sa famille et ultérieurement.

Le même principe relatif aux liens de fratrie est explicitement adopté dans la plupart des États. Par exemple, en Pennsylvanie, la doctrine juridique pour permettre à la fratrie de rester ensemble autant que possible est appelée la « doctrine de l'unité familiale » Wiskoski v. Wiskoski, 427 PA Super, 531; 629 A. 2nd 996 (PA Super 1993).

« Sauf raisons impérieuses contraires, la politique de ce Commonwealth est que les frères et sœurs doivent être élevés ensemble autant que possible… Bien que ce facteur ne puisse pas être élevé automatiquement au-dessus de tous les autres facteurs, il doit être évalué conjointement avec les autres. C'est la « doctrine de l'unité familiale ». Id. §536

La question de savoir si le principe du lien de fratrie se référait seulement aux fratries biologiques ou s'il était étendu aux demi-frères et sœurs a été résolue il y a quatorze ans par la Cour suprême de Pennsylvanie. Répondant à l'argument, le juge en chef Nix a clairement écrit : « Ce principe n'est en aucun cas réduit par le fait que le troisième enfant dans cette affaire est un demi-frère » Albright v. Fetters, 421 A. 2nd 157 ; 491 Pa. 320 at 328, 1980.
La garde physique séparée des frères et sœurs fait généralement l'objet d'opposition car elle prive les frères et sœurs du bénéfice d'entretenir une relation constante. La règle n'est cependant pas gravée dans le marbre, et des circonstances particulières peuvent indiquer que la séparation peut être dans l'intérêt supérieur des membres de la fratrie. Bien qu'il existe une position de principe contre la séparation de la fratrie, il peut se trouver des raisons valables et convaincantes pour s'écarter de la règle générale.
Des raisons convaincantes pour diviser la fratrie peuvent en effet exister dans les circonstances suivantes : (a) une différence d'âge substantielle, (b) des circonstances médicales extrêmes, (c) des circonstances éducatives spéciales, et (d) une mésentente affective sérieuse entre les membres de la fratrie. La dernière condition renvoie à des situations où il existe une rupture significative du lien dans la fratrie.[67]

Tous les États exigent que les décisions de placements soient basées sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans la détermination de cet intérêt supérieur, au moins vingt-deux juridictions[68] identifient des facteurs de placement légaux qui incluent la mention de la relation de fratrie. Dans le district de Columbia, le facteur pertinent de placement est énoncé comme suit :

« Pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal considérera… l'interaction et la relation de l'enfant avec… sa fratrie… » D.C. Code§ 16-914(a)(3)(C).

Ce facteur a été souligné dans une affaire de la Cour d'appel du district de Columbia intitulé Spires v. Spires, 743 A. 2nd 186, D.C. Cour d'Appel (1999)

Dans cette affaire, le père a fait appel de la décision du tribunal qui accordait la garde des enfants du couple à la mère. Un des fondements du père pour faire appel était que le tribunal n'avait pas porté une attention adéquate aux relations de la fratrie. Le couple avait eu trois enfants et le père avait un fils d'une précédente épouse. L'agent de probation qui a mené une visite au domicile « attesta que les [trois] enfants étaient liés et avaient une relation très étroite avec [leur demi-frère] ». Id. 189. La décision du tribunal accorda également au demi-frère le droit de visite aux trois enfants du couple au domicile de la mère. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance en vue de maintenir et de favoriser les relations de la fratrie.

6ème partie : Considérations pour les juges

1. Il existe un seul facteur légal relatif à la garde des enfants qui traite de la relation de fratrie. Il est reconnu par la législation d'au moins vingt-deux États dans la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant. Un poids plus fort peut être accordé à ce facteur dans les décisions de placement.

2. La recherche penche clairement du côté des aspects positifs du lien de fratrie. Un lien fort entre deux membres d'une fratrie bénéficie à chacun d'eux ; et les effets peuvent signifier un soutien mutuel, une histoire partagée, et une amitié continue au cours d'une vie entière. « Les liens filiaux prennent racine dans les premières étapes du développement de l'enfant ». Juge Handler, ante. p. 4.

3. Lorsqu'un litige relatif à la garde d'un enfant est « centré sur l'enfant », les décisions de placement devraient bénéficier à l'enfant, même lorsqu'elles peuvent être défavorables aux adultes.

Références (en anglais) :

Ainsworth, M. D. S. (1978). The Bowlby-Ainsworth attachment theory. Behavioral and Brain Sciences, 1(3), 436–438.

Ainsworth, M.D., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Bowlby, John (1969). Attachment and Loss, Vol. 1, New York: Basic Books.
Dalton, Clare, et al. (2006) Navigating Custody and Visitation Evaluations…, National Council of Juvenile and Family Court Judges.

Lewis, Ken (2009). Child Custody Evaluations by Social Workers: Understanding the Five Stages Custody, National Association of Social Workers, NASW Press, Washington, DC.

Main, Mary, Hesse, Erik, and Hesse, Siegfried. "Attachment Theory and Research: Overview With Suggested Applications To Child Custody," 49(3) Family Court Review 426-463 (2011).

66. Ndt : Fostering Connections to Success and Increasing Adoption Act of 2008.

67. Durant les 30 années où j'ai mené des évaluations de placement d'enfants, j'ai recommandé une garde séparée dans seulement une affaire où il y avait une rupture existante du lien de fratrie entre deux frères. Il s'agissait d'une affaire de déménagement où il existait un rejet extrême ancien dans la fratrie, basé sur des convictions religieuses opposées et hostiles.}

68. Parmi ces juridictions, on trouve : Californie, Colorado, Connecticut, Géorgie, Hawaii, Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Missouri, Montana, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Vermont, Virginie, Virginie de l'ouest, et Wisconsin, de même que le district de Columbia et les Iles Vierges des États-Unis.

3.1.3. UN ESPACE D'ÉCHANGE ET DE RÉFLEXION : LE LABORATOIRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES DROITS DE L'ENFANT

Par Mona Paré[69]

Un espace d'échange et de réflexion sur les droits de l'enfant est ouvert à la communauté internationale des professionnels qui travaillent dans des domaines touchant aux droits de l'enfant. Cet article présente le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant, né au Canada, et qui cherche à développer un réseau international de chercheurs, professionnels et institutions s'intéressant aux enfants et à leurs droits.

Qu'est-ce le LRIDE?

Le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant (LRIDE) a été créé en 2007 à l'Université d'Ottawa, à la Faculté de droit, par les professeures Rachel Grondin, Mona Paré et Marie Pratte (aujourd'hui juge à la retraite). Le Laboratoire est un réseau de chercheurs et de praticiens, promouvant la recherche interdisciplinaire et le transfert de connaissances sur les questions relatives à la reconnaissance et à la mise en œuvre des droits de l'enfant. Ainsi, le LRIDE cherche à améliorer la protection des droits de l'enfant, tant sur le plan national qu'international. Pour ce faire, le LRIDE favorise le développement de la formation et de la recherche interdisciplinaires sur les droits de l'enfant et tend à mettre sur pied des collaborations au niveau national et international entre des chercheurs et des praticiens de divers milieux, rattachés à diverses disciplines. Il espère ainsi stimuler le transfert de connaissances entre le milieu universitaire et celui de la pratique, et ce dans les deux sens. Ceci assure la pertinence et l'utilité de la recherche, et sert ainsi de catalyseur pour la création de projets de recherche et de formation conjoints, ayant de véritables retombées pratiques. Les membres du LRIDE représentent différentes disciplines, provenant, à l'Université d'Ottawa, des facultés de Droit, Éducation, Sciences de la santé et Sciences sociales. À l'extérieur de l'université, les partenaires du LRIDE comprennent des institutions gouvernementales, non-gouvernementales et universitaires au niveau local, national et international.

La recherche

Les axes de recherche prioritaires du LRIDE sont : 1. L'enfant sujet de droit; 2. L'enfant et la famille; 3. L'enfant, l'État et la société. Ces thèmes permettent de traiter de sujets tels que la filiation et l'identité, la protection de l'enfance et la délinquance, la vulnérabilité et les groupes marginalisés, ou encore la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE).

Des projets de recherche conjoints entre chercheurs universitaires de différentes disciplines et entre universitaires et partenaires communautaires ont d'ores et déjà porté sur des thèmes comme l'intimidation en milieu scolaire avec le développement d'un outil d'évaluation fondé sur les droits de l'enfant; la prise en compte des droits des enfants dans les cas d'agressions sexuelles commises par les enfants et les défis que cela pose au niveau familial; l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école dans des contextes de langue minoritaire; ou encore la place de la parole de l'enfant dans les procédures de protection de l'enfance.

Les projets de recherche incluent aussi des recherches faites par les étudiants du cours « Droit de l'enfance » conjointement avec des organismes communautaires. Des groupes d'étudiants ont fait par exemple une étude comparative pour l'incorporation de la Convention relative aux droits de l'enfant au Canada pour le compte d'UNICEF Canada. D'autres étudiants ont fait des recherches pour un centre local de pédiatrie sociale. De plus, les étudiants peuvent soumettre leurs travaux résultant de recherches individuelles dans le cadre de leurs programmes de Licence/Baccalauréat et des études supérieures à un concours de rédaction sur les droits de l'enfant, que le LRIDE organise annuellement. Les lauréates du concours pour l'année 2019 sont Sidra Hashmi, étudiante inscrite au baccalauréat spécialisé bidisciplinaire en criminologie et études des femmes à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa et Amira Maameri, inscrite au Programme de doctorat en droit à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, en co-tutelle de thèse avec l'Université de Bordeaux. Nous invitons les lecteurs à lire les dissertations gagnantes.

Le texte de Sidra Hashmi a remporté le premier prix de la catégorie « Études de premier cycle » pour sa dissertation intitulée « Mundane Marginalization: A Criminological Analysis of the Immigration Detention of Children in Canada ». Sa dissertation traite de la détention des enfants dans le cadre de l'immigration. Elle en traite en tant que crime « banal » et soutient que la Convention relative aux droits de l'enfant est utilisée contre les intérêts des enfants immigrants et dans l'intérêt de ceux qui détiennent le pouvoir et pour le maintien des structures de marginalisation. Madame Hashmi prône l'adoption d'analyses qui vont au-delà des méthodes traditionnelles en criminologie, afin de créer une nouvelle infrastructure pour la société dans laquelle les droits sont une norme universelle. Elle appelle à de nouvelles recherches portant sur l'élargissement des définitions juridiques et communes des concepts clés afin de d'éviter la possibilité de les manipuler, comme c'est le cas quand l'État a le monopole sur l'interprétation de la Convention. La dissertation de Madame Hashmi, comme toutes les dissertations gagnantes de la catégorie « Études de premier cycle », a été publiée dans la revue Canadian Journal of Children's Rights/Revue canadienne des droits des enfants.

Le texte d'Amira Madame Maameri remporte la palme de la catégorie « Études supérieures » et est intitulé « L'Enfance autochtone et canadienne : Le Miroir de l'identité – Une quête légitime des mineurs autochtones du droit à la préservation de leur identité culturelle ». Dans

69. Mona Paré est professeure à la Faculté de droit, Université d'Ottawa (mona.pare@uottawa.ca)

70. Mona Paré, à gauche, et l´équipe du Laboratoire, la professeure Rachel Grondin et Marie Pratte, suivi par le logo du Laboratoire

ce texte, Madame Maameri traite de la situation des enfants autochtones au Canada du point de vue de la préservation de leur identité culturelle. En examinant la question de manière interdisciplinaire, elle parle de l'importance de tenter de pallier la difficulté d'intégrer les traditions juridiques des mineurs autochtones dans l'appareil juridique canadien et par là même de rassurer les mineurs autochtones face à leur sentiment d'insécurité culturelle. Selon Madame Maameri, la considération des ressources autochtones comme des sources d'inspiration serait le dénouement essentiellement fondamental à la guérison des enfants autochtones, qui sont brisés de l'intérieur. Cette étude invite à participer ensemble à la création de ponts d'intégration entre le droit et les sociétés interculturelles.

Le transfert de connaissances

Le transfert de connaissances au sein du LRIDE permet d'impliquer différents acteurs, incluant des étudiants, des chercheurs et des praticiens. Les étudiants participent au transfert de connaissances par la publication de blogues et l'exposé de leurs recherches lors de colloques du LRIDE. Ils bénéficient également d'une formation dans le cadre d'un cours de maîtrise intitulé « Les droits de l'enfant : une approche interdisciplinaire » et enseigné par plusieurs professeurs de facultés différentes. Cette année, des étudiants du cours « Droit de l'enfance » ont animé des ateliers pour des jeunes dans le cadre de l'initiative « Shaking the Movers » (STM), sur le thème de l'éducation et de la diversité, enseignant aux jeunes participants les droits des enfants et leur permettant de s'exprimer sur des sujets qui les touchent afin de transmettre leur parole aux décideurs. Cette initiative se fait en partenariat avec le Centre Landon Pearson pour les droits de l'enfant, instigateur du projet STM.

Un aspect important de la mobilisation des connaissances en matière des droits de l'enfant est l'organisation de conférences chaque année, auxquelles tous sont invités à participer. Le LRIDE organise des midi-conférences avec des conférenciers invités provenant du monde universitaire ou du monde de la pratique. De plus, le LRIDE organise un colloque interdisciplinaire annuel sur un sujet d'actualité, incluant « Jeunes filles et gangs de rue : association ou exploitation » (2008); « Les enfants à l'ère de la technologie : entre crainte et émerveillement » (2012); « Colloque international sur l'évaluation d'impact sur les droits de l'enfant (CRIA) » (2013); « Lutte contre la violence dans les écoles : approches fondées sur les droits de l'enfant » (2014); ou encore « Les implications de la légalisation du cannabis sur les droits de l'enfant » (2018).

En 2020, le colloque annuel du LRIDE sera intitulé « Accès et participation des enfants à la justice : Bilan critique ». Il aura lieu à l'Université d'Ottawa les 21 et 22 mai 2020 et réunira professionnels de la justice, chercheurs universitaires et spécialistes de domaines tels que la psychologie et le travail social. Le colloque vient appuyer les efforts en faveur d'initiatives promouvant la participation des enfants et leur accès à la justice aux niveaux interne et international, tels que l'appel à l'action pour la l'application aux enfants de l'objectif de développement durable no. 16. Ce colloque cherchera à circonscrire l'accès des enfants à la justice d'une manière globale, en répondant aux défis actuels, en soulevant des questions qui n'ont pas encore été posées et en apportant des nouvelles réponses aux problématiques existantes. Un appel à propositions a été lancé afin d'attirer des contributions permettant de faire un bilan critique de l'application de la justice aux enfants dans différents domaines du droit et dans différents secteurs de la vie des enfants (ex. l'éducation, les soins de santé, la justice pénale, les demandes d'asile, la protection de l'enfance); la participation des enfants à la justice au-delà des procédures judiciaires (modes alternatifs de résolution des conflits, justice réparatrice, défenseurs des enfants, etc.); l'accès de certains groupes d'enfants à la justice, tels que les enfants privés de libertés, les enfants migrants, les enfants en situation de handicap et les enfants autochtones; et la participation des enfants à la définition de la justice et de l'accès à la justice.

Ce colloque est le fruit d'un partenariat de recherche sur l'accès à la justice des mineurs, incluant des chercheurs des universités d'Ottawa, Leiden, Louvain (UCL), Aix-Marseille et Bordeaux, ainsi que d'autres partenaires comme le Centre interdisciplinaire des droits de l'enfant de Belgique, l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario et le Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne de l'Université d'Ottawa. Dans les années à venir, ce partenariat développera un réseau international de recherche sur la protection et la parole de l'enfant.

Une vision d'avenir?

Le LRIDE continue à développer des partenariats et des projets de recherche et de mobilisation des connaissances. Nous espérons que le dialogue continu entre personnes représentant différentes disciplines, entre les mondes universitaire, communautaire et gouvernemental, entre enfants, étudiants et professionnels permettra d'enrichir notre compréhension des droits de l'enfant et des situations dont il faut traiter de manière prioritaire.
Nous souhaitons que cette présentation du LRIDE encouragera toutes les personnes qui sont intéressées à pousser la réflexion sur les droits de l'enfant, à trouver des solutions à des problèmes de mise en œuvre des droits et à contribuer à la formation en droits de l'enfant, à participer à nos activités : visitez notre site Web, lisez les articles et blogues, suggérez des sujets de recherche et participez à notre colloque annuel!

4. INNOVATIONS ORGANISATIONNELLES ET METHODOLOGIQUES (LES BONNES PRATIQUES), INCLUANT CELLES CONCERNANT LA FORMATION

4.1 L'IMPORTANCE DE LA FORMATION JUDICIAIRE SUR LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE (UE) EN TANT QUE SOLUTION NON LÉGISLATIVE POUR LA PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS

Par Wojciech Postulski[71]

Les droits des enfants en vertu du droit de l'UE

Les droits de l'enfant font partie des droits de l'homme que l'Union européenne et ses États membres doivent respecter, protéger et remplir. La Commission européenne elle-même est guidée par les principes énoncés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant[72] auxquels tous les États membres de l'UE sont liés, ainsi que par d'autres recommandations ou lignes directrices internationales (telles que les lignes directrices du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants).

L'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne fixe l'objectif pour l'UE de promouvoir la protection des droits de l'enfant. En outre, la Charte des droits fondamentaux de l'UE garantit la protection des droits de l'enfant par les institutions et les États membres de l'UE lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union: l'article 24 sur les droits de l'enfant et l'article 31 sur l'interdiction du travail des enfants portent spécifiquement sur les droits de l'enfant.

L'acquis de l'UE et les documents relatifs aux droits de l'enfant sont nombreux[73].Par conséquent, le poste de coordinateur de la Commission pour les droits de l'enfant est particulièrement important ; il a été créé en 2007 à la suite de la Communication de 2006 intitulée « Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant »[74], coordonne les travaux entre tous les services de la Commission et veille à ce que les droits de l'enfant soient correctement pris en compte dans toutes les politiques et actions pertinentes.

En 2011, la Commission européenne a adopté un programme de l'UE sur les droits de l'enfant, qui définit une série d'actions concrètes par lesquelles l'UE peut apporter une valeur ajoutée aux politiques en faveur du bien-être et de la sécurité des enfants, notamment en promouvant une justice adaptée aux enfants, en informant mieux les enfants de leurs droits et en rendant l'internet plus sûr pour les enfants. Avec la nouvelle Commission européenne en place, la vice-présidente Šuica pour la démocratie et la démographie a été chargée de diriger les travaux sur une stratégie globale sur les droits de l'enfant, qui inclura un volet relatif à la justice adaptée aux enfants.

Une application efficiente et efficace

Toutefois, ce n'est pas l'absence de législation pertinente qui constitue le défi[75], mais plutôt le fait que cette législation n'est pas appliquée de manière efficace. Dans le contexte de l'application du droit de l'Union en général, la Commission européenne a déclaré que « un système d'exécution solide, efficace et efficient est nécessaire pour faire en sorte que les États membres appliquent, mettent en œuvre et [fassent] respecter pleinement le droit de l'Union et offrent des voies de recours adéquates aux citoyens ».[76] Ceci est très pertinent pour la question de la mise en œuvre de mesures garantissant les droits de l'enfant.

Le Congrès mondial sur la justice des enfants de 2018, organisé conjointement par l'Association internationale des juges et des magistrats de la jeunesse et de la famille, a déclaré « le besoin urgent et l'importance de renforcer et d'améliorer les systèmes de justice pour enfants »[77] et a demandé que des mesures soient prises pour faire en sorte que les professionnels de la justice soient dotés des compétences requises.

Cette déclaration rappelle le rôle essentiel que jouent dans ce domaine les personnes qui participent au service de la justice, principalement les juges, les procureurs et les avocats, ainsi que les autres praticiens du droit. Le rôle des praticiens du droit est de comprendre et de respecter les droits de l'enfant dans le cadre de l'application de la loi applicable. Par conséquent, il est essentiel que chaque juge et tout autre praticien du droit connaisse et comprenne le droit applicable et reconnaisse que le droit et les principes juridiques n'existent pas dans un vide. Les praticiens du droit opèrent publiquement au sein de la société et interagissent quotidiennement avec d'autres êtres humains,[78] y compris des enfants. Ils devraient connaître et comprendre le statut spécial et la position d'un enfant dans le système juridique et dans les procédures judiciaires.[79]

La question est de savoir comment permettre aux praticiens du droit de répondre au mieux à ces attentes. L'un des outils clés est la formation professionnelle, la formation des attitudes des praticiens et leur mise à disposition des connaissances et des compétences nécessaires.

La formation judiciaire européenne

La formation judiciaire européenne est importante pour tous les praticiens du droit, et en particulier pour les juges et les procureurs, afin qu'ils deviennent compétents pour la mise en œuvre du cadre législatif européen. La confiance et la compréhension entre les praticiens du droit veilleront à ce que les droits des personnes, y compris les droits des enfants, soient respectés de manière claire et cohérente. À la lumière des responsabilités qui lui incombent en vertu du traité de Lisbonne, la Commission a publié en 2011 une Communication intitulée « Susciter la confiance dans une justice européenne, donner une nouvelle dimension à la formation judiciaire européenne ».[80] L'objectif de cette communication était de donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne et

71. Chargé de mission, formation judiciaire européenne. Direction générale de la justice et des consommateurs, Commission européenne

72. Convention relative aux droits de l'enfant adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par la résolution 44/25 de l'Assemblée générale du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49.

73. Voir le résumé dans JUST.C2/MTF-NCP, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_acquis_rights_of_the_child_april_2019.pdf.

74. Bruxelles, 4.7.2006, COM (2006) 367 final, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:fr:PDF.

75. Plusieurs législations pertinentes ont été mises en place au sein de l'UE au cours des dernières années, par exemple: les règles de l'UE en matière de garanties relatives aux enfants suspects (Directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, JO L 132/1 du 21.5.2016) ; relatives aux enfants victimes (Directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, JO L 315/57 du 14.11.2012) ; relatives à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (Directive 2011/92/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, JO L 335/1 du 17.12.2011); dans le domaine du droit de la famille transfrontalier, le Règlement Bruxelles II bis qui régit les questions relatives à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (règlement (CE) no 2201/2003, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R2201. Le règlement a été révisé, le règlement Bruxelles II bis (règlement (UE) 2019/1111) relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu'à l'enlèvement international d'enfants s'appliquera à partir du 1 août 2022).

76. Communication de la Commission — Le droit de l'UE: une meilleure application pour de meilleurs résultats, Bruxelles, 21.12.2016, C (2016) 8600 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=fr.

77. Déclaration de Paris du 30 mai 2018, http://www.aimjf.org/download//Home/World_Congress_J4C_Paris_Final_Declaration_30_May_2018_FR.pdf.

78 Organisation internationale de la formation judiciaire, commentaire du principe no 8 de la déclaration sur les principes de formation judiciaire, 2017/11/08, Rec 1, http://www.iojt.org/~/media/Microsites/Files/IOJT/Microsite/2017-Principles.ashx.

79. Les principes de conduite judiciaire de Bangalore, 2002/11/25-26, p. 5.1., https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.

80. Communication de la Commission européenne COM (2011) 551 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0551.

de permettre à un nombre encore plus grand de praticiens du droit d'accéder à une formation de qualité sur le droit de l'UE.

La réalisation de cet objectif relève de la responsabilité conjointe de l'ensemble des parties prenantes. Les États membres, les conseils de la magistrature, les organismes de formation judiciaire nationaux et européens et les professions juridiques au niveau national et européen doivent s'engager à intégrer le droit de l'UE et sa mise en œuvre dans la formation nationale et locale et à accroître le nombre d'activités de formation dans le droit de l'UE, ainsi que le nombre de participants à ces sessions.

La Commission s'est engagée à continuer à fournir des fonds pour soutenir des projets de haute qualité ayant une incidence européenne significative. Elle soutient financièrement le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ), cofinance des projets de formation judiciaire transfrontière menés par de nombreux prestataires de formation judiciaire et publie un rapport annuel sur la participation des praticiens du droit à la formation sur le droit de l'UE au sein de l'Union européenne.[81] La Commission entend mettre les supports de formation existants à la disposition des praticiens de la justice pour leur propre usage et à la disposition des formateurs des praticiens du droit en tant que ressource pour leur travail dans le domaine des droits de l'enfant. La section spéciale du Portail européen e-Justice consacrée à la formation judiciaire est déjà riche en matériaux de formation sur les droits de l'enfant.[82]

Dans le cadre du programme « Droits, égalité et citoyenneté », la Commission européenne a également financé des projets visant à rendre les procédures judiciaires impliquant des enfants[83] plus adaptées aux enfants. En juin 2018, la Commission européenne a organisé une conférence sur le thème « Une justice adaptée aux enfants » et des systèmes intégrés de protection de l'enfance — enseignements tirés des projets de l'UE[84]. Parmi les pratiques mises en évidence lors de la conférence figurait le Barnahus qui fournit une collaboration pluridisciplinaire et inter-agences afin de garantir que les enfants souffrant de violences (que ce soit les victimes ou les témoins) bénéficient d'une réponse adaptée, coordonnée et adaptée aux enfants, dans le but d'empêcher les nouveaux traumatismes[85].

En outre, dans le cadre du suivi de la Communication de 2017 sur la protection des enfants migrants, une base de données est en place pour compiler des pratiques prometteuses en matière de protection des enfants migrants, notamment pour les professionnels du droit.[86]

La Commission européenne a évalué la stratégie européenne 2011-2020 en matière de formation judiciaire européenne en 2019[87]. Le rapport annuel 2019 sur la formation judiciaire européenne[88], publié récemment, complète cette évaluation et présente d'excellents résultats en termes de participation. L'objectif fixé en 2011, à savoir la participation de la moitié des praticiens du droit à la formation sur le droit de l'UE d'ici à 2020, a déjà été atteint en 2017. Au total, plus de 1 million de praticiens du droit ont suivi une formation sur le droit de l'UE depuis 2011. Le nombre annuel de participants a augmenté de 148 % entre 2011 et 2018. Rien qu'en 2018, plus de 190 000 praticiens du droit ont pris part à une formation sur le droit de l'UE. Entre 2011 et 2017, les échanges de juges et de procureurs entre les tribunaux et les parquets d'autres pays de l'UE ont augmenté de 190 %. Le soutien financier de l'UE à la formation judiciaire a presque doublé, s'élevant à plus de 150 millions d'euros sur toute la période. La stratégie a contribué à améliorer la connaissance du droit de l'UE tout en renforçant la confiance mutuelle entre les praticiens du droit. L'évaluation dresse un bilan des objectifs atteints et servira de base pour l'élaboration d'une stratégie post-2020 pour la formation judiciaire européenne.

Diversité de la formation judiciaire

Toutefois, il convient de souligner clairement que la formation des praticiens du droit devrait être dispensée à de nombreux niveaux différents et dans de nombreux domaines différents.

C'est aux États membres qu'incombe la responsabilité principale de la qualité et de l'ampleur de cette formation. Toutefois, les possibilités de formation nationales sont complétées par celles organisées au niveau de l'UE et (co-)financées par l'UE.

Les prestataires de formation judiciaire au niveau européen sont bien placés pour former des participants de différentes nationalités. Le principal prestataire de formation judiciaire au niveau européen est le Réseau européen de formation judiciaire (REFJ). Il convient également de mentionner l'Académie de droit européen (ERA), qui reçoit également un soutien financier de la Commission. Le Centre européen des juges et des avocats de l'Institut européen d'administration publique (EIPA) et l'Institut universitaire européen de Florence (EUI) sont d'autres organismes européens de formation impliqués dans la formation des praticiens de la justice. Ils reçoivent également un soutien financier de la Commission. Les réseaux et les associations de praticiens de la justice, tels que l'Association internationale des juges et des magistrats de la jeunesse et de la famille, pourraient également jouer un rôle central dans le développement des compétences de leurs membres.

Formation judiciaire sur les droits des enfants

Les droits de l'enfant sont l'un des nombreux sujets abordés par les activités de formation dispensées avec le soutien de la Commission. Ces activités sont axées sur les priorités de l'UE dans ce domaine. Les droits de l'enfant sont examinés lors des sessions de formation destinées aux juges et à d'autres professionnels de la justice, soit en tant que thème de formation spécifique pour des formations spécialisées, soit intégrés dans d'autres cours, tant du point de vue des droits de l'homme que du point de vue des droits procéduraux en matière pénale. D'autres formations ont pour objectif de sensibiliser le public et d'apprendre en pratique à appliquer les instruments de l'UE en matière de justice adaptée aux enfants. Néanmoins, la majorité de la formation est et devrait avoir lieu au niveau national.

Il ne fait aucun doute qu'il est possible et nécessaire de faire plus dans ce domaine. Dans le cadre du contenu de la formation des praticiens du droit européens, il convient d'accorder une attention particulière aux objectifs et à l'approche méthodologique de la formation sur les droits de l'enfant. Cela suscite de nombreuses questions. Quel devrait être le rôle de la formation dans la préparation des systèmes judiciaires afin de protéger efficacement et efficacement les droits de l'enfant? Comment préparer les praticiens à s'occuper des enfants dans leurs fonctions?

• Contenu de la formation sur les droits des enfants

• Les activités de formation destinées aux praticiens de la justice devraient porter principalement, mais pas exclusivement, sur les domaines suivants:

• rendre les systèmes de jus-

84. Rapport de la conférence: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/chfj_report_dgt_final.pdf et autres documents de référence: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/child-friendly-justice_en.

85. https://www.childrenatrisk.eu/promise

86. https://webgate.ec.europa.eu/protecting-children-in-migration/cim/good-practices-search

87. Commission européenne, Document de travail des services de la Commission sur l'évaluation de la stratégie européenne 2011-2020 en matière de formation judiciaire européenne, SWD (2019) 380 final, https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/training-legal-practitioners-and-training-practices_en.

88. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019_judicial_training_report.final_.web_.pdf

tice adaptés aux enfants (pour les magistrats, mais aussi pour le personnel des tribunaux et des parquets et les avocats);

• assurer le traitement des enfants d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur niveau de compréhension, en tenant compte de leurs besoins particuliers;

• communication avec des enfants dans la salle d'audience;

• les droits des enfants dans les systèmes de justice pénale, y compris le droit d'accès à un avocat et l'assistance d'un avocat;

• les questions concernant les enfants victimes et les témoins;

• le détournement et les alternatives à la détention des enfants;

• les garanties pour les enfants privés de liberté;

• le trafic d'enfants;

• le droit de la famille;

• les enfants non accompagnés migrants.

La formation des praticiens de la justice moderne n'est pas seulement une formation juridique. Cette formation doit être pluridisciplinaire et pratique, essentiellement destinée à la transmission de techniques et de valeurs professionnelles complémentaires d'une formation juridique. La formation au contexte social est un aspect important de la formation judiciaire, qui donne une appréciation de la situation humaine et de la société au sein de laquelle opèrent les juges et les autres praticiens du droit.

En ce qui concerne le droit d'être entendu, ainsi que sur d'autres aspects de la manière de rendre les systèmes judiciaires adaptés aux enfants, l'Agence des droits fondamentaux de l'UE a produit plusieurs rapports et documents[89] qui reflètent cette approche.

Système de jugement

Dans toute activité de formation judiciaire, les objectifs d'apprentissage devraient comprendre la compréhension des conditions communes susceptibles d'affecter la capacité d'un individu à comprendre le processus judiciaire, ou de communiquer efficacement avec les praticiens du droit concernés. Il est nécessaire de former à l'adaptation du comportement, de la langue et de l'approche des praticiens en fonction des besoins des enfants qui sont parties à une procédure, que ce soit en tant que victimes, suspects ou témoins. À cette fin, il est nécessaire d'élaborer et d'améliorer sans cesse les styles et techniques de communication de qualité. Ces questions font partie intégrante d'un concept plus large, à savoir le métier de juge. Le métier de juge est de plus en plus sollicité et proposé dans le cadre de la formation judiciaire. Le métier de juge couvre des sujets tels que la conduite judiciaire et l'éthique, la résilience judiciaire, les partis pris inconscients et la pratique des compétences dans la salle d'audience. Cette formation est nécessaire, étant donné que les praticiens entrent dans le système judiciaire avec leurs propres valeurs, opinions, idées préconçues et préjugés. La formation devrait donner un degré d'ouverture d'esprit et être prête à reconnaître et à traiter les idées préconçues et les préjugés pour faire en sorte que ceux-ci n'affectent pas le processus judiciaire.

Méthodes de formation
En ce qui concerne la formation des juges dans le contexte de la création de pratiques de justice adaptées aux enfants, la conception, le contenu et la mise en œuvre de la formation judiciaire sont de la compétence exclusive des autorités judiciaires, conformément au principe de l'indépendance de la justice. Toutefois, la formation dispensée par des juges ne fait pas obstacle à la participation d'experts, d'universitaires et d'autres spécialistes qui peuvent renforcer et compléter la formation, en particulier dans un domaine aussi sensible que celui des droits de l'enfant.

Dans le même temps, la formation croisée professionnelle devrait jouer un rôle important dans la formation aux droits de l'enfant, étant donné que tous les praticiens du droit impliqués dans des procédures impliquant des enfants devraient recevoir des soins et une sensibilité uniforme.

Quel devrait être le format exact de ces activités de formation dans le domaine des droits de l'enfant? La formation judiciaire doit recourir à toute une série de méthodes, en recourant à divers formats de formation à jour, avec une approche sur mesure. Il s'agit de sélectionner un format qui réponde aux besoins des participants et de disposer d'un ensemble de résultats d'apprentissage bien établis.

Conclusions

Les praticiens du droit ont besoin de renforcer leur capacité à protéger les droits des enfants et la formation judiciaire doit être considérée comme un outil essentiel pour répondre à ce besoin. La Commission continuera de soutenir les actions de formation judiciaire européenne et la formation des praticiens du droit demeurera élevée sur la liste des priorités. La nouvelle stratégie de la Commission pour la formation des praticiens du droit devrait être publiée en 2020. Dans un avenir proche, la Commission adoptera également une stratégie globale sur les droits de l'enfant, qui comprendra des actions visant à promouvoir davantage la justice adaptée aux enfants dans l'UE.

4.2 ENQUÊTE SUR LA FORMATION SPECIALISÉE EN DROIT DES ENFANTS – RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Par Eduardo Rezende Melo[90]

Dans l´édition de juillet 2019 de la Chronique, nous avons proposé une enquête sur la spécialisation des juges et magistrats en activité dans les tribunaux pour enfants.

Nous continuons à stimuler les membres à répondre au questionnaire de l´enquête, mais dans cette édition nous partageons les résultats préliminaires de sept pays en Europe et deux en Amérique du Sud. Les États-Unis n´ont pas encore répondu au questionnaire, mais ont envoyé des études sur la formation spécialisée. De la France nous utilisons des

89. https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view

90. Eduardo Rezende Melo est juge au Brésil depuis 1991, il est docteur en droit par l´université de São Paulo, Brésil, coordone la formation des magistrats en droits des enfants à l´École de Magistrats de São Paulo et est rédacteur en chef de la Chronique

informations reçues de l´École Nationale de la Magistrature il y a quelques années.

L´ENQUÊTE

Le questionnaire de l´enquête est structuré en cinq domaines, avec des questions spécifiques à chaque champ :

a) La formation requise sur les droits de l'enfant pour toute personne qui souhaite devenir juge ;

b) La formation sur les droits de l'enfant offerte aux juges une fois admis dans la Magistrature ;

c) La formation prévue pour les juges qui vont occuper un poste spécialisé dans les droits de l'enfant ;

d) La supervision des actions du juge (ou procédure équivalente) lorsqu'il occupe un poste spécialisé ;

e) Les mécanismes complémentaires de soutien au juge dans l'exercice de ses fonctions.

EUROPE

Sept pays en Europe ont répondu au questionnaire : la Belgique[91], la Croatie[92], l´Italie, les Pays-Bas[93], la Pologne[95], la République de Macédoine du Nord[96] et la Suisse[97]. La France n´a pas répondu, mais nous avons utilisé des informations reçues auparavant de l´École de la Magistrature.

Nous mettrons en évidence les principaux résultats des réponses dans chaque domaine de la recherche.

a) La formation requise sur les droits de l'enfant pour toute personne qui souhaite devenir juge ;

En Suisse, les juges sont élus par la population, pourtant on ne considère pasune spécialisation précédente nécessaire.

Dans la République de Macédoine du Nord, l´Académie de Juges et Procureurs promeut une formation initiale, autant théorique que pratique, et ensuite les juges doivent faire des examens sur les sujets abordés.

En Italie, le tribunal pour enfants (Tribunale per i Minorenni) est composé par des juges professionnels et honoraires travaillant ensemble dans tous les domaines : civil, criminel, adoption et administratif. La structure du tribunal est de deux juges professionnels et deux honoraires – un homme et une femme -, sauf dans deux situations : dans les procédures criminelles d´enquête préliminaire, la seule étape où les décisions sont monocratiques, prises par des juges professionnels ; et l´audience préliminaire, où n´interviennent que trois juges – un professionnel et deux honoraires.

Les juges professionnels doivent avoir passé un examen écrit (trois thèmes) et oral (dix thèmes). Les juges honoraires sont sélectionnés par un concours public dans lequel on évalue leur connaissance et expérience pour travailler avec les enfants et les questions de familles. En dépit de n´être pas évaluée, la connaissance des juges professionnels sur les droits des enfants est un aspect considéré.

En France, la formation initiale a une durée de 31 mois, ce qui inclut un stage dans un cabinet d'avocat pendant 6 mois ; une période de scolarité de 8 mois et un stage juridictionnel de 12 mois. La formation est interdisciplinaire et inclut des techniques de communication et un rapprochement des principaux partenaires institutionnels du juge des enfants.
En Belgique, Croatie, Pays-Bas et Pologne, il n´y a pas d´examen sur la connaissance des droits des enfants comme condition pour qu´un professionnel devienne juge.

b) La formation sur les droits de l'enfant offerte aux juges une fois admis dans la Magistrature ;

Dans la République de Macédoine du Nord, selon la loi sur la justice pour les enfants, les juges, les procureurs, les avocats et les professionnels du Ministère de l´Intérieur doivent passer par une formation, dans leur propre pays ou à l´étranger, mais dans la pratique, il n´y a pas assez des cours de formation en Macédoine et les juges n´ont pas de soutien financier pour participer à des cours à l´étranger.

En Italie, des cours de formation sont organisés par l´École Supérieure de la Magistrature, non obligatoires, mais fortement recommandés.

En Belgique, un programme de formation spécialisé avec une durée de 8 jours est obligatoire. L´accent de la formation est large, et inclut les cours suivants:

• Droit pénal pour mineurs, à la fois l´aspect matériel, et l'aspect procédural

• Droit de la famille, autant le droit matériel que procédural

• Les traités internationaux

• La fonction d´un magistrat des enfants et de la famille (le juge, le tribunal, le barreau)

• Introduction à la psychologie de l´enfance

• Introduction à la médiation

• Introduction aux instituts sociaux de référence pour les enfants

• Introduction aux services des travailleurs sociaux

• Introduction à l´écoute des enfants

Aux Pays-Bas, il y a un programme similaire, mais de cinq jours de formation.

En France, après avoir passé les différentes épreuves de classement, les auditeurs qui choisissent d´être juge des enfants devront passer une nouvelle période d´études à l`École de Magistrature : 6 semaines au cours desquelles seront de nouveau abordées, pour les futurs juges des enfants, l'assistance éducative (civil) et la prise en charge de la délinquance des mineurs de façon très approfondie, ce qui inclut parmi d´autres thèmes, les approches culturelles différentes par rapport aux immigrés et d´autres spécificités des mineurs. Ils visitent aussi un centre éducatif fermé et une prison pour mineurs.

En Croatie, il y a une formation initiale de six heures, mais pas interdisciplinaire.
En Pologne et en Suisse il n´y a pas de formation spécifique pour devenir juges.

c) La formation prévue pour les juges qui vont occuper un poste spécialisé dans les droits de l'enfant ;

Aux Pays-Bas, il y a un programme complémentaire pour devenir juge dans un tribunal pour enfants.

Le même chose se passe en Belgique.

En Italie, il n´y a pas de formation spécifique dans ce cas, mais, pour les juges professionnels, quelques tribunaux pour enfants organisent une période de mentorat. Pour les juges honoraires, quelques tribunaux pour les enfants organisent soit un mentorat, soit des formations spécifiques (comme à Milan).
En France, à l'occasion de chaque chan-

96. Réponses par Aleksandra Deanoska

97. Réponses par Anne-Catherine Hatt

gement de fonction tous les magistrats qui n'ont pas déjà exercé leur nouvelle fonction doivent suivre une formation de 5 semaines : 2 semaines théoriques à l'école de la magistrature et 3 semaines en stage. La formation continue est obligatoire pour tous les magistrats à raison de 5 jours par an. Les magistrats choisissent leurs actions de formation et sont donc invités à déposer leurs demandes de formation, qui peuvent être des formations théoriques ou des stages dans une autre institution.
En République de Macédoine, Croatie, Pologne et en Suisse, il n´y a pas de formation spécifique pour devenir un juge spécialisé.

d) La supervision des actions du juge (ou procédure équivalente) lorsqu'il occupe un poste spécialisé ;

Dans la République de Macédoine du Nord, le système général d´évaluation des juges s´applique aux juges des enfants, avec une évaluation par le conseil judiciaire.

En Italie, les juges professionnels doivent préparer un rapport périodique et les juges honoraires doivent être sélectionnés chaque trois ans grâce à des examens publiques.

En Belgique, il n´y a pas de supervision, mais les juges des enfants et de la famille ont un mandat spécial qui doit être renouvelé après quelques années, ce que veut dire qu´indirectement la qualité de leur service peut avoir, théoriquement, un poids dans l´appréciation de la revalidation.

En France, plusieurs activités de supervision sont offertes, ce qui inclut, par exemple, l´accompagnement de pratiques professionnelles des juges des enfants (4 réunions annuelles animées par un psychologue)
Il n´y a pas de supervision aux Pays-Bas, en Croatie, Pologne et en Suisse.

Les mécanismes complémentaires de soutien au juge dans l'exercice de ses fonctions.

Dans la République de Macédoine du Nord, il y en a des associés légaux, comme des travailleurs sociaux et psychologues, qui pourvoient un soutien professionnel aux juges.

En Belgique, il y a aussi des assistants légaux et des criminologues pour soutenir les travaux des juges, quoique pas en nombre suffisant.

Aux Pays-Bas, il y a le support d´avocats pour des orientations.

En Croatie, il y en a des formations par l´Académie Judiciaire et des travailleurs sociaux et pédagogues pourvoient aussi une orientation aux juges.

Il n´y a pas de soutien aux juges en Italie, Suisse et Pologne.

AMÉRIQUE DU SUD

Deux pays ont répondu au questionnaire de l´enquête en Amérique du Sud, l´Argentine et le Brésil. Les deux sont des fédérations, avec des particularités dans chaque province/état, ce qui empêche de présenter un portrait unique de chaque pays. Nous présenterons les tendances plus générales, parce que tous les provinces/états de ces pays n'ont pas répondu au questionnaire.

a) La formation requise sur les droits de l'enfant pour toute personne qui souhaite devenir juge ;

Dans toutes les réponses, autant en Argentine qu´au Brésil, il est affirmé que tous les professionnels désirant devenir juge doivent passer des examens, dans lesquels des questions sur les droits des enfants sont posées.

b) La formation sur les droits de l'enfant offerte aux juges une fois admis dans la Magistrature ;

En Argentine, il y a une variété de situations concernant cette question. Dans quelques provinces, il y a une formation préliminaire au commencement effectif du travail comme juge, mais la plupart des réponses révèlent que ce n´est pas la réalité dans la plupart du pays.

Au Brésil, une formation avec une durée de 480 heures est obligatoire pour tous les professionnels approuvés par l'examen public pour devenir juge. La formation spécifique d'environs deux jours en droits des enfants est un des buts de la formation.

c) La formation prévue pour les juges qui vont occuper un poste spécialisé dans les droits de l'enfant ;

d) La supervision des actions du juge (ou procédure équivalente) lorsqu'il occupe un poste spécialisé ;

Il n´y a pas de supervision ou de monitorage en Argentine.

Au Brésil, il y a une évaluation quantitative des activités des juges, qui doivent présenter un rapport mensuel des procès sous leur responsabilité, qui est comparé avec les données du système informatique. Il n´y a pas de supervision qualitative.

d) Les mécanismes complémentaires de soutien au juge dans l'exercice de ses fonctions.

L'enquête n'a révélé aucun programme de soutien aux juges en Argentine.
Au Brésil, il y a un service de soutien obligatoire dans chaque État (la Coordinance de l´enfance et de la jeunesse) responsable pour l´orientation des juges en cas de doutes, soit sur des questions légales, soit sur les questions interdisciplinaires (autant pour les juges que pour les équipes interdisciplinaires du tribunal) ; un service de recherche de jurisprudence, et un soutien pour la mise en place de projets interinstitutionnels au niveau de l´État ou local qui offre aussi des cours optionnels.

AMÉRIQUE DU NORD

Aux États-Unis, Linda A. Szymanski a fait une recherche sur la formation spécifique des juges des enfants. Elle a mis en évidence qu´au Connecticut, il y a de formation spécifique sur la compétence culturelle des juges et les stratégies adoptées pour faire face à la disproportion de la détention des groupes minoritaires. De la même façon, à Washington, l´administration des tribunaux, sous la supervision du Chef de la Justice, est obligé par loi de développer une formation sur la compréhension de la diversité ethnique et culturelle et son implication dans le travail avec les jeunes et les familles noirs.[98]

L´ENQUÊTE EST TOUJOURS OUVERTE POUR VOTRE CONTRIBUTION

Nous présentons ici les résultats préliminaires de notre enquête. Il y a encore d´autres informations à partager sur les pays présentés ici et nous attendons encore la contribution de nos membres dans plus de 60 pays. Les spécificités de chaque pays peuvent mettre en évidence des questions invitant à la réflexion dans ce domaine et votre collaboration est fondamentale.

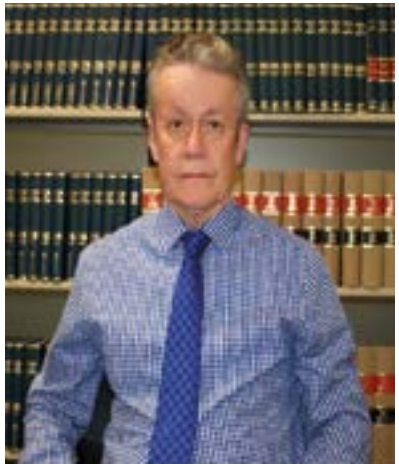
Pour participer, complétez s´il vous plaît le questionnaire suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHbWtTxQIpsuHNu-Y2I12nw5ZNUKitYakQn-8DK3YVsnBD-vKQ/viewform

98. Szymanski, L. (2012) Must Judges and Other Court Personnel Receive Special Training with Respect to Preventing and Controlling Juvenile Crime? NCJJ Snapshot, 17(4). Pittsburgh, PA: National Center for Juvenile Justice.

5. L´EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE ET SON IMPACT POUR LA GARANTIE DES DROITS DES ENFANTS PAR LES JUGES ET MAGISTRATS

5.1. RENFORCER LE POUVOIR JUDICIAIRE ET AVANCER ENSEMBLE: LE RÔLE DES ASSOCIATIONS JUDICIAIRES AUJOURD'HUI[99]

Par John Lowndes[100]



Introduction

Toute société démocratique qui respecte le principe de l'indépendance de la justice et attache de l'importance à l'État de droit a besoin d'associations judicaires pour protéger l'indépendance du pouvoir judiciaire en tant que troisième branche du gouvernement et préserver l'État de droit en tant que l'autre pierre angulaire de la démocratie.

Le pouvoir judiciaire est traditionnellement perçu comme le maillon faible et la branche du gouvernement la plus vulnérable[101] – et pourtant on attend de lui qu'il soit le gardien et le garant de l'indépendance de la justice et de l'État de droit. Toutefois, l'indépendance qu'il cherche à soutenir et à protéger (dans le but de préserver la primauté du droit) est toujours en péril compte tenu de la très grande faiblesse et de la vulnérabilité du pouvoir judiciaire au sein de la structure gouvernementale. Les associations judiciaires contribuent à remédier au déséquilibre des pouvoirs entre la branche judiciaire et les deux autres branches du gouvernement plus puissantes, dans le but de les mettre sur le même pied d'égalité. Elles y parviennent en unissant le pouvoir judiciaire et en augmentant son pouvoir et son influence en tant que troisième branche du gouvernement – un exemple pur et simple de renforcement du pouvoir judiciaire.

En tant que la voix active et publique de la troisième branche du gouvernement, les associations judiciaires jouent un rôle vital en renforçant et en défendant l'indépendance du pouvoir judiciaire, tout en préservant l'État de droit dans une démocratie moderne.

Les associations judiciaires en tant qu'entités légitimes

Les associations judiciaires sont un phénomène internationalement reconnu ; elles ont une existence légitime dans les sociétés modernes.

À titre d'exemple, le 9e principe des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature des Nations Unies déclare :

Les juges sont libres de constituer des associations de juges ou d'autres organisations, et de s'y affilier pour défendre leurs intérêts, promouvoir leur formation professionnelle et protéger l'indépendance de la magistrature.

La nécessité des associations judiciaires

Étant donné la faiblesse et la vulnérabilité du pouvoir judiciaire au sein de la structure gouvernementale, il existe très peu de mécanismes de protection pour préserver son indépendance.

Les principaux mécanismes de protection sont les « Principes de Latimer House » du Commonwealth et la doctrine de la séparation des pouvoirs. Ces principes encouragent le respect mutuel entre les trois branches du gouvernement par rapport à la mise en œuvre de « leur mission respective et décisive de promotion de la prééminence du droit de manière complémentaire et constructive » (principe 11 (b)) – de même qu'ils reconnaissent que « les parlementaires, les membres du pouvoir exécutif et judiciaire de chaque pays du Commonwealth sont les garants dans leur sphère respective de l'État de droit » (Principe1) et qu' « un pouvoir judiciaire indépendant, impartial, honnête et compétent est indispensable pour faire respecter l'État de droit, inspirer la confiance du public et dispenser la justice » (Principe 1V).

Toutefois, du fait que cette doctrine n'est pas toujours constitutionnellement établie ou légalisée, et n'opère que par le biais de l'usage ou la convention, elle reste « un mécanisme incomplet et fragile pour assurer l'indépendance de la justice » [102]. Comme l'a noté Diana Woodhouse, là où la doctrine de la séparation des pouvoirs est basée sur « des compréhensions réciproques, des conventions et conseils », son efficacité dépend d'une « communauté d'intentions et de valeurs partagées à travers des cultures politiques, institutionnelles et judicaires ». [103] Néanmoins, « les évolutions de la gouvernance – telles que l'accent mis sur la gestion des affaires publiques et l'efficacité des pouvoirs publics, les changements dans les rôles et l'orientation de la justice, la tournant davantage vers l'extérieur, et les attentes accrues du public couplées à une perte de sa confiance – signifient que les relations qui ont promu le partage des valeurs changent » et que « la communauté d'intentions ne peut plus être prise pour acquise » (Woodhouse, p. 158).

Malgré l'importance fondamentale des « Principes de Latimer House » du Commonwealth et de la doctrine de la séparation des pouvoirs en tant que rempart institutionnel de l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce sont des mécanismes fragiles qui sont susceptibles de se briser en un instant – même dans une démocratie moderne et stable.

L'opinion traditionnelle maintient que le pouvoir judiciaire et la population devraient se tourner vers le Procureur général (en Australie) ou le Lord Chancelier (l'équivalent au Royaume-Uni) pour défendre les tribunaux et le pouvoir judiciaire des attaques contre l'indépendance de la justice et les critiques injustifiées et irresponsables[104]. Néanmoins, ces trente dernières années, le rôle du Procureur général et du Lord Chancelier en tant que défenseurs du pouvoir judiciaire a progressivement diminué, et est devenu si minime que la branche judiciaire du gouvernement ne peut plus compter ni sur le Procureur général ni sur le Lord

99. Cet article est une version abrégée de l'article publié dans le Volume 24 N° 1 de juin 2019 de la Revue judiciaire du Commonwealth (Commonwealth Judicial Journal), lui-même basé sur un article présenté à la 18e Conférence triennale de l'Association des magistrats et des juges du Commonwealth (CMJA) à Brisbane, Australie, en septembre 2018, et est reproduit avec l'aimable autorisation du CMJA.

100. John Lowndes est l'ancien juge en chef du tribunal local du Territoire du Nord, et président sortant du CMJA.

101. Alexander Hamilton, Le Fédéraliste (The Federalist Papers), No. 78.

102. John Lowndes, « Judicial Independence and Judicial Accountability at the Coalface of the Australian Judiciary », article (non traduit) présenté à l'Association du Barreau du Territoire du Nord, à Dili, Timor oriental, juillet 2016, p.24.

103. « United Kingdom, The Constitutional Reform Act 2005 – Defending Judicial Independence the English Way » (non traduit) (2007) 5 IJCL 153 at 158).

104. Voir The Hon L King «The Attorney General, Politics and the Judiciary » (non traduit) (2000) 72 ALJ 444 p. 453 ; Sir Anthony Mason « No Place in a Modern Democracy for a Supine Judiciary » (non traduit), 1997, 35(11) Law Society Journal 51; Woodhouse p. 154.

Chancelier pour protéger l'indépendance du pouvoir judiciaire.[105]

Historiquement, l'émergence des organisations judiciaires vient de la perception que l'indépendance du pouvoir judiciaire n'était pas garantie, pour les raisons suivantes :

• Un manque d'indépendance per se ;

• La fragilité du principe de l'indépendance de la justice ; ou

• L'absence de garanties institutionnelles fortes d'indépendance de la justice.

Dans un article fondateur,[106] le juge McGarvie a avancé que la branche judiciaire du gouvernement avait besoin de s'organiser et de s'affirmer « de façon à préserver l'indépendance de la justice dans le monde démocratique moderne » ; et d'afficher « un engagement à faire tout ce qui est nécessaire pour relever les défis de l'indépendance judiciaire » (voir « Une brève histoire », p 2-3).

Comme l'a reconnu l'ancien juge en chef de la Haute Cour d'Australie Gleeson, « de temps en temps, il sera nécessaire aux juges en chef de répondre aux critiques faites à l'encontre des jugements ou des juges, quand une réponse est nécessaire et que le Procureur général ne la fournit pas »[107], ou même à des questions s'étendant à la justice dans son ensemble. De telles critiques ou questions peuvent exiger des prises de position institutionnelle de la part d'une association judiciaire nationale.

Comme l'avait observé David Malcolm AC KCSJ, « l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la profession juridique est reconnue internationalement comme un élément central de toute société civilisée », et « l'indépendance du pouvoir judiciaire et celle de la profession juridique est destinée à la protection du peuple, et est la colonne vertébrale d'une société libre et démocratique ». Comme énoncé dans les lignes directrices des « Principes de Latimer House » du Commonwealth, « une profession juridique indépendante et organisée est une composante essentielle de la protection de l'État de droit » (Lignes directrices V111).

Comme l'avait observé David Malcolm AC KCSJ, « l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la profession juridique est reconnue internationalement comme un élément central de toute société civilisée », et « l'indépendance du pouvoir judiciaire et celle de la profession juridique est destinée à la protection du peuple, et est la colonne vertébrale d'une société libre et démocratique » [108]. Comme énoncé dans les lignes directrices des « Principes de Latimer House » du Commonwealth, « une profession juridique indépendante et organisée est une composante essentielle de la protection de l'État de droit » (Lignes directrices V111).

Le rôle des associations judicaires
Il est évident de la discussion qui précède que le rôle principal des associations judiciaires est de renforcer et de défendre l'indépendance de la justice et de préserver l'État de droit.

Cependant, le rôle des associations judiciaires n'est pas confiné à une défense « de première ligne » de l'indépendance de la justice et de l'État de droit.

La récente Déclaration de Brisbane sur l'indépendance et l'intégrité des officiers de justice des juridictions inférieures déclare, entre autres :

En accord avec leurs droits fondamentaux, tous les membres de la justice sont libres de former et de rejoindre des associations ou d'autres organisations afin de :

a) Assurer le maintien d'une justice forte et indépendante au sein d'une société démocratique qui adhère à l'État de droit ;

b) Promouvoir et encourager la formation et l'apprentissage continues des membres de la justice dans les domaines juridiques, judiciaires et interculturels ;

c) Promouvoir et encourager les échanges d'informations juridiques (ou judiciaires), pédagogiques, pratiques ou professionnelles sur les bonnes pratiques entre les membres de la justice et d'autres personnes ou organismes, y compris, lorsque cela est possible, par la participation à des conférences pertinentes à l'intérieur ou à l'extérieur de leur champ de compétences, tout en accordant un financement approprié aux officiers de justice des juridictions inférieures pour permettre leur participation ;

d) Promouvoir une meilleure compréhension et appréciation du rôle spécifique du pouvoir judiciaire dans l'administration de la justice et de l'importance d'un pouvoir judiciaire fort et indépendant dans la protection des droits fondamentaux de l'homme, et enraciner la bonne gouvernance et faire de même au sein des pouvoirs exécutif et législatif du gouvernement ;

e) Chercher à améliorer l'administration de la justice et l'accessibilité du système judiciaire ;

f) Effectuer des recherches qui contribueront à la réalisation de ces objectifs.

Les associations judiciaires peuvent donc jouer un rôle légitime en faisant des commentaires ou des propositions concernant des actes législatifs au des actions de l'exécutif en vue de protéger de manière préventive l'indépendance de la justice, l'État de droit et l'administration de la justice dans une société démocratique.

L'Association des juges et magistrats du Commonwealth (CMJA)[109] a établi un ensemble de lignes directrices pour traiter les demandes émanant des gouvernements membres, à travers leurs ministres de la Justice ou équivalents, le secrétariat du Commonwealth et les membres des associations/juges en chef (de même que les officiers de justice) pour répondre aux consultations sur les réformes constitutionnelle ou législative : voir « les procédures de la CMJA pour traiter des questions d'indépendance de la justice ».

La Conférence judiciaire d'Australie (JCA)[110] a aussi développé un ensemble de lignes directrices concernant les circonstances dans lesquelles il serait approprié pour la JCA de faire des commentaires et de donner des avis au sujet de projets de changements législatifs[111], suggérant que « en général, les déclarations publiques de la JCA [en relation avec un projet de loi] seront circonscrites à/dirigées vers : (a) des questions touchant l'indépendance de la justice ; (b) des questions affectant le fonctionnement des tribunaux ; (c) le maintien, la promotion et l'amélioration du système judicaire ; et (d) toutes questions susceptibles d'affecter un quelconque aspect de l'administration de la justice.

En règle générale, la JCA fera des « déclarations publiques sur des sujets de ce type seulement s'ils touchent directement les fonctions centrales du pouvoir judiciaire ».

Toutefois, en faisant de telles déclarations publiques, toute association judiciaire – de même que le pouvoir judiciaire lui-même – doit agir dans le cadre des « Principes de Latimer House » du Com-

105. Voir King p. 453 ; Ancien Procureur général australien Daryl Williams : « Judicial Independence » (non traduit) (1998) 36(3) Law Society Journal 50-51) et « Who Speaks for the Courts », in « Courts in a Representative Democracy » (non traduit) - Un ensemble d'articles issus d'une conférence nationale organisée par l'AIJA, le Conseil d'État et la Fondation pour le centenaire de la constitution, novembre 1994, p. 182 à 192 ; Juge Robert Beech Jones « The Dogs Bark but the Caravan Rolls On: Extra-Judicial Responses to Criticism » (non traduit), une intervention présentée à la Conférence des magistrats d'Australie du Sud, mai 2017, p. 15 ; « A Brief History of the Early Days of the Judicial Conference of Australia » (non traduit), Secrétariat de la Conférence judiciaire d'Australie p. 17 ; Woodhouse p. 154-156.

106. «The Ways Available to the Judicial Arm of Government to Preserve Judicial Independence" JJA (1992) 1 p. 236 à 243 (non traduit).

107. Juge Margaret McMurdo, « Should Judges Speak Out or Shut Up » (non traduit), une intervention basée en partie sur un article présenté au 5e colloque du JCA, avril 2000, p. 6, citant I. Henderson, « Gleeson Vows to Defend Judges » (non traduit) The Australian, 25 juin 2001.

108. « Independence of the Legal Profession and Judiciary », Church Service, mai 2005, p. 3 & 4. Disponible à l'adresse : https://www.supremecourt.wa.gov.au/_files/TheChurchService09052005.pdf (en anglais).

109. Commonwealth Magistrates' and Judges' Association.

110. Judicial Conference of Australia.

111. Voir « Public Pronouncements about Proposed Legislation » (non traduit). Ces directives ont pour but « d'informer le Conseil des gouverneurs ou l'exécutif de la JCA au nom du pouvoir judiciaire ».

monwealth et de ses fondements théoriques, la doctrine de la séparation des pouvoirs. Les deux requièrent que les trois branches du gouvernement respectent mutuellement leurs fonctions dans une société démocratique. En faisant de telles déclarations publiques, une association judiciaire doit veiller à ne pas transgresser la doctrine de la séparation des pouvoirs, et à ne pas sembler d'une quelque façon que ce soit remettre en cause le principe de souveraineté parlementaire.

Un autre rôle des associations judiciaires concerne la désirabilité de « la communication institutionnelle pour expliquer le travail des juges et des tribunaux »[112]. En effet, une telle communication institutionnelle est une nécessité absolue, la justice ayant une obligation éthique à œuvrer à l'éducation civique[113]. Il n'existe pas de meilleur vecteur de communication institutionnelle de ce type que les associations judiciaires.

Comme l'a noté J. Lowdness, la justice a en effet « une obligation sociétale de faire participer la communauté de la manière suggérée par Bookman, car, en tant qu'importante institution sociale, la justice a besoin d'informer le public au sujet de son rôle, ses fonctions et ses activités afin de soutenir sa légitimité – qui est issue de la communauté qu'elle sert – et de maintenir la confiance que le public a en elle en tant que branche du gouvernement »[114]. Les associations judiciaires fournissent à la justice en tant qu'institution un moyen de remplir cette obligation fondamentale.

Dernier point, mais non le moindre, une association judiciaire doit être impliquée dans « la formation et le développement professionnel continus des membres de la justice » - ce qui est « essentiel pour assurer que les juges soient compétents et disposent d'un haut niveau de normes éthiques »[115]. Le manque d'éthique et l'incompétence des officiers de justice sont les ennemis jurés de l'indépendance et de l'impartialité de la justice. Poursuivre l'éducation judiciaire renforce l'indépendance de la justice et l'État de droit.

Le fonctionnement des associations judiciaires et progresser ensemble

Pour être efficace, une association judiciaire a besoin d'être une machine bien organisée, bien huilée et finement réglée.

Il est essentiel qu'une association judiciaire dispose de politiques et de procédures appropriées pour ses rôles.

Les associations judiciaires permettent au pouvoir judiciaire d'être « plus fort » et de s'affirmer comme une branche aussi importante que les autres branches du gouvernement. Mais que réserve l'avenir ? Comment le pouvoir judiciaire va-t-il évoluer, en tant que branche séparée, mais égale aux autres branches du gouvernement?

Le fonctionnement des associations judiciaires et progresser ensemble

Pour être efficace, une association judiciaire a besoin d'être une machine bien organisée, bien huilée et finement réglée.

Il est essentiel qu'une association judiciaire dispose de politiques et de procédures appropriées pour ses rôles.

Les associations judiciaires permettent au pouvoir judiciaire d'être « plus fort » et de s'affirmer comme une branche aussi importante que les autres branches du gouvernement. Mais que réserve l'avenir ? Comment le pouvoir judiciaire va-t-il évoluer, en tant que branche séparée, mais égale aux autres branches du gouvernement ?

La structure et les membres des associations judiciaires sont essentielles et dictent le degré d'unité institutionnelle qu'elles engendrent. Plus l'unité institutionnelle (ou la solidarité judiciaire) créée par l'association judiciaire est grande, plus elle a de chances d'être efficace.

De telles associations sont plus propices à la création d'une unité institutionnelle qui est nécessaire pour permettre au pouvoir judiciaire de rester ferme contre les actions de l'exécutif et du législatif qui remettent en question l'indépendance de la justice et l'État de droit.

Dernier point, mais non des moindres, cette mise en réseau permet aux associations judiciaires d'apprendre les unes des autres et de trouver ensemble les moyens les plus efficaces pour défendre et renforcer l'indépendance de la justice et préserver l'État de droit dans un monde en perpétuel changement qui présente de nouveaux défis.

5.2. LES ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION DES JUGES AUX AFFAIRES FAMILIALES DE POLOGNE

Par Magdalena Arczewska[116]

Les tribunaux de la famille ont été créés en Pologne dans le cadre de changements organisationnels introduits par le ministère de la Justice à la fin des années 1970. Les juges aux affaires familiales forment un groupe professionnel spécifique. Ils ont un fort sentiment d'appartenance à la communauté qu'ils représentent. En raison des problèmes qu'ils ont à traiter dans leur travail quotidien, ils ont également un sens aigu de leur mission et de leur vocation.

Conformément à la loi sur les associations, l'Association des juges aux affaires familiales de Pologne, à l'instar de n'importe quelle autre personne morale représentant ce groupe d'organisations non gouvernementales, est une association à but non lucratif, permanente, autogérée et basée sur le volontariat, qui détermine de façon indépendante ses buts et programmes d'activités, de même que sa structure organisationnelle, et adopte des décisions internes encadrant ses activités, qui sont basées sur le travail bénévole de ses membres. Aujourd'hui, l'Association est composée de plus de 240 membres, ce qui signifie qu'un quart des juges aux affaires familiales en Pologne est membre de l'organisation. Tous les juges, y compris ceux à la retraite, peuvent être membres ordinaires de l'organisation. Les membres extraordinaires sont notamment des chercheurs travaillant sur des questions familiales ou, par exemple, des tuteurs nommés par les tribunaux.

Les instances les plus hautes de l'Association sont l'Assemblée générale, le Conseil, le Comité d'étude et le Comité d'arbitrage. La durée de mandat des membres de ces organes est de quatre ans ; ils sont élus au cours d'un scrutin ouvert ou secret, selon la résolution de l'Assemblée générale. Le travail de l'Association est conduit par le Conseil, qui est actuellement composé de 12 personnes.

112. Voir Juge McMurdo, « Should Judges Speak Out » (non traduit), p. 10.

113. John Lowndes « Judicial Accountability as an Evolving and Fluid Concept » (non traduit), Vol 23 No 3 juin 2018 Commonwealth Judicial Journal.

114. J. Lowndes « Judicial Accountability as an Evolving and Fluid Concept » (non traduit) p. 22, citant Bookman p. 6.

115. Horizon Institute, « Judges Associations » (non traduit), p. 3 ; 9e principe des Nations Unies des Principes Fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature.

116. Magdalena Arczewska est sociologue et juriste, elle est également titulaire d'un doctorat en sciences sociales. Elle travaille en tant que professeure assistante à l'Institut de sciences sociales appliquées de l'Université de Varsovie. Les recherches de Madame Arczewska portent sur les politiques sociales et la collaboration entre l'administration publique et les organisations non gouvernementales au niveau national et local de gouvernance. Elle est membre du Conseil de l'Association des juges aux affaires familiales de Pologne.

Déjà présente en Pologne durant la période de l'entre-deux-guerres, l'Association des juges aux affaires familiales a été réactivée en 1987, grâce à la participation du juge Józef Musił, alors ministre adjoint de la Justice, puis juge à la Cour Suprême, aujourd'hui à la retraite. En 1987, Gérard Bajger, Président du tribunal régional de Bielsko-Biala, devint Président de l'Association. Dès ses débuts, l'Association a été soutenue par Henryka Veillard-Cybulska, une juge pour enfants qui a créé la Fondation Veillard-Cybulski en 1988 et a fait don de 50 000 CHF pour la mise en œuvre des objectifs statutaires de l'Association. La présidente suivante fut Barbara Skoczyńska-Soroko, juge au tribunal régional de Varsovie. Pendant plusieurs années, l'organisation fut présidée par la juge Ewa Waszkiewicz (à partir de 1988), également juge au tribunal régional de Varsovie. En 2015, la juge Dorota Hildebrand-Mrowiec, une personne énergique pleine de charisme travaillant par vocation en tant que juge aux affaires familiales, devint Présidente.

L'Association est l'un des membres fondateurs de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille (AIMJF). En 2013, elle changea de nom pour devenir l'Association des juges aux affaires familiales de Pologne, en raison de la réforme organisationnelle du système de justice polonais (les divisions de la famille obligatoires dans les tribunaux de district furent fermées, et leur création devint optionnelle). Il faut mentionner que les affaires traitées par les juges aux affaires familiales en Pologne sont extrêmement diverses. Elles relèvent des catégories du droit de la famille et de la tutelle, de la déviance et des actes punissables commis par des mineurs, du traitement des toxicomanes et de nombreuses autres lois.
Conformément à ses statuts, le but de l'Association est de renforcer l'indépendance et l'impartialité des juges aux affaires familiales, la reconnaissance de leur autorité, de soutenir et de renforcer la famille, ainsi que d'accroître les connaissances et les compétences des juges et des professionnels collaborant avec les tribunaux de la famille. De plus, l'Association partage des informations sur des enjeux tels que la lutte contre la délinquance juvénile, la protection de la famille, le soutien et le développement de la médiation, la formation de l'opinion publique, la défense de la communauté des juges et de son intégration, la collaboration dans le processus législatif avec l'exécutif et d'autres corps internes au système de justice de la famille. L'Association met en œuvre ses objectifs en menant des actions qui font avancer la protection de la famille et l'intérêt supérieur de l'enfant, la prévention des actes condamnables et de la déviance des mineurs ; des activités éducatives ; l'organisation de rencontres, de conférences scientifiques, d'expositions et de lectures ; la collaboration avec d'autres associations au profil similaire en Pologne et à l'étranger en favorisant la promotion des succès du système de justice de la famille de Pologne, la préparation et l'échange d'informations et d'éléments sur des sujets d'intérêt pour l'Association, l'organisation de congrès, de séminaires, de conférences nationales et internationales, la collaboration avec des étudiants en droit, pédagogie et psychologie dans le cadre de programmes volontaires et à travers son site Web (http://www.sssrwp.pl/index.php) et son compte Facebook (suivi par 2800 personnes) de même que par des contacts avec les médias.

En 1999-2004, l'Association a publié le trimestriel « FamiliJant », adressé aux juges qui traitent des affaires familiales et celles impliquant des jeunes. La revue comprenait des informations sur le fonctionnement des tribunaux de la famille en Pologne de même que des décisions récentes. « FamiliJant » servait aussi de plateforme de discussion et d'échange d'opinion. Le rédacteur en chef était la juge Eleonowa Porębiak-Tymecka.

Des représentants de l'Association participent aux travaux de l'Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la famille (AIMJF) et à la section européenne de cette dernière. La juge Katarzyna Kościów-Kowalczyk est membre du bureau de l'AIMJF tandis que Magdalena Arczewska (titulaire d'un doctorat) prend part au travail du Comité général de l'AIMJF au nom de l'Association. Elles ont représenté l'Association à la dernière rencontre de la section qui a eu lieu en octobre 2018. L'Association rassemble des juges qui sont des membres actifs de la société et dont l'engagement civique est reconnu et apprécié. Deux membres du Conseil, les juges Katarzyna Kościów-Kowalczyk en 2016 et Dorota Hildebrand-Mrowiec en 2018, ont été récompensées du prix « Civic Justice » de l'année au terme de l'enquête de la Fondation Court Watch Poland. L'idée de l'enquête était de mettre en valeur des juges pour leur engagement civique. Le prix est décerné depuis 2015 aux juges dont l'engagement dépasse le processus de prise de jugement au sens strict et qui déploient des actions à l'extérieur de la salle d'audience pour réduire l'écart qui existe entre les tribunaux et la société. La juge Dorota Trautman, Présidente adjointe de l'Association, et le professeur Henryk Haak, membre de l'Association, ont également été reconnus par le Défenseur des enfants, qui leur a décerné la médaille d'honneur du mérite pour la protection des droits des enfants. L'Association des juges aux affaires familiales de Pologne participe à des activités qui cherchent à promouvoir des juges exceptionnels. Elle a déjà organisé six éditions du concours des juges aux affaires familiales. Ce concours implique la rédaction d'un essai sur des sujets tels que le droit de la famille, les questions familiales ou les expériences professionnelles. Le but est de promouvoir les juges dont l'engagement et l'activité sont plus élevés qu'en temps normal et qui, en même temps, démontrent un sens du service en travaillant au bénéfice de l'enfant et de la famille. Le concours vise aussi à promouvoir les juges qui constatent l'existence de problèmes juridiques, sociaux et culturels importants pour la famille et l'enfant, tentent de s'y attaquer et sont prêts à partager leurs expériences, réflexions et doutes avec d'autres personnes. Les essais soumis lors du concours sont évalués par des représentants du monde universitaire et des juges. Les auteurs gagnants reçoivent des récompenses financières, ainsi que des livres et des diplômes commémoratifs. Quelques sujets du concours s'intitulaient ainsi : « le droit de l'enfant à être élevé par ses deux parents », « ma vision du système de justice de la famille », « l'intérêt supérieur de l'enfant tel que reflété par les décisions du juge aux affaires familiales », « le travail du juge aux affaires familiales : un savoir-faire ou une vocation ? ». La dernière édition du concours a été organisée en 2018.

En 2016, l'Association a annoncé un concours destiné à récompenser la meilleure thèse de Master dédiée aux problèmes du droit de la famille, qui a soulevé un intérêt significatif parmi les étudiants diplômés.

De plus, l'Association entreprend des efforts visant à l'intégration et au développement professionnel de la communauté des juges aux affaires familiales. Le congrès des juges aux affaires familiales, une initiative éducative et de formation, a rassemblé environ 170 juges de toute la Pologne lors de sa 21e édition, qui s'est tenue à Zakopane cette année. Le sujet du congrès année était « la crise de la famille au XXIe siècle ». Le but de la conférence était d'offrir aux partici-

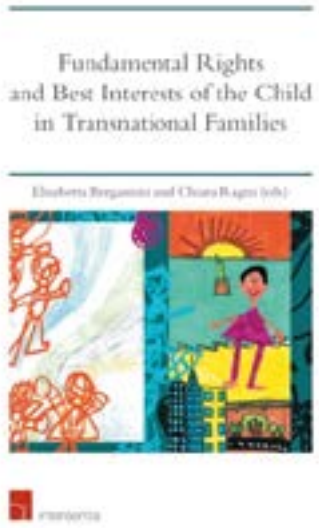
pants une meilleur compréhension des problèmes relatifs au droit, à la psychiatrie et à la psychologie, ce qui est désormais requis pour être à même d'examiner des cas familiaux et d'atteindre des normes uniformes en matière de jugement. Une importante composante du programme de formation a été la discussion des modifications du Code de procédure civile et du Code de la famille et de la tutelle. Parmi les nombreuses conférences, celle proposée par Ewa Woydyłło-Osiatyńska, titulaire d'un doctorat, psychologue et thérapeute, qui a tenté de répondre à la question de savoir pourquoi les relations se sont brisées et jusqu'à quand il était possible de les sauver, de même que la présentation de la crise de la famille exposée par Bogdan de Barbaro, un éminent psychiatre de l'Université de Jagiellonian, ont soulevé un grand intérêt parmi l'audience. Le professeur Katarzyna Kłosińska, un linguiste de l'Université de Varsovie et Président du Conseil de la langue polonaise, a parlé de l'importance du polonais dans le travail du juge. Il faut mentionner que les conférences du Congrès ont été suivies par l'Ombudsman polonais, le Défenseur des enfants, le Premier Président de la Cour Suprême et le Président de la Chambre Civile de la Cour Suprême. Des informations sur les éditions consécutives du Congrès sont diffusées par les médias.

En 2018, l'Association a organisé une conférence intitulée « L'intérêt supérieur de l'enfant, un sujet sociétal », qui s'est tenue à Zamość. Le but de la conférence était d'informer les juges des résultats des études menées sur le concept de l'intérêt supérieur de l'enfant et de discuter des divers problèmes qui surgissent au cours des mesures de tutelles. De plus, la conférence incluait des ateliers sur la manière d'auditionner l'enfant et sur les aspects psychologiques des comportements dans la salle d'audience.

Les membres de l'Association ont aussi l'occasion d'être supervisés par un psychologue. L'Association collabore avec de nombreuses institutions et organisations, y compris la fondation pour les enfants « Dajemy Dzieciam Siłę », des associations de tuteurs mandatés par les tribunaux, et des organisations indépendantes d'avocats et de conseillers juridiques. Ses représentants prennent part à des conférences nationales et internationales sur des sujets variés, comme par exemple « Le syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF) – des défis médicaux, psychologiques, éducatifs, économiques et juridiques », « La collaboration entre le tribunal des tutelles et les unités de soins en tant qu'activité du juge aux affaires familiales hors de la salle d'audience », ou encore « Bien et mal : des concepts également inclusifs. La protection juridique de l'enfant. Déclarations et réalité ».

6. NOUVELLES PUBLICATIONS

6.1. DROITS FONDAMENTAUX ET INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT DANS LES FAMILLES TRANSNATIONALES



Fundamental Rights and the Best Interest of the Child in Transnational Families (Droits fondamentaux et intérêt supérieur de l'enfant dans les familles transnationales, non traduit) constitue un travail opportun sur la prise en compte des intérêts des enfants au sein de l'Union européenne. Il traite des sujets les plus pertinents qui ont émergé de la rapide internationalisation du droit de l'enfant et de la famille et de la mobilité accrue des familles.
Livre | publié | 1ère édition
Septembre 2019 | xxviii + 322 p.

Les familles en Europe sont de plus en plus façonnées par la mobilité des personnes et les contextes multiculturels. Ce livre traite de la protection des enfants dans les situations transfrontalières. Quels sont les droits fondamentaux des enfants dans les familles transnationales, quel est leur « intérêt supérieur » et comment leurs droits peuvent-ils être protégés ? Beaucoup de controverses entourent ces droits et les incertitudes qui planent ont entrainé des difficultés pratiques considérables pour ceux qui tentent de les mettre en œuvre.

Afin d'apporter une vision et des idées plus claires sur la nature des droits fondamentaux des enfants et leur intérêt supérieur, ce livre examine les réponses données à la fois par l'Union européenne et le droit international aux questions posées par le nombre croissant de familles transnationales au regard de la protection des enfants. Il aborde à la fois les règles de fond et celles de conflit de lois. Les différences entre les droits substantiels de la famille des États membres empêchent toujours une protection efficace de l'enfant ou de sa cellule familiale, notamment dans les cas de migration, d'asile, de mariage forcé, de kafala, mais aussi de familles « arc-en-ciel ». De fait, le rôle des droits de l'homme (reconnaissance mutuelle de statut et contrats de gestation pour autrui, adoption) et des droits procéduraux (enlèvement d'enfant, Bruxelles II bis remanié) doit être considéré avec prudence dans les cas transfrontaliers.

Fundamental Rights and the Best Interest of the Child in Transnational Families (Droits fondamentaux et intérêt supérieur de l'enfant dans les familles transnationales, non traduit) constitue un travail opportun sur la prise en compte des intérêts des enfants au sein de l'Union européenne. Il traite des sujets les plus pertinents qui ont émergé de la

rapide internationalisation du droit de l'enfant et de la famille et de la mobilité accrue des familles.

Elisabetta Bergamini est professeure associée de droit international à l'Université d'Udine, Italie. Elle enseigne et écrit sur des sujets de droit international, de droit de l'Union européenne et de droit privé international, en mettant un accent particulier sur le droit de la famille. De 2014 à 2016, elle a coordonné un module Jean Monet sur le droit de la famille en Europe cofinancé par la Commission européenne.

Chiara Ragni est professeure associée de droit international à l'Université de Milan, Italie, où elle a coordonné un module Jean Monnet sur le droit de la famille en Europe et les droits de l'homme. Ses principaux domaines d'expertise incluent le droit privé international de la famille, le droit pénal international et le droit relatif aux droits de l'homme.

6.2. PLURALITÉ ET DIVERSITÉ DES RELATIONS FAMILIALES EN EUROPE

Ce volume renferme les contributions livrées lors de la sixième conférence internationale de la Commission du droit européen de la famille (CEFL) qui s'est penchée sur le droit comparé et international de la famille dans les pays d'Europe dans leurs contextes culturels respectifs.

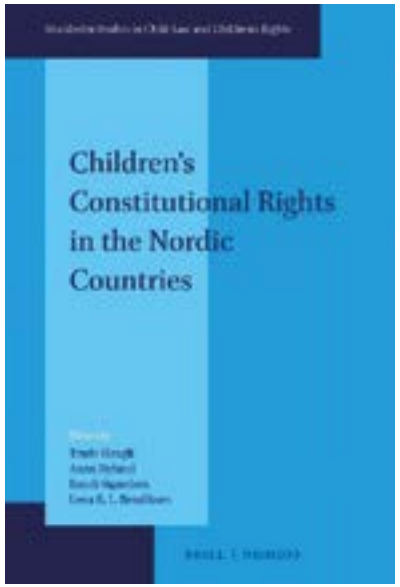
AUTEURS : Katharina Boele-Woelki, Dieter Martiny
COLLECTION : Droit européen de la famille
VOLUME : 45
Livre | publié | 1ère édition
Août 2019 | xii + 388 p.

Ce volume renferme les contributions livrées lors de la sixième conférence internationale de la Commission du droit européen de la famille (CEFL), qui s'est penchée sur le droit comparé et international de la famille dans les pays d'Europe dans leurs contextes culturels respectifs. Des experts de la CEFL et d'autres juristes y traitent, entre autres, des thèmes suivants : la CEFL et ses principes, les relations entre droit de la famille et sociologie de la famille, la migration familiale, les droits fondamentaux des enfants et des femmes, ainsi que le concept en évolution de parentalité, le rôle des enfants dans les procédures familiales, les divorces extrajudiciaires et les résolutions alternatives des conflits dans les affaires familiales.

Alors que le droit de la famille européen continue d'évoluer, de nouveaux défis apparaissent sans effacer pour autant les anciens qui restent toujours d'actualité. La prise de conscience de la pluralité et de la diversité des relations familiales est à la hausse. Les deux posent problèmes. De nouvelles solutions juridiques doivent être intégrées dans le système du droit de la famille existant. D'autre part, il existe des tensions entre les valeurs fondamentales modernes et les positions religieuses traditionnelles. Les deux nécessitent une analyse approfondie.

La conférence et, partant, ce livre, ont pour objectif de renforcer l'échange d'idées et d'arguments sur le droit comparé et international de la famille en Europe.

6.3. LES DROITS CONSTITUTIONNELS DES ENFANTS DANS LES PAYS NORDIQUES



https://brill.com/view/title/39188
Décembre 2019
Livre relié (approx. 450 p.)
ISBN 9789004382800
E-ISBN 9789004382817
Prix 193 € / 232 US$
Stockholm Studies in Child Law and Children's Rights, 5[117]
Éditeur : Brill | Nijhoff

Children's Constitutional Rights in the Nordic Countries (Ndt : Les Droits constitutionnels des enfants dans les pays nordiques, non traduit)

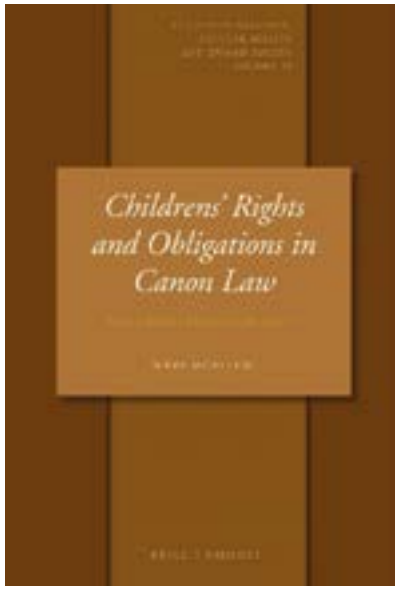
Publié par : Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen et Lena R. L. Bendiksen, Université de Tromsø

L'ouvrage présente une étude comparative des droits constitutionnels de l'enfant au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège et en Suède. Les auteurs discutent de l'intérêt d'inscrire les droits de l'enfant dans les Constitutions nationales en plus de mettre en œuvre la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE). La question centrale est de savoir si l'inscription des droits de l'enfant dans une constitution améliore la mise en œuvre et l'application de ces droits en fournissant des outils de plaidoyer et en obligeant les tribunaux, les législateurs, les décideurs politiques et les juristes à prendre les droits de l'enfant au sérieux. L'étude évalue si les Constitutions sont conformes à l'approche des droits de l'enfant de la CIDE à la fois de façon générale et dans le détail, dans trois domaines : l'intérêt supérieur de l'enfant, les droits à la participation et le droit au respect d'une vie de famille.

PUBLIC : Toute personne intéressée par les droits de l'enfant, les droits de l'homme et le droit constitutionnel (politiciens, bibliothèques universitaires, chercheurs, étudiants, juristes).

117. Ndt : Presses universitaires de Stockholm, droit de l'enfance et droits de l'enfant, 5

6.4. LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DES ENFANTS DANS LE DROIT CANONIQUE



https://brill.com/view/title/55914

Novembre 2019
Livre relié (approx. 590 p.)
ISBN 9789004411166
E-ISBN 9789004411173
Prix 160 € / 192 US$
Studies in Religion, Secular Beliefs and Human Rights, 14
(Ndt : Études sur la religion, les croyances séculaires et les droits de l'homme, 14)
Éditeur : Brill | Nijhoff

Childrens' Rights and Obligations in Canon Law

The Christening Contract
(Ndt : Les droits et les obligations des enfants dans le droit canonique, Le Baptême, non traduit)
Mary McAleese

Dans un ouvrage inédit, Mary McAleese soumet à un examen approfondi le Code de droit canonique de l'Église catholique romaine de 1983, tel qu'il s'applique aux enfants. L'Église catholique est la plus grande organisation non gouvernementale impliquée dans la prestation de services d'éducation et de prise en charge des enfants au monde. Elle regroupe plus de trois cent millions d'enfants membres à travers le monde, la grande majorité de ces enfants étant devenus membres de l'Église lors de leur baptême alors qu'ils étaient nourrissons. Le droit canonique définit leurs droits et obligations en tant que membres de l'Eglise. Les enfants jouissent aussi de droits en vertu de la Convention des Nations Unies des droits de l'enfant de 1989, à laquelle le Saint Siège est un État partie. Les effets de la Convention sur le droit canonique sont examinés en détail et l'analyse note un changement radical et préoccupant dans l'attitude du Saint Siège à l'égard de ses obligations découlant la Convention depuis que les scandales d'abus sexuels commis par des prêtres sont devenus un sujet de discussion au Comité des droits de l'enfant, qui supervise la mise en œuvre de la Convention.

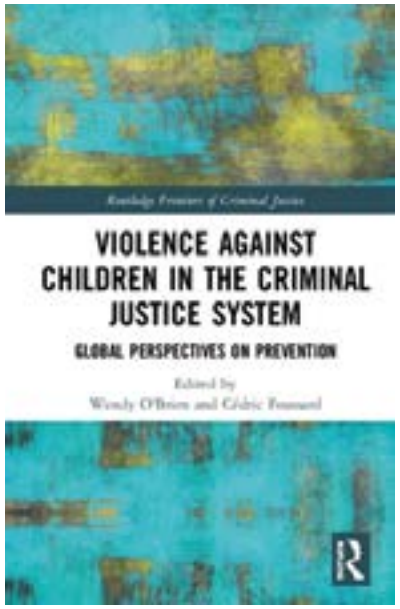
PUBLIC : Toute personne intéressée par le droit canonique de l'Église catholique et la catéchèse, ainsi que tous ceux concernés par le droit international relatif aux droits de l'enfant.

Lauréate du Prix éthique Alfons Auer :

L'ancienne présidente de l'Irlande Mary McAleese a été récompensée par l'un des plus prestigieux prix du monde catholique, le Prix éthique Alfons Auer, de l'Université de Tübingen en Allemagne, pour sa thèse de doctorat sur les « Droits et obligations des enfants dans le droit canonique ».

https://www.catholicireland.net/mary-mcaleese-wins-europes-richest-theology-prize-study-canon-law/
(en anglais)

6.5. LA VIOLENCE FAITE AUX ENFANTS DANS LE SYSTEME DE JUSTICE PENALE, PERSPECTIVES GLOBALES SUR LA PREVENTION



Violence Against Children in the Criminal Justice System

Global Perspectives on Prevention
(La violence faite aux enfants dans le système de justice pénale,

Perspectives globales sur la prévention, non traduit), 1ère édition

Publié par Wendy O'Brien, Cédric Foussard

Routledge
246 pages |

Description

Les enfants qui entrent en conflit avec la loi sont plus susceptibles d'avoir été victimes de violences ou d'avoir vécu des moments difficiles que leurs pairs non délinquants. Tout en exacerbant les effets délétères de ces traumatismes vécus dans l'enfance, le contact des enfants avec le système de justice pénale présente des risques indus de violence physique, sexuelle et psychologique. Ce livre examine les formes spécifiques de violences que subissent les enfants lorsqu'ils entrent en contact avec le système de justice pénale.

Par ailleurs, ce livre, auquel ont contribué d'éminents universitaires et praticiens dans le domaine des droits des enfants et de la justice juvénile, présente des stratégies de prévention fondées sur des données probantes et des études de cas issues du monde entier. Il illustre la diversité des contextes où sévit la violence contre les enfants, sous des formes variées, et fait avancer les connaissances à la fois sur la nature et sur l'étendue des violences faites à l'encontre des enfants dans le système de justice pénale, et les facteurs conjoncturels spécifiques qui contribuent à, ou au contraire empêchent, la mise en œuvre efficace des stratégies de prévention de la violence. Il démontre que les systèmes de justice spécialisée pour enfants, dans lesquels les droits des enfants sont respectés, sont cruciaux pour prévenir la violence inhérente aux régimes de justice pénale conventionnels.

Écrit dans un style clair et accessible, ce livre intéressera autant les étudiants que les chercheurs en criminologie, justi-

ce pénale, justice juvénile, victimologie, prévention pénale et droits des enfants.

7. LES ACTIVITÉS DE L´AIMJF– DES NOUVELLES DU BUREAU

7.1. MEXIQUE - CONGRÈS DU RÉSEAU NATIONAL DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS. SEPTEMBRE 2019

118

Un congrès du Réseau national de justice pénale juvénile s´est tenu à Mexico les 5 et 6 septembre 2019. En plus des juges mexicains, le congrès a compté avec la participation de la présidente de l´AIMJF, la juge Marta Pascual, du rédacteur en chef de la Chronique, le juge Eduardo Rezende Melo, et la juge argentine et membre de l'AIMJF, Agustina Das Cordero.

La présidente Marta Pascual a donné une conférence sur la justice réparatrice, le juge Eduardo R Melo sur les défis d'efficacité des sentences et la juge Agustina Dias sur le droit à la participation. Les travaux ont été conduits et organisés par la juge Sara Patricia Orea, membre de l´AIMJF, qui a été à l'origine de la constitution du réseau de juges mexicains.

L'AIMJF a également participé aux activités de mise en place du réseau de juges pénaux pour les adolescents en conflit avec la loi, présentant l'AIMJF aux personnes présentes, offrant un soutien à l'organisation de l'association et ouvrant les portes aux collaborations institutionnelles.

La Présidente de l'AIMJF a également rencontré des représentants de la Justice mexicaine pour organiser un congrès mondial en 2021 en collaboration avec Terre des Hommes et Penal Reform International.

7.2. VISITE D'ETUDE A SÃO PAULO, BRESIL, DU 4 AU 6 NOVEMBRE 2019

Dans cet article, nous présenterons un bref rapport de la visite d'étude réalisée à São Paulo, au Brésil, et organisée par l'AIMJF dans le cadre d'un programme de visites qui auront lieu dans différents pays tous les trois mois.

Deux juges argentins, Elbio Ramos et Gladys Viviana Krasuk, ainsi que la chercheuse d'origine anglaise mais établie aux Pays-Bas, Kim Enrica Tsai, y ont participé.

La visite a débuté par une formation théorique de quatre heures. Au commencement de celle-ci, Eduardo Rezende Melo, rédacteur de la Chronique et juge au Brésil, a présenté le système de garantie des droits des enfants et adolescents, l'organisation du système judiciaire, le système spécialisé de protection de l'enfance et le système de prise en charge socio-éducative destiné aux adolescents en conflit avec la loi. Le défenseur du peuple, Giancarlo Vay, a également participé à la formation, au cours de laquelle il a exposé les activités du Bureau du défenseur du peuple qui visent à protéger les droits des enfants, essentiellement dans le champ de la justice juvénile, mais aussi dans le champ de la protection. La procureure Elisa De Divitiis Camuzzo a aussi pris part à la formation. Elle y a expliqué les activités du Bureau du procureur, en particulier dans la protection des droits sociaux, ainsi que le vaste domaine d'activités du Bureau liées aux procédures collectives. Enfin, le juge Egberto de Almeida Penido, qui coordonne la mise en œuvre des projets de justice restaurative, a présenté lors de cette formation les domaines de dissémination de cette pratique.

Les activités se sont d'abord concentrées dans le champ de la justice juvénile. Après cette matinée, les participants ont visité un centre de formation professionnelle pour des adolescents en conflit avec la loi, situé dans un service de

118. La conférence de la presidente et du rédacteur en chef de la Chronique, de la juge Agustina Díaz, la conduction des travaux de constitution du réseau par la Juge Sara Patricia Orea et le groupe finalement réuni

119. Le rencontre à l´École de Magistrats de São Paulo pour la formation théorique, avec la participation de la sécretaire génerale de l´AIMJF, Andrea Santos Souza; la visite à un centre de formation industrielle pour les adolescents en conflit avec la loi et le la discussion avec les juges locaux. Le logo de l´École de Magistrats de São Paulo, qui a donné tout appui logistique pour la visite.

référence de l'industrie automobile. En outre, les participants se sont rendus dans un tribunal pour assister à des audiences préliminaires (c.-à-d. avant que la procédure judiciaire officielle ne soit engagée) lors desquelles des propositions de règlement des conflits par des dispositifs restauratifs ont été mises en avant. Ils ont également assisté à une première audience d'instruction durant laquelle un adolescent a été interrogé, ainsi qu'à des audiences d'évaluation ou de réévaluation de plans individuels de prise en charge, qui guident l'exécution des mesures socio-éducatives.

Le deuxième jour, les participants ont visité trois centres de privation de liberté : un centre temporaire où la durée maximale du placement est de 45 jours et où les détenus sont en attente de leur procès et de leur condamnation ; un centre pour condamnés en milieu fermé ; et un centre en semi-liberté pour adolescentes.

L'après-midi du deuxième jour, les participants ont visité un autre tribunal où ils ont assisté à une audience de réévaluation de la mesure de privation de liberté d'un enfant.
Le troisième et dernier jour de la visite d'étude, une réunion s'est tenue entre des juges et d'autres professionnels locaux sur leurs impressions des modèles de justice et les différences qui existent entre ces derniers, à laquelle ont participé 180 personnes.

La visite a continué dans l'après-midi dans le domaine de la protection de l'enfance. En effet, les participants ont visité un service d'assistance multiple destiné aux enfants privés de relations familiales. Dans ce service, les agents organisent des formations à l'intention d'autres services dans l'optique d'élaborer des registres compilant l'historique des enfants qui sont placés en institution ou en famille d'accueil. Ils fournissent également des services de parrainage pour ces enfants, ainsi que des services de famille d'accueil.

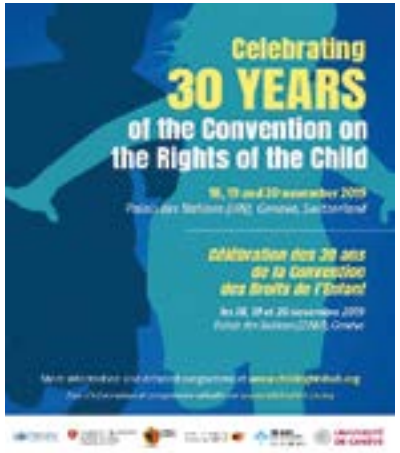
Enfin, les participants à la visite d'étude ont assisté à des audiences concentrées, de réévaluation des plans individuels de prise en charge d'enfants placés en institution, au cours desquelles interviennent différents services publics (liés à la santé, l'assistance sociale, le logement, l'emploi), en plus du juge, du procureur et du défenseur du peuple, afin de garantir les droits des enfants. Toutes les audiences concernaient des enfants réfugiés en provenance d'Haïti et de pays africains.

La visite d'étude a compté sur le soutien précieux de l'École des magistrats de São Paulo (École Pauliste de la magistrature), au Brésil, qui a ouvert ses portes pour l'organisation de la formation initiale et de la réunion avec les juges locaux, en plus de fournir le transport pour les visites.

Les prochaines visites d'étude prévues auront lieu au Cap, en Afrique du Sud, et à Londres, en Angleterre, respectivement en mars et en juin 2020.

7.3. CELEBRATION DU 30ème ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION À GÉNÈVE, SUISSE

Par Andrea Santos Souza[120]



121

En novembre dernier, la Convention relative aux droits de l'enfant (Convention), le traité le plus ratifié de l'histoire des Nations Unies, a eu 30 ans.

Pour célébrer cet anniversaire, de nombreux événements ont été organisés à travers le monde, dont la Conférence internationale spéciale, tenue au siège des Nations Unies à Genève, les 18 et 20 novembre dernier, jour même de la ratification de la Convention en 1989.

Certains membres du conseil d'administration de l'AIMJF ont participé à cette conférence, dont la présidente, Marta Pascual, la trésorière, Anne-Catherine Hatt et la secrétaire générale, Andréa Souza. Étaient également présents les

120. Andrea Santos Souza est sécretaire général de l´AIMJF, membre du Ministère Publique à São Paulo- Brésil, Master en Advanced Studies on Children's Rights - IUKB et Faculté de Droit de l´Université de Fribourg – Suisse ; et un Master en Philosophie (Éthique) - - Pontifícia Universidade Católica de Campinas - SP, Brésil

121. Le logo de la conférence; la conférence de la présidente de l´AIMJF ; la secrétaire générale, Andrea Santos Souza, le trésorière Anne-Catherine Hatt et la présidente de l´AIMJF, Marta Pascual.

membres Philip Jaffé, membre du Comité des droits de l'enfant et Jean Zermatten, ancien président du Comité des droits de l'enfant.

La Conférence a permis aux participants d'échanger sur des sujets d'importance reliés aux droits de l'enfant dont deux principaux que nous a rappelés le Dr. Gerison Lansdown, défenseure des droits de l'enfant, lors de ses remarques finales:

• Les nouvelles pratiques mises en place à travers le monde depuis l'adoption de la Convention (transformation des lois, des politiques, des programmes ainsi que des normes et attitudes sociales)

• L'identification des priorités d'action en fonction des leçons tirées de l'expérimentation de ces nouvelles pratiques

Au cours des 30 dernières années, la Convention a eu un impact sur l'agenda des gouvernements locaux, nationaux et internationaux. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre l'objectif visé, soit s'assurer que les droits de chaque enfant dans le monde soient respectés.

Les participants ont bénéficié de plusieurs allocutions stimulantes de la part d'experts en droits de l'enfant et de membres du Comité des droits de l'enfant ainsi que de la participation appréciée de Mme Michele Bachelet, Haut-Commissaire aux droits de l'homme.

Différents ateliers relatifs aux droits de l'enfant ont également été offerts aux participants, plus particulièrement sur les sujets suivants :

1. Le droit à la participation

Ce droit n'était pas reconnu avant la Convention. Les organisateurs de la Conférence ont donc voulu lui réserver une place privilégiée en permettant aux enfants de différents pays d'exprimer leurs idées et leurs espoirs. Les enfants ont aussi eu l'opportunité d'émettre leurs suggestions quant aux priorités sur lesquelles devraient travailler les États partis. Ils ont ainsi exprimé plus particulièrement que:

• les droits des enfants ont une importance fondamentale et que les enfants ne peuvent pas exercer leurs droits s'ils ne les connaissent pas

• les droits ne peuvent être exercés que si on écoute les enfants.

• il faut veiller à rejoindre les enfants partout, où qu'ils soient

• il faut garantir aux enfants des mécanismes de mise en application de leurs droits.

2. Accès à la justice (système de justice pénale, protection de l'enfance, procédure familiale et immigration)

L'accès à la justice demeure un défi de taille. Il y a toujours de nombreux enfants condamnés à la prison à vie ou à la peine de mort ainsi que des enfants illégalement privés de liberté ou encore, traités à l'intérieur de systèmes judiciaires qui violent leurs droits.

Les enfants demandeurs d'asile se voient confrontés à la bureaucratie et à une réglementation rigide en plus d'être soumis à des mécanismes judiciaires mal adaptés à leur état de vulnérabilité. D'un autre côté, il y a des avancées prometteuses. La récente publication de l'Observation Générale du Comité des droits de l'enfant sur les droits de l'enfant dans le système de justice pour enfants indique que de nouvelles pratiques émergent, dont celle fondée sur la justice réparatrice. Cette pratique met l'accent sur la réparation et la guérison. Elle aide ainsi les enfants à accéder à une véritable justice.

La Présidente de l'AIMJF, Marta Pascual, a participé à une table ronde au sujet des systèmes de justice pour et avec les enfants. Elle a ainsi pu parler de son expérience comme juge au Tribunal pour mineurs à Buenos Aires.

3. Protection de l'enfance

La Conférence a également été l'occasion de discuter de l'évolution du concept de protection de l'enfance au cours des 30 dernières années. Le Comité des droits de l'enfant nous a maintenant permis de conceptualiser la violence que subissent les enfants du monde dans leur vie quotidienne, et d'en démontrer la multiplicité de ces formes.

Afin de continuer à améliorer le système de protection des enfants, des enjeux prioritaires ont été identifiés:

• Nécessité d'une approche holistique en matière de violence. Si on veut protéger les enfants, il faut leur offrir des espaces où ils peuvent s'exprimer en toute sécurité. Les enfants ne doivent pas craindre non plus d'être soumis à de nouveaux abus s'ils ont le courage de dénoncer la violence. Le développement des enfants, dont leur droit à l'éducation, peut également être entravé si les enfants sont exposés à la violence.

• Nécessité d'investir davantage dans le soutien aux parents, dans les services communautaires et dans l'aide aux donneurs de soins en général. Il faut aussi continuer d'évaluer les services régulièrement afin de s'assurer que les enfants, qu'ils demeurent auprès de leurs parents ou qu'ils soient confiés à des milieux de vie alternatifs, bénéficient d'une protection efficace, ce qui n'est pas toujours le cas.

• Importance du lien entre les droits des enfants, la famille et l'État. En reconnaissant les droits des enfants au sein de leur famille, le Comité des droits de l'enfant impose aux États l'obligation d'offrir un soutien aux parents afin qu'ils respectent les droits de leurs enfants, mais impose du même souffle une limite à leur autorité parentale afin de prévenir d'éventuelles violations des droits de l'enfant.

• La biotechnologie et le droit des enfants conçus par donneurs ou par des mères porteuses, en particulier le droit de connaître leurs origines et leurs parents biologiques.

• Le droit des enfants de parents incarcérés ou qui encourent l'incarcération. L'intérêt supérieur de l'enfant doit éclairer la prise de décision.

• L'importance du 3e Protocole facultatif à la Convention. L'élaboration de lignes directrices devrait aider à mieux connaître le contenu du Protocole et renforcer sa mise en œuvre.

• Nécessité d'éduquer et de transformer les attitudes. En effet, bien que l'amélioration de la législation soit essentielle, sans remettre en cause les normes et croyances sociales profondément ancrées, sans éducation aux droits, peu de choses changeront sur le terrain.

• Nécessité d'obtenir de meilleures données afin d'évaluer ce que vivent les enfants. Encore une fois, les participants rappellent l'importance de parler avec les enfants et de les écouter. 20 ans plus tard, le besoin d'une nouvelle étude mondiale est évoqué.

4. Questions émergentes - la mondialisation et les changements politiques des trois dernières décennies engendrent aujourd'hui de nouvelles questions qu'il faut aborder:

a) Migrants - la pauvreté, les changements climatiques et les conflits politiques augmentent, tout comme le nombre d'enfants migrants. Cette population est plus vulnérable à l'exploitation et à la violence extrême. Cette migration forcée provoque la séparation des familles, la faim. Elle favorise le recrutement forcé dans les milices ou la traite ainsi que la détention arbitraire.

• Certains jeunes migrants ont présenté leurs histoires et les grands défis auxquels ils sont confrontés. Les participants ont débattu des moyens pour mieux faire entendre la voix des jeunes migrants, afin d'élaborer des stratégies visant à leur offrir des services sécuritaires et efficaces. Il faut mettre l'accent sur la dimension positive de la migration selon les participants. Les migrants peuvent contribuer de façon remarquable à leur pays d'accueil.

b) Le terrorisme et son impact sur les enfants - trop d'enfants grandissent aujourd'hui au cœur de conflits avec les graves conséquences que cela engendre: blessures physiques et psychologiques dévastatrices, en plus de nombreuses violations des droits. Il y aurait près d'un enfant sur 5 qui serait victime du terrorisme.

• Des panelistes ont discuté du risque croissant pour les enfants de se retrouver dans des environnements où le recrutement et l'exploitation sont monnaie courante, d'autant plus que les progrès technologiques augmentent la capacité des groupes armés de rejoindre et d'enrôler les enfants. L'idée qu'au nom de la sécurité, les droits des enfants doivent céder, est à proscrire. Il faut plutôt mettre l'accent sur la prévention afin d'offrir aux enfants des alternatives positives, telles la réinsertion et la réadaptation tout en continuant de lutter contre ceux qui recrutent et enrôlent des enfants.

c) Développements numériques – Le Web est né la même année que la Convention. Aujourd'hui, 4 milliards de personnes sont désormais connectées et 1 utilisateur sur 3 est un enfant. Le virage numérique a eu un impact énorme sur la vie des enfants, et pas seulement parce que les enfants naviguent maintenant sur internet. Nous faisons tous face à une réalité numérique qui augmente de jour en jour. Ce monde numérique virtuel a un impact sur un bon nombre de droits tels que:

• Participation, liberté d'expression et d'association, jeux et culture, éducation, santé, déclaration des naissances, enjeux avec les enfants handicapés ainsi que la discrimination

• Protection: les risques que les enfants peuvent rencontrer en ligne sont complexes. Qu'il s'agisse du contenu (pornographie, violence, cultures suicidaires et haine), de la communication (extorsion, recrutement extrémiste), des crimes (cyberintimidation, harcèlement, incitation à la violence), des enjeux de confidentialité (partage des données par les enfants, utilisation et abus par les parents des données ou des images des enfants, surveillance dans les écoles, sociétés de technologie récoltant des données)

• Le défi consiste à trouver un équilibre entre tous ces droits. Il faut assurer la protection des enfants, sans leur interdire l'accès au monde numérique.

Conclusion

La Conférence a été très enrichissante et de nombreux autres sujets ont été abordés. Nous avons présenté ici les sujets que nous croyions les plus près de nos réalités quotidiennes.

Ceci étant dit, nul doute que la Convention doit poursuivre ses efforts de mise en œuvre. Pour ce faire, elle doit continuer de miser sur son approche basée sur les droits des enfants tout en relevant les nouveaux défis que constituent la technologie et les environnements politiques en constante évolution.

7.4. VISITE D´ÉTUDES À LONDRES, ANGLETERRE – JUIN 2020

L´ancienne présidente de l´AIMJF, Avril Calder, et le rédacteur en chef de la Chronique, Eduardo Rezende Melo, en collaboration avec le service de visite et d'information international des Cours Royales de Justice, organisent un programme de visite d´études à Londres, en Angleterre, pendant 4 jours, à commencer le 16 juin 2020. Le programme inclut des visites des tribunaux de la famille et de justice juvénile (probablement les tribunaux de la famille de Londres oriental et occidental, la division de la famille de la Cour Royale de Justice et un tribunal de justice juvénile, probablement à Highbury Mags).

Tous les membres ont été invités pour une inscription préliminaire en raison de limitation de personnes autorisés en tribunal (9 personnes). Nous avons eu 20 membres intéressés à participer et le procès de sélection commencera aussitôt les procédures de formalisation de la visite conclus.

Des nouveaux programmes de visites seront organisés et annoncés prochainement. Les membres désirant organiser un tour dans leur pays doivent contacter le rédacteur en chef de la Chronique par le courriel suivant : aimjfchronicle@gmail.com.

8. LE REGARD REGIONAL SUR LA JUSTICE ET L´ENFANCE- DES NOUVELLES DES SECTIONS REGIONALES OU DES CONSEILS CONSULTATIFIS RÉGIONAUX

8.1. RÉUNION DE LA SECTION EUROPÉENNE DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAGISTRATS DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE (AIMJF). 4 octobre 2019 – Skopje (République de Macédoine du Nord)

Par Aleksandra Deanoska[122]

Personnes présentes : Isabelle Soenen (Belgique), Lana Peto Kujundzic (Croatie), Joseph Moyersoen (Italie), Margreeth Dam (Pays-Bas), Aleksandra Deanoska et Olja Ristova (République de Macédoine du Nord), Katarzyna Kosciow-Kowalczyk et Magdalena Arczewska (Pologne), Anne-Catherine Hatt (Suisse).

Trois exposés ont été présentés par nos hôtes macédoniens et la professeure Gordana Lazetic :

Les lois relatives à la justice pour enfants en République de Macédoine du Nord ;

Le système de justice juvénile macédonien dans la pratique ;

Les modifications apportées aux lois relatives à la justice pour enfants.

Il est évident qu'il existe un grand écart entre la théorie et la pratique. Il y a beaucoup à gagner, en pratique, à assurer le respect des lois et règlements et à investir dans la qualité et la formation des juges pour enfants, des procureurs et des avocats. Lana Peto Kujundzic a suggéré que la République de Macédoine du Nord suive l'exemple de la Croatie en mettant sur pied une association de juges de la jeunesse en vue de renforcer leur influence sur les politiques et le gouvernement.

De même, il est clair que le juge de la jeunesse ou le juge pour enfant a un statut inférieur par rapport aux autres juges en République de Macédoine du Nord. Affecter un juge à une chambre de la jeunesse est parfois perçu comme une destitution. Ce manque de reconnaissance a été identifié par plusieurs participants et il a été suggéré d'en discuter lors de la prochaine réunion, en 2020.

La formation des juges pour enfants : tous les participants ont rempli le questionnaire distribué par La Chronique (puis par Aleksandra Deanoska et Margreeth Dam). La Belgique est le seul pays où la formation (de base), qui inclut des aspects juridiques, pédagogiques et psychologiques, est obligatoire pour les juges de la jeunesse. Ceci est considéré comme une bonne pratique. Une autre bonne pratique en Belgique réside dans le fait que leur système éducatif est transparent, et donc que les avocats et autres participants au processus peuvent être informés du parcours éducatif du juge.

Tous les participants sont d'accord pour dire qu'une formation multidisciplinaire de base devrait être disponible pour tous les juges de la jeunesse, et ne devrait pas être limitée à un certain nombre de participants. Cela devrait constituer une norme minimale.

Mise en œuvre des lignes directrices : les participants sont au courant que les lignes directrices ont été remises aux autorités, mais ils ne savent pas si elles les utilisent réellement. La Croatie et l'Italie ont fait traduire les lignes directrices par leurs associations, de sorte que les personnes qui travaillent avec elles puissent être à même de les comprendre.

La langue de travail dans la Section européenne : il a été décidé d'utiliser l'anglais comme langue de travail au sein de la Section européenne, car seuls quelques membres sont capables de communiquer en français. Cela signifie que tous les membres de la Section européenne doivent avoir une compréhension basique de l'anglais. Lors des réunions, il y aura toujours des participants qui comprennent à la fois l'anglais et le français (comme c'est le cas par exemple d'Isabelle Soenen et d'Alice Grunewald) et peuvent aider les membres qui le nécessitent.

Rencontre 2020 : la Section européenne se réunira à Varsovie (Pologne) les 2 et 3 octobre 2020. Les participants sont reconnaissants aux membres polonais de proposer d'organiser la prochaine réunion. Quelques sujets ont été mentionnés pour l'année prochaine, tels que les ONG, notre capacité à travailler ensemble et si oui, comment, ainsi que le statut du juge de la jeunesse.

122. Faculté de droit « Justinianus Primus », Université Saint-Cyrille et Saint-Méthode, Skopje, République de Macédoine du Nord

8.2. RENFORCEMENT DES ALLIANCES EN AFRIQUE – POUR UNE SECTION RÉGIONALE DE L´AIMJF – CONFÉRENCE DU CAP – AFRIQUE DU SUD – MARS 2020

L`organisation de la réunion du comité de l´AIMJF en Afrique du Sud symbolise un double défi, soit pour le Bureau, soit pour le comité éditorial de l´AIMJF : la construction d´une relation plus proche avec les membres dans les diverses régions du monde et les efforts pour organiser une structure plus solide dans chaque région, capable de contribuer aux discussions et activités de l´AIMJF.

Avec le soutien de l´Université du Cap Occidental, particulièrement de la Professeure Julia Sloth-Nielsen, et du bureau d´avocats Miller du Toit, l´AIMJF participera de la 23ème conférence annuelle sur le droit de la famille au Cap, Afrique du Sud, du 11 au 13 mars.

Le 11 mars aura lieu une visite d´étude dans les tribunaux et dans un centre de détention pour adolescents, dans le contexte d´efforts de l´AIMJF pour donner aux membres l´opportunité d´une connaissance et expérience plus concrètes des différents systèmes.

La conférence aura lieu le 12 et 13 mars, avec des thèmes très variés et intéressants : la Convention de la Haye, violence domestique et enlèvement d´enfants, gestation pour autrui et reproduction alternative, droits des LGBTQI, droits des enfants, droit coutumier, réformes procédurales, entre autres sujets.

L´AIMJF participera à une session sur la justice juvénile et organisera aussi un espace pour une réunion avec les membres africains, particulièrement ceux qui sont invités pour bâtir les bases d´une section régionale de l´AIMJF.

La réunion du Comité aura lieu le 13 mars, à 11h, dans l´Hôtel Président.

Pour les inscriptions, consultez https://www.mdtcinc.co.za/conference/#register

9. AGENDA DES ÉVÉNEMENTS A VENIR

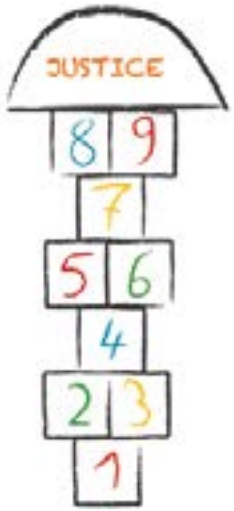
9.1. APPEL A CANDIDATURES: MASTER (LL.M.) SPECIALISE EN DROITS DE L'ENFANT - UNIVERSITE DE LEIDEN

Le Département des droits de l'enfant est désormais ouvert aux candidatures pour le programme d'étude "Master (LL.M.) spécialisé en droits de l'enfant" débutant en Septembre 2020 pour la prochaine année académique de 2020-2021 à l' Université de Leiden (Pays-Bas). Il s'agit d'un programme international de petite échelle offrant une spécialisation approfondie où les étudiants apprendront à faire face à l'augmentation des développements juridiques concernant les enfants dans les domaines internationaux, régionaux et nationaux. Le programme est ouvert aux professionnels du droit et aux diplômés du monde entier, ayant un diplôme de droit ou ayant un diplôme d'un niveau équivalent dans une autre discipline avec une connaissance suffisante en droit. Découvrez notre dernière newsletter ici et visitez notre page Facebook.

9.2. APPEL A CANDIDATURES: LES FRONTIERES DES DROITS DE L'ENFANT COURS D'ETE – UNIVERSITE DE LEIDEN

Les candidatures sont les bienvenues pour le cours d'été de 2020 les frontières des droits de l'enfant qui se déroulera du 29 juin au 3 juillet à Leiden et La Haye. Ce cours d'été offre aux participants un cours complet sur les droits de l'enfant, qui permet une réflexion approfondie sur les problèmes contemporains des droits de l'enfant d'un point de vue juridique, et aussi bien d'un point de vue multidisciplinaire, de divers systèmes juridiques, perceptions et réalités locales. Ce cours s'adresse aux étudiants de droit (qui ont accompli au moins trois ans), aux jeunes diplômés et aux professionnels diplômés en droit. Des candidats d'autres disciplines pertinentes liées au thème du cours seront également pris en considération. Les frais de scolarité pour le cours sont de 950 €. Nous offrons un tarif spécial de 800 € pour les participants qui s'inscrivent avant le 1er mars 2020.

9.3. ACCÈS DES ENFANTS À LA JUSTICE UNIVERSITÉ D'OTTAWA, 21-22 MAI 2020



L'accès à la justice est une préoccupation dans plusieurs pays. Déjà en 1978 on distinguait trois vagues de l'accès à la justice (Cappelletti et Garth 1978) et des discussions continuent à avoir lieu pour savoir comment favoriser une justice plus proche des personnes qui en ont besoin. Les questions de l'accès à la justice sont souvent abordées du point de vue des coûts associés aux procédures de justice, de la complexité et de la lenteur des procédures et du manque d'information disponible. La justice intéresse aussi les enfants et les jeunes qui se trouvent impliqués de différentes manières dans des procédures de justice, mais les efforts d'amélioration de l'accès des citoyens à la justice ignorent généralement les enfants et les problématiques particulières qui se rattachent à eux. Ces problématiques incluent l'absence d'adaptation des systèmes de justice et des procédures à la situation des enfants. Des efforts ont été faits au niveau international, depuis environ une décennie, avec les Lignes directrices du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants (2010), le rapport de la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme sur l'accès des enfants à la justice (2013), ou encore l'Observation générale no. 12 du Comité des droits de l'enfant sur le droit de l'enfant d'être entendu (2009). Il existe maintenant de multiples sources de recommandations sur la mise en place d'une justice adaptée aux enfants. Pourtant les efforts, tant au niveau de la pratique que de la recherche, demeurent limités et plusieurs questions doivent encore être posées. Ce colloque, organisé par le Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant (LRIDE/IRLRC) et des organismes partenaires, vient appuyer les efforts en faveur des initiatives d'accès à la justice des enfants, tels que l'appel à l'action pour la l'application aux enfants de l'objectif de développement durable no. 16. Ce colloque cherche à circonscrire l'accès des enfants à la justice d'une manière globale, en répondant aux défis actuels, en soulevant des questions qui n'ont pas encore été posées et en apportant des nouvelles réponses aux problématiques existantes

RENSEIGNEMENTS :
Line C. Bissonnette, M.A.
Gestionnaire, Relations internationales et communautaires
Faculté de droit, Section de droit civil
Université d'Ottawa
Pavillon Fauteux
57, rue Louis-Pasteur, pièce 209
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5

Téléphone : 613-562-5800 poste 1736
Télécopieur : 613-562-5121
Courriel : lbisson@uOttawa.ca

10. RUBRIQUE DE LA TRÉSORIÈRE

Appel à payer les cotisations 2020
L'Assemblée générale 2018 à Paris a décidé en Mai 2018 d'adapter le montant de cotisation des membres individuels à 45 livres sterling, 50 Euros ou 60 Francs Suisses.

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous rappeler les moyens de vous acquitter de cette cotisation :
1. en vous rendant sur le site web de l'AIMJF : cliquez sur « Membership » et puis sur

« Subscribe » pour pouvoir payer en ligne, via le système sécurisé PayPal.
Toutes les monnaies sont acceptées, le système de PayPal fera la conversion en Livres sterling.

2. directement sur les comptes bancaires suivants:

GBP: to Barclays Bank, Sortcode 204673, SWIFTBIC BRCGB22, IBAN GB15 BARC 2046

7313 8397 45, Account Nr. 13839745

CHF: to St.Galler Kantonalbank, SWIFTBIC KBSGCH22, BC 781, IBAN CH75 0078 1619

4639 4200 0, Account Nr. 6194.6394.2000

Euro: to St. Galler Kantonalbank, SWIFTBIC KBSGCH22, BC 781, IBAN CH48 0078 1619
4639 4200 1, Account Nr. 6194.6394.2001

Il est bien sûr également possible de payer en liquide en donnant la somme directement à l'un des membres du Comité exécutif.

Sans votre cotisation, il nous serait impossible de publier cette Chronique.

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter par courriel (treasurer@aimjf.org)

Merci beaucoup d'avance!
Anne-Catherine Hatt, Trésorière AIMJF

11. LA RUBRIQUE DES CONTACTS

De	Sujet	lien
OMS (Organisation mondiale de la santé)	Rapport de l´OMS sur le handicap (en anglais)	http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html
Prison fellowship international Centre for Justice and Reconciliation (restorative justice on line)	Analyse du Ministère de la Justice de Nouvelle Zélande sur la récidive dans les cas de justice restaurative: 2008 et 2009 (en anglais)	http://www.restorativejustice.org/10fulltext/ministryofjusticenewzealand2011/view
Conseil des Nations Unies sur les droits humains	Rapport du représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés	http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/443/70/PDF/N1144370.pdf?OpenElement
	Enfants et justice pendant et après les conflits armés	http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_1957.pdf
	Résolution sur l´orientation sexuelle et identité de genre	http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G11/141/94/PDF/G1114194.pdf?OpenElemen http://daccess-dds-
	Protocole optionnel à la CDC sur la procédure de communication	ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/148/40/PDF/G1114840.pdf?OpenElement t
	Programme préliminaire pour la 19ème session du Conseil des Droits de l´Homme	http://www.crin.org/docs/Revised%20PROGRAMME%20OF%20WORK%2012-12-2011.pdf
Human Rights for Development	Un programme international sur droits humains en developpement avec une attention spéciale aux droits des enfants 30 Juillet-24 Août 2012 Anvers, Belgique	www.hr4dev.be
Centre pour l´Étude de l´enfance et de la jeunesse, Université de Sheffield 16 Mai 2012	Exploring Childhood Studies in the Global South – Africa in Focus' (En explorant les études sur l´enfance au sud du monde – l´Afrique en focus	http://www.cscy.group.shef.ac.uk/events/index.htm
The Child Rights Information Network (CRIN)	Le site web de CRIN offre des ressources sur les droits des enfants en 4 langues (français, arabe, anglais et espagnol)	Email: info@crin.org www.crin.org
Interagency Panel on Juvenile Justice (IPJJ)	Newsletter	newsletter@juvenilejusticepanel.org
Observatoire international de la justice juvénile (OIJJ)	site web	http://www.ijjo.org

12. LA CHRONIQUE – LA VOIX DE L´AIMJF ET SON COMITE DE REDACTION

La Chronique est la voix de l'Association. C´est une revue publiée deux fois par an dans les trois langues officielles de l'Association—l'anglais, le français et l'espagnol. Le but du Comité de Rédaction consiste à faire de la Chronique un forum de débat pour ceux qui sont concernés, dans le monde entier, par des questions relatives à l'enfant et à la famille, dans le domaine du droit civil en matière de l'enfant et de la famille, ou par les questions relatives à la justice juvénile.

Comme expression d´une Association avec des membres dans plus de soixante pays, la Chronique est un important portrait de la diversité des pratiques dans le monde, surtout sur la Justice, pour mieux mettre en place les droits des enfants, mais aussi pour améliorer la Justice elle-même, toujours avec un horizon de construction des réflexions théoriques qui puissent contribuer à l´approfondissement du droit de l´enfant.

Avec la participation des membres, dans un grand réseau de collaborateurs, étendu à ses contacts dans les universités, les chercheurs indépendants, les organisations qui s´occupent des enfants, la Chronique est une source permanente d´articles théoriques, bonne pratiques, de nouvelles publications, nouvelles lois et jurisprudence dans le monde entier.

Au-delà d´articles sur des sujets d´intérêt général, chaque édition dédie un espace à un sujet d´étude comparative, suggéré par le Comité de Rédaction, les Conseils Consultatifs Régionaux ou par un membre de l´Association.

Les contributions de tous les lecteurs sont bienvenues. Les articles pour la Chronique doivent être envoyés en anglais, français ou espagnol. Le Comité de Rédaction s'engage à faire traduire les articles dans les trois langues – il sera évidemment très utile que les participants fournissent des traductions.

Préférablement, les articles devraient être d'une longueur de 1500 à 2000 mots. Les commentaires sur les articles déjà publiés sont aussi bienvenus. Les articles et les commentaires devraient être envoyés directement au Rédacteur en chef dans le courriel suivant : chronicle@aimjf.org. Si vous préférez, vous pouvez les envoyer aussi à tout membre du Comité de Rédaction aux adresses ci-dessous. C´est l´opportunité de remerciement à tous les membres du Comité de Rédaction pour leur fondamentale collaboration.

Aleksandra Deanoska – Macédoine (aleksandra_deanoska@yahoo.com)

Andrew Becroft – Nouvelle Zélande (a.becroft@occ.org.nz)

Gabriela Ureta – Chili (gureta@vtr.net)

Jean Trépanier – Canada (jean.trepanier.2@umontreal.ca)

Julia Sloth-Nielsen – Afrique du Sud (jsloth-nielsen@uwc.ac.za)

Leonard Edwards – États-Unis (judgeleonardedwards@gmail.com)

Madan Lokur – Inde (madanlokur@gmail.com)

Magdalena Arczewska – Pologne (Magdalena.arczewska@uw.edu.pl)

Mary Beloff – Argentine (mabeloff@retina.ar)

Nadira Patherya – Inde (patherya@gmail.com)

Taghreed Jaber – Jordanie (tjaber@penalreform.org)

Viviane Primeau – Canada (viviane.primeau@judex.qc.ca)

SUMMARY

1. EDITORIAL – Eduardo Rezende Melo (Editor in Chief)

2. FOCUSED STUDY OF A SPECIFIC SUBJECT- GOOD PRATICES IN JUVENILE AND RESTORATIVE JUSTICE

2.1. THEORETICAL APPROACHES

2.1.1. Due process and justice for adolescents. Progress and pending agenda in Mexico. By Alicia Azzolini (Mexico)

2.1.2. The facilitation conference: an alternative method of settlement in criminal justice for young persons. By Nancy Moreau (Canada)

2.1.3. When young persons make up for what they have done by getting involved in the community through the "fair approach". By Marie-Eve Lamoureux et Mathilde Martin (Canada)

2.1.4. The praxis of socio-education with teenagers and young people in Jardim Angela / SP, Brazil. By Alcimar Neves Antônio, Claudineia Rodrigues Marques Silva, Gabriela Benedicto de Morais, Joel Costa Rodrigues, Sandro Alves Dias & Suzana Gomes dos Santos (Brazil)

2.1.5.Application of the restorative approach in the Macedonian judicial practice in criminal procedures against children. By Olja Ristova (Rep. of North Macedonia)

2.1.6. Restorative Juvenile Justice: South Africa, Namibia and Zimbabwe. By Julia Sloth-Nielsen (South Africa)

2.1.7. General Comment No 24 by the Committee of the Rights of the Child, on September 19, 2019. Replacing General Comment No 10, 2007. By Marta Pascual (Argentina)

2.1.8. Global study on children deprived of liberty

2.2. Case-law analysis: why does the ruling issued by the Brazilian Supreme Federal Court - SFC, that prevents overcrowding in minor incarceration, cause controversy? By Brigitte Remor De Souza May

3. GENERAL TOPICS

3.1. THEORETICAL APPROACHES

3.1.1. Forensic evidence in child protection proceedings. By Peter Johnstone (Australia)

3.1.2. Sibling bonding considerations in child custody cases. By Ken Lewis (USA)

3.1.3. The Interdisciplinary Research Laboratory on the rights of the child: a platform for exchange and reflection. By Mona Paré (Canada)

4. ORGANIZATIONAL OR METHODOLOGICAL IMPROVEMENTS IN THE JUDICIAL SYSTEM

4.1. The importance of judicial training on EU law as a non-legislative solution to protecting the rights of children. By Wojciech Postulski

4.2. Survey on specialized training on child and youth rights – preliminary outcomes. By Eduardo Rezende Melo (Brazil)

5. ASSOCIATIVE EXPERIENCE AND ITS IMPACT ON HOW JUDGES AND MAGISTRATES GRANT CHILDREN´S RIGHTS

5.1. Becoming stronger and moving forward together: the role of judicial associations in the modern era. By John Lowndes (Australia)

5.2 The activity of the Association of Family Judges in Poland. By Magdalena Arczewska (Poland)

6. BOOK REVIEW

6.1. Fundamental rights and best interests of the child in transnational families

6.2. Plurality and diversity of family relations in Europe

6.3. Children's constitutional rights in the Nordic countries

6.4. Childrens' rights and obligations in canon law

6.5. Violence against children in the criminal justice system

7. IAYFJM´S ACTIVITIES – NEWS FROM THE EXECUTIVE BOARD

7.1 Mexico – Congress of the National Juvenile Justice Network. September 2019

7.2. Study tour to São Paulo, Brazil – 4 to 6 November de 2019

7.3. 30th anniversary of the CDC – Geneva, Switzerland. By Andrea Santos Souza

7.4. Study Tour to London, England – June 2020

8. A REGIONAL PERSPECTIVE ON JUSTICE AND CHILDHOOD -NEWS FROM THE REGIONAL SECTIONS AND CONSULTIVE BOARDS

8.1. Meeting European section of the IAYFJM in October 4th 2019 in Skopje (North Macedonia). By Aleksandra Deanoska

8.2. Strengthening alliances in Africa – towards an IAYFJM´s regional section. Conference in South Africa – March 2020

9.AGENDA FOR UPCOMING EVENTS

9.1. Advanced studies in international children's rights – Leiden University

9.2. Frontiers of children's rights summer school – Leiden University

9.3. Children's access to justice University of Ottawa, May 21-22, 2020

10. TREASURER'S COLUMN

11. CONTACT CORNER

12. THE CHRONICLE – IAYFJM'S VOICE AND ITS EDITORIAL BOARD

1. EDITORIAL

By Eduardo Rezende Melo[1]

This edition of the Chronicle arrives a month later than usual to guarantee a better participation of the association´s members. We have noticed that the distribution of the chronicle in July, with a call for new articles during the northern summer, restricting the participation of many members. On the other hand, the January edition happened during the southern hemisphere summer. It is in front of this situation that we decided to change the deadlines for our members to submit articles to mid-May, for the August publication; and for late-October, expecting February´s publication. We hope this helps all our members to participate!

About the subjects, this edition focuses on good practices on juvenile justice and restorative justice.

On this field we have three groups of articles. The first one is dedicated to juvenile justice and inter-institutional strategies.

Prof. Alicia Azzolini, from Mexico, analyzes the impact of her countries new legislation, with an impressing reduction of child's deprived of their liberty since they adopted the oral accusatory system, specialized in age difference and the measures to be taken with them. She also analyzes the pending agenda of things to improve.

We also have a very interesting article by Judge Nancy Moreau, from Canada, who makes a presentation about the facilitation conferences as a strategy to lower the length of de judicial processes, even before the plea bargaining, proven to be very effective when providing solutions. Marie-Eve Lamoureux and Mathilde Martin introduce us to the work of Equijustice, also in Canada, involved in the implementation of restoration measures to the community and benevolent jobs for teenagers, describing strategies and methodologies, and their positive results.

The socio-educative measures team of "Jardin Angela", a neighborhood just outside of San Pablo, Brazil, exposes the challenges and strategies to work with teenagers that are carrying judicial measures, their interaction with the community that they are inserted and the need to create new life perspectives for them, always with the professional support of the ones involved in the community

The second group of artcles is centered in restorative justice.

Judge Olja Ristova, from the Republic of North Macedonia, exposes the challenges behind the use of a restorative approach in her country´s judiciary practice, even with the legal incorporation. Prof. Julia Sloth-Nielsen, from South Africa, analyzes the lack of enthusiasm with restorative justice in her country, meanwhile, in Zimbabwe, it's been very well applied, creating a regional panorama with proposals for the implementation in Namibia.

Lastly, the President of the IAFYJM, Judge Marta Pascual, analyzes the General Comment Number 24, of the Children's Rights Committee, replacing General comment number 10, and published the Global Study on Children's deprived of Liberty.

Judge Brigitte May makes a comment on the decision of Brazil´s Supreme Court – and its social and juridical reaction – on a collective habeas corpus against the overpopulation of teenager's detention centers in the country.

In the general interest section, we have two very interesting articles about forensic evidence on child protection.

Judge Peter Johnstone, from Australia, discusses the shaken baby syndrome and the evidence evaluation criteria for judges. Prof. Ken Lewis, From USA, talks about the legal parameters and criteria for taking apart siblings in family processes.

Prof. Mona Pare, From Canada, presents the activities of the Interdisciplinary Investigations Laboratory on Childs Rights, and the upcoming conference in Ottawa, for next May, about children's access to justice.

Actions towards perfecting justice are of most interest to our association. The European Commission's judicial training section brings the important discussion that the IAFYJM started in their 2018 congress, about the need to improve the effective implementation of laws, and therefore the need to involve professionals in the knowing and comprehension about child's rights. Wojciech Postulski, responsible for the organization of this training program, presents the contents, proceedings and methods used for perfecting the work of judges and prosecutors in Europe, in their work with children rights.

As you know, we initiated an international survey on specialized training of magistrates that work in specialized courts. We keep collecting data – and invite you to inform about your countries, but we want to share with you the partial results.

This edition brings another new feature. We will present, in the upcoming editions, the specific actions of the most important members of the IAFYJM, the national associations. These are the ones that, nationally, work towards perfecting justice, mediating international discussions and local topics and bring new experiences for global debate.

We start this edition with a discussion about the importance of magistrate's associations with a text by the former president of the magistrate's association of the Commonwealth, John Lowndes, and will have, in each edition, with the opportunity to hear about a national associations activity towards perfecting the justice system. Poland, the country that proposed the United Nations the organization of a Convention, will have the honor of inaugurating the space that, we hope, will help the IAFYJM to get closer to the national partners, creating a solid network.

We move towards with our bibliographical section with the support of Brill and Insentia editorial houses, and with the especial mention of the book organized by our partner from Terres des Hommes, Cedric Foussard, and Wendy, about violence against children in the criminal justice system. We recommend the reading.

As always, we are open to collaboration from editorial houses for the distribution

1. Eduardo Rezende Melo is the Editor in Chief of the Chronicle. He is Judge in Brazil since 1991, he has a Doctorate in Human Rights by the University of Sao Paulo and is the pedagogical coordinator of the magistrates´ training in childrens´ rights of the Magistrates School of Sao Paulo.

of scientific production in our fields. We invite the members to tell us about the publishing of their works for us to post in our chronicle!

The Executive Committee of the IAFYJM presents the activities for this semester, looking to share its results with the members and to stimulate he reflection about actions to be taken.

Our presidents, Marta Pascual, participation in the Mexican Congress, preparing upcoming international events and helping in the constitution of associative movements; the organization of visits programs in each country (like the one held in San Pablo, Brazil, in November, the upcoming visit to South Africa in march and London in June), and the international discussion about the role of justice guaranteeing children's rights, like the one that happened in the Convention for the 30th anniversary of the CRC in Geneva, Switzerland, where we are informed by our secretary Andrea Santos Souza.

On a regional level, the European section presents a summary of the meeting held in the Republic of Northern Macedonia about the training of magistrates on children's rights and the organization for South Africa's conference, to build a regional section of the IAFYJM. We will organize our next committee reunion in Cape Town, in an effort with all our members.

In our events agenda, we highlight two activities of the University of Leiden, in the Netherlands, the masters on children rights and a summer training; a conference in Canada about children's access to justice and, only in the Spanish version, a specialization and international capacitation on children's and youth by the Latin American Council of Social Sciences CLACSO.

We invite you to join, write and contribute with the chronicle, as a wish and search to make this association and this space a field of debate, learning, knowledge and gathering between professionals who are committed with the defense of children's rights

I wish you all an excellent reading
Best regards

2. FOCUSED STUDY OF A SPECIFIC SUBJECT-GOOD PRATICES IN JUVENILE AND RESTORATIVE JUSTICE

2.1.THEORETICAL APPROACHES

2.1.1. DUE PROCESS AND JUSTICE FOR ADOLESCENTS. PROGRESS AND PENDING AGENDA IN MEXICO

By Alicia Azzolini[2]

I. Progress

The reform to the Political Constitution of the Mexican United States (CPEUM) in 2005 brought about a change in the model of juvenile justice in force in the country by adapting it to the contents of the Convention on the Rights of the Child (CDN). The process of transformation from the guardianship model to the integral protection one was developed unevenly in the diverse federative entities, but the enforcement of a national law has benefited the consolidation of the system across the country in a more homogeneous way.

Adolescents as rights holders
The CRC was a watershed in the issue of the rights of children. The new paradigm adopted by the CPEUM and in the National Law of the Integral System of Criminal Justice for Adolescents (NLISCJA) that went into effect in 2016 substantially modifies the form and the way and manner of addressing the problem of underage persons in conflict with criminal law. Children –persons under the age of 18 years of age- are no longer object to state protection but they are subjects of rights. The fiction of no criminal accountability characteristic of the irregular situation doctrine is left aside to build a model in which adolescents are responsible for their acts but in a differentiated way, with less drastic responses than adults.

Reduction in deprivation of liberty

The most relevant achievement of the new model is that the number of adolescents deprived of liberty was dramatically reduced. In 2005, before the constitutional reform, there were round numbers of 37,000 minors in detention, in 2013 The population of adolescents inmates approximately accounted for 5,000, while 7,000 served diverse measures when released.[3] The notion of integral protec-

2. Research Professor at UAM Azcapotzalco, professor at INACIPE and Honorary Member of the Academia Mexicana de Ciencias Penales.

3. Azaola, Elena, Diagnosis of adolescents that commit felonies in Mexico, Unicef, 2015, p.13. Also see Criminal Procedural Justice Institute, Ac, Report about justice for youths in conflict with criminal law in Mexico; Current state after the constitutional reforms of 2005, 2008 and 2011, Mexico, 2013, p. 41–43. Cited in Azzolini Bincaz, Alicia Beatriz, The rights of girls, boys and adolescents, Programa Universitario de Derechos Humanos, UNAM; Mexico, Porrúa, 2017.

tion for girls, boys and adolescents privileges some rights, among them one of the most relevant for their development, liberty. The enforcement of alternate leave and non-deprivation of liberty measures have been decisive so that most of the adolescents in conflict with the law are not taken away from their daily life, in this respect that decreases the chances of being caught up in criminal activities.

Accusatory procedural and oral design
The NLISCJA designs an accusatory and adversarial procedural model that acknowledges the principles of due process. It is specifically mentioned there, in article 22, that the "System shall be based on an accusatory and oral process where the principles of publicity, contradiction, concentration, continuity and intermediation with the adjustments and exceptions characteristic of the specialized system".

Clearly, adolescents are granted all the principles and rights of the adult penal system, presumption of innocence, for instance, as well as those inherent as individuals in development, progressive autonomy, and superior interest, among others.

The supplementary use, outlined in article 10, in the National Code of Criminal Procedures, in the Alternative Mechanisms Law, in the National Law of Criminal Enforcement and the General Law of Victims, confirms the oral nature and adversarial character of the system.

Duration of the sanctions

La NLISCJA unified the sanctions – sanction measures- enforced on adolescents responsible for the commission of a crime.

The law, regarding the principle of progressive autonomy, distinguishes three age groups. From 12 years of age completed to less than 14; from 14 years of age completed to less than 16, and from 16 years of age completed to less than 18. The detention order can be used in the last two groups. Those adolescents that are between 14 years of age completed to less than 16 could serve a maximum of three years of detention, those who are between 16 and less than 18 could be sanctioned for a maximum time of 5 years. The age at the time of the commission of the crime is taken into account.

The law, not only created uniform intervals of sanction across the country, but IT also revokes disproportionate measures that anticipated some regulations of up to 20 years of deprivation of liberty.

Sentencing Phase

There has been progress in the NLISCJA since the execution phase was ruled in more detail. It sets forth the powers of the execution judge and the Administrative Authority in charge of the execution. Besides, it designs the proceedings to be followed before any instance.
It highlights the inclusion of restorative justice in the sentencing stage, thus searching for social and family reintegration of the youths as well as the victim's legal claims.

II. Pending issues

There still exist several pending issues to address in the Mexican juvenile criminal system. Some of them could be solved with legislative changes, however, most of them have to do with the enforcement of regulations, institutional practices, and system operators.

Enforcement of the principles
The NLISCJA considers the guiding principles of the system. Those who take part in the justice system for adolescents do not always apply the regulating principles fully. Provisions originated in the law prevail over the guidelines that orient the system. Legal operators are mostly persons trained in the old, rigid and formal procedural system with a legal conception. The Public Prosecutor's Office agents still request as precautionary action the preventive detention almost invariably for all types of offenses that admit so, without assessing the concrete situation nor complying with the principle that deprivation of liberty must be exceptional and for the minimum possible time. Over the course of the process, the adolescent is compelled to attend court in unnecessary cases, failing to see that implies missing school or work.

Something similar occurs in the substantive sphere. It has not been understood that in connection with the principle of progressive autonomy, crime categories are to be applied and interpreted according to the development of the adolescent as an individual, and not with the parameters of the criminal system for adults.

This is also the case for crimes of omission, where it is not possible to demand from persons that are in development to anticipate possible results or act to protect assets to the same degree as adults. Each case is to be assessed individually according to the principle of progressive autonomy and presumption of innocence.
As the youth criminal process has its characteristics that differ from the one for adults, substantive criminal law as regards adolescents also have to adapt to the characteristics of the subjects that fulfill the purpose for the system, the adolescents.

Specialization is not required everywhere

The NLISCJA provides that all the authorities of the System must be educated, trained and specialized in the area of juvenile justice regarding their responsibilities. It sets forth that the institutions or bodies involved in the operation of the System shall give the education, training, specific update to its public servants according to their degree of intervention in the different phases or stages of such Systems. It regulates that, from the beginning of the proceeding, every action and diligence shall be in charge of specialized bodies of the juvenile system of justice. The law confines itself to the servants involved in the system, it does not refer to private attorneys that may intervene in the process as defense attorneys of the adolescent accused or as legal advisers of the victim.

The Supreme Court of the Nation (SCJN) has gone a little beyond the international criteria by stating that everybody involved in the procurement and enforcement of juvenile justice has the necessary training in the matter.[4]

This has caused that juvenile courts request private attorneys to demonstrate their specialization in the matter. However, this request does not extend to the legal advisers of the victim. It is common that the legal advisers of the victim are unaware of the goals of the system and boost a vindictive lawsuit oriented to punishment in itself and to redress damages. The litigation becomes a very similar proceeding to the one for adults, lacking its distinctive features.

Therefore, all parties must be specialized so that they understand the goal of the system and have the sensitivity to understand the characteristics that define it. The NLISCJA should request the specialization of all the attorneys that intervene in the process.

4. JUVENILE INTEGRAL JUSTICE SYSTEM. SUBJECTS DUE TO SPECIALIZATION. Registro: 168768.

Profile of the officials

When referring to the specialization of the actors of the juvenile system of justice, the NJSC has defined three aspects it comprehends: a) Organization of work: organic specialization. b) Allocation of competences: specialization per subject and c) Personal profile: the profile of the actors of the system...[5]

Our supreme court has emphasized the training of the actors of the system as a must to meet the goals that pursues[6] as well as in their profile that is necessary to treat adolescents.[7]

Unfortunately, the public servants that intervene in the juvenile system of justice do not always have the profile, the sensitivity nor the necessary training to interact with adolescents. The lack of profiles becomes more evident and there should be locks so that this does not happen.

Juvenile criminal justice is specialized and needs specialized judges and magistrates with such a profile that allows them to understand the complexity that characterizes individuals in development. In some states judges are mixed, so they are criminal judges that deal with adults and adolescents. That goes against the specialization required in the NLISCJA.

Regulation and sentencing enforcement
The Achilles heel of the system certainly is the enforcement of measures, especially the one of detention. In this matter, little has been done by federative entities, most of them have kept their facilities and staff of the legal guardianship system

Perhaps, it is in the sentencing area where the vices that last throughout the system are most visible. The punishing nature that persists in many actors who do not understand the difference between the juvenile and the adult criminal system, and becomes evident at the moment of enforcing the punishing measure of deprivation of liberty.

Most of the adolescents that have been convicted are subject to no deprivation of liberty measures and this is the least regulated and developed aspect that requires a higher number of state actions to offer effective programs for social and family reinsertion. The problems that have been more often detected are the lack of suitable facilities, the bad quality of services, such as food, the lack of training of security personnel that abuse the youth inmates, the lack of educational programs at more advanced levels (secondary) and the absence of programs and instances that let them prepare to face life in freedom.

The rest of the sanctioning measures provided by the local laws are not fully enforced. Commonly, the bodies in charge of sentencing youths do not count on the human and material resources for their enforcement. It is fundamental to focus upfront on the punitive measures towards education and to youth reinsertion in the community. That involves the existence of programs — and specialized personnel to enforce them— oriented to reconcile youths with their past and their present and to bring them closer to the victims (whenever possible) and the community.

IV. Concluding remarks
To conclude this brief analysis of the youth justice system in Mexico, it is necessary to note that even if the NLISCJA is perfectible, at this moment the biggest challenge is its proper enforcement. It is only possible to achieve respect for the due process in the area of juvenile justice when the institutions and the persons involved in the system organize themselves and act within the principles that inspire it. Proper institutions, qualified personnel with the necessary profile and good practices must blend so that the operation of the system leads to achieving the goals it was created for.

2.1.2. THE FACILITATION CONFERENCE: AN ALTERNATIVE METHOD OF SETTLEMENT IN CRIMINAL JUSTICE FOR YOUNG PERSONS

By Nancy Moreau[8]

For a long time, we have underestimated the importance of alternative methods of settlement in criminal and penal justice, particularly as the procedure in Canada is essentially contradictory.

Indeed, since the presumption of innocence is a fundamental principle and because it is the task of the prosecutor to prove the accused's guilt "beyond reasonable doubt", without the need for the accused person to prove his or her innocence, authorities had to reflect upon a way to offer other ways of settlement to the parties and make them acceptable.

Today, given the initiatives, legislative changes and case-law, judges make more use of their management powers to suggest ways of hearing cases more efficiently and reducing delays. They take part in discussions with prosecution and defense counsels in order to reach a partial or complete resolution of a case, as regards the guilt or even the sentencing. They make use of case management conferences and facilitation conferences.

The goal of this article is to show you what a facilitation conference for young persons is and how it operates. It should be mentioned that this procedure is similar to the one used for adults, but its implementation is somewhat modified, given the particularities provided in the Youth Criminal Justice Act[9] (YCJA).

Since the facilitation conference falls under a criminal process, it should first be noted some aspects of this Act who targets specifically young persons. Indeed, these aspects will inevitably influence the content of the discussions that will be held during the facilitation conference.

In Canada, in proceedings laid under the Criminal Code, it is the YCJA that sets out the principles, the specific procedural rules and the sentences applicable to young persons who, at the time of the offence, were between 12 and 17 years old (inclusive).

This Act includes a Preamble, a Declaration of principles of general application

5. Register: 168773. Thesis: P./J. 63/2008.

6. JUVENILE INTEGRAL JUSTICE SYSTEM. THE TERM "SPECIALIZED" USED IN ARTICLE 18 IN THE CONSTITUTION REFERS TO THE PROFILE OF THE OFFICIAL AND LEGAL COMPETENCY TO THE BODY THAT BELONGS TO THAT SYSTEM. Register: 168773.

7. JUVENILE INTEGRAL JUSTICE SYSTEM. ASPECTS OF THE SPECIALIZATION AS PROFILE OF THE OFFICER THAT FORMS PART OF IT. Register: 1011758.

8. Admitted to the Bar in 1980, Judge Nancy Moreau worked as Deputy Attorney General, then as Chief Attorney at the Office of Director of Criminal and Penal Prosecutions, at the Youth Division of Montreal. She was appointed Judge at the Court of Québec, Youth Division, in 2007.

9. S.C. 2002, c. 1.

that provides the main interpretative framework of the Act, as well as specific declarations of principles that apply to certain sections.

This way, there are principles applicable to extrajudicial measures and sentencing, containing criteria that apply to custody, as well as principles concerning the custody and supervision system.

This penal justice system, which is distinct from the one for adults, is essentially based on the principle that young persons are less responsible. Therefore, sentencing aims at determining a sanction that is a fair and proportionate response to the severity of the offence and the degree of responsibility of the young person. The sentence must be compatible with their state of dependency and their level of maturity.

The measures taken must provide young persons with meaningful consequences that take into account their needs and level of development. They must encourage social readaptation and reinsertion of the young person by involving the family, members of his/her community and certain social agencies, and promote a sense of responsibility by the recognition of the damage caused.

It is worth noting that this Act calls for the integration of gender, ethnic, cultural and linguistic differences, in particular as regards aboriginal young persons.

Moreover, given young persons' perception of time, it is suggested that the persons responsible for enforcing this Act take actions with promptness and speed.
Other factors may influence the discussions during the facilitation conference, such as the length of the pre-trial custody, previous findings of guilt, as well as aggravating and mitigating circumstances related to the young person's situation.

Finally, bearing in mind that the sentence must be the least burdensome possible to comply with the objectives, a custodial sentence must be a sentence of last resort and protection measures must not be substituted.

As we will see further on, a facilitation conference is a voluntary approach initiated by counsels acting in criminal and penal proceedings. In this approach, a judge is asked to intervene in order to help the parties resolve a dispute taking place in a legal proceeding. This management tool serves the good administration of justice.

At the Court of Québec, facilitation conferences apply to proceedings held against both adults and young persons. It should be noted here that the situation of a young person involved in a criminal offence who has not yet reached the age of criminal responsibility (i.e. 12 years old) is rather dealt under a provincial law, i.e. the Youth Protection Act.[10]

Before exposing more in details the operating rules of a facilitation conference, it is worth recalling briefly the context that led to its implementation.

When, in the 1990s, the Province of Ontario is facing a recurring problem related to long delays in penal proceedings, the Government establishes a large working group to review the rules on disclosure of evidence and settlement.

Inspired by the recommendations of the report filed in 1993 by Judge G. Arthur Martin "Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions", the idea of facilitation in penal matters emerge and a collaboration work starts between judicial authorities of Quebec, representatives of the Court of Appeal and of the Superior Court, as well as members of the Bar acting both in prosecution and defense.

In 2004, the three main Courts with competence in penal affairs (Court of Appeal, Superior Court, Court of Québec) launch a facilitation pilot program in penal matters with a duration of 18 months. After the review and over time, the program is implemented by the different Courts.

Currently, the Regulation of the Court of Québec allows the chief judge to establish the rules that define the objectives, as well as the rules of access and of practice.

In short, this process implies that a judge takes part in the discussions between the counsels for prosecution and defense in order to facilitate the search for settling a dispute, including the sentencing, and eventually to settle it.
Facilitation conferences can take place in all types of cases, regardless of the nature of the charges.

Everything starts by the signature of a joint request sent to the coordinating judge asking him or her to assign a judge to conduct the facilitation conference. Only the judges trained for the purpose can be assigned.
By filing the request, the parties commit to submit to the judge designated, at least seven days prior to the conference, a brief file containing the accusation, a summary of the facts relating to the case and any other relevant document for the holding of the conference.

Since the rules governing the conference do not modify at all the rules governing the plea bargaining, the parties can also give details on the previous discussions and therefore better address the particular needs during the conference.

By signing the request, the parties commit to remain available and to respect the confidential nature of all the discussions that will take place during the conference. Naturally, the counsel for defense will be able to report to his or her client to check their position and confirm his or her mandate, and the counsel for prosecution will be able to do the same with the victim and/or the investigator, but none of the points discussed or put forward will be brought debore the court, as they risk to create a dead end or lead to a trial. This reflects the scope of the privilege attached to the principle of confidentiality.

Discussions are generally held behind closed doors, in a conference room, without recording. This confidentiality rule encourages free and frank discussions.

The conference is normally held in the presence of the counsels. However, the Court can allow the presence of a third person with the agreement of the parties and for various grounds. For instance, it can request the opinion of a professional who has already assessed the accused person in order to get a view on the sentence, or it can ask a social worker to intervene to validate the sentence's feasibility when it implies a third body (for example, extrajudicial sanctions, anger management program).

It is important to underline that the presence of a third party requires it to sign the confidentiality agreement.

When opening the conference, the judge recalls his or her mandate and the operating rules of the conference. The judge checks if the parties have signed the request and emphasizes the importance of confidentiality. The judge then validates with the counsels the scope and limits of their mandate and, if necessary, adopts particular operating rules. The conference takes place in a friendly and respectful atmosphere.

10. CQLR, chap. P-34.1.

When the judge gets into the issue itself, he or she invites each counsel to present their view of the case and their position with the aim of resolving the dispute.

This exercise allows to identify the issues at stake, to weigh the differences, to discuss each party's position and to work specifically on proposals for a solution.

During the discussions, the judge may wish to meet separatly the party and to organize a so-called "caucus".

This way, the judge will be able to address a particular point, to better understand the counsel's view and to try to resolve an emerging deadlock. This discussion remains confidential, it will be for the counsel to decide if he or she reveals or not the content of what was said, always with the aim of resolving the dispute.

If the case is big or implies several accused people, the judge can draw up a summary of everyone's position and make sure that it represents well the essence of their view.

If the positions give rise to related problems (for example, accessibility to certain documents or expertise, extradition), the judge can establish a list that he or she will refer to as discussions progress.

If the discussions reach a settlement, the judge who conducted the conference can, with the agreement of the parties, receive the guilty plea.

A settlement can fully resolve the dispute in that it covers the pleas and the sentence. It can also resolve the substantive aspects but not the sentence. In this case, the facilitating judge or another judge, according to the wishes of the parties, hears the representations in the Court and impose the sentence.

When a settlement is reached, the facilitating judge asks the counsels to write a factual summary corresponding to the discussions and agreements resulting from the meeting.

This summary is important because it will serve not only to summarize the facts after the recording of the pleas in the Court, but also to impose the sentence, the latter being a joint suggestion or not.

It is also worth noting that this factual summary will serve any professional who is asked to prepare a report or an expertise with a view to imposing the sentence.

Since penal justice is made public, the settlement is submitted to the facilitating judge, or any other judge, in the courtroom. It is important that the judge explains to the public the process that led to the agreement before the counsel records the pleas.

By acting this way, the public doesn't have the feeling that the case was settled behind closed doors and is aware of what was decided and of the grounds underlying the settlement. Transparency is a constant principle in facilitation matters.

If, by the end of the exercise, the dispute wasn't settled and is deadlocked, the facilitating judge is excluded from the judicial hearing and the other members of the Court are not informed of the process. As already mentioned, confidentiality enjoys a certain privilege.

In this case, before putting an end to the meeting, the facilitating judge can transform the facilitation conference into a management conference.

Once again, this exercise allows the parties and the judge to identify the questions to be solved at the time of the trial, to find ways to examine the legitimate applications and requests more effectively, i.e. those that have a reasonable chance to succeed, to record admissions, to limit the number of witnesses, all of this reducing the duration of the trial and making justice more efficient.

The experience gained the past few years in facilitation matters shows the advantages of using this way of settlement for the counsels and the justice in general. Indeed, in more than 90% of the cases brought before a facilitating judge, a settlement has been reached and, in a majority of the cases, sentencing was handed down. It is for you now to try the experience!

2.1.3. WHEN YOUNG PERSONS MAKE UP FOR WHAT THEY HAVE DONE BY GETTING INVOLVED IN THE COMMUNITY THROUGH THE "FAIR APPROACH"

By Marie-Eve Lamoureux et Mathilde Martin[11], Equijustice[12], Quebec

Adopted in 2003 throughout the Canadian territory, the Youth Criminal Justice Act (YCJA) defines the framework for extrajudicial and judicial intervention to be followed when young persons aged between 12 and 17 years old have committed an offence under the Criminal Code and other federal laws. Thus, when young persons have committed an offence, adapted measures exist so that they can repair the harm done, taking into account both the victim and the community.

Examples of measures proposed to

11. Marie-Eve Lamoureux, Director of criminal youth justice and citizen mediation services (Youth Criminal Justice Act) and Mathilde Martin, associate director and editor, at the Equijustice network.

12. Born in 1989, the Equijustice network is a Quebec non-profit provincial association gathering 23 members across Quebec. Equijustice provides expertise in restorative justice and citizen mediation (www.equijustice.ca).

young persons to repair their wrongdoing are: victim offender mediation, awareness-raising workshops or restorative processes towards the community and volunteering works.[13] In Quebec, the Equijustice network is one of the organizations participating in the implementation of these measures, in particular the restorative processes in the community and the volunteering works.

In recent years, the restorative justice has mainly focused on the practice of mediation. It is true that there is something significant to see people in conflict, who are totally opposed, accepting to meet each other and start a dialogue.

Even though restorative processes within the community are less spectacular than the practice of mediation, we will see that they are very well inserted in the development of restorative justice and of juvenile justice good practices.

Restorative processes in the community and volunteering works: definitions and objectives

The philosophy put forward by the restorative justice has infused the Canadian criminal justice system for forty years. As mentioned before, the restorative processes and volunteering works are part of the Youth Criminal Justice Act, based on the restorative justice principles.

Defined as unpaid services accomplished by the offender for the benefit of an organization established in the community, they aim at:

• Allowing young persons to repair the harm caused by the offence they have committed;

• Giving affected parties the opportunity to become actors of the judicial or extrajudicial process;

• Supporting the common good, since the young person contributes to the mission of organizations helping the community;

• Allowing the parent to participate in the restorative process and support the teenager;

• Encouraging the rehabilitation and social reinsertion of offenders.

Criminal system actors mainly resort to volunteering works when there is no other feasible option (such as the mediation with the victim). When young persons cannot come into direct contact with the victim, they will give time and work to an organization established in the community that, through its mission, positively influences society. According to the Equijustice network's internal statistics, restorative processes in which the young person is involved in the community and does volunteering work represent almost 70% of all cases that are brought before the network.

In view of this prevalence, actors of the network considered necessary to restore the reputation of restorative processes in the community, as well as of volunteering works, by modernizing their practices, in compliance with restorative justice principles, drawing on the work carried out in the framework of victim/offender mediations and elaborating on a new intervention approach. These efforts to modernize the professional practices aimed at creating adherence of both young persons and organizations collaborating in the process, clarifying the restorative processes and volunteering works' objectives with respect to other existing processes, and refocusing the practice on the idea of reparation instead of punishment.
Redefining the role of the young person, parents and partners through the "fair approach"

The "fair approach" has been conceptualized by the Equijustice network and has deeply transformed the stakeholders' practices in that it proposes the justiciable another experience and a different way of implementing justice.

Good practices with young offenders

The Equijustice network is as much interested in preventing offences as in the reaction to those events that caused them. Paying close attention to the history of each person, Equijustice welcomes offenders without a priori or bias, avoiding labels and stigma. This commitment to fairness and impartiality allows young offenders to express their point of view, reclaim the situation they experienced and explore all possible paths offered by the restorative process.
A personalized approach centered in careful listening, free of moral and prejudices, was fostered to create a relationship of trust with young offenders, encourage dialogue and their active participation. This approach provides young persons with an opportunity to understand their role in the restorative process and embrace it fully. Being at the core of the judiciary work, the young person becomes an essential actor of the process. Beyond the statement that a norm has been violated, it is now the reparation that prevails in the process, a process to which the young person subscribes.

If we take this model as a given nowadays, it has not always been so. Professionals in a position of authority may be tempted to impose their manacheistic view of a situation, to analyze instead of listening and to impose a line of conduct over a young person that is portrayed as inconstant, reckless and irresponsible. Often, the schedules, places and activities of young offenders were controlled by professionals who would subject them to some work aiming at holding them responsible. Such attitude deviated professionals from their vocation and depreciated both the process and its function.

Over the years, their position has changed: aware of their role, professionals try to limit the negative impacts that could arise from their attitude (essentialization, preconception, moralization…) by focusing on non-directivity, equity and transparence. The objective is first of all to accompany, listen and support young offenders in their restorative process and, finally, to encourage them to verbalize their own choices, resulting from their own reflections on themselves and discussions without restraint with the professional.

It is by probing the intrinsic motivations of young persons, by making them reflect upon their acts, understand them, and finally elaborate a personal project and adhere to it that the process takes its full restorative dimension.
The sense of partnership

In our network, we adhere to the idea, supported by Lode Walgrave, that a crime does not only concern the victim who suffered from it. In fact, the impact of a criminal act goes way beyond the individual for it affects, in turn, the whole society. It is therefore primordial to recognize the role of the community in the restorative process.

This position has radically changed the way of conceiving the role and implication of the community organizations with whom we collaborate in the framework of the restorative process and the volunteering works. Professionals of the network faced many constraints requiring them to request partner organizations to take actions according to geographical criteria (proximity with the place of residence of the young person) and availability (the competition

13. Also known as "community service".

between different volunteering projects has resulted in less associations being inclined to collaborate with professionals). Restoring the trust relationships, redefining and improving the role these partners had to play were necessary steps to change their position from centers merely receiving young offenders to actors of the process and the dialogue with young offenders.

Through their mission, these organizations promote the well-being of both the individuals and the community. Therefore, by choosing to contribute to the organization's mission, the young person participates in the common good. This also makes it possible to open new communication channels and re-establish an informal solidarity and mutual aid network, which enables to work towards rebuilding the social ties that were broken by the offence.

A research carried out in 2012 by the Equijustice network showed that 96% of the organizations felt either very positive or positive about the relevance of the restorative process within the community. Almost 80% of the respondent organizations put forward that the main advantage of such measure for the young persons is accountability and in 60% of the cases, the opportunity to repair the harm caused. These results highlight the importance of getting the different partners involved in the preparation of the process so that both the collaborating organization and the young person understand better its meaning.

Every time young persons choose a partner organization, they recognize its mission and the activities it carries out. This way, the values of both the organization and the young offender meet. It is this meeting that allows reparation for the harm done and gives back a sense to their respective work.

Parents as collaborators of the intervention

Although parents' participation was foreseen in the fundamental principles of the Young Offenders Act, it took some time to seriously consider their collaboration on the ground. For many years, stakeholders from the Equijustice network have considered young offenders as solely responsible for their act and, de facto, as the unique admissible interlocutors in the restorative process. In this context, the presence of parents was neither required nor promoted. Besides, the expertise that stakeholders used to openly claim in their favor did not encourage parents to speak up, as they were often relegated to a simple role of observers. It might seem paradoxical to keep at bay and in such radical way those who are yet the pillars of the young person's life.

Today, the stakeholders' practice was redesigned to put parents back at their right place as tutelary figures. From mere intermediaries between the young person and the stakeholder, they are now privileged interlocutors in the restorative process. As first actors in the life of the young person and main collaborators of the stakeholder, parents are not only encouraged to express themselves on the act committed by their child, but also to get involved in all the process steps that are relevant to the latter.

In the framework of the restorative process and volunteering works, parents provide support for their children as much as the Equijustice network's stakeholder offers a support to the parents whose familial life has been affected, despite themselves, by the crime.

Conclusion

Transformations that have been underway in the Equijustice network over the last years may seem imperceptible for external observers, but they have nevertheless deeply changed the stakeholders' position as well as their relation with the young offenders, parents, victims and partner organizations. This was a long-term undertaking that was carried out in order to develop good working practices regarding juvenile justice. In light of our experience, it appears crucial to us – and this is true for all actors of the juvenile justice – to learn how to evolve, to update our knowledge and working practices, as well as to put in doubt our way of thinking.
Thanks to the work of Equijustice network's stakeholders, restorative processes towards the community and volunteering works are no longer negligible and disregarded measures of the justice system, but fall within the development of a multifaceted restorative justice.

2.1.4. THE PRAXIS OF SOCIO-EDUCATION WITH TEENAGERS AND YOUNG PEOPLE IN JARDIM ANGELA / SP, BRAZIL

Alcimar Neves Antônio
Claudineia Rodrigues
Marques Silva Gabriela
Benedicto de Morais
Joel Costa Rodrigues
Sandro Alves Dias
Suzana Gomes dos Santos

Gabriela B. de Morais Psychol

Sandro A. Dias -Pedagogue

Gabriela B. Morais – Psychol.

Claudineia Silva –Social Worker

Joel Rodrigues –Manager

Alcimar Antonio – Social Worker

Presentation

The Brazilian Social Assistance Policy plays a fundamental role in the care of adolescents and young people in compliance with open social and educational measures, defined in the Statute of the Child and Adolescent (ECA, Federal Law n. 8069 (1990) – and called as Provision of Services to the Community (PSC) and Assisted Freedom (AF). The Organic Law of Social Assistance (OLSA), Federal Law n. 8742/1993 and revised by Law n. 12.435 (2011) – is conceived as a public policy aimed at those who need it, by right. OLSA has as its structuring axes the Single System of Social Assistance (SSSA), the Basic Operating Standard of SUAS (BOS/SUAS, 2005), the National Typification of Social Assistance Services (NTSAS, 2009). In guiding and monitoring the implementation of the PSC and AF measures, there is also as a guide, the Federal Law n. 12.594 (2012), that regulates and establishes the National System of Socio-Educational Assistance (NSSEA), aiming at the objectives of the socio-educational measures, second paragraph, of art. 1st:

I - the responsibility of the adolescent regarding the harmful consequences of the infraction, whenever possible encouraging their reparation;

II - the social integration of adolescents and the guarantee of their individual and social rights, by the fulfilment of their individual care plan; and

III - the disapproval of the infraction conduct, making the dispositions of the sentence as the maximum parameter of deprivation of liberty or restriction of rights, observing the limits provided by law (BRASIL, SINASE, 2012).

The attainment of such objectives has been possible by the intersectoral and interinstitutional articulation of the Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto no Jardim ngela (MSE-MA) (Jardim ngela Open Environment Socio-Educational Measure Service), considering the principle of institutional incompleteness that permeates the adolescent and youth's socio-educational policy in compliance with a court decision. Technical action, including the social educators' ones, has ensured interdisciplinary multi and interdisciplinary practices, including the quality of the relationship between systems, SUAS, NSSEA and Justice.

This text presents how social education (socio-educational practices), sustained from the perspective of human rights, conceptual-strategic and operational aligned on ethical and pedagogical basis, has been developed by SMSE-MA in Jardim ngela, located in São Paulo City extreme South Zone. The socio-educational praxis of SMSE-MA trajectory is recognized as one of the references of socio-educational praxis in the orientation and monitoring of adolescents and young people in PSC and LA measures in the city of São Paulo.

SMSE-MA ngela II - RAC trajectory

The Sociedade Santos Mártires (SSM) (Holy Martyrs Society), a non-governmental organization based in Jardim ngela, was created in 1998 motivated by social mobilization actions in defence of the improvement of living conditions and against the banalization of violence. Earlier, however, in 1997, the Fórum em Defesa da Vida do Distrito no Jardim ngela (Jardim ngela District Life Advocacy Forum) launched the challenge of opening spaces for integral protection for the youth aged 14 to 18 years exposed to situations of vulnerability, risk and violence.

Jardim ngela is in the Southern Region and is 30 km away from São Paulo City ground zero. There are 300,000 inhabitants and there is a population density of 7,387 inhab./km. Of this total, 70,000 are adolescents and young people aged 12-19 years, and 160 of them in compliance with social and educational measures of PSC and AF in the two MSE/MA in the region. In September, 69 adolescents and young people attended / followed up in this service. The predominant economic activity in the District is commerce and the provision of services and most of its residents work in other regions of the city.

SSM, as a member of that Forum, mobilizes the local community about violence and violation of children's rights and seeks to know institutions, professionals and activists linked to the defence of human rights present in the region. The first "social-pedagogical meeting" took place with the São Paulo State Minor Welfare[14], professionals who had a technical support base in the Region, the Community Minor Care Division/ Southern Post. At the time, the institution had no financial resources to develop new projects, only technical capacity to guide communities and local public institutions interested in the protection and defence of adolescents and young people as a preventive action.

The possibility of partnering with São Paulo State Department of Justice and Defence of Citizenship, and to which the Foundation is linked, was accomplished to guide and accompany adolescents and young people sentenced to non-custodial judicial measures (PSC and AF). SSM made a service proposal and obtained its first financial incentive for socio-educational action for an experimental period of 120 days for the acquisition of basic materials, organization of PSC and AF programs / services and training and qualification of social educators, aiming at the construction of methodologies for socio-education.

The first proposal for socio-education was called Adolescent Reintegration

14. The FEBEM/SP had its named changed to Fundacão Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente/Fundação CASA (Foundation Center for Social and Educational Assistance to Adolescentes (CASA Foundation) in 2016.

into Social and Community Living (ARSCL), which was built collectively (social educators, adolescents and young people, family members, technicians from DAMC/Southern Post). The ARSCL was implemented after technical adjustments (pedagogical and operational) through the elaboration of the Work Accomplishment and Accompaniment Plan, between the partnerships involved (Santos Mártires, DAMC/Posto Sul, Justice). However, during that experimental period, no adolescent was referred by the court to comply with PSC and AF measures. This seeming breach of intention and gesture caused SSM, displeased with that situation, to resume the debate with its partners in the second half of 1998. Meetings with the public offices responsible for the implementation of the socio-educational policy were, however, unsuccessful.

As Brazilian legislation and international norms focus on attention to adolescents and young people in compliance with judicial measures as close as possible to their place of residence, study or work, the ARSCL coordination then seeks the São Paulo City Hall (SPCH), through the Regional Supervision of Social Welfare (RSSW)[15] based in Jardim ngela, for the PSC and AF socio-educational measure implementation. Within 48 months of communication between ARSCL and RSSW in Campo Limpo, SSM was approached by the Programa Comunidade Solidária (Solidarity Community Program)[16], under the federal government, in care of adolescents and young people in contexts with high social vulnerability and violence. ARSCL can thus work with that public during 1999 in the development of various activities. That action was very important for the strengthening of the ARSCL team and in the methodological elaboration on socio-education. After listening to adolescents and young people, thematic workshops were held, enabling them to approach professional education: advanced computing, English, music, hip-hop, hairdresser, pizza maker, theatre, DJ and cultural producer, lasting 180 days. Assisted boys and girls also had counselling and psychosocial guidance and the development of socio-community activities that favoured citizenship, solidarity and education for peace.

In March 2000, SPCH, through RSSW, signed an agreement with SSM to assist and accompany 100 adolescents and young people in compliance with the PSC and AF socio-educational measures. Again, there was another obstacle with the signed agreement: the justice system argued that adolescent and youth in socio-educational measure referral to the ARSCL was possible through formal action between participating institutions (tripartite relationship of responsibilities) - SPCH/RSSW/ São Paulo State Minor Welfare (current CASA Foundation) - SSM/ARSCL. Obstacles to the development of publicly funded legal action showed that the institutions responsible for the Rights Guarantee System (RGS) are incipient and fragile in implementing open social and educational policy (PSC and AF). For SSM/ARSCL, the whole process of implementing the socio-educational measures program/service showed how conflicting it is to function in the state bureaucratic machine and coexisting harmoniously with it has become a major challenge. The trajectory has indeed shown that the law does not change reality. It took a lot of patience, perseverance and persistence in order to the adolescent, young people and their families' rights be able to count on a program / public service of socio-educational measures, closest to their territory (housing, school, work).

From that moment on and with the ongoing municipalization process and better understanding of responsibilities and attributions of the municipality with the implementation of non-custodial measures, the judiciary begins the referral of adolescents for guidance and monitoring by the ARSCL. It can be said that, only in 2004, the process of municipalization of socio-educational measures services began in São Paulo City. All this readjustment meant the resignation of more than 60% of the ARSCL team of social educators (technicians, educators and workshops), forged and trained throughout this period. As the service of the RAS was ample, it was necessary to review the proposal and refer the adolescents and youth who were not in socio-educational measures (two Youth Centres were established to accommodate those adolescents and youth).

In the first semester of 2002, after intense debates and suggestions made by adolescents and young people, the name ARSCL was approved and, in this sense, the word "rediscover" was the most suitable for bringing up the idea of rediscovering this group in the community they live in and seek to transform its reality and that of its surroundings. The name chosen to explain the change was Rediscovering Adolescent in the Community (RAC) and, in 2010, the new denomination for SMSE / MA ngela 2 - RAC. The monthly service capacity for 2019 is for 75 adolescents and young people in PSC and AF who are involved, in order of occurrence, in theft, drug trafficking, object receiving, personal injury, murder, assault, aggression and gun possession. The service is extended to support and guidance the families and includes a professional team in the areas of social assistance, psychology, social education, administration (management and administrative support). In addition to participating in guidance and technical training offered by the staff of the Specialized Reference Centre of Social Assistance of M'Boi Mirim (SRCSA), there are monthly technical hours for supervision and training with specialized professionals in socio-educational policy.

The praxis of socio-education

The activities offered at MSE-MA ngela 2 - RAC has, as a premise, the adolescents and young people reception, skill identification, knowledge exchange, social reintegration in the perspective of breaking with crime and non-recurrence. The social action in the socio-educational space focuses on understanding the family trajectory, the adolescent and the young in the different dimensions of social life for the elaboration of a political-pedagogical project that considers the process of formation of identity and subjectivities, contributing to the construction of a another trajectory and life project. Looking at the historicity of the assisted teenagers implies the critical rereading of the professionals' own social intervention in their specificities of knowledge and action: inter and multidisciplinarity is thus woven in line with the ethical-political assumptions of each area and the commitment with the construction of a new know-how, based on the observed and lived reality.

In the socio-education development in the MSE-MA ngela II - RAC space, it is possible to observe that the caregivers show their potential at the rereading of themselves, among peers, family and community: the practice of ethical exercise in those relationships is worked under the thesis of youth protagonism and autonomy. This view favours the development of a series of psychosocial and pedagogical actions in the resignification of those cared for in the context they live in and in other spaces of coexistence and participation. For example, activities aimed at vocational training have been shown to be relevant to the discovery and search for new skills and competences that many believed to lack: income generation, labour practice and insertion in the labour market have been the cause for better educational, cultu-

15. The Regional Supervisiono of Social Welfare is now called as Municipal Secretariat of Assistance and Social Development.

16. Program linked to the federal executive in the Government of Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) and coordinated by the first lady, Dra. Ruth Cardoso

ral and social training of those assisted teenagers.

The theoretical references that guide the MSE-MA ngela II - RAC praxis are from several areas, considering the adolescent and youth in their different dimensions of "being" and "being" in the world, and in which they feel belonging to and singular protagonists in different social contexts, people who are critical of a better world and reflective of the ethical and moral consequences of their actions. The conception of the meaning of the paradigm of the integral protection doctrine, the objectives of the socio-educational measures, the institutional incompleteness in the execution of the socio-educational policy refer to the search for different theoretical and practical references as Vygotsky (2007), Freire (2009), Costa (1994), Iamamoto (2003).

The reflection on the multiple intelligences and the validation of the importance of the development of these capacities and competences have made possible to work with the assisted ones the aptitude of new learning, the discovery and expansion of their potentialities, as well as making them perceive themselves as tolerant, empathic, critical and reflective in interaction with teams, among peers, families, community (GARDNER, 1995).
The activities in groups used as devices of change and transformation of each one of them, personally and socially, help in the constitution of the subjectivity, the identity and its formation and with real possibilities of reconstruction of trajectories distant from the criminal practices: the existence of a group presupposes that there is interaction and a shared emotional experience (SILVEIRA and PREVITALI, 2017; FERNANDES, 2003).

The way the activities are planned and proposed allow the caretakers a dual relationship, which helps in the development of their humanities, because "if there is a self, it is nothing more than the awareness of what happened throughout a history of intersubjective relationships" (ÁVILA, 2007, p.9).

With group experiences, it can be observed that adolescents, young people, parents and guardians belonging to the groups share not only the interest in what is transmitted, but can create relationships and bonds, based on an emotional experience that allows identifying processes, as well as the possibility of living the experience of being part of a group. However, individualized care also gains space in socio-educational praxis, even considering a series of difficulties in the elaboration, achievement and monitoring of the individual care plan.

In the praxis of socio-education, there are several order boundaries due to the complexity of the attention given to adolescents and young people in compliance with judicial decisions and their daily coexistence in markedly unequal socioeconomic and political contexts, and very far from access to cultural resources that are so necessary due to their growing person peculiar condition. The commitment of those who practice socio-educational praxis in MSE-MA ngela II - RAC has been vigilant to guarantee the rights of those attended teenagers, in order to comply the open social quality education (PSC and AF). The interlocution and articulation with the SGD has contributed to the renewal of this praxis and the support given by SRCSA, for the permanent formation of service professionals, an evidence that the work with adolescents and young people in conflict with the law is worth believing in (RODRIGUES and BOSCO , 2005).

Adolescents in professional education

References

AVILA, L. A. Grupos: a perspectiva psicanalítica. Vínculo – In Revista do NESME, Núcleo de Estudos em Saúde Mental e Psicanálise das Configurações Vinculares. São Paulo, v. 4, 2007. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/1394/139420850003.pdf>. Acesso em: 11 de setembro de 2019.

COSTA, A.C. G. da. De menor a Cidadão. In _____(org.) Das Necessidades aos direitos. São Paulo: Malheiros, 121-144, 1994.

FERNANDES, W. J. A importância dos grupos hoje. In Revista da SPAGESP - Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado de São Paulo 2003, Vol. 4, No. 4, pp. 83-91. Disponível em: <file:///C:/Users/Gabriela/Downloads/Dialnet-AImportanciaDosGruposHoje-5599905.pdf> Acesso em: 10 de setembro de 2019.

IAMAMOTO, M. V.. O serviço social e a contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 6 ed. São Paulo, Cortez, 2003.

RODRIGUES, J. C. & BOSCO, S. M. S. (org.). Redescobrindo o Adolescente na Comunidade - Uma outra visão da periferia. São Paulo – SP: Cortez Editora, 2005.

SILVEIRA, M. S.; PREVITALI, F. S. Sociabilidade dos adolescentes em conflito com a lei de Uberlândia (MG). In Revista Katálysis, Florianópolis, v. 22, n. 2, p. 309-319, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802019000200309&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 10 de setembro de 2019.

FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009.

GARDNER, H. Inteligências Múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre/RS: Artes Médicas, 1995.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Trad. José Cipolla Neto et.al. , 7ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

2.1.5. APPLICATION OF THE RESTORATIVE APPROACH IN THE MACEDONIAN JUDICIAL PRACTICE IN CRIMINAL PROCEDURES AGAINST CHILDREN

By Olja Ristova[17]

Introduction

The Law on justice for children[18] was adopted in 2013 by the Parliament of the Republic of Macedonia, as a result of the numerous critics made by domestic and foreign legal experts, who concluded that the Juvenile Justice Law[19] of 2007 was not revived in practice. Actually, from a legal point of view, this act it is in line with the international documents on the rights of the child, but the main obstacle to its full realization is its poor implementation.

In setting standards of law, the legislator started from the "fundamental freedoms and rights guaranteed by the Constitution of the Republic of Macedonia[20], the United Nations Convention on the Rights of the Child[21] (hereinafter: the Convention) and other international treaties on the status of children, ratified in accordance with the Constitution of the Republic of North Macedonia".

The basic principles underlying the Law on justice for children are the best interest of the child, the procedural safeguards that are in line with the procedural guarantees for adults, the measures of assistance and protection, the upbringing and re-education of the child, restorative justice with a particular emphasis on the role, the interest and the position of the victim, prevention at central and local level and protection of the child - victim of crime.

Restorative approach

The Law on Justice for Children is based on a restorative approach, it advocates assistance and protection measures to compensate the injured party, adopts a diversionary model for dealing with less serious crimes which avoids the classical criminal procedure against the child; also, a mediation procedure is provided and a settlement that is within the jurisdiction of the public prosecutor and may be treated as diversionary treatment with restorative aspects.
The Law also stipulates the principle of expediency according to which the competent public prosecutor may decide not to initiate procedure or to request termination of procedure already initiated against the child when it is considered necessary due to the nature of the crime, the previous life of the child and his/her personality.

The Law also specifies the possibility for the public prosecutor to propose a sanction without preparatory procedure, if it is about a crime for which up to three years of imprisonment is prescribed, the case to be sufficiently clarified, i.e. to have sufficient evidence and the collected data on the personality of the child to provide a sufficient basis for decision making. As a result of the Council of Europe Recommendation No.R (87) 18 concerning the simplification of criminal justice, some new institutes have been introduced for recognition of responsibility and plea bargaining in order to accelerate the procedure.

The public prosecutor may submit such a proposal when the conditions for sentencing a child at risk over 14 years are fulfilled, when they have evidence that unambiguously indicates that the child is a perpetrator of a crime, that he/she is responsible for the crime committed and when the conditions for imposing a sentence are fulfilled.

The text of the Law conscripted in this way indicates that it has been adopted in accordance with modern flows for treatment of children who have committed acts that contain elements of a criminal offense and is based on principles of re-education, social integration, education and special prevention of future deviant criminal behaviour.

Regardless of what type of procedure will be chosen and the final measure to be imposed, the fundamental rights and best interests of the child must be respected, whilst stigmatization and discrimination must be avoided, the procedure duration must be the minimum required time in proportion to the individual characteristics of the child and with legitimate purpose only.

The purpose of the restorative approach

Restorative justice aims to overcome the retributive approach to punishment; it promotes a diversionary model for avoiding the victim - centred criminal procedure. The characteristic of the restorative treatment is that all efforts are directed at resolving the consequences and finding a solution for what has been done. This approach can only be applied when the facts surrounding the event are undisputed for both the perpetrator and the victim.

The measures and activities that can be categorized under the term restorative justice can generally be divided into two groups: those that constitute a restorative process and those that provide restorative objectives (purposes). The restorative process requires involvement of all stakeholders - victims, perpetrator(s) and members of the local community in resolving the dispute regarding committed crime and finding an adequate solution. The restorative purpose means reaching agreement as a result of the restorative process, including compensation, community service and other programs designed to enable victim and community reparation as well as reintegration of the victim and perpetrator.

Restorative justice is based on four basic principles that are pillars of its conceptual definition. The first principle is the principle of personality, that is, the perception of the crime initially as a violation of human and interpersonal relations. The second principle is the principle of repairing the damage that resulted from the crime. The third principle concerns the participation in the perpetration or the so-called principle of participation and finally, the fourth principle is the principle of reintegration, which implies that the perpetrator remains in the community, and not to be isolated and stigmatized; therefore, there should be simultaneous reintegration of the victim, rather than his/her marginalization.

The Law on justice for children follows modern international trends and is therefore based on a restorative approach and contains a whole range of provisions that can be applied to a child at risk

17. Judge at Basic Criminal Court Skopje, Republic of North Macedonia

18. Law on justice for children (Official Gazette of the Republic of Macedonia No.148 from 29 October 2013)

19. Juvenile Justice Law (Official Gazette of the Republic of Macedonia No.87 from 12 July 2007)

20. Constitution of the Republic of Macedonia (Official Gazette of the Republic of Macedonia No.52 from 22 November 1991)

21. United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989, adopted by UN General Assembly Resolution 44/25 from 20 November 1989

or a child in conflict with the law, such as: compensating the damaged party in front of the Centre on social affairs, mediation and settlement proceedings, the principle of expediency under which the public prosecutor may decide not to institute proceedings, referral to mediation, where the main role have the public prosecutor, the child, the parent, the defence counsel and the victim or the damaged party.

Application in practice

Proceedings before the court begins with submitting a request for initiation of preparation procedure by the competent public prosecutor, but before deciding whether to file a request, the Law requires that the public prosecutor first summons and hears the child in the presence of his/her defence lawyer, his or her parent or guardian. While this provision is imperative in its content, it is not applied in practice as the legislator intended. Public prosecutors dealing with children have the same practice as with adult offenders, that is, they apply this provision most often to traffic criminal offenses, which require the consent of the damaged party and if the damage is compensated, the defendant, in this case the child, will not be prosecuted.

Avoiding the application of this provision means deviating from the restorative approach according to which the initiation of court procedure against the child is the last resort provided by law.

In explaining why they do not apply this measure, prosecutors state that the budget of the public prosecution offices does not have the sufficient financial funds to pay the ex-officio defenders, which is why lawyers in child-related proceedings are not called to the prosecution offices.

As a result of such actions, public prosecutors dealing with cases of children who have taken actions that are provided by law as a criminal offense, upon receipt of the criminal reports by the police with the evidence attached thereto, they immediately form a case and submit the request for initiation of a preparatory procedure to the children's judge, with a proposal to summon and interrogate the damaged party and the witnesses, which is opposite to the spirit of the Law providing re-education and social integration.

On the other hand, after receiving the request, the judge for children has the legal opportunity to disagree with it and to address to the Criminal court council for children that will decide whether to proceed or not. Judges for children, guided by the principle of a trial within a reasonable time, i.e. that the procedure for children should be completed in the shortest possible time, and that the Law prescribes that proceedings that involve children could take up to one year, and only for serious crimes one year and six months from the date of receipt of the request in court, they do not apply this provision for declaration of disagreement and decide to commence preparatory action immediately, i.e. to conduct proceedings against the child.

Such conduct of both, the Public Prosecutor's Office and the court, is contrary to the basic principle of acting in the best interests of the child, i.e. the judges for the children, who are placed in this situation, are choosing to respect the principle of urgency of the proceedings, as opposed to applying restorative justice provisions that may result that the child will not be prosecuted.

Therefore the conclusion that the restorative approach is practically not applied in the case law which is of great importance for the children involved in the proceedings, through which the Law should accomplish its basic purpose, special prevention and emphasized individualization, upbringing, re-education and better socialization, rather than sanctioning violations of certain legal norms.

Conclusion

For these reasons, enhanced training and education is needed which will not be efficient and effective if it only applies to judges and public prosecutors. Training for dealing with children at risk and children in conflict with the law should be comprehensive, i.e. to include all participants in the proceedings, the police, lawyers, social workers, prosecutors and judges. In this regard, education should be common, designed in a way that includes all participants who can contribute in correcting children's behaviour. The trainings should also be conducted with inclusion of more examples of domestic and foreign good practice, the way of application should also be corrected, i.e. the goal to achieve should be that the law is properly applied, and additionally, suggestions should be given on amendments of the legal provisions that have no efficiency in practice.

2.1.6. RESTORATIVE JUVENILE JUSTICE: SOUTH AFRICA, NAMIBIA AND ZIMBABWE

By Julia Sloth-Nielsen[23]

Restorative justice has been around in the annals of South African juvenile justice reform processes since the early 1990s, when, at the dawn of the new democracy, a delegation from New Zealand visited South Africa to explain the functioning of restorative justice in their (then new) legislation. Their enthusiastic approval fell on fertile ground here: South Africa was searching for innovative solutions for the post apartheid era that was almost upon us, and healing, amends and forgiveness were the hallmark of the Truth and Reconciliation Commission that was to be established to bring to light South Africa's dark history.

Juvenile Justice law reform spanned the period 1995- 2008, culminating in the adoption of the Child Justice Act 75 of 2008. This Act came into force in 2010, and has now been implemented for clo-

23. Julia Sloth-Nielsen is a professor at the Faculty of Law, University of the Western Cape, Cape Town, and professor of children's rights in the developing world at the University of Leiden, The Netherlands. She has worked on children's law reform in many subsaharan countries, including Lesotho, Kenya, Tanzania, Namibia, Zimbabwe, Botswana and Mozambique, as well as in her native South Africa. She has published more than 200 articles and book chapters on various aspects of children's rights, juvenile justice and family law.

se on 9 years. The period spanning the 1990s and early part of the millennium saw much innovation with diversion in particular. Diversion programmes commenced in 1992, spearheaded by a non-governmental organisation, and to date most diversion programmes are offered by non-governmental organisations, who receive a per capita subsidy from the state for the programmes they present to children in conflict with the law. The Child Justice Act established a system of national accreditation of service providers and the programmes they offer, with programmes having to comply with minimum criteria and service providers being held accountable to the Department of Social Development (which bears responsibility for diversion). Re-accreditation is undertaken at periodic intervals (every four years). Whilst the names of the approved programmes are officially gazetted, it cannot be established to what extent these programmes contain a restorative justice element, although the Act itself is clear that several legislated objectives of diversion encompass restorative justice principles (diversion must 'encourage the child to be accountable for the harm caused by him or her'; diversion must 'provide an opportunity to those affected by the harm done to express their views on its impact upon them'; diversion must 'encourage the rendering to the victim of some symbolic benefit or the delivery of some object as compensation for the harm'; diversion must 'promote reconciliation between the child and the person or community affected by the harm caused by the child' (section 51 (b); (e), (f) and (g)).

The Act further provides expressly for referral to family group conferences as a form of diversion (section 61). Family group conferences are described as informal procedures which bring together the child who is alleged to have committed the offence and the victim, together with the support of their families or other appropriate persons, with the aim of developing a plan on how the child will address the effects of the offence. Both the child and the victim must consent to the family group conference taking place. It is mandated that a probation officer (ie social workers), appointed by a magistrate, convene the family group conference (see, in general, section 61 of the Act). This plan should contain specified objectives to be achieved by the child (and the period within which they are to be achieved, contain details of any services and assistance to be provided to the child and his or her parents, specify which person or organisation will provide these services and assistance, state the responsibilities of the child and his or her parents, provide details of personal objectives for the child and for the parents, and include any other matters relating to employment or education as are relevant. A written record of this must be kept.

The Act also provides for victim offender mediation, which differs from family group conferencing insofar as it includes only the child and the offender, without the broader participation of family and support persons. For this reason, it is not a favoured option for non-governmental organisations and probation officers, as they prefer dealing with a child more holistically in the context of the family and community.

Restorative justice can also be used after conviction, prior to the imposition of sentence: in this case the plan developed at the family group conference must be approved by the sentencing officer (section 73(3)), and if the court does not approve, it may impose another sentence but must enter the reasons for substituting the plan with its own sentence. The Annual Report of the Department of Justice 2017-2018 shows that only few such sentences are imposed nationally every year (1 in 2015-2016, 3 in 2016-2017, and 4 in 2017-2018). The 2016-2017 Annual Report on the implementation of the Child Justice Act provides figures for restorative justice sentences since 2011; they have shrunk from a high of 508 such sentences in 2012 to the 1 recorded for 2015-2016[24]. The Annual Report 2017-2018 (the most recent available) of the Department of Social Development gives overall diversion figures, but does not break these down into the various programmes to which children in conflict with the law were referred. Thus it is not possible to know whether family group conferences as a specific form of diversion were being implemented through their auspices. The enthusiasm for restorative justice endeavours that led to the above provisions of the Act being developed therefore seem to have waned significantly as time has passed. Although speculative, some reasons can be put forward for this decline.

First, preparing participants setting up and convening a family group conference is a time consuming endeavour. Probation officers and social workers are notoriously overworked. It is likely, therefore that they favour less intensive diversion options such as supervision and guidance orders (section 53(f)), and indeed the Department of Social Development reports a significance number of home based supervision visits (more than 3000) which tend to support this theory. Second, the involvement of non-governmental organisations in the delivery of restorative justice programmes remains obscure: the only national organisation with dedicated expertise in this area closed its doors due to lack of funding a couple of years ago, after 20 years of existence. This organisation was also able to provide mentoring and training, which is no longer possible. For accredited diversion services providers, it is likely that presentation of programmes to groups of children will be ore cost and time efficient than running dedicated one on one conferences for individual child offenders and their victims. Third, with the passage of time since both the Truth and Reconciliation Commission and the heady days of child justice law reform, restorative justice has all but disappeared from public view. Further, skills have been lost to the sector.
It seems that a dedicated effort will have to be made for the restorative justice provisions of the Child Justice Act to be brought to life.

Namibia

Namibia's juvenile justice law reform process has been underway for a very long time (since 1994 when the first draft Bill was prepared; a further unfinished version is dated 2012) and is still not complete. The author acted as a consultant to the Ministry of Justice in 2018 to prepare an updated version of a Bill which is due to be tabled in Parliament any time now. All previous versions, and the current one, contain elaborate restorative justice provisions. The enthusiasm for restorative justice was predicated in sharing of lessons learned between South Africa and Namibia in the 1990s, and a receptive population to restorative justice principles and objectives on account of the fact that they harmonise with customary justice tenets.

The Bill in its current version elaborates particularly the benefits to all concerned – child, victim, and community – of restorative justice. Part 2 of chapter 7 is devoted entirely to the process of entrenching restorative justice as a diversion option, and permits a referral to be effected by a probation officer, a prosecutor or a court. The process for referring and convening a family group conference is detailed, and its intended result, namely the formulation of a written plan with resolution(s) appropriate to the child (in-

24. This is the last combined interdepartmental report that was tabled in Parliament. Thereafter the Child Justice Act was amended to enable departments to report individually.

cluding possible referral to a diversion programme), his or her family and to local circumstances which is consistent with the principles contained in the Act is outlined. The plan must state the responsibilities of the child, the child's parent (or an appropriate adult in lieu of a parent or guardian); state the personal objectives for the child, the child's parent or an appropriate adult; and include such other matters relating to the education, employment, recreation and welfare of the child as are relevant. Provisions for monitoring its implementation and the fulfilment of its conditions are spelt out.

Whilst the Bill has yet to be tabled and finalised, it is likely that these provisions will remain as restorative justice enjoys wide support.

Zimbabwe

Pre-trial diversion was launched in Zimbabwe in 2009. Initially supported by donors, as of 2016, the Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs has taken over the employment of diversion officers, with 16 officers now fully employed by the Ministry in the five pilot programme areas. There are now 12 fully functional PTD districts, and another 5 are due to be established by summer, with an additional 6 by the end of 2019. According to an evaluation completed in 2016, it is reported that 1,728 children in conflict with the law were diverted from the formal criminal justice system in Zimbabwe between 1 January 2013 and 28 September 2016 (Penal Reform International, 2016:8). During that time, only 429 children were referred to the formal criminal justice system, meaning that 80% of children in conflict with the law were diverted. In 2018, 595 out of 805 children (74%) were diverted.

Again, there was capacity building from neighbouring South Africa during the period prior to implementation of diversion, which meant that restorative justice was a stated objective of diversion (National Pre-trial Diversion Committee: Guidelines on Pre-Trial Diversion, undated, chapter 4). Victim Offender Dialogue is described as a key diversion option, which promotes restorative justice. As a consultant engaging with stakeholders in the lead up to the adoption of a new child justice Act during 2019, however, the author observed that many diversion cases were not finalised because of the inability on the part of the child or his or her family to pay compensation to the victim. In my view, restorative justice is not solely about compensation to the victim, and in a resource poor country such as Zimbabwe, it should not be a bar to completing cases as other forms of restoration should be devised – such as a formal apology or symbolic restoration.

The proposed Child Justice Bill of Zimbabwe[25] it at an advanced stage of preparation prior to it being tabled in Parliament – likely during 2020. A key objective, according to the preamble, is "to entrench the notion of rehabilitation and restorative justice as an integral part of the child justice system". In the same vein as the South African and Namibian counterpart, diversion and restorative justice are outline in discrete chapters, and sufficient detail is provided to enable role players to implement the provisions. A diversion officer or probation officer must take responsibility for organising a victim-offender mediation or other restorative justice process, and may serve as convenor or appoint a suitably qualified person to chair the mediation. between the child and other concerned persons; and the draft Bill in present form provides that at the family group conference the offence is discussed and a plan is formulated on what must be done in order to achieve reconciliation.

There still a way to go before the legislation will be finalised and approved for introduction to Parliament, but considerable work towards completion has already been done, and the is a high degree of consensus as to the need for and likely shape of the new legislation.

2.1.7. GENERAL COMMENT NO 24 BY THE COMMITTEE OF THE RIGHTS OF THE CHILD, ON SEPTEMBER 19, 2019. REPLACING GENERAL COMMENT NO 10, 2007.

By Marta Pascual[26]

General comment 24, which consists of 126 sections, has dealt with the state of juvenile penal justice for more than a decade, where different resolutions and measures for the youth have been developed. Also, the Committee made some negative criticism about the permanent use of custodial sanctions to youthful offenders as well as towards the tendencies to lower the age of punishability for youths.

This extensive document notes in its final development its concern, and encourages the enforcement of measures that neutralize the recruitment of boys and girls by armed, terrorists or extremists groups. Given that boys and girls become the victims of multiple infringements such as conscription, military training or their being used in terrorist acts including suicide attacks.

According to journalistic references, it is with astonishment that we have seen their use as human shields or victims of kidnapping, sale, traffic or being forced to perform hazardous tasks such being spies, keeping "watch" or bearing military equipment.

Thus, the Committee urges States to treat these children as victims by refraining from persecuting and accusing them as part of these armed groups, besides, these States are to focus on restorative practices such as diversion or alternative measures to detention.

Comment 24 devotes a subhead towards custom and usage that is an informal process and has celerity and low-cost advantages with a cultural adjustment to the environment for children.

The Committee highlights that it is a must to reconcile or combine custom with the state system of justice by integrating formal and informal aspects in the administration of justice.

About the juvenile system of justice compatible with the Convention of the Rights of the Child, the Committee acknowledges the efforts made by some states and although little has been achieved regarding the areas of prevention and the enforcement of alternative measures as well as a suitable minimum age of punishability, it also warns us about the inappropriate use of deprivation of liberty for youths and the exten-

25. This is one part of a broader project to align many pieces of legislation with the 2013 Constitution of Zimbabwe.

sion of pre-trial detention periods.

As of its 7th section, it starts to deploy the guiding principles of juvenile justice.

Therefore, the concept of non-discrimination refers to the special attention that must be paid to the so-called "offenses committed by the circumstances" that are considered to be a crime if committed by adults. Thus, the punishments are focused on groups of vulnerable children such as the homeless who belong to racial, ethnic, or religious children minorities such as indigenous, disabled or recidivist children.

The children in this situation, as well as those wandering the streets or the runaways, should be treated with the enforcement of measures that protect them and providing support to their parents or those responsible for their care to work on the reasons that cause these behaviors.

As regards the best interest of the child, it notes the priority of this guiding principle for children that differ from those for adults in terms of their development and needs and they bear a different responsibility for youths in conflict with criminal law.

These are also the reasons for the special status of the juvenile jurisdictional venue, so without losing public security, it is to step away from the traditional objective of criminal justice (that is retribution) giving way to the rehabilitation of youths supported in the principles of restorative justice.

Referring to the right to be heard, the Committee expresses that the voice of the boy or girl in the juvenile system is a tool and an approach to satisfy their rights.

When it comes to respecting for dignity, it implies that the deal agrees with human rights stressing the reinsertion of the boy or girl and motivating its self-determination so that it takes a constructive role in society and full citizenship.

Resolution number 24 in terms of paragraph 17 describes the essential elements of a wide policy of juvenile justice, as follows:

a. The prevention of juvenile crime by promoting the education of youths to live responsibly in their community to play a constructive role.

Prevention programs should be focused on helping the families, especially those in a situation of vulnerability and poverty, by engaging schools in teaching basic values for the youths, and orienting their educational programs to those at risk and in the capacity of retention at educational centers.

b. Intervention or Diversion: the recommendation deploys two classes of intervention at hand for state members towards the treatment of youths in conflict with the law that are:

- Diversion is a measure outside the legal process.

- Alternative measures within the judicial proceeding.

Regarding the first one, the effectiveness of those alternative programs based on the community is noted, such as community services supervision or, social workers guides, family counselors or restorative practices as a form of the state reaction with youthful offenders.
As for the second kind of measures, within the judicial proceeding and observing the rules of fair trial and due process, by pointing out the positiveness of those social or educational measures out of a context of seclusion.

c. In connection with the minimum age of punishment, that is the central point of the reforms in Latin America because they have centralized the debates to that objective, has impeded the development of the juvenile penal system according to the principles of the Convention since many countries, like Argentina, continue the effect at a national level of an obsolete law from the time of the military process and that has not conformed to the standards of the international law.

Thus, the Committee recommends that the minimum age of criminal responsibility is not a very low number taking into account the emotional, mental and intellectual maturity.

In the original comment from 2007 the Committee had considered 12 to be the absolute minimum age, however, in this new wording, it deemed it to be low and noted that it should be risen to at least 14 years of age, praising those states that standardized it to 15 or 16 years of age.

The concern of the Committee shows regarding the situation of the youths in conflict with the penal law under the age of criminal responsibility and the way they are treated, as stated in the reports that the state members request before the Committee to contain thorough and detailed information.

d. Guarantees of a fair trial: from the reading of this new recommendation arises the concern of the Committee as regards the quality and capacity of the designated persons for the administration of juvenile justice to implement a special treatment and a fair trial for the youths that have committed crimes.

In connection with the girls, that just a few go through the juvenile system and regardless of the number of cases, their needs should be met such as health, psychological or psychiatric treatment and take very special care of those cases that show abuse.

In connection with the presumption of innocence, this document places the burden of proof on the prosecutor and points out the benefit of the doubt for the young offender, likewise, when youths are taken to trial, due to their immaturity, fear or other reasons are observed suspiciously, that shall not motivate the judge or tribunal to take their responsibility for the act beyond any doubt the authorities may have.

Exercising the right to be heard, principle that any expert distinguishes from being listened to or the mere proceeding of recording or writing what the child says in the process and taking into account that this right leads to an understanding of the youth's situation and a special empathy for those who are taken to trial or treatment, this is a fundamental right for a fair trial. Thus, the youths are to be treated as a participant instead of as a passive object, and this contributes to giving an effective answer to their behavior, increasing the possibility of their neighborhood or community integration. To do this, it is necessary that during the process all parts develop in a clear and comprehensive language for the youths.

e. The Committee reiterates the need for exiguous periods, not only regarding the duration of the process but also in connection with serving subpoenas, urging states to set time limits from the commission of a crime during the period of investigation, the prosecutor's statement and the final ruling, being these periods much shorter than the ones for the adults.

Additionally, the Committee regrets the

modern tendency to enforce sanctions to those parents whose children have committed crimes because this works against the youth and it is not to contribute in making those liable to commit the reintegration of youths.

f. In this subhead, the enforcement of alternative measures is pointed out that can be both used before trial or continue during the whole process. In connection with the damage caused by the deprivation of liberty to children and adolescents, the Committee recommends that States set a maximum punishment for juvenile crime cases, stressing that the reaction must always be given by the crime committed and never based on the personal situation of the youth, and devote two sections to the prohibition of the death penalty as well as the life imprisonment sentence without the benefit for youthful offenders.

Regarding the deprivation of liberty, this document notes that in many countries children suffer from pre-trial custody for long periods as it is a procedural action that infringes the principle of innocence. The duration of pre-trial custody must be short and subject to periodic review. The Committee recommends that states issue strict regulations related to the regular review of pre-trial custody, preferably weekly.

As for the treatment and conditions of pre-trial custody, it is pointed out that it must be done in special places for youths and always separate from adults. Also, regarding convicted youths, as they are of legal age, that they are not automatically transferred to prisons for adults.

Towards the end of the extensive comment, The Committee redefines the importance of gathering systematic information that is relevant for the administration of juvenile justice and is of a vital importance for the development and enforcement of policies, not only those of prevention but also those destined to address juvenile justice, and recommends investigations and periodic evaluations of the practices carried out with youths that tend to weigh the effectiveness of the adopted measures, in particular, those devoted to alternative issues or restorative justice.

2.1.8. GLOBAL STUDY ON CHILDREN DEPRIVED OF LIBERTY

In its resolution 69/157 of 18 December 2014, the General Assembly invited the Secretary-General to commission an in-depth study on children deprived of liberty. In October 2016, Manfred Nowak (Austria) was appointed as Independent Expert leading the study, which is the first scientific attempt, on the basis of global data, to comprehend the magnitude of the situation of children deprived of liberty, its possible justifications and root causes, as well as conditions of detention and their harmful impact on the health and development of children. The study also identifies best practices in non-custodial solutions applied by States in relation to the following six situations: (a) detention of children in the administration of justice; (b) children living in prisons with their primary caregivers; (c) migration-related detention; (d) deprivation of liberty in institutions; (e) detention in the context of armed conflict; and (f) on national security grounds. The study proposes recommendations to support States and the United Nations in dealing with this phenomenon. The report summarizes the detailed findings of the global study on children deprived of liberty, which will be available in printed, electronic and child - friendly versions. It was prepared through a participatory process, which included regional, subregional, national and thematic consultations, as well as expert meetings. Many Governments, United Nations agencies and other stakeholders provided comprehensive responses to a questionnaire transmitted to them in February 2018. https://undocs.org/A/74/136

2.2. CASE-LAW ANALYSIS WHY DOES THE RULING ISSUED BY THE BRAZILIAN SUPREME FEDERAL COURT - SFC, THAT PREVENTS OVERCROWDING IN MINOR INCARCERATION, CAUSE CONTROVERSY?

By Brigitte Remor De Souza May[27]

In May 2019, Minister Fachin had a national impact due to the effects of the injunction granted in the collective HC 143.988. The ruling restricts to 119% the occupancy rate in the socio-educational units and states the transfer of the surplus of adolescents to other units that do not exceed their occupancy capacity to the established rate.

Could an adolescent be deprived of his or her liberty? Yes, they could, regarding

27. Brigitte Remor De Souza holds a Master's degree in Legal Sciences from Universidad del Vale do Itajaí. Judge of the Child and Youth Court of the District of Florianópolis. Founder member of the Instituto Brasileiro de Direito da Criança e Adolescente (IBDCria- ABMP) Member of the Judges for Democracy Association

acts similar to the crimes set forth in Art. 122 of the Child and Adolescent Statute that are committed to violence and serious threat (Art. I)

Each federal state has, under the responsibility of the Executive Federal Power, units to enforce custodial measures, at the same time as non-custodial measures are the responsibility of the Municipalities where the adolescent lives.
What is the scope of the deprivation of liberty for juveniles in the country? The data published in 2018, related to 2015, show that 26,000 adolescents are somehow deprived or restricted to liberty. Of that total, 18.381 would be incarcerated youths, this equals to 68%.

In the country, 484 units were found for the enforcement of the socio-educational measure of reclusion, according to "the annual survey" of the National System of Socio-educational Care (SINASE) of 2015.

In 2012, the National Council of Justice revealed not only the precariousness of the socio-educational units in some states but also the overcrowded conditions and highlighted that the average occupancy rate in Brazil is 102%.

In 2019, The National Council of the Public Prosecutor's Office published a document entitled "Overview of the implementation of socio-educational programs of reclusion and part-time detention in Brazilian states" that points out the overcrowded condition in several states as well as vacancy deficit.

Oriented? To the point. In May 2019, Minister Fachin made the effects of the injunction public at a national level that had already been granted on 16/08/2018 in the collective Habeas Corpus (HC 143.988 AGR / ES).[1]

The ruling limits the occupancy rate of the socio-educational units at 119% and establishes the transfer of adolescents surplus to other units that do not have an occupancy capacity higher to the established rate.

In addition, in case the transfer is not possible, the judge in charge of enforcing the socio-educational measures must analyze who can be included in the semi-open program (Art. 49, ítem II, Act N ° 12.594 / 12) until the percentage of maximum occupancy is established.

Since then, a controversy aroused, but without "denying the constitutional validity of the addressed ruling", as Márcio da Silva Alexandre stated.

It can be easily noted from the decision that there was no "massive liberty determination" as sensationalist mass media and opportunistic fundamentalists either in 2018 or 2019.

The rapporteur provided several alternatives.

If States do not have a proper socio-educational care network of detention for adolescents, whose historic omission is it?

The Child and Adolescent Statute was created in 1989. The law that regulates the implementation of socio-educational measures (SINASE Act) passed in 2012, including all the international legislation on the topic.

The inertia of the executive is only understood due to the constant and daily breach of the fundamental precept by the governing authorities.

Furthermore, it cannot be argued that the states were not aware of the reality about the implementation of the measures of deprivation of liberty in their territories because the crisis in the socio-educational system, especially concerning the deprivation of liberty, has been long.

Every national survey, every visit to the units, every report and paper has long revealed the unconstitutional nature of this situation.

The rapporteur himself refers to the public civil actions in the body of the voting.

I have come to believe that the "controversy" just happened because we are not used to more forceful reactions regarding the socio-educational system of deprivation of liberty.

The problems related to the socio-educational system are often relieved so as not to "disorganize" the system[2] or " to approve of overcrowding if it proves to be the best for detained adolescents"[3] or even the reaction to interdiction in the units.[4]

Have the "opposing voices" to Minister Fachin's ruling been surprised due to the fact that, under Juvenile Justice, adolescents deprived of their liberty have their rights acknowledged?

The Minister analyzes several factors, from the basic health conditions to "the occupancy beyond the planned capacity and the limits of sensibility" and concludes:

"The fundamental rights of the detained adolescents are seriously breached by overcrowding, thus they cannot remain in their degrading situation."

Likewise, it rests on the constitutional principle of human dignity (Art. 1º, III, CF and art. 124, V, Act 8.069 / 1990) based on:

"Respects entails the obligation of the State to provide the necessary conditions for the implementation of socio-educational measures for adolescents in conflict with the Law (art. 1, § 3, Act 12.594 / 2012 - SINASE)."

It invokes the regulations of the Convention on the Rights of the Child passed through Decree 99.710/1990, in Art. 3º and Art. 37, that also brings a novelty to the socio-educational system, i.e. the principle of "numerus clausus", that is " recognized as the principle or organizational system by which every new entrance of a person into the penitentiary system must relate at least to a release so that the ratio detained-vacancy always remains stable or decreases".

The honorable Minister notes that "the solution, i.e., the implementation of the principle numerus clausus, is for the time being the most suitable one to minimize and stabilize this unsettling framework ".

Also, he adds:

"As stated at the beginning, the principle of numerus clausus has been recently implemented in the international scope and in the public civil action that involves another detention unit (UNAI), the ruling issued by the first instance judge that set forth, among other measures, the supervision of the maximum number of prison inmates to a total amount of 68 adolescents, under the penalty of a daily fine, was kept in the FSC (Federal Supreme Court), in the anticipated stance of court decision 823/ES, Rapporteur Min. Lewandowski."

The Minister's court ruling focuses on the development of the individual, on the issue of deprivation of liberty and the same indignation caused regarding the penitentiary system:

" In this respect, I consider that in the en-

vironment of the adolescent in conflict with the law, the socio-educational measures of deprivation of liberty must be carried out at facilities that deliver dignified conditions and respect their particular situation of a person in the process of becoming."

He also states that "the protective tutelage derives from the direct and immediate effectiveness of the explicit provision of the Constitution".

Minister Fachin has gone beyond the theory of Integral Protection as to, "the duty of the judge to harmonize the order of the universal human rights".

The court order brought intolerance to overcrowding to public light as regards 119% of the socio-educational units as done by the Supreme Court (Federal Superior Court/ Superior Tribunal Federal-STF) for some time concerning the topic of prisons.

Let's see: regarding the penitentiary system that accommodates one of the largest penitentiary populations of the world at a glance, there are several precedents at the Supreme Court from declaring the system of "unconstitutional state" in 2015 (ADPF 347 CM / FD, rap. Min. Marco Aurélio), to even giving notice of cases of "a breach of the fundamental rights that personally harm the detainees" (EA 580.252, rap. Min. Alexandre de Moraes).

In a vote, the rapporteur Minister Alexandre de Moraes notes the final report of the parliamentary inquiry committee of the House of Representatives that concludes: "Overcrowding is perhaps the mother of all the rest of the problems in the penitentiary system. Overcrowded units cause insalubrity, diseases, riots, uprisings, deaths, degradation of the human being." (EA 580.252, rap. Min Alexandre de Moraes).

Also, in another decision issued by Minister Marco Aurélio: "Apart from the fact that it does not meet inmates resocialization, it would foster an increase in crime because young offenders would become "crime monsters" (NAFP 347 DF / DF, rap. Min. Marco Aurélio).

In his vote, in the above-mentioned Extraordinary Appeal nº. 580.252, Minister Teori Zavascki declares: "Considering that is is the duty of the State, imposed by the regulatory system, to keep in its prisons the minimum standards of humanity set forth in the legal system and under article 37, paragraph 6 of the Constitution to be responsible for the obligation to compensate for damages, including moral damage demonstrably inflicted on the detainees due to the lack or negligence of the legal conditions of the prison".

In the same vote, Minister Teori Zavascki talks about "the dysfunctional nature of the public welfare system, prison indigence accounts for just one part- an important one, but just one of a wider whole that is the public security system offered by the Brazilian State".

The Supreme Court, in its Extraordinary Appeal nº. 580.252, also acknowledges the role of the judiciary regarding the issue of prison overcrowding in the country: "The judiciary would also be accountable because about 41% would be under provisional custody and the inquiry would prove that when judged, most of them would be acquitted or sentenced to alternative punishments".

Certainly, according to national surveys, the lack of structure of the judiciary itself, that has a limited number of Children and Youth Courts in the country, let alone, Courts that implement socio-educational measures for instance.
Nonetheless, it should be pointed out that since 2016, the Binding Precedent number 56 issued by the Supreme Court establishes, for the adult inmate, that the lack of suitable penitentiary premises does not allow for keeping the convicted in a stricter penitentiary regime.
Furthermore, in 2018, the Supreme Court clearly stated that the above- mentioned binding precedent is to be specifically applied to the socio-educational system (HC 157228 / SC - Ordinary Action in HC, Min. Gilmar Mendes).
Yet, the ruling was consistent with the Resolution by the National Council of Justice (CNJ), which has as an institutional policy of the judiciary, the promotion of the implementation of penal alternatives with a restorative approach by replacing the deprivation of liberty (Resolution No. 288/2019).

In this context, as shown above, Minister Fachin's decision complies with the Federal Constitution, the law, the international treaties and is not contrary to the treatment given to the penitentiary issue by the Supreme Court. The ruling should be a must-read for all of us.

As Márcio da Silva Alexandre recalls, according to the law "it is the right of the adolescent, either dangerous or not, righteous or impious, violent or not, to serve their 'punishment' in a unit of deprivation of liberty where there is a vacancy. Thus, in case there is no one, the law mandates that they are transferred to a semi-open regime program. Even if the crime was committed with a serious threat or violence to the individual".

However, the decision has generated some criticism for a number of reasons, given that setting the percentage above the capacity would also be an infringement to the rights.

It must be taken into account, nevertheless, that the discussion about the capacity and its percentage in the socio-educational units is not new, not even timely.

In 2015, Minister Dias Toffoli kept the regulatory law if the State of São Paulo that allowed a surplus of 15% regarding the limit of planned vacancies in the units of socio-educational enforcement in the state of São Paulo (Provision No. 1.436 / 07, Superior Council of the Judicial Power of the State of São Paulo, articles 6 & 7, subparagraph EA 405267).
There, the approach was to organize the system and guarantee of permanence of adolescents near their families, and stressing that 'good fruit' cannot be reaped from the illegality declared by the National Council of Justice (CNJ) regarding articles 6 & 7, subparagraph, of the Provision No. 1.436 / 07, of the Superior Council of Justice of the State of São Paulo".

The Minister considered that "on the contrary, the effective enforcement of such action is disorganizing the management system of unit administration for the implementation of the socio-educational measures of detention in the State of São Paulo, effectively undermining the best interest of the adolescents subjected to this type of measure".

Assis da Costa Oliveira and Luanna Tomaz de Souza analyze three issues that they regard as relevant when considering the ruling issued by Minister Fachin critically, and summarize:

"This logic naturalizes the absurd and ratifies the infringement of the rights of the adolescents that remain in this condition. He authorizes the State to operate unlawfully, but with the judicial authorization to do it. The judiciary now legitimizes the negligence of the state to solve not only the problem of overcrowding in the socio-educational system but also it leads to the fact that more and more adolescents enter it."

Authors Assis da Costa Oliveira and Luanna Tomaz de Souza support as the

best objective criterion the non-negotiable use of the maximum capacity of the premises and the principle of numerus clausus.

The criticism regarding the percentage adjustment is extremely relevant.

The decision issued by Minister Fachin was a breakthrough though, regardless of this topic, and an important step towards the visibility and the situation of the national socio-educational system.

Thus, why is there a controversy? Is it because we get back to the habit of "invocating selectively state reasons to deny, specifically a determined category of subjects, the right to physical and moral integrity"? (Vote by Minister Teori Zavaski, in EA 580.252).

Is it due to the internalization of our authoritarianism? Because of the dehumanization of the other, of the naturalization of the chaos of the socio-educational system?

From the illusion that with neoliberalism the penal state will account for the juvenile social conflict" through the "criminalization of the consequences of poverty"?[5]

To me, the controversy can only be explained by the perpetuation of a state that infringes on the rights and weakens our battered democracy.

Taiguara Libano Soares y Souza warns us that by making democracy fragile there is an expansion of the Police State (Foucault) or the criminal State (Wacquant) and there is an upsurge of social control measures, "because the search for security exceeds the fight for freedom, the discourse of public security replaces the human rights one, the protection of few is privileged over the protection of the community".

By strengthening the system of rights guarantees, it is our duty to respect the Constitution, the international treaties, the specific legislation about the topic and to learn about the reality of the socio-educational system of deprivation of liberty.

As Norberto Bobbio maintained in his book The Era of Rights (La Era de los Derechos), "the fundamental problem regarding human rights nowadays is not so much to justify them but to protect them. This is not a philosophical problem but a political one".

Besides, the concrete exercise of these rights makes it alive.

Footnotes:
[1] The original ruling ascertained liberty in those units located in Espírito Santo. States of Bahía, Ceará, Pernambuco and Río de Janeiro.

[2] "[...] there are no 'good fruits' derived from the unlawfulness declared by the CNJ regarding Articles 6 & 7, subparagraph, in Resolution No. 1.436 / 07 issued by the Magistrate Superior Council of the State of São Paulo. On the contrary, the effective enforcement of such action is disorganizing the managing system of the administration of the unit for the enforcement of the socio-educational measures of reclusion in the State of São Paulo, clearly affecting the best interest of those adolescents subjected to this type of measure […]" Briefing n. 698. Suspension of the decision of the CNJ: transfer of juvenile offenders and detention units (MS 31902 CA / FD)

[3] "Therefore, the most skilled person to determine (sic) the transfer of the adolescent to serve the socio-educational measure in another unit is the Judge in charge of the Child and Juvenile Court who can even allow for overcrowding if that is in the best interest of the adolescents detained. […] Thus, the transfer of units of adolescents in conflict with the law must be ruled by the Child and Juvenile Court Judge, case by case, with the intervention of the Public Ministry so that their rights are not infringed".

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28SUPERLOTA%C7%C3O++E+ADOLESCENTE+E+ATO+E+INFRACIONAL%29&base=baseInformativo&url=http://tinyurl.com/y2wg4438

[4] In 2015 - Rcl 22618 / RJ, Min. Marco Aurélio, where he had asked the Public Defender Office "interdiction or, eventually, the observance of the maximum capacity of a determined unit", and Río de Janeiro Court noting that "is looking for a solution to the reported problems that allegedly damaged resocialization of the detained adolescents for years, interdiction not being now, partial or even the limitation to a certain number of reclusions, in short, the best answer to be given by the judiciary".

[5] Loic Wacquant. Castigar a los pobres: la nueva gestión de la miseria en los Estados Unidos. RJ: Freitas Bastos, 2001

3. GENERAL TOPICS

3.1.THEORETICAL APPROACHES

3.1.1. FORENSIC EVIDENCE IN CHILD PROTECTION PROCEEDINGS

By Peter Johnstone[28]

Introduction

Cases involving instances of shaken baby syndrome are among the most emotive, controversial and challenging within the care and protection jurisdiction of the Children's Court of NSW.

Decision making in care and protection proceedings is complex, and necessitates that judicial officers engage in the difficult task of considering and evaluating the multiple factors which combine

28. Peter Johnstone is Judge, President of the Children's Court of New South Wales, Australia

to impact on the child's future safety, welfare and well-being.[29] This process is especially complex in cases involving non-accidental head injury where there is typically no direct evidence to the alleged abuse, and the explanations offered by carers are usually inconsistent with the physical findings.[30]

This paper aims to explore the role of forensic evidence in care and protection proceedings involving non-accidental head injury.

Care and protection proceedings

Care and protection proceedings are conducted in the Children's Court of NSW under the Children and Young Persons (Care and Protection) Act 1998 (NSW) ('the Care Act').

The paramountcy principle under which the Care Act is to be administered provides that in any action or decision concerning a child, his or her safety, welfare and well-being is paramount. [31] This principle prevails over all other considerations, even where it conflicts with the rights or interests of the parents.

Critical decisions under the Care Act relating to such issues as restoration, contact, parental responsibility and placement, the proper test to be applied is that of 'unacceptable risk of harm to the child,' as established in the High Court decision in M v M [1988] HCA 68.

Evidence in care and protection proceedings

The Children's Court has a wide discretion to admit evidence in care and protection proceedings, such as hearsay evidence, that would not be admissible in other courts. Nevertheless, it must draw its conclusions from material that is satisfactory, in the probative sense, so as to avoid decision-making that might appear capricious, arbitrary or without foundational material.[32]

When considering cases of suspected non-accidental head injury the Court will frequently be required to consider and evaluate evidence from experts, particularly medical witnesses. Their evidence is opinion evidence.

Despite the Children's Court's broad discretion to admit evidence, in matters concerning expert scientific evidence the Court tends to apply the usual rules of evidence relating to expert testimony.[33]

In Makita (Australia) Pty Ltd v Sprowles Justice Dyson Heydon, then a justice of the Court of Appeal, NSW summarised the applicable law in relation to the admissibility of expert evidence:[34]

(1) there must be field of "specialised knowledge" in which the witness demonstrates that by reason of specified training, study or experience, the witness has become an expert;

(2) the opinion proffered must be "wholly or substantially based on the witness's expert knowledge";

(3) so far as the opinion is based on facts "observed" by the expert, they must be identified and admissibly proved by the expert;

(4) so far as the opinion is based on "assumed" or "accepted" facts, they must be identified and proved in some other way;

(5) it must be established that the facts on which the opinion is based form a proper foundation for it; and the expert's evidence must explain how the field of "specialised knowledge" in which the witness is expert, and on which the opinion is "wholly or substantially based" applies to the facts assumed or observed so as to produce the opinion propounded.

Doctors should not stray outside their area of expertise. For example, a general practitioner should not venture to express a view on a matter of psychiatry, or at least should make clear that the view is based on a limited level of general medical knowledge derived from study or general practice. The expert should clearly set out any written material considered, and all the people consulted with, and specify which aspects of that material were regarded as persuasive in forming the opinion. Medical experts should identify any paper or study they have relied on, and should articulate the reasoning process they have used to come to any opinion or conclusion, and be in a position to defend it.

Non-accidental head injury

It is not possible to analyse the role of forensic evidence in care and protection proceedings involving suspected non-accidental head injury without an attempt to survey the present realities of abusive head trauma in infants.

The issue of non-accidental head injury has been the subject of profound and sometimes passionate disagreement.

Shaking as a mechanism for inflicting intracranial injury in infants was first described in an article in the British Medical Journal in 1971. The research relied upon was published a few years prior wherein rhesus monkeys were placed in fibreglass chairs on tracks and then, with their heads free to rotate, subjected to accelerations similar to those in rear end motor vehicle collisions. Some of the animals were found thereafter to have suffered intracranial injury and some were found to have a concomitant neck injury. The resulting proposition that rotational acceleration of sufficient magnitude could cause intracranial injury without impact, and therefore without external evidence of injury, appeared to be an explanation for hitherto unexplained injury in infants.

In 1987 however, a major study of 48 children aged one month to two years with suspected shake injury was published in the Journal of Neurosurgery. The experiment concluded that the accelerations established for shakes were smaller by a factor of 50 to one than those for impacts. The study ended:

"It is our conclusion that the shaken baby syndrome, at least in its most severe acute form, is not usually caused by shaking alone. Although shaking may, in fact, be a part of the process, it is more likely that such infants suffer blunt impact. The most likely scenario may be a child who was shaken, then thrown into or against a crib, or other surface, striking the back of the head and thus undergoing a large, brief deceleration."[35]

Non-accidental head injury in care proceedings

In matters involving suspected non-accidental head injury, the Children's Court is tasked with deciding whether the child has suffered significant harm, or if there is a real possibility of significant harm in the future. Critical to this decision making process is establishing whether there is an unacceptable risk of harm to the child, or siblings of the child.

Proving on the balance of probabilities that injuries occurred through abuse and non-accidental means can be challenging. Even in matters where the Court is able to make a finding that the injuries were caused through abuse, ascertaining the identity of the offender is often difficult, if not impossible, as the circumstances of the alleged crimes

29. Kozlowska, K, and Foley, F, 'Attachment and Risk of Future Harm: A Case of Non-Accidental Brain Injury' (2006) 27(2) Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 75.

30. Department of Family and Community Services (NSW) and the Bell-Collins Children [2014] NSWChC 5.

31. Children and Young Persons (Care and Protection) Act 1998 (NSW), s 9(1).

32. JL v Secretary, Department of family and Community Services [2015] NSWCA 88 at [148]; see also Sudath v Health Care Complaints Commission [2012] NSWCA 171 at [79].

33. Amanda Stephens, Legal Outcomes in Non-Accidental Head Injury ('Shaken Baby Syndrome') Cases: Inevitable Inconsistencies (PhD Thesis, The University of Sydney, 2011).

34. (2001) 52 NSWLR 705 at 743-744 Makita (Australia) Pty Ltd v Sproules [2001] NSWCA.

35. Duhaime, A, et al, 'The Shaken Baby Syndrome: A Clinical, Pathological, and Biomechanical Study' 22 (1987) Journal of Neurosurgery 409.

are not precisely determined by the pathological findings and perpetrators' accounts of the events are rarely accurate and consistent.[36]

Forensic evidence in child protection proceedings

Care and protection proceedings involving suspected non-accidental head injury often rest entirely upon forensic evidence.

A review of legal principles, as set out in Re JS [2012] EWHC 1370 (Fam), emphasises the centrality of expert evidence in care and protection proceedings involving matters of suspected non-accidental head injury.

Firstly, the burden of proof lies with the Department of Communities and Justice.

Second, the standard of proof is the balance of probabilities: Briginshaw v Briginshaw [1938] HCA 34. If the Department proves on the balance of probabilities that a child has sustained non-accidental injuries inflicted by one of his parents, the Children's Court will treat that fact as established and all future decisions concerning his future will be based on that finding.

Third, findings of fact in suspected non-accidental injury must be based on evidence. As Munby LJ observed in Re A (A Child) [2011] EWCA Civ 12:

"It is an elementary proposition that findings of fact must be based on evidence, including inferences that can properly be drawn from the evidence and not on suspicion or speculation."

Fourth, when considering cases of suspected child abuse the Court must take into account all the evidence and furthermore consider each piece of evidence in the context of all the other evidence. As Dame Elizabeth Butler-Sloss observed in Re T [2004] EWCA Civ 558, [2004] 2 FLR 838 at 33:

"Evidence cannot be evaluated and assessed in separate compartments. A judge in these difficult cases must have regard to the relevance of each piece of evidence to other evidence and to exercise an overview of the totality of the evidence in order to come to the conclusion whether the case put forward by the local authority has been made out to the appropriate standard of proof."

Fifth, the evidence received in proceedings involving allegations of non-accidental head injury, is expert medical evidence from a variety of specialists.
Whilst appropriate attention must be paid to the opinion of medical experts, those opinions need to be considered in the context of all the other evidence. The roles of the Court and the expert are distinct. It is the Court that is in the position to weigh up expert evidence against the other evidence.

Sixth, in assessing the expert evidence it is to be borne in mind that cases involving an allegation of shaking involve a multi-disciplinary analysis of the medical information conducted by a group of specialists, each bringing their own expertise to bear on the problem. The Court must be careful to ensure that each expert keeps within the bounds of their own expertise and defers, where appropriate, to the expertise of others.

Seventh, the evidence of the parents and any other carers is of the utmost importance. It is essential that the Court forms a clear assessment of their credibility and reliability. They must have the fullest opportunity to take part in the hearing and the Court is likely to place considerable weight on the impression it forms of them.

Eighth, it is common for witnesses in these cases to tell lies in the course of the investigation and the hearing. The Court must be careful to bear in mind that a witness may lie for many reasons, such as shame, misplaced loyalty, panic, fear, distress, and the fact that a witness has lied about some matters does not mean that he or she has lied about everything.

Ninth, as observed by Hedley J in Re R [2011] EWHC 1715 Fam:

"There has to be factored into every case which concerns a disputed aetiology giving rise to significant harm a consideration as to whether the cause is unknown.

That affects neither the burden nor the standard of proof. It is simply a factor to be taken into account in deciding whether the causation advanced by the one shouldering the burden of proof is established on the balance of probabilities."
The Court must resist the temptation to believe that it is always possible to identify the cause of injury to the child.

Finally, when seeking to identify the perpetrators of non-accidental injuries the test of whether a particular person is in the pool of possible perpetrators, is whether there is a likelihood or a real possibility that he or she was the perpetrator, as established in North Yorkshire County Council v SA [2003] 2 FLR 849. In order to make a finding that a particular person was the perpetrator of non-accidental injury the Court must be satisfied on a balance of probabilities. It is always desirable, where possible, for the perpetrator of non-accidental injuries to be identified both in the public interest and in the interest of the child, although where it is impossible for a judge to find on the balance of probabilities, for example that Parent A rather than Parent B caused the injury, then neither can be excluded from the pool and the judicial officer should not strain to do so.
Expert witnesses are uniquely placed to assist the Court in cases involving suspected child abuse, but are not an advocate for a party. They have a paramount duty, overriding any duty to the party or other person retaining the expert witness, to assist the Court impartially on matters relevant to the area of expertise of the witness. Expert witnesses ultimately assist the Court in determining matters to ensure the safety, welfare and well-being of a child or young person.

Conclusion

Forensic evidence plays a central role in care and protection proceedings involving suspected non-accidental head injury. It is critical in establishing the required tests under the Care Act, namely, whether a child is in need of care and protection, and whether there is any realistic possibility of restoration.

Judicial officers rely on medical professionals to conduct timely and high-quality clinical investigations in suspected shaken baby cases to facilitate the decision-making process in court.

Decision making in care and protection proceedings is complex, and necessitates that courts engage in the difficult task of considering and evaluating the multiple factors which combine to impact on the child's future safety, welfare and well-being.[37] This process is especially complex in cases involving non-accidental head injury where there are typically no witnesses to the alleged abuse and explanations offered by carers are often inconsistent with the physical findings.

Whilst appropriate attention must be paid to the opinion of medical experts, those opinions need to be considered in the context of all the other evidence. The roles of the Court and the expert are dis-

36. Amanda Stephens, Legal Outcomes in Non-Accidental Head Injury ('Shaken Baby Syndrome') Cases: Inevitable Inconsistencies (PhD Thesis, University of Sydney, 2011)

37. Kozlowska, K, and Foley, F, 'Attachment and Risk of Future Harm: A Case of Non-Accidental Brain Injury' (2006) 27(2) Australian and New Zealand Journal of Family Therapy 75.

tinct. It is the Court that is in the position to weigh up expert evidence against all other available evidence. Thus there may be cases, if the medical opinion evidence is that there is nothing diagnostic of non-accidental injury, where a judicial officer, having considered all the evidence, reaches the conclusion that is at variance from that reached by the medical experts.

I hope this paper has been illuminating, especially for those who may come into contact with the care and protection jurisdiction of the Children's Court of NSW.

3.1.2. SIBLING BONDING CONSIDERATIONS IN CHILD CUSTODY CASES

By Ken Lewis[38]

Part 1 – Definitions of Attachment and Bonding

While the terms, "attachment" and "bonding" both relate to an emotional connection between human individuals, technically they are distinctly different terms. While genetics influence most aspects of human development, it does not influence attachment. Attachment is a process that is based on experience. Parents and other caregivers shape the attachment of children. Children can be attached to parents, but not the reverse. Attachment is equated with safety. When a child is scared or needy, the child will exhibit a variety of verbal and nonverbal cues to indicate the level of stress or need. Constant and continuous satisfactory responses by a caregiver create in the child the phenomenon of attachment.

In an adoption matter that originated in the DC Superior Court, expert testimony was offered that differentiated these terms. He described attachment as:
"…a psychological phenomenon that begins early in a child's life whereby a child comes to see a caretaker ... as [her] psychological parent. The psychological parent is essentially that person ... whereby the child comes to see that individual as the person ... on whom they count for getting their emotional needs met…Attachment is that deeper emotional connection that only comes with the constancy, and the stability, and the consistency over time....T.W.M. v T.B., 18 A. 3rd 815 at fn. 4 (2011).

"Attachment theory"[38] postulates that attachment begins in the second half of the infant's first year of life. From this point in time, if the infant has a regular caregiver (typically the parent, but not necessarily that person), upon whom the infant relies for emotional needs, then the infant would begin to become "attached" to that caregiver. The expert in T.W.M. explained how bonding was different:

"[B]onding reflects a very different phenomenon than attachment does. [B]onding as children grow up tends to refer to the connection that a child has with other people to whom they don't have a deeper attachment." Id.

In short, attachment is a phenomenon unique to infants, whereas bonding refers to an affectionate emotion that older children and adults have to one another.

Part 2 – Bonding Taxonomic to Family Law

Within the realm of family law, "attachment" and "bonding" have significant importance. For example, in adoption law, courts pay attention to the strength of an infant's attachment, and the potential damage that may result with its breach. Long ago, a New Jersey Supreme Court judge expressed it this way:
"A filial relationship takes root in the earliest stages of child development and this cannot be destroyed or changed without some risk of emotional harm to the child." Sees v Baber, 377 A. 2nd 628; 74 N.J. 201 at 222 (1977). Opinion by Justice Handler.

Examples from child custody law of often expressed in modification cases, particularly when the issue is relocation. For example, when Mother petitioned to modify custody in order for her to relocate with her seven-year old son from Washington, DC to Virginia Beach, Father opposed. The District of Columbia Court of Appeals affirmed the trial court, and commented on the issue of bonding:

"[T]he trial court noted that even though [Father's] prior job had required him to travel extensively and regularly, he had been able to maintain a close relationship with [his son]….The trial court also noted that the bond between [Father and son] was strong and would continue if [the son] relocated since Mother believed that [their son] should have a close relationship with his father and indicated that she wanted to foster that relationship." Estopina v O'Brian, 68 A. 3rd 790 at 794-795 (2013)

In short, while the terms "bonding" and "attachment" in lay language can mean mere affection, in family law the definitions have specific importance.

Part 3 - Assessments Available in a Bonding Study

A bonding study involves an assessment of the emotional connectedness between child and parent, or child and relative, or child and non-relative, or between siblings.

The history of bonding studies can be traced to their beginnings in the 1930's when Mary Ainsworth and others began to analyze the interaction between mother and child.[40] In the 1960's she conducted experiments by observing infant behavior when other researchers entered the room. From these behaviors, she offered an opinion about the infant's relationship with the parent. Her experiments became the basis for modern bonding studies. Id.

When social workers are asked to conduct a "bonding study" in connection with foster and adoption cases the following professional instruments are among those available:

AAQ
Antenatal Attachment Questionnaire

IBM
Intimate Bond Measure

MAI
Maternal Attachment Inventory

MCRE
Mother-child Relationship Evaluation

MIRI
Maternal Infant Responsiveness Instrument

PAI
Prenatal Attachment Inventory

38. Ken Lewis, PhD. During the 1970's, Ken was a Professor of Social Work at several universities (Kansas, North Carolina, Tuskegee Institute) and he was a Visiting Professor of Intercultural Studies at Central Washington University. For the past 30 years, he has worked full-time in the area of child custody, and has been court-appointed guardian ad litem or custody evaluator in more than two dozen States and in Canada. His specialties are parental alienation and other high conflict child custody cases.

39. Attachment theory was developed in the 1940's and beyond by John Bowlby and further developed by Mary Ainsworth. The theory postulates that a child's early emotional attachment to an adult (usually a parent) is an essential mechanism for the child's later emotional health; and the lack of such attachment may lead to emotional deprivation.

40. See David E. Arredondo, M.D., and Hon. Leonard P. Edwards, Attachment, Bonding, And Reciprocal Connectedness, 2 Journal for the Center for Family, Children and the Courts 109 at 110 (2000). The authors identify practical questions that a judge should ask when evaluating a report on a bonding study, at 121-22.

SMIBD Screening for Mother-Infant Bonding Disorder

A bonding assessment might also be important in a child custody case, when the case is in litigation at one of its later stages.[41] Assessing and comparing bonding strengths between parent and child, and between siblings, can provide useful data for the judge in a contested case. Among the areas of inquiry in most custody evaluations are "the quality of the child's parental attachments… [and] the child's sibling relationships."[42] A frequently employed custody-specific instrument for assessing a child's perception of each parent is the Bricklin Perception Scales (BPS) for children aged six and older.

Some writers have identified a bonding assessment as an important measurement in child custody evaluations.[43] For example, O'Donohue, et. al.[44] developed a model for forensic custody evaluations. They specified five relevant factors according to both legal and psychological criteria that would mitigate substantial involvement with one parent. "Poor attachment" was listed as the first important factor.[45]

Perhaps, the most important instrument for assessing bonding is the experienced professional. In child custody evaluations, experienced evaluators rely on direct observations in home environments.

"Seeing parents and children together in the intimacy of a home setting provides a perspective on the case that cannot be duplicated elsewhere."[46]

The American Psychiatric Association has recognized direct observation as a valuable instrument for assessing bonding. In its Report[47], the task force --
"…suggested that when assessing the parent-child bond, the psychiatrist should observe the interaction between the child and parent and measure whether the parent is able to empathize and communicate with the child." Id. at 6.

There is a vast inventory of professional child custody literature regarding bonding assessments. For judicial determinations of child placements, whether in foster care or contested custody litigation, an assessment of the strength or weakness of the emotional bond between two humans should be a useful piece of data. The bond may be between child and parent, child and relative, child and non-relative, or between siblings. The latter is generally the longest lasting bond.

Part 4 - Sibling Bonding in Professional Literature

The literature on siblings exposes various types of "siblings" such as full siblings (sharing both parents), step siblings (by remarriage) and half siblings[48] (one of two or more children who have one parent in common). Even relatives and non-relatives who live together in the same household sometimes call themselves siblings. The term "sibling" can be biological, legal, colloquial, but mostly emotional.[49]

The sibling bond is significant because of its lifespan duration. Young siblings often share familial experiences, cultural practices, and relevant interactions with their relatives as they age; and they generally outlive their parents. In 1982, a Cambridge University developmental psychologist published a book on sibling relationships that explored many facets of sibling bonding over a lifetime. The book was aptly called Sibling Relationships: Their Nature and Significance Across the Lifespan.[50]

In 1992, two child psychologists published comprehensive collection of articles on sibling bonding topics. It is called, Children's Sibling Relationships: Development and Clinical Issues.[51] It examines the sibling relationship as a distinctive emotional connection from infancy onward. It contains ten chapters, the first five focus on the developmental aspect of sibling bonding; the latter five chapters focus on clinical concerns.
The professional literature on bonding is not restricted to one particular field of study. Just the opposite is true. John Bowlby, creator of the attachment bond theory, was a British psychiatrist; and Mary Ainsworth, who further developed the theory, was a Canadian psychologist. But, beyond psychiatrist and psychologist, the literature on sibling bonding spans several professional fields of study, such as:

Sociology
Marilyn Ihinger-Allman[52]

Social Work
Ellen Ryan[53]

Nursing
Marsha. Marecki[54]

Child Development
Jean Piaget[55]

Social Psychology
Michael E. Lamb[56]

Family Studies
Mark E. Feinberg,
Penn State Univ.

Part 5 – Sibling Bonding in Law

The importance of the sibling relationship has long been recognized by both federal and state courts. While the term "bonding" had not yet been articulated in legalese, the importance of bonding as a concept was recognized in statute. Thirty years ago, in the District of Columbia, one of the statutory factors for the termination of parental rights was the consideration of the quality of interaction between siblings.

"In determining whether… the parent and child relationship [should] be terminated, a judge shall consider…the quality of the interaction and interrelationship of the child with his or her…siblings….." D.C.Code §16-2353(b)(3) (1989).[57]

In federal law, also, separating siblings was something to be avoided because of the potential harm to them. The "breach of the bond" is not a legal term in federal law, but the concept is clearly recognized:

"The court also determined that because [brother and sister] had a loving and close relationship, separation would be harmful to both siblings, and that avoiding such a separation met the requirements of the Hague Convention." Ermini v Vittori, 758 F. 3rd 153 at 160 (2014).

The same principle of not separating siblings is found in federal adoption law. The Fostering Connections to Success and Increasing Adoption Act of 2008 amended federal law by requiring states "to make reasonable efforts to place siblings in the same foster, kinship, or adoptive homes, unless contrary to the safety or wellbeing of any of the siblings" 42 U.S.C. §671(a) as amended.
The Fostering Connections Act demonstrated the importance of sibling bonding, by imposing an obligation on the States to ensure that visitation between siblings occurs while they are in foster care as well as afterward. It conditioned the States' receipt of federal funding on their reasonable efforts to ensure sibling contact after a child has been removed from his or her home and thereafter.

The same principle of sibling bonding is explicitly stated in most States. For

41. See, Child Custody Evaluations by Social Workers: Understanding the Five Stages Custody by this writer. Stages Two, Three, and Four often involve bonding issues.

42. Steven Herman, et al. (1997). "Practice Parameters for Child Custody Evaluation, "Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychology," Volume 36, 139.

43. According to the National Council of Juvenile and Family Court Judges, "[t]he core function of the evaluator is to gather and interpret information and report their findings to the court."

44. O'Donohue, W., Beitz, K.& Cummings, N. (2007). "A Model for Constructs Relevant to Child Custody Evaluations." Journal of Forensic Pathology Practice, Volume 7, issue 4, 125- 139.

45. The five factors were: (1) poor attachment, (2) poor parenting skills, (3) emotional instability/mental disorder of the parent, (4) environmental instability, and (5) exaggerated conflict.

46. Dianne Skafte, Child Custody Evaluations: A Practical Guide, p. 73.

47. Andre .P. Derdeyn. Child Custody Consultations: Report of the Task Force on Clinical Assessment in Child Custody, Washington, D.C. American Psychiatric Association, 1982.

48. Mosby's Medical Dictionary, 9th edition, 2009, Elsevier. Half siblings often affectionately refer to themselves as "half-sibs."

49. Consider the expression, "bro" as an affectionate term for "brother" in a situation where there is no legal sibling relationship.

50. Michael E. Lamb and Brian Sutton-Smith, Sibling Relationships: Their Nature and Significance Across the Lifespan, New York: Psychology Press, 1982.

51. Frits Boer and Judy Dunn, Children's Sibling Relationships: Developmental and Clinical Issues, Hillsdale NJ: Erlbaum Publishers, 1992.

52. Marilyn Ihinger-Allman, "Sibling and Stepsibling Bonding in Stepfamilies," in K. Pasley (ed.) Remarriage and Step-parenting: Current Research and Theory 54-73, Guilford Press, 1987.

53. Ellen Ryan, "Assessing Sibling Attachments in the Face of Placement Issues," Clinical Social Work Journal, Springer Press, 2002.

54. Marsha. Marecki, "Early Sibling Attachment," Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing Vol 14, 418-423, 1985.

55. Jean Piaget, Origins of intelligence in the child. London: Routledge, 1936. His cognitive theory of development revolutionized how we think about child development.

56. Michael E. Lamb, "Father-Infant and Mother-Infant Interaction in the First Year of Life." 48 Child Development 167-181, 1977.

58. This statutory factors was raised as grounds for appeal by a father in Spires v Spires, see infra. p. 13.

example, in Pennsylvania, the legal doctrine for permitting siblings to be raised together whenever possible is called the "family unity doctrine." Wiskoski v Wiskoski, 427 PA Super, 531; 629 A. 2nd 996 (PA Super 1993).

Absent compelling reasons to the contrary, it is the policy of this Commonwealth that siblings should be raised together whenever possible… While this factor cannot be elevated automatically above all other factors, it must be weighed in conjunction with the others. This is the "doctrine of family unity." Id. at 536

The issue of whether the principle of sibling bonding referred only to biological siblings or whether it extended to half siblings was resolved forty years ago by Pennsylvania's Supreme Court. Against the argument, Chief Justice Nix simply wrote, "This principle is in no way diluted by the fact that the third child in this case is a half-brother." Albright v Fetters, 421 A. 2nd 157; 491 Pa. 320 at 328, 1980.

Split physical custody of siblings is generally opposed because it deprives siblings of the benefit of constant association with one another. The rule is not ironclad, however, and circumstances may arise which demonstrate that separation may promote the best interests of the siblings. While there is a presumption against splitting siblings, good and compelling reasons must exist for a departure from the general rule.

Compelling reasons for splitting siblings may exist in the following circumstances: (a) a substantial age difference, (b) extreme medical circumstances, (c) special educational circumstances, and (d) serious emotional discord between the siblings. This latter condition suggests situations where there is a significant breach of sibling bonding.[58]

All States require child custody determinations to be based on the best interests of the child. In determining best interests, at least twenty-two jurisdictions[59] identify statutory custody factors that include mention of the sibling relationship. In the District of Columbia, the pertinent custody factor reads:

"To determine the best interest of the child, the court shall consider … the interaction and interrelationship of the child with…his or her siblings…." D.C. Code§ 16-914(a)(3)(C).

This factor was emphasized in a case from the District of Columbia called Spires v Spires, 743 A. 2nd 186, D.C. Court of Appeals (1999).

The Father in Spires appealed the trial court's order that awarded the Mother custody of the couple's children. One of Father's grounds for appeal was that the trial court failed to give adequate consideration to the sibling relationships. The couple had three children between them; and the Father had a son from a previous wife. The probation officer who conducted the home study "testified that the [three] children were 'bonded' and had a very close relationship with [their half-sibling]. Id. 189. The trial court's order also provided for the half-sibling to visit the couple's three children at the Mother's home. The appellate court upheld the trial court for maintaining and nurturing the sibling relationships.

Part 6 – Considerations for the Bench

There is only one statutory child custody factor that addresses the relationship between siblings. It is recognized in the laws of at least twenty-two States (ante. fn. 21) for determining the best interests of the child. Heavier weight might be placed on this factor when determining a custody placement.

Research is clearly on the side of the positive aspects of sibling bonding. A strong bond between two siblings benefits both siblings; and the effects can mean mutual support, shared history, and a continued friendship over an entire lifespan. "Filial bonds take root in the earliest stages of child development," Justice Handler, ante. p. 4.

When child custody litigation is "child-centered," placement determinations should advantage the child, even when they may be disadvantageous to the adults.

References

Ainsworth, M. D. S. (1978). The Bowlby-Ainsworth attachment theory. Behavioral and Brain Sciences, 1(3), 436–438.

Ainsworth, M.D., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Bowlby, John (1969). Attachment and Loss, Vol. 1, New York: Basic Books.

Dalton, Clare, et al. (2006) Navigating Custody and Visitation Evaluations…, National Council of Juvenile and Family Court Judges.

Lewis, Ken (2009). Child Custody Evaluations by Social Workers: Understanding the Five Stages Custody, National Association of Social Workers, NASW Press, Washington, DC.

Main, Mary, Hesse, Erik, and Hesse, Siegfried. "Attachment Theory and Research: Overview With Suggested Applications To Child Custody," 49(3) Family Court Review 426-463 (2011).

3.1.3. THE INTERDISCIPLINARY RESEARCH LABORATORY ON THE RIGHTS OF THE CHILD: A PLATFORM FOR EXCHANGE AND REFLECTION

By Mona Paré[60]

The Interdisciplinary Research Laboratory on the Rights of the Child (IRLRC) is a platform for exchange and reflection on the rights of the child open to the international community of professionals working in the fields related to children's rights. This article presents the IRLRC, which was created in Canada and whose aim is to develop an international network of researchers, professionals and institutions interested in children and

59. During my 30 years conducting custody evaluations, I recommended split custody in only one case based on the existing breach of the sibling bond between two brothers. It was a relocation case where there existed long time extreme negativity between the siblings based on opposite and animus religious persuasions.

59. Among the jurisdictions are: California, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawaii, Illinois, Kansas, Maryland, Minnesota, Missouri, Montana, New Hampshire, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia, West Virginia, and Wisconsin, as well at the District of Columbia and the U.S. Virgin Islands.

60. Professor, Faculty of Law, University of Ottawa (mona.pare@60. Professor, Faculty of Law, University of Ottawa (mona.pare@uottawa.ca)

61. Professor Paré on the left and the Laboratory´s team: professors Rachel Grondin and Marie Pratte. On the right, the Laboratory´s logo.

their rights.

What is the IRLRC?

The IRLRC was born in 2007 at the Faculty of Law of the University of Ottawa by the professors Rachel Grondin, Mona Paré and Marie Pratte (today a retired judge). The Laboratory is a network of researchers and practitioners promoting the interdisciplinary research and the transfer of knowledge on issues related to the recognition and implementation of children's rights. Therefore, the IRLRC aims at improving the protection of the rights of children, both at national and international levels. To do so, the IRLRC promotes the development of interdisciplinary training and research on children's rights and intends to establish collaborations at national and international levels between researchers and practitioners from various sectors and disciplines. Thus, it hopes to stimulate the transfer of knowledge between the academic world and the practitioner world, in both directions. This ensures the relevance and usefulness of research, and serves as a catalyst for the creation of joint research and training projects that have real practical outcomes. Members of the IRLRC represent different disciplines. At the University of Ottawa, they come from the Faculties of Law, Education, Health Sciences and Social Sciences. Outside the University, partners of the IRLRC include governmental and non-governmental institutions, as well as academic institutions at local, national and international levels.

Research

The main lines of research of the Laboratory are: 1. The Child: a subject of law; 2. The Child and the Family; 3. The Child, the State and the Society. These themes allow to study subjects such as filiation and identity, child protection and delinquency, vulnerability and marginalised groups, or even the implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC).

Joint research projects between academic researchers from different disciplines and between academics and community partners have already addressed several themes, such as: the issue of bullying at school, using an assessment tool based on children's rights; the consideration of children's rights in cases of sexual assault committed by children and the challenges that arise at the family level; the inclusion of children with disabilities at school in contexts involving minority languages; or even the role of the child's voice in child protection procedures.

Research projects also include projects conducted by students following the course "Child Rights", in collaboration with community organisations. For example, groups of students undertook a comparative study for the integration of the Convention on the Rights of the Child in Canada on behalf of UNICEF Canada. Other students made research for a local center of social paediatrics.

Besides, the students can submit their works resulting from individual research carried out during their Bachelor and superior studies to a writing contest on children's rights, organised by the IRLRC each year. Winners of the 2019 contest were Sidra Hashmi, an undergraduate student in the joint Honours BSocSc in Criminology and Women's Studies program, at the Social Sciences Faculty of the University of Ottawa and Amira Maameri, a doctoral student in Law at the University of Ottawa registered in a joint PhD program with the University of Bordeaux. We invite you to read their essays.

Sidra Hashmi won first prize in the "Undergratude studies" category for her essay entitled "Mundane Marginalization: A Criminological Analysis of the Immigration Detention of Children in Canada". Her essay addresses the detention of children in the context of immigration. She considers the immigration of children as a "mundane" crime and claims that the Convention on the Rights of the Child is applied against the children's interests and in the interest of those in power, in order to maintain the structures of marginalization. Sidra Hashmi calls for the adoption of analyses that go beyond traditional methods in criminology, in order to create a new infrastructure for society in which human rights are a universal standard. She also calls for new research focusing on the expansion of legal and common definitions of key concepts in order to ensure that there is no possibility to manipulate them, as is the case when the State has a monopoly on the Convention's interpretation. Sidra Hashmi's essay, as for all the winning essays in the "Undergraduate Studies" category, has been published in the Canadian Journal of Children's Rights/Revue canadienne des droits des enfants.

As for Amira Maameri's essay, it won the "Graduate Studies" category and is entitled "L'Enfance autochtone et canadienne : Le Miroir de l'identité – Une quête légitime des mineurs autochtones du droit à la préservation de leur identité culturelle". In her essay, Amira Maameri addresses the situation of Aboriginal children in Canada, focusing on the preservation of their cultural identity. By looking at this issue in an interdisciplinary way, she talks about the importance of trying to overcome the difficulty of integrating the legal traditions of Aboriginal children in the Canadian legal system, which, as a result, will reassure these children who face a feeling of cultural insecurity. According to Amira Maameri, the answer lies in taking into account the Aboriginal resources as sources of inspiration, which will help heal these children who are broken up from the inside. This study is an invitation to create together "bridges" for integration between law and intercultural societies.

Transfer of knowledge

The transfer of knowledge in the IRLRC involves different actors, including students, researchers and practitioners. Students participate in the transfer of knowledge through the publication of articles on blogs and the presentation of their research in IRLRC conferences. They also have access to a training in the framework of a Master course entitled "Children's rights: an interdisciplinary approach" given by several professors from different faculties. This year, students who enrolled in the course "Child Rights" have conducted workshops for young people on the occasion of the initiative "Shaking the Movers " (STM). This initiative focused on education and diversity, teaching young participants on children's rights and allowing them to express themselves on subjects that affect them, in order to make them heard by decision-makers. This initiative is pursued in partnership with the Landon Pearson Resource Centre for Children's Rights, which initiated the STM project.

An important aspect of knowledge mobilisation in terms of children's rights consists in organising conferences each year, involving all stakeholders. The IRLRC organises "lunch-talks" with speakers from the academic world or the practitioner world. Further, the IRLRC holds an annual conference on topical issues. Previous conferences covered the following subjects: "Young girls and street gangs: association or exploitation" (2008); "Children in the technology era: between awe and wonder" (2012); "International conference on the impact assessment on children's rights" (2013); "Ending school violence: children's ri-

ghts-based approach" (2014); or "Implications of cannabis legalization for children's rights" (2018).

In 2020, the annual IRLRC conference will be on "Children's access to and participation in justice: Critical assessment". The conference will be held in Ottawa on May 21 and 22 and will gather together professionals of justice, academic researchers and experts on fields like social psychology and work. The conference supports efforts towards promoting the children's participation in justice and their access to it at domestic and international levels, such as the call for action to achieve Sustainable Development Goal n° 16 for children. The conference will seek to define children's access to justice in a global way, by addressing current challenges, asking questions that have not yet been formulated and by bringing new answers to existing problems. A call for proposals has been launched in order to gather papers that will help undertake a critical review of several topics: the administration of justice for children in different areas of law and sectors of children's lives (for example, education, health care, penal justice, asylum applications, children protection); the children's participation in justice beyond the judicial procedures (alternative dispute resolution, restorative justice, child advocates, etc.); the access of specific groups of children to justice, such as children deprived of liberty, migrant children, children with disabilities, Aboriginal children); and the children's participation in defining justice and access to justice.
This conference is the result of a research partnership on minors' access to justice, that includes researchers from several universities: Ottawa, Leiden, Louvain (UCL), Aix-Marseille and Bordeaux, as well as other partners such as the Interdisciplinary Center for the Rights of the Child (Belgium), the Association of French Speaking Lawyers of Ontario and the Human Rights Research and Education Centre of the University of Ottawa. In the coming years, this partnership will develop an international research network on the protection and the voice of children.

A forward-looking perspective?

The IRLRC continues to develop research and knowledge mobilisation partnerships and projects. We hope that the ongoing dialogue between people representing different disciplines, between academic, community and governmental worlds, as well as between children, students and professionals, will enrich our understanding of children's rights and of the situations that need to be dealt in priority.

We wish that this presentation of the IRLRC will encourage all people interested in children's rights to find solutions to problems regarding their implementation and to help develop training in children's rights, as well as to participate in our activities. Please visit our webpage, read our articles and surf on our blogs, suggest research topics and get involved in our annual conference!

4. ORGANIZATIONAL OR METHODOLOGICAL IMPROVEMENTS IN THE JUDICIAL SYSTEM

4.1. THE IMPORTANCE OF JUDICIAL TRAINING ON EU LAW AS A NON-LEGISLATIVE SOLUTION TO PROTECTING THE RIGHTS OF CHILDREN

By Wojciech Postulski[62]

The rights of children under EU law

The rights of the child are part of the human rights that the European Union and EU Member States must respect, protect and fulfil. The European Commission itself is guided by the principles set out in the UN Convention on the rights of the child[63] to which all EU Member States are bound, and other international recommendations or guidelines (such as the Guidelines of the Council of Europe on child-friendly justice).

Article 3(3) of the Treaty on the European Union establishes the objective for the EU to promote the protection of the rights of the child. In addition, the Charter of Fundamental Rights of the EU guarantees the protection of the rights of the child by the EU institutions and by EU Member States when they implement EU law: Article 24 on the rights of the child and Article 31 on the prohibition of child labour specifically cover children's rights.

The EU acquis and the policy documents on the rights of the child are vast[64]. Of particular importance therefore is the position of the Commission's coordinator for the rights of the child, which was set up in 2007 as a result of the 2006 Communication "Towards an EU strategy on the rights of the child"[65], that coordinates work among all the departments of the Commission and to make sure that the rights of the child are properly considered in all relevant policies and actions.

In 2011 the European Commission adopted an EU agenda on the rights of the child, which set out a series of concrete actions where the EU can provide added value to policies for children's well-being and safety, including promoting child-friendly justice, better informing children about their rights, and making the internet safer for kids. With the new European Commission in place, Vice-President Šuica for Democracy and Demography has been tasked to lead the work on a comprehensive strategy on the rights of the child, which will include child-friendly justice as one of the strands.

62. Policy officer, European judicial training - Directorate General Justice and Consumers, European Commission

63. Convention on the Rights of the Child adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49.

64. See a summary in JUST.C2/MTF-NCP, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_acquis_rights_of_the_child_april_2019.pdf.

65. Brussels, 4.7.2006, COM(2006) 367 final. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0367:FIN:en:PDF

Efficient and effective enforcement

However, it is not the lack of relevant legislation that is the challenge[66], but rather that this legislation is not applied effectively. In the context of the application of EU law in general, the European Commission stated that "a robust, efficient and effective enforcement system is needed to ensure that Member States fully apply, implement and enforce EU law and provide adequate redress for citizens."[67] This is very relevant to the issue of the implementation of measures safeguarding the rights of the child.

The 2018 World Congress on Justice for Children, co-convened by the International Association of Youth and Family Judges and Magistrates (IAYFJM), "declare[d] [68] the pressing need and importance of strengthening and improving justice systems for children", and called for actions to ensure that justice professionals are equipped with the relevant skills.

This statement recalls the crucial role in this area of those involved in the service of justice, predominantly judges, prosecutors and lawyers as well as other legal practitioners. The role of legal practitioners is to understand and respect the rights of the child within the application of the relevant law. Consequently, it is clearly essential for every judge and other legal practitioner to know and understand the relevant law as well as to acknowledge that the law and legal principles do not exist in a vacuum. Legal practitioners operate publicly within society and interact on a daily basis with other human beings,[69] including children. They should be aware of, and understand the special status and position of a child in the legal system and in court procedures.[70]

The question is how to best empower legal practitioners to be able to meet such expectations. One of the key tools is professional training, shaping the attitudes of practitioners, and equipping them with the needed knowledge and skills.

European judicial training

European judicial training is important for all legal practitioners, and in particular for judges and prosecutors, in order for them to become competent in the implementation of the European legislative framework. Trust and understanding between legal practitioners will ensure that the rights of individuals, including the rights of children, are upheld in a clear and consistent manner. In light of the responsibilities given to the EU by the Treaty of Lisbon, the Commission published a Communication on "Building trust in EU-wide justice, a new dimension to European judicial training" in 2011[71]. The aim of this communication was to give a new dimension to European judicial training and to enable an even greater number of legal practitioners to access high-quality training on European Union law. Achieving this objective is the joint responsibility of all stakeholders. Member States, Councils for the judiciary, national and European judicial training bodies, and legal professions at national and European level must be committed to integrating EU law and its implementation into national and local training and to increasing the number of training activities in EU law, as well as the number of participants attending such sessions.

The Commission is committed to continuing to provide funding to support high-quality projects with a significant European impact. It supports financially the European Judicial Training Network (EJTN), co-funds cross-border judicial training projects carried out by numerous judicial training providers, and publishes a yearly report on the participation of legal practitioners in training on EU law within the European Union[72]. The Commission aims to make existing training materials available both to legal practitioners for their own use, and to the trainers of legal practitioners as a resource for their work in the field of the rights of the child. The special section of the European e-Justice Portal devoted to judicial training is already rich with training materials on children's rights[73].

Under the Rights, Equality and Citizenship Programme, the European Commission has also funded projects aiming at making judicial proceedings involving children more child-friendly[74]. In June 2018, the European Commission organised a conference on child-friendly justice and integrated child protection systems – lessons learned from EU projects[75]. Among the practices highlighted at the conference, the Barnahus provides a multi-disciplinary and interagency collaboration to ensure that children who suffer violence (either victims or witnesses) benefit from a child-friendly, professional and coordinated response, with the objective to prevent retraumatisation.[76]

Furthermore, as a follow-up to the 2017 Communication on the protection of children in migration , a database is in place compiling promising practices for the protection of children in migration, including some for legal professionals.[77]

The European Commission evaluated the 2011-2020 European Judicial Training strategy in 2019[78]. The recently published 2019 Annual report on European judicial training[79] complements this evaluation and shows excellent results in terms of participation. The target set in 2011 that half of all legal practitioners would attend training on EU law by 2020 was already reached in 2017. In total, more than 1 million legal practitioners attended training on EU law since 2011. The yearly number of participants increased by 148 % between 2011 and 2018. In 2018 alone, more than 190 000 legal practitioners took part in training on EU law. Between 2011 and 2017, the exchanges of judges and prosecutors between courts and prosecution offices of other EU countries increased by 190%. EU financial support for judicial training almost doubled, amounting to more than €150 million over the whole period. The strategy contributed to raising knowledge of EU law while reinforcing mutual trust between legal practitioners. The evaluation includes a stock-taking of the objectives achieved and will be the basis for designing a post-2020 strategy for European judicial training.

Diversity of judicial training

However, it must be clearly noted that training of legal practitioners should be delivered at many different levels and in many different areas.

Member States bear the main responsibility for the quality and scale of such training. However, national training opportunities are complemented by those organised at the EU level, and (co)financed by the EU.

Judicial training providers at European level are well placed to provide training to participants of different nationalities. The main EU-level judicial training provider is the EJTN. The Academy of European Law (ERA) should be mentioned as well, and it also receives financial support from the Commission. Other European training bodies involved in training legal practitioners include the European Centre for Judges and Lawyers of the European Institute of Public Administration (EIPA), and the European University Institute of Firenze (EUI). These also receive financial support from the Commission. The legal practitioners' networks and associations, like the Inter-

66. Relevant legislation has been set up in the EU over the last years, for example: EU rules on safeguards for child suspects (Directive (EU) 2016/800 on procedural safeguards for children who are suspects or accused in criminal proceedings, OJ L 132/1, 21.5.2016), on child victims (Directive 2012/29/EU establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, OJ L 315/57, 14.11.2012), on combating sexual abuse and exploitation of children and child pornography (DIRECTIVE 2011/92/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, OJ L 335/1, 17.12.2011); in the area of cross-border family law, the Brussels IIa Regulation (Regulation 2201/2003, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R2201. The Regulation has been revised, the Brussels IIa recast Regulation (Regulation (EU) 2019/1111) on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, and on international child abduction and will apply from 1 August 2022), which regulates issues jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility.

67. Communication from The Commission, EU Law: Better Results through Better Application Brussels, 21.12.2016, C(2016) 8600 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN

68. PARIS DECLARATION, 30 May 2018,

69. International Organisation of Judicial Training, Commentary to principle number 8 of Declaration on Judicial Training Principles, 2017/11/08, Rec 1, http://www.iojt.org/~/media/Microsites/Files/IOJT/Microsite/2017-Principles.ashx.

70. The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002/11/25-26, p.5.1., https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf.

71. European Commission Communication COM(2011) 551 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0551.

72. European Commission, Directorate-General Justice and Consumers, 2019 report on European judicial training, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019_judicial_training_report.final_.web_.pdf.

73. The European e-Justice Portal is available in all EU languages (except Gaelic), https://e-justice.europa.eu/content_rights_of_the_child-257-en.do

74. For a reference of the projects funded under the the Rights, Equality and Citizenship programme, a summary of EU-funded projects (REC-programme) on rights of the child and violence against children 2013-2019 is compiled here: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20190401_compilation.pdf

75. Conference report: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/chfj_report_dgt_final.pdf
And other background documents: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/child-friendly-justice_en

76. https://www.childrenatrisk.eu/promise

77. https://webgate.ec.europa.eu/protecting-children-in-migration/cim/good-practices-search

78. European Commission, Staff Working Document on the Evaluation of the 2011-2020 European judicial training strategy, SWD(2019) 380 final, https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/training-legal-practitioners-and-training-practices_en.

79. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019_judicial_training_report.final_.web_.pdf

national Association of Youth and Family Judges and Magistrates (IAYFJM), could also play a pivotal role in the development of the competences of their members.

Judicial training on children rights

The rights of the child is one of the numerous topics addressed by training activities delivered with the support of the Commission. The focus of those activities reflects the priorities of the EU concerning this subject matter well. Children's rights are examined at the training sessions for judges and other justice professionals either as a specific training topic for specialised trainings, or mainstreamed into other courses, both from the point of view of human rights and from the point of view of procedural criminal rights. Other training have the objective to raise-awareness and practically learn how to apply the EU instruments relating to child-friendly justice. Nevertheless, the majority of the training does and should take place at national level.

There is no doubt that more can and should be done in this area. Within the scope of European legal practitioners' training content, the objectives and methodological approach of training on children's rights require special attention. This triggers numerous questions. What should be the role of training in preparing justice systems to protect the rights of a child effectively and efficiently? How to prepare practitioners to deal with children in their professional duties?

Content of training on children rights

Training activities for legal practitioners should address primarily - but not exclusively - the areas of:

- making justice systems child-friendly environment (for magistrates but also court staff and prosecution offices' staff and lawyers);
- ensuring treatment of children in a manner appropriate to their age, maturity and level of understanding, taking into account their special needs;
- communication with children in the courtroom;
- children's rights in criminal justice systems, including the right of access to a lawyer and assistance by a lawyer;
- matters involving child victims and witnesses;
- diversion and alternatives to children detention;
- safeguards for children deprived of liberty;
- trafficking of children;
- family law;
- unaccompanied children in migration.

Modern legal practitioners' training is more than legal training alone. Such training must be multidisciplinary and practical, essentially intended for the transmission of professional techniques and values complementary to a legal education. Social context training is an important facet of judicial training, providing an appreciation of the human condition and the society within which judges and other legal professionals operate.

On the right to be heard, as well on other areas of how to make the justice systems child-friendly, the EU Fundamental Rights Agency has produced several reports and materials[80] that reflect such approach.

Judgecraft

In any judicial training activity, the learning objectives should include understanding the common conditions which may affect the ability of an individual to understand the court process, or to communicate effectively with the legal practitioners involved. There is a need to train on adapting practitioners' behaviour, language and approach according to the needs of children who are party to a proceeding, either as victims, suspects or witnesses. This requires developing and continually improving good communication styles and techniques. These issues are part and parcel of a broader concept - judgecraft. Judgecraft is becoming a more and more requested and offered subject of judicial training. Judgecraft covers topics such as judicial conduct and ethics, judicial resilience, unconscious bias and the practicing of skills in the courtroom. Such training is necessary since practitioners enter the judiciary with their own values, opinions, preconceptions and prejudices. Training should instil a degree of open-mindedness and readiness to acknowledge and address one's own preconceptions and prejudices to ensure that these do not taint the judicial process.

Training methods

When it comes to the training of judges in the context of creating child-friendly justice practices, the design, content and delivery of judicial training are exclusively for judicial authorities to determine, in accordance with the principle of judicial independence. However, judge-led training does not preclude the involvement of experts, academics, and other specialists who can enhance and supplement training, especially in such a sensitive area as children's rights.

At the same time, cross-professional training should play an important role in training on the rights of the child, as uniform care and sensitivity is expected from all legal practitioners involved in proceedings involving children.

What should be the exact format of such training activities in the area of children rights? Judicial training must employ a range of methodologies, making use of a variety of up-to-date training formats, with a tailor-made approach. This implies selecting a format that meets the needs of the participants, and having an established set of learning outcomes.

Conclusions

Legal practitioners need reinforcement of their capacity to protect the rights of children, and judicial training should be seen as a crucial tool to answer to this need. The Commission will continue supporting European judicial training actions, and training of legal practitioners will remain high on the priority list. It is expected that the new Commission strategy for training of legal practitioners should be published in 2020. In the near future the Commission will also adopt a comprehensive strategy on the rights of the child, which will include actions to further promote child-friendly justice in the EU.

80. https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-childrens-view

4.2. SURVEY ON SPECIALIZED TRAINING ON CHILD AND YOUTH RIGHTS – PRELIMINARY OUTCOMES

By Eduardo Rezende Melo[81]

In the 2019 July Edition of the Chronicle, we have proposed an international survey on the specialization of Judges and Magistrates presiding Family or Youth Courts.

We are still stimulating members to answer the survey, but we may share in this edition partial results from seven countries in Europe and two in South America. The USA, in spite of not having answered the survey, send some studies on Judicial training. From France we have the information provided by the National School for Magistrates.

THE SURVEY

The survey is structured in five parts, with specific questions in each of them:

• evaluation of knowledge on children rights to become a Judge or a Magistrate

• initial training after entering the Judiciary

• specific training to become a specialized Judge/Magistrate in a Family or Youth Court

• supervision or monitoring of the Judge/Magistrate activities

• official support provided for those professionals by their institutions

EUROPE

Seven countries in Europe have answered our survey: Belgium[82], Croatia[83], Italy[84], The Netherlands[85], Poland[86], Republic of North Macedonia[87] and Switzerland[88]. Although France hasn´t answered, we are using information provided by the National School for Magistrates some years ago.

We are going to highlight the main outcomes of the answers regarding each area of analysis.

a) evaluation of knowledge on children rights to become a Judge or a Magistrate

In Switzerland, the population elect the Judges, therefore it is considered that no previous specialization is needed.

In the Republic of North Macedonia, during the initial training at the Academy for Judges and Public Prosecutors the future judges receive both theoretical and practical instruction regarding justice for children. They also have questions on this subject when they are examined.

In Italy, Youth Court (Tribunale Per i Minorenni) is composed by Professional and Honorary Judges working together in all criminal, civil, adoption and administrative matters. The structure of the Court is of two Professional and two Honorary Judges– one man and one woman -, except in two cases: in criminal procedure in the Preliminary investigation, the only phase in which decisions are monocratic and, therefore, taken by only one Professional Judge; and the Preliminary Hearing where the decisions are taken by three judges – one Professional and two Honorary.

Professional Judges are selected by public competition based on examinations (three written and ten oral, each of them on one different subject).

Honorary Judges are selected by Public Competition based on the knowledge and experience background dealing with children and family issues. Although Professional Judges are not tested on their knowledge about children rights, their previous experience on children and family issues are taken into consideration in the selection.

In France, to become a Judge, professionals go through a 31 months of initial training, which include an internship in a legal office for 6 months; 8 months of theoretical courses (half a day per week is focused on children rights) and 12 months in a judicial internship (5 weeks in a Youth Court). The training is interdisciplinary, it also focus on communication skills and provide opportunity for a first contact with the main institutional partners of a youth judge.

In Belgium, Croatia, in the Netherlands and in Poland no specific knowledge on children rights is tested for those pretending to become a Judge.

b) initial training after entering the Judiciary

In the Republic of Macedonia, according to the Law on Justice for Children, the judge for children, the public prosecutor, attorneys and professionals from the Ministry of Interior should have a specialized training on justice for children, either in Macedonia or abroad. In the practice, however, this doesn´t happen, either because of an insufficient number of trainings in the country or due to a lack of financial support for attending trainings abroad.

In Italy, training Courses are organized by the SSM – Superior School of Magistrates, that are strongly recommended but not mandatory

In Belgium and in the Netherlands, a specialized training program is mandatory. The focus of the Belgium training program is broad, including:

• procedural and substantive juvenile law;

• procedural and substantive family law;

• international treaties;

• the function of the youth magistrate and family magistrate (judge, the court, and prosecutor);

• introduction to child psychology;

• introduction to mediation;

• introduction to social institutes related to childhood;

• introduction to the work of social workers;

• introduction to methodologies to hear a child…

In the Netherlands there is also a 5 day mandatory training program.

81. Eduardo Rezende Melo is Judge in Brazil since 1991, he coordinates the training on children rights in São Paulo State School of Magistrates, he has a PhD in Law (University of São Paulo) and he is the Chronicle´s Editor in Chief

82. Information provided by Isabelle Soenen

83. Information provided by Lana Peto Kujundzic

84. Information provided by Joseph Moyersoen

85. Information provided by Margreeth Dam

86. Information provided by Magdalena Arzcweska

87. Information provided by Aleksandra Deanoska

88. Information provided by Anne-Catherine Hatt

In France, after passing the exams, those professionals who choose to become a youth judge, will have to make a complementary 6 weeks of training at the National School for Magistrates, with a more deepened approach, including cultural diversities of immigrants and the specificities of situations that a child may be involved. They also visit a juvenile detention facility.

In Croatia there is an initial 6 hours training, but it is not interdisciplinary.

However, there is no specific training program after entering the Judiciary in Poland and Switzerland

c) specific training to become a specialized Judge/Magistrate in a Family or Youth Court

In the Netherlands, there is a complementary training program to become a Judge in a specialized Court.

The same occurs in Belgium.

In Italy there is no specific training in this situation, but, for Professional Judges, some Youth Court organize a short period of coaching. For Honorary Judges, some Youth Courts, organize a short period of coaching and/or a specific training course (for example in Milan)

In France, if a professional wants to swift functions and work in a specialized court, it is mandatory a 5 week training, divided in 2 weeks of theoretical studies and 3 weeks of practical studies in an internship. A 5 day training per year in mandatory to all Judges, who are invited to submit their requests to the School for Magistrates, which may be both theoretical or an internship in another institution.

In the Republic of North Macedonia, Croatia, Poland and in Switzerland there is no specific training to become a specialized Judge.

d) supervision or monitoring of the Judge/Magistrate activities

In the Republic of North Macedonia, the General System of evaluation of the Judges in the country applies to all judges and the assessment is conducted by the Judicial Council

In Italy, Professional Judges do have to prepare a periodical self-made report and Honorary Judges have to be selected every three years in a Public Competition.

In Belgium there is no monitoring, but family and juvenile judges have a special mandate that has to be renewed after some years, so, indirectly, the quality of their work can have, theoretically, an influence on the renewal.

In France several activities are offered, including a monitoring activity by a psychologist in 4 annual meetings.

No monitoring exist in the Netherlands, in Croatia, Poland and in Switzerland.

e) official support provided for those professionals by their institutions

In the Republic of North Macedonia, there are legal associates, as social workers and psychologists, providing professional help for the Judge.

In Belgium there are also legal assistants and criminologists in support to the Judges, although not sufficiently provided

In the Netherlands, there are support lawyers who provide service orientation, In Croatia there are courses provided by the Judicial Academy and social workers and pedagogues provide service orientation to the Judges

There is no support for Judges in Italy, Switzerland and Poland.

SOUTH AMERICA

Two countries have answered the survey in South America, Argentina and Brazil. Both countries are a federation, with singularities in each Province/State, that make it difficult to present a single picture of the country. We will expose its general trends, also because not all Provinces/States have answered the survey.

a) evaluation of knowledge on children rights to become a Judge or a Magistrate

In all answers, both in Argentina and in Brazil, it is stated that all professionals who want to become a Judge or a Magistrate are examined in public competition and part of the questions focus on children rights.

b) initial training after entering the Judiciary

In Argentina, there is a variety of situations regarding this aspect. In some Provincess there is a preparatory training for those professionals approved in the public examinations to become a Judge/Magistrate before they begin to work, but the majority of the answers reveal that this is not the reality in most of the country.

In Brazil it is mandatory a 480 hours initial training for all professionals approved in the public examination and part of it is focused on children rights, normally a two day training.

c) specific training to become a specialized Judge/Magistrate in a Family or Youth Court

In Argentina, with the exception of the City of Buenos Aires, there is no specific training for Judges before they begin to work in a specialized court.

In Brazil, Judges have to participate in training programs for promotion to higher levels of the judicial career (40 hours per year), and, when promoted to a specialized court, they have to participate in specific courses related to the subject of their court. Regular courses are offered regarding children´s rights.

d) supervision or monitoring of the Judge/Magistrate activities

There is no supervision or monitoring in Argentina.

In Brazil, there´s a quantitative analysis of the activities, with a monthly report made by the Judges, and checked with the data of files in the Courts. There is no qualitative monitoring/supervision.

e) official support provided for those professionals by their institutions

No support programs have been informed in Argentina.

In Brazil, however, there is a support service in each State (Childhood and Youth Coordination), who provides orientation, both in legal issues and in interdisciplinary issues (to the Judges and to the professionals who work with the Judges), doctrine or jurisprudence investigation, support to interinstitutional projects or to projects developed in each Court, besides optional training courses.

NORTH AMERICA

In the US, Linda A. Szymanskl made a research on specific training provided for Judges working in Youth Courts. She highlighted that in Connecticut there are "specific training on issues of cultural competency and strategies to address

disproportionate minority confinement". In Washington, as well, "the Administrator for the Courts, under the supervision of the Chief Justice, is required by law to develop a curriculum for a general understanding of ethnic and cultural diversity and its implications for working with youth of color and their families".[89]

THE SURVEY IS STILL OPEN FOR YOUR CONTRIBUTION

These are preliminary outcomes of our survey. There are more information to be shared from these countries and we are still waiting for the contributions of our members in more than 60 countries. The specificities of each country may highlight important issues to be addressed in this area and your collaboration is of great help.

To participate, please complete the questionnaire in this link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZhLXhJP4WJvS7EcZuoY-sO9d3mX6838mkbipta8RaRPBAmVA/viewform

5. ASSOCIATIVE EXPERIENCE AND ITS IMPACT ON HOW JUDGES AND MAGISTRATES GRANT CHILDREN´S RIGHTS

5.1. BECOMING STRONGER AND MOVING FORWARD TOGETHER: THE ROLE OF JUDICIAL ASSOCIATIONS IN THE MODERN ERA[90]

By John Lowndes[91]

Introduction

Any democratic society that respects the principle of judicial independence and values the rule of law needs judicial associations to protect the independence of the judiciary as the third branch of government and to preserve the rule of law as the other cornerstone of democracy.

The judiciary has traditionally been regarded as the weakest[92] and most vulnerable branch of government—and yet it is expected to be the guardian and guarantor of judicial independence and the rule of law. However, the independence it seeks to sustain and protect (in the interests of preserving the rule of law) is always at risk due to the very weakness and vulnerability of the judiciary within the structure of government. Judicial associations serve the function of addressing the power imbalance between the judiciary and the other two more powerful arms of government with a view to making the judiciary an equal branch of government. They achieve this by bringing the judiciary together and augmenting the power and influence of the judiciary as the third branch of government—a simple and pure case of "becoming stronger together".

As the active and public voice of the judicial branch of government, judicial associations play a vital role in strengthening and defending the independence of the judiciary and preserving the rule of law in a modern democracy.

Judicial Associations as Legitimate Entities

Judicial associations are an internationally recognised phenomenon that have a legitimate existence in modern society.

Among others, principle 9 of the United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary states:

Judges shall be free to form and join associations of judges or other organisations to represent their interests, to promote their professional training and to protect their independence.

The Need for Judicial Associations

Given the judiciary's lack of power and vulnerability within the structure of government there are very few protective mechanisms to protect its independence.

The primary protective mechanisms are the Latimer House Principles and the doctrine of the separation of powers. These Principles encourage mutual respect between the three branches of government in relation to the fulfilment of "their respective but critical roles in the promotion of the rule of law in a complementary and constructive manner" (Principle 11)(b))— as well as acknowledging that "each Commonwealth country's Parliaments, Executives and Judiciaries are the guarantors in their respective spheres of the rule of law" (Principle 1) and that "an independent, impartial, honest and competent judiciary is integral to upholding the rule of law, engendering public confidence and dispensing justice" (Principle 1V).

However, because this doctrine is not always constitutionally entrenched or legislated, and only operates by way of the common law or convention, it remains "an incomplete and fragile mechanism for ensuring judicial independence".[93] As noted by Diana Woodhouse, where the doctrine of the separation of powers is based on "understandings, convention and guidance," its efficacy depends on "a commonality of purpose and shared values across various political, institutional and judicial cultures".[94] However, "developments in government—such as the emphasis on public management and efficiency, changes in the role and focus of the judiciary making it more outward looking, and increased public expectations coupled with a decline in public trust—mean that the relationships

89. Szymanski, L. (2012) Must Judges and Other Court Personnel Receive Special Training with Respect to Preventing and Controlling Juvenile Crime? NCJJ Snapshot, 17(4). Pittsburgh, PA: National Center for Juvenile Justice.

90. This paper is an abridged version of the paper published in Volume 24 No 1 June 2019 Commonwealth Judicial Journal which was based on a paper presented at the CMJA's 18th Triennial Conference in Brisbane, Australia in September 2018 and is reproduced with the kind permission of the CMJA.

91. Dr John Lowndes is the former Chief Judge of the Local Court of the Northern Territory and Immediate Past President of the CMJA.

92. Alexander Hamilton. The Federalist Papers, No. 78

93. John Lowndes "Judicial Independence and Judicial Accountability at the Coalface of the Australian Judiciary", a paper delivered at the Northern Territory Bar Association in Dili, East Timor July 2016, p. 24

94. "United Kingdom, The Constitutional Reform Act 2005 – Defending Judicial Independence the English Way" (2007) 5 IJCL 153 at 158)

that have promoted a sharing of values are changing" and "commonality of purpose can no longer be assumed" (Woodhouse at 158).

Notwithstanding the fundamental importance of the Latimer House Principles and the doctrine of the separation of powers as institutional safeguards of judicial independence they are fragile mechanisms that are liable to shatter in an instant—even in a modern and stable democracy.

Traditional thinking maintains that the judiciary and the public should look to the Attorney- General (in Australia) or to the Lord Chancellor (the equivalent office in the UK) to defend the courts and the judiciary from threats to judicial independence and unjustified and irresponsible criticism.[95] However, over the past three decades the role of the Attorney General and the Lord Chancellor as a defender of the judiciary has progressively diminished, and become minimised such that the judicial branch of government can no longer look to neither an Attorney-General nor a Lord Chancellor to protect the independence of the judiciary.[96]

The historical reasons for the emergence of judicial organisations were the perception that the independence of the judiciary was not guaranteed because of:

a lack of independence per se;
the fragility of the principle of judicial independence; or
the absence of strong institutional safeguards of judicial independence.

In a foundational paper,[97] Justice McGarvie argued that the judicial branch of government needed to organise and assert itself "in the manner necessary for the preservation of judicial independence in the modern democratic world"; and to display "a commitment to doing what is necessary to meet the challenges to judicial independence" (see Brief History, pp. 2-3).

As former Chief Justice Gleeson of the High Court of Australia acknowledged, "from time to time it will be necessary for Chief Justices to respond to criticism of judgments or judges when response is necessary and the Attorney General does not respond"[98] or even to issues extending to the judiciary as whole. Issues of this type may require an institutional response through a national judicial association.

As was observed by the Hon. David Malcolm AC KCSJ, "independence of the judiciary and the legal profession is recognised internationally as a core element of any civilised society", and "the independence of the judiciary and the independence of the legal profession is for the protection of the people, and is the backbone of a free and democratic society".[99] As enunciated in the Latimer House Guidelines "an independent, organised legal profession is an essential component in the protection of the rule of law" (Guideline V111).

The Role of Judicial Associations
It is obvious from the preceding discussion that the primary role of judicial associations is to strengthen and defend the independence of the judiciary and to preserve the rule of law.

However, the role of judicial associations is not confined to a "front-line" defence of judicial independence and the rule of law.

The recent Brisbane Declaration on the Independence and Integrity of Judicial Officers of the Lower Courts states, amongst other things:

Consistent with their fundamental rights, all members of the judiciary shall be free to form and join associations or other organisations to:

a) ensure the maintenance of a strong and independent judiciary within a democratic society that adheres to the rule of law;

b) promote and encourage continuing legal, judicial and cross cultural study and learning by members of the judiciary;

c) promote and encourage the exchange of legal (or judicial) educational practical or professional information on best practice between members of the judiciary and other persons or bodies including wherever possible by attendance at relevant conferences within or without the jurisdiction for which appropriate funding should be made available for attendances by judicial officers from the lower courts;

d) promote a better understanding and appreciation of the proper role of the judiciary in the administration of justice and the importance of a strong and independent judiciary in protecting the fundamental human rights and entrenching good governance and to do likewise within the Executive and Legislative branches of government;

e) seek improvements in the administration of justice and the accessibility of the judicial system;

f) undertake supporting research that will further the achievement of these aims.

Therefore, judicial associations can perform a legitimate role in commenting on, or making submissions concerning, proposed legislative and executive action in the interests of pre-emptively protecting judicial independence, the rule of law and the administration of justice in a democratic society.

The CMJA[100] has established a set of guidelines for dealing with requests from member governments, through their Ministries of Justice or equivalent, the Commonwealth Secretariat and Member Associations/Chief Justices (as well as individual judicial officers) to respond to consultations on constitutional or legislative reforms: see "The CMJA Procedures for Dealing with Judicial Independence Issues".

The JCA[101] has also developed a set of guidelines concerning the circumstances in which it would be appropriate for it to make comment or submissions concerning proposed legislative changes[102], suggesting that "in the main, the public statements of the JCA [in relation to proposed legislation] will be confined/directed to: (a) matters affecting the independence of the judiciary; (b) matters affecting the operation of courts; (c) the maintenance, promotion and improvement of the judicial system; and (d) matters likely to affect some aspect of the administration of justice".

As a general rule, the JCA will make "public statements on matters of that kind only if they bear directly on the central functions of the judiciary".

However, in making such public statements, any judicial association—as much as the judiciary itself—must operate within the framework of the Latimer House Principles and its theoretical underpinning, the doctrine of the separation of powers. Both require the three branches of government to mutually respect each other's function in a democratic society. In making such public pronouncements a judicial association must be careful not to breach the doctrine of the separation of powers nor in any way appear to undermine the principle of parliamentary sovereignty.

Another role of the judicial associations

95. see The Hon L King "The Attorney General, Politics and the Judiciary" (2000) 72 ALJ 444 at 453; Sir Anthony Mason "No Place in a Modern Democracy for a Supine Judiciary" 1997, 35(11) Law Society Journal 51; Woodhouse at 154

96. see King at 453; former Australian Attorney-General Daryl Williams, "Judicial Independence" (1998) 36(3) Law Society Journal 50-51) and "Who Speaks for the Courts," in "Courts in a Representative Democracy"—A Collection of Papers from a National Conference presented by the AIJA, the Law Council of Australia and the Constitutional Centenary Foundation, November 1994, 182 at 192; Justice Robert Beech Jones "The Dogs Bark but the Caravan Rolls On: Extra-Judicial Responses to Criticism," an address presented to the South Australian Magistrates Conference May 2017, p. 15; A Brief History of the Early Days of the Judicial Conference of Australia, Secretariat of the Judicial Conference of Australia at 17; Woodhouse at 154-156).

97. "The Ways Available to the Judicial Arm of Government to Preserve Judicial Independence" JJA (1992) 1 at 236 at 243,

98. Justice Margaret McMurdo, "Should Judges Speak Out or Shut Up", an address based in part on a paper delivered at the 5th JCA Colloquium, April 2000, p. 6 citing I. Henderson, "Gleeson Vows to Defend Judges" The Australian, 25 June 2001

99. "Independence of the Legal Profession and Judiciary", Church Service, May 2005, pp. 3 and 4

100. Commonwealth Magistrates' and Judges' Association

101. Judicial Conference of Australia

102. see "Public Pronouncements about Proposed Legislation: Guidelines". These guidelines are designed to "inform the Governing Council or the Executive of the JCA in speaking on behalf of the judiciary".

relates to the desirability of "institutional communication to explain the workings of judges and the courts"[103]. Indeed, such institutional communication is an absolute necessity as the judiciary is under an ethical obligation to engage in civic education.[104] There is no better vehicle for institutional communication of this type than judicial associations.

As pointed out by Lowndes, the judiciary has indeed a "societal obligation to engage the community in the manner suggested by Bookman because as an important social institution the judiciary needs to impart information to the public concerning its role, functions and activities in order to sustain its legitimacy—which is derived from the community it serves—and to maintain public confidence in it as a branch of government"[105] Judicial associations provide a means by which the judiciary as an institution can meet this fundamental obligation.

Finally, but not least, a judicial association must be concerned with providing "training and continuing professional development for the judiciary"—which is "essential to ensuring high ethical standards and competent judges"[106] Unethical and incompetent judicial officers are the arch enemies of judicial independence and impartiality. Continuing judicial education strengthens the independence of the judiciary and the rule of law.

The Functioning of Judicial Associations and Moving Forward Together

To be effective, a judicial association needs to be a well-organised, well-oiled and finely tuned machine.

It is essential that a judicial association have in place appropriate policies and procedures for its roles.

Judicial associations enable the judiciary to "become stronger together" and to assert itself as an equal branch of government. But what about the future? How does the judiciary move forward as a separate, but equal branch of government?

The structure and membership of judicial associations is critical to, and dictates, the degree of institutional unity engendered by a judicial association. The greater the institutional unity (or judicial solidarity) that a judicial association creates, the more likely it is to be effective.

Such associations are more conducive to creating the institutional unity that is needed to enable the judiciary to stand firmer against executive and legislative action that challenges the independence of the judiciary and the rule of law

Finally, but not least, such networking enables judicial associations to learn from each other as to the most effective ways to defend and strengthen the independence of the judiciary and preserve the rule of law in an ever- changing world that presents new challenges.

5.2.BECOMING STRONGER AND MOVING FORWARD TOGETHER: THE ROLE OF JUDICIAL ASSOCIATIONS IN THE MODERN ERA

By Magdalena Arczewska[107]

Family courts were created in Poland as part of the organisational changes introduced by the Ministry of Justice in the late 1970s. Family judges make a special professional group. They have a strong sense of belonging to the community they represent. Because of the issues they need to deal with in their everyday work, they have a sense of a mission and vocation.

Pursuant to the Law on Associations, the Association of Family Judges in Poland, just like any other legal person representing this group of non-governmental organisations, is a voluntary, permanent and self-governing non-profit association which independently determines its aims, programme of activity as well as organisational structure and adopts internal acts regulating its activity, which is based on voluntary work performed by its members. At present, the Association has over 240 members – which means that every 4th family judge in Poland is a member of the organisation. Any judge, including retired judges, may be an ordinary member of the organisation. Extraordinary members are, in particular, researchers dealing with family issues or, e.g., court-appointed family guardians.

The highest authorities of the association are the General Assembly, the Board, the Review Panel and the Arbitration Panel. The term of office lasts four years for all these bodies, which are elected in an open or secret ballot, depending on the resolution of the General Assembly. The work of the Association is managed by the Board, which is currently composed of 12 persons.

Already existing in Poland during the interwar period, the Association of Family Judges was reactivated in 1987 owing to the involvement of Justice Józef Musił, a Deputy Justice Minister then and a retired Supreme Court judge now. In 1987, Gerard Bajger, the President of the Regional Court in Bielsko-Biała, became President of the Association. From the very start, the Association was supported by Henryka Veillard-Cybulska, a youth judge who established the Veillard-Cybulski Foundation in 1988 and donated the amount of CHF 50 thousand for the implementation of its statutory aims. The next president was Barbara Skoczyńska-Soroko, a judge of the Regional Court in Warsaw. For many years, the organisation was presided over by Justice Ewa Waszkiewicz (since 1988), a judge of the Regional Court in Warsaw. In 2015 Justice Dorota Hildebrand-Mrowiec, an

103. see Justice McMurdo "Should Judges Speak Out" at 10

104. John Lowndes " Judicial Accountability as an Evolving and Fluid Concept" Vol 23 No 3 June 2018 Commonwealth Judicial Journal.

105. John Lowndes " Judicial Accountability as an Evolving and Fluid Concept" Vol 23 No 3 June 2018 Commonwealth Judicial Journal.

106. Horizon Institute, "Judges Associations", p. 3; Principle 9, United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary.

107. Magdalena Arczewska is a sociologist and lawyer with a PhD in social sciences. She works as an assistant professor at the Institute of Applied Social Sciences of Warsaw University. Ms Arczewska's research interests focus on social policy and collaboration between public administration and NGOs at the national and local government level. She is Member of the Board of the Association of Family Judges in Poland.

energetic person full of charisma and a true family judge by vocation, became President.

The Association is one of the founding members of the International Association of Youth and Family Judges and Magistrates. In 2013, it changed its name to the Association of Family Judges in Poland due to the organisational reform of the Polish justice system (obligatory family divisions in district courts were closed down and their creation became optional). It should be mentioned that the cases adjudicated by family judges in Poland are extremely diverse. They fall under the categories of family and guardianship law, the demoralisation and punishable acts of minors, the treatment of substance abusers and many other laws.

Pursuant to its statute, the aim of the Association is to reinforce the independence and impartiality of family judges as well as the recognition of their authority, to support and strengthen the family, to enhance the knowledge and competencies of judges and professionals collaborating with family courts. The Association also initiates and manages the exchange of information on such issues as combating juvenile delinquency, the protection of the family, the support and development of mediation, public opinion formation, advocacy for the community of judges and its integration, collaboration in the legislative process with the executive branch and other bodies within the family justice system. The Association implements its aims by undertaking tasks advancing the protection of the family and the best interests of the child, the prevention of punishable acts and the demoralisation of minors; educational activity; organisation of meetings, scientific conferences, exhibitions and readings; collaboration with other associations of a similar profile in Poland and abroad by promoting the achievements of the Polish family justice system, the preparation and exchange of information and materials on the subjects of interest for the Association, the organisation of congresses, seminars, national and international conferences, collaboration with the students of law, pedagogy and psychology as part of voluntary programmes and through its website (http://www.sssrwp.pl/index.php) and Facebook profile (observed by 2800 persons) as well as contacts with the media.

In 1999-2004 the Association published the quarterly "FamiliJant" addressed to the judges adjudicating on youth and family cases. The journal included information on the functioning of family courts in Poland as well as recent rulings. "FamiliJant" also served as a platform for a discussion and opinion exchange. The editor-in-chief was judge Eleonowa Porębiak-Tymecka.

Representatives of the Association participate in the work of the International Association of Youth and Family Judges and Magistrates (IAFJM) and the European section of IAFJM. Justice Katarzyna Kościów-Kowalczyk is a member of the Board of IAFJM while Magdalena Arczewska, PhD, takes part in the work of the General Committee of IAFJM on behalf of the Association. They represented the Association at the most recent meeting of the section which took place in October 2018. The Association gathers judges who are active members of society whose civic engagement is recognised and praised. Two members of the Board, Justice Katarzyna Kościów-Kowalczyk in 2016 and Dorota Hildebrand-Mrowiec in 2018, were awarded the titles of the Civic Justice of the Year in the survey organised by Court Watch Poland. The idea of the survey was invented in order to recognise judges for their civic engagement. The prize has been presented since 2015 to those judges whose engagement surpasses adjudication and involves efforts undertaken outside the court room in order to bridge the divide between the courts and society. Justice Dorota Trautman, Deputy President of the Association, and Professor Henryk Haak, a member of the Association, have been recognised by the Ombudsman for Children with Honorary Medals of Merit for the Protection of Children's Rights. The Association of Family Judges in Poland is involved in the activities aiming to promote outstanding judges. It has already organised six editions of the competition for family judges which involves an essay on such subjects as family law, family matters or professional experiences. The aim of the competition is to promote the judges whose commitment and activity are superior and who, at the same time, demonstrate a sense of service working for the benefit of the child and the family. The competition also seeks to promote the judges who note and attempt to tackle legal, social and cultural issues important for the family and the child and are ready to share their experiences, reflections and doubts with others. The essays submitted for the competition are evaluated by representatives of the academia and judges. The winning authors receive financial awards as well as books and commemorative diplomas. Some example competition topics include "The right of the child to be raised by both parents", "My vision of the family justice system", "The best interests of the child as reflected by the rulings of a family judge", "The work of a family judge – a craftsmanship or a vocation?". The latest edition of the competition was organised in 2018.

In 2016, the Association announced a competition for the best Master's thesis focusing on the family law issues, which attracted significant interest among graduate students.

Additionally, the Association undertakes efforts aimed at the integration and professional development of the community of family judges. The Congress of Family Judges, an educational and training initiative, gathered about 170 judges from across Poland at its 21st edition held in Zakopane this year. The motto of this year's Congress was "The crisis of the family in the 21st century". The goal of the conference was to give participants a greater insight into issues related to law, psychiatry and psychology, which is required to be able to examine family cases and, additionally, to achieve uniform adjudication standards. An important component of the training programme was the discussion of the amendments to the Code of Civil Proceedings and the Family and Guardianship Code. Out of numerous lectures, the one offered by Ewa Woydyłło-Osiatyńska, PhD, a psychologist and a therapist, who tried to answer the question why relationships broke down and until when there was a chance to save one, as well as the presentation about the crisis of the family delivered by Bogdan de Barbaro, an eminent psychiatrist from the Jagiellonian University, attracted the greatest interest among the audience. Professor Katarzyna Kłosińska, a linguist from the University of Warsaw and the President of the Polish Language Council, spoke about the importance of the Polish language in the work of a judge. It needs to be mentioned that the Congress has been attended by the Polish Ombudsman, the Ombudsman for Children, the First President of the Supreme Court and the President of the Civil Chamber of the Supreme Court. Information about consecutive editions of the Congress is reported by the media.

In 2018, the Association organised the conference "The best interests of the child as an issue of concern for society", which was held in Zamość. The goal of the conference was to inform judges

about the results of studies focused on the concept of the best interests of the child and discuss various issues arising over the course of guardianship suits. Moreover, the conference included workshops on the ways of hearing the child and the psychological aspects of behaviour in the court room.

The members of the Association also have an opportunity to be supervised by a psychologist. The Association collaborates with many institutions and organisations, including the Children's Foundation "Dajemy Dzieciam Siłę", associations of court-appointed guardians and self-governments of attorneys and legal advisors. Its representatives take part in national and international conferences on various subjects, e.g. "Foetal Alcohol Syndrome (FAS) – medical, psychological, educational, economic and legal challenges", "The collaboration between the guardianship court and welfare units as part of a family judge's work outside the court room" or "Good and harm as equally inclusive concepts. The legal protection of the child. Declarations and reality."

6. BOOK REVIEW

6.1. FUNDAMENTAL RIGHTS AND BEST INTERESTS OF THE CHILD IN TRANSNATIONAL FAMILIES

'Fundamental Rights and the Best Interest of the Child in Transnational Families' is a timely work on the implementation of the child's interests in the EU and covers the most relevant topics emerging from the rapid internationalisation of child and family law and from the increased mobility of families.
book | published | 1st edition

September 2019 | xxviii + 322 pp.

Families in Europe are increasingly shaped by the mobility of persons and multicultural backgrounds. This book is focusing on the protection of children in cross-border situations. What are the fundamental rights of children in transnational families, what is in their 'best interest', and how can their rights be safeguarded? There is much controversy on these rights and the accompanying uncertainty has resulted in considerable practical difficulties for those trying to implement them.

In order to provide a clearer scope and insights into the nature of children's fundamental rights and their best interests, this book examines solutions provided by both EU and international law to the questions raised by the increasing incidence of transnational families as regards the protection of minors. It covers both substantive and conflict-of-laws rules. Differences in the substantive family laws of Member States still prevent an effective protection of the child or its family unit. This includes cases of migration, asylum, forced marriage, kafalah, but also rainbow families. Further, the role of human rights (mutual recognition of status and surrogacy agreements, adoption) and procedural rights (child abduction, Brussels II bis recast) in cross-border cases must be considered carefully.

Fundamental Rights and the Best Interest of the Child in Transnational Families is a timely work on the implementation of the child's interests in the EU and covers the most relevant topics emerging from the rapid internationalisation of child and family law and from the increased mobility of families.

Dr Elisabetta Bergamini is Associate Professor of International Law at the University of Udine, Italy. She teaches in and writes on international law, EU law and private international law, with particular emphasis on family law. From 2014 to 2016, she coordinated a Jean Monnet Module on European Family Law co-financed by the EU Commission.

Dr Chiara Ragni is Associate Professor of International Law at the University of Milan, Italy, where she coordinated a Jean Monnet Module on European Family Law and Human Rights. Her main areas of expertise include private international family law, international criminal law and human rights law.

6.2. PLURALITY AND DIVERSITY OF FAMILY RELATIONS IN EUROPE

This volume contains the contributions delivered at CEFL's sixth international conference, which focused on comparative and international family law in Europe in their respective cultural contexts.
EDITOR(S):

Katharina Boele-Woelki, Dieter Martiny
SERIES:European Family Law VOLUME:

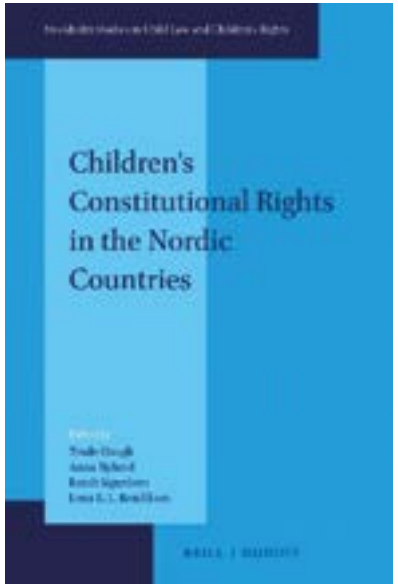
45
book | published | 1st edition August 2019 | xii + 388 pp.

This volume contains the contributions delivered at CEFL's sixth international conference, which focused on comparative and international family law in Europe in their respective cultural contexts. Inter alia in this book CEFL experts and other legal scholars address the CEFL and its Principles, the interrelation of family law and family sociology, family migration, children's and women's fundamental rights, as well as the developing concept of parenthood, the role of children in family proceedings, extra-judicial divorces and ADR in family matters.

While the development of modern trends in European family law is going on, some new challenges arise and old challenges remain. The awareness of more plurality and diversity in family relationships is increasing. Both pose problems. New legal solutions have to be integrated into the existing family law system. On the other hand, there are tensions between modern fundamental values and traditional religious solutions. For both a deeper analysis is necessary.

The conference, and in turn the book, aims to enhance the exchange of ideas and arguments on comparative and international family law in Europe.

6.3. CHILDREN'S CONSTITUTIONAL RIGHTS IN THE NORDIC COUNTRIES



https://brill.com/view/title/39188

December 2019
Hardback (approx. 450 pp.)
ISBN 9789004382800
E-ISBN 9789004382817
Price € 193 / US$ 232
Stockholm Studies in Child Law and Children's Rights, 5
Imprint: Brill | Nijhoff

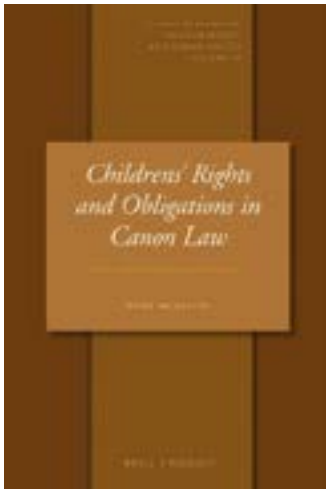
CHILDREN'S CONSTITUTIONAL RIGHTS IN THE NORDIC COUNTRIES

Edited by Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen and
Lena R. L. Bendiksen, University of Tromsø

The book presents a comparative study of children's constitutional rights in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. The authors discuss the value of enshrining children's rights in national Constitutions in addition to implementing the Convention of the Rights of the Child (CRC). Central issues are whether enshrining children's rights in a constitution improves implementation and enforcement of those rights by providing advocacy tools and by mandating courts, legislators, policy-makers and practitioners to take children's rights seriously. The study assesses whether the constitutions are in line with the child rights approach of the CRC both on a general level and in detail in three domains; the best interests of the child, participation rights, and the right to respect for family life.

READERSHIP: All interested in children's rights, human rights and constitutional law. Politicians, academic libraries, researchers, students, practitioners in law.

6.4. CHILDRENS' RIGHTS AND OBLIGATIONS IN CANON LAW



https://brill.com/view/title/55914

November 2019
Hardback (approx. 590 pp.)
ISBN 9789004411166
E-ISBN 9789004411173
Price € 160 / US$ 192
Studies in Religion, Secular Beliefs and Human Rights, 14
Imprint: Brill | Nijhoff

CHILDRENS' RIGHTS AND OBLIGATIONS IN CANON LAW
The Christening Contract

Mary McAleese

In the first study of its kind Mary McAleese subjects to comprehensive scrutiny the Roman Catholic Church's 1983 Code of Canon law as it applies to children. The Catholic Church is the world's largest non-governmental organisation involved in the provision of education and care services to children. It has over three hundred million child members world-wide the vast majority of whom became Church members when they were baptised as infants. Canon law sets out their rights and obligations as members. Children also have rights which are set out in the 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child to which the Holy See is State Party. The impact of the Convention on Canon Law is examined in detail and the analysis charts a distinct and worrying sea-change in the attitude of the Holy See to its obligations under the Convention since the clerical sex abuse scandals became a subject of discussion at the Committee on the Rights of the Child, which monitors implementation of the Convention.

READERSHIP: All interested in Catholic Church canon law and catechesis and anyone concerned with international children's rights law.

Winner of the Alfons Auer Ethics Award:

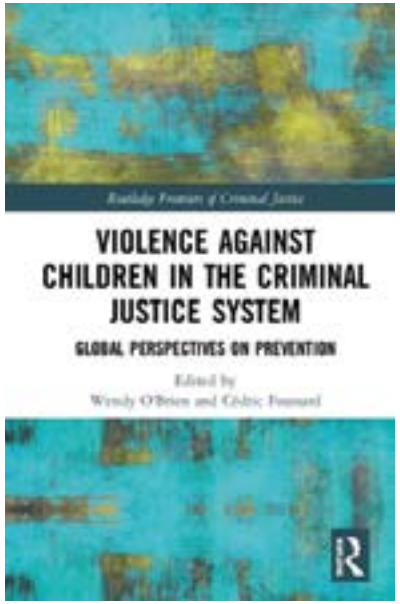
The former President of Ireland Mary McAleese has won one of the Catholic world's most prestigious prizes, the Alfons Auer Ethics Award, from Tübingen University in Germany for her doctoral thesis on "Children's Rights and Obligations in Canon Law"

https://www.catholicireland.net/mary-mcaleese-wins-europes-richest-theology-prize-study-canon-law/

6.5. VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Global Perspectives on Prevention, 1st Edition

Edited by Wendy O'Brien, Cédric Foussard

Routledge
246 pages |



Description

Children who come into conflict with the law are more likely to have experienced violence or adversity than their non-offending peers. Exacerbating the deleterious effects of this childhood trauma, children's contact with the criminal justice system poses undue risks of physical, sexual, and psychological violence. This book examines the specific forms of violence that children experience through their contact with the criminal justice system.

Comprising contributions from leading scholars and practitioners in children's rights and youth justice, this book profiles evidence-based prevention strategies and case studies from around the world. It illustrates the diversity of contexts in which various forms of violence against children unfold and advances knowledge about both the nature and extent of violence against children in criminal justice settings, and the specific situational factors that contribute to, or inhibit, the successful implementation of violence prevention strategies. It demonstrates that specialised child justice systems, in which children's rights are upheld, are crucial in preventing the violence inherent to conventional criminal justice regimes.

Written in a clear and accessible style, this book will be of interest to students and researchers engaged in studies of criminology and criminal justice, youth justice, victimology, crime prevention, and children's rights.

7. IAYFJM´S ACTIVITIES – NEWS FROM THE EXECUTIVE BOARD

7.1. Mexico – Congress of the National Juvenile Justice Network. September 2019

108

108. The conferences held by IAYFJM´s President, by the Chronicle´s Editor in Chief and Judge Agustina Cordero. Judge Sara Patricia Orea leading the meeting to organize the Mexican network and finally the whole group, representing different Mexican States.

On September 5 and 6, 2019, a congress of the National Network of Criminal Justice for Adolescents was held in Mexico City with the participation -, in addition to Mexican judges - of the president of the IAYFJM, Judge Marta Pascual, the editor-chief of the Chronicle , Judge Eduardo Rezende Melo and the Argentinian judge and member of the IAYFJM, Agustina Días Cordero. The Congress has been organized by the Mexican Judge Sara Patricia Orea, also member of IAYFJM.

President Marta Pascual gave a lecture on restorative justice, Judge Eduardo R Melo on the challenges of sentences´ effectiveness and Judge Agustina Dias on the right of participation.

IAYFJM also participated in the activities of constitution of the network of Youth Judges, explaining IAYFJM´s activities, offering support for organiza-

tion of their association and opening the doors for Institutional collaboration.

The President of IAYFJM has also met high representatives of Mexican Justice to organize a world congress in 2021 in collaboration with Terre des Hommes and Penal Reform International.

7.2. Study tour to São Paulo, Brazil – 4 to 6 November de 2019

109

We feature the fact-finding visit held in Sao Paulo, Brazil, and organized by the IAFMJ within a program that will be developed each semester in different countries.

Two Argentine judges Elbio Ramos and Gladys Viviana Krasuk as well as the English researcher based in the Netherlands, Kim Enrica Tsai participated in it.
The program started with a four-hour theoretical training. Originally, Eduardo Rezende Melo, editor of the Chronicle and judge in Brazil, made a presentation on the system of rights' guarantee for boys, girls and adolescents, the organization of the system of justice, the specialized system of child protection and the socio-educational caregiving system oriented to adolescents in conflict with the law. We counted on the participation Public Defender Giancarlo Vay who spoke about the action of the Public Defender Office on the defense of the rights of children, basically on juvenile justice and also in the field of protection. The prosecutor Elisa De Divitiis Camuzzo talked about the role of the Prosecutor's Office, especially regarding the defense of social rights as well as the wide field of proceedings with class actions. Finally, judge Egberto de Almeida Penido, who coordinates the enforcement of restorative justice projects, presented the fields of dissemination of this practice.

In the beginning, there was a concentration of activities in the field of juvenile justice. Then, we visited a center of professional training for adolescents in conflict with the law, at a reference service of the automobile industry. At court, they attended preliminary hearings that preceded the formal beginning of the legal process where a proposal of conflict solving by a restorative means was offered; there was an initial preliminary investigation with the interrogation of the adolescents and the assessment hearings or reassessment of individual caregiving plans, leading guides for the enforcement of socio-educational measures.

On the second day, we visited three centers of deprivation of liberty: a provisional one for a maximum term of 45 days, awaiting pre-trial procedures and sentence; one for those sentenced to imprisonment and one for parole subject to conditions for female adolescents.

In the afternoon we visited another court where we attended a reassessment hearing of a child deprived of liberty.

On Wednesday, the last day of the visit, there was a conversation with judges and other local professionals on the impressions and differences among the models where 180 people participated.
The visit continued in the afternoon at the protection camp when we visited multiple services with an approach towards children deprived of family co-existence. They do training of other services to develop albums for record logs with the history of those children who are under a detention service or with foster families, who offer these children sponsorship and foster family services.

At last, we attended abbreviated hearings that reassess plans of individual care for children on detention services and different public services (health, social assistance, housing, employment), also the judge, the prosecutor, and the defender to guarantee the rights of the children. The hearings were all related to refugee children from Haiti and other African countries.

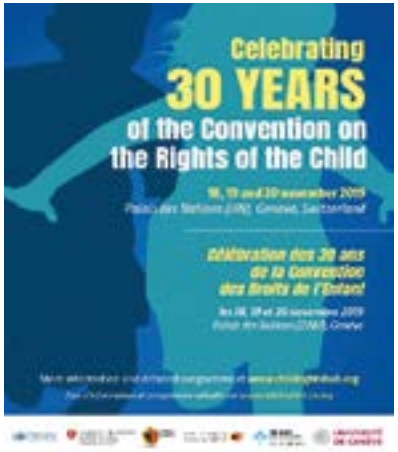
The fact-finding visit counted on the valuable support of the School of Magistrates of Sao Paulo (Escola Paulista da Magistratura), Brazil, that opened its doors for the initial training and communication with local judges as well as providing transport for visitors.

The next programmed visits will be in Cape Town, South Africa and London, England, in March and June 2020, respectively.

7.3. 30th anniversary of the CDC – Geneva, Switzerland.

By Andrea Santos Souza[107]

111



109. The theoretical training in São Paulo School for Magistrates, with the participation of IAYFJM´s Secretary General, Andrea Santos Souza; the visit to the industrial training center where juveniles learn automobile mechanics; the meeting in São Paulo School for Magistrates with local professionals. And the logo of the School for Magistrates, who granted all logistic support for the visit.

110. Andrea Santos Souza is IAYFJM´s Secretary General, she is District Attorney in São Paulo, Brazil and has Master degree in Advanced Studies on Children's Rights - IUKB and Law Faculty of the University or Fribourg- Switzerland;
And a Master degree in Philosophy (Ethics) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas - SP, Brazil

Last November the Convention on the

Rights of the Children (CRC), the most ratified treaty in the history of the United Nations, completed 30 years and the date was celebrated with events throughout the world.

To celebrate its anniversary, a most special International Conference was held at the UN Headquarters in Genebra, during the 18th and the 20th of November, the very date of the publication of the CRC.

Some members of the board of the IAYFJM attended this conference, such as the President, Marta Pascual, the Treasurer, Anne-Catherine Hatt and the Secretary General, Andréa Souza. Also present were the members Philip Jaffé, member of the Committee of the Rights of the Child and Jean Zermatten, former President of the Committee of the Rights of the Child.

The Conference was very rich for it provided the opportunity to discuss two major points, as explained by dr. Gerison Lansdown, child`s rights advocate, in her final remarks about the event:

• recognize all the practices that have taken place since the adoption of the CRC, and the transformation in so many laws, policies, programmes and in social norms and attitudes

• present the challenge of identifying the priorities based on this knowledge we gather from those experiences.

Over the past 30 years, the CRC has influenced the agendas of all the international mechanisms, local and national governments. But it is also true that there is still too much to be done if we want to achieve the goal of respecting, protecting and fulfilling the rights of every child.

The Conference had some major keynote addresses by experts on children's rights, members of the CRC Committee and the special participation of Mrs. Michele Bachelet, High Commissioner for Humans Rights.

It also had various workshops on different themes related to children's rights. We'll list here the most frequently discussed:

1) Participation – a right that was not recognized prior to the CRC and very much respected in this conference that had granted a large space for children from different parts of the world to present their thoughts, hopes and suggestions to States Parties and the adults that attended the conference.

There was a powerful demand from the young people, providing a framing for the adults:

• Children rights are of fundamental importance and children cannot exercise those rights without knowledge of them

• Rights can only be realised by listening to children

• Must reach out to all children

• Must act on what children say and guarantee mechanisms of enforcement

2) Access to justice - in relation to the criminal justice system, child protection, family proceedings and immigration.

Some challenges were presented such as many children with life imprisonment and death penalty sentences, deprived of liberty, placed in abusive and rights-violating systems, bureaucracy and rigidity of regulations for asylum seekers, lack of child friendly mechanisms within the justice systems.

On the good side, it was acknowledged that the new released revised General Comment of the CRC Committee on youth justice establishes a positive framework for justice systems; that there are many emerging practices, including particularly those based on restorative justice, and with a focus on reparation and healing, that can help us move towards enabling all children caught up in these systems to access real justice.

The President of the IAYFJM, Marta Pascual, participated, as panellist, of a round table of discussion about a justice system for and with children, and presented her experience as a judge in juvenile court in Buenos Aires.

3) Child protection – the conference discussed the evolution of this concept these past 30 years and how the CRC has enabled us to conceptualise the violence children around the world experience in their daily lives and the multiplicity of forms of violence and abuse they face.

Some key issues were raised:

• Necessity for a holistic approach to addressing violence for we cannot address protection without listening to children and children cannot speak out if they are not in safe spaces. Need to address the fears that if children challenge violence they will be subjected to further abuse. Also, cannot achieve the right to education without children being safe. Children's optimum development is profoundly impeded if they are exposed to violence

• Children in alternative care and placed in environments that do not guarantee effective protection. There's still the need for more investments on community-based services, support for the parents, for the care givers and continue to monitor to see if outcomes are improving

• The conference explored the relationship between children's rights, the family and the State. By recognising children's rights within the family, the CRC places explicit obligations on States to provide support to enable parents to fulfil their children's rights, while also placing boundaries on parental authority to prevent their potential abuse or violations of the child's rights.

• It was also discussed the issue of biotechnology and birth and the rights of donor conceived or surrogate children, specially the right to know their birth origins and be able to know who

111. The conference´s logo; Marta Pascual, IAYFJM´s President, during her conference; Secretary General Andrea Santos Souza, Tresorer Anne-Catherine Hatt and IAYFJM´s President, Marta Pascual

their biological parents are.

• Rights of children of incarcerated parents, where the principle of the child's best interests needs to inform decision-making when a parent is in the criminal justice system and facing incarceration

• The importance of OPAC was stressed– now developing guidelines to strengthen implementation and make the guidelines better known and more accessible, and ensure they are used.

• Legislation is vital but without challenging deeply embedded social norms and beliefs little will change on the ground. Urgent need for education and social transformation in attitudes.

• We also need better data on what is happening to children. Again, this needs to find out from children themselves. Maybe 20 years on we need another global study.

4) Emerging issues – globalization and political changes during these past three decades have given space to new issues that we now must approach:

a) Migrants - poverty, climate change and political conflicts have increased the number of migrant children. This population is, of course, more vulnerable to exploitation, extreme violence, separation from families, hunger, forcible recruitment into militia, trafficking, arbitrary detention, denial of family reunification. Some young migrants presented their stories and the huge challenges they face. It was discussed how to improve and strengthen opportunities for the voices of young migrants to be heard, in order to develop safe and effective strategies and services. It was also pointed out the importance of emphasize the positive dimension of migration – huge contribution they make to the recipient countries.

b) Terrorism and its impact on children - There are far too many children now growing up in situations of conflict and war with all the devastating harms and rights violations that such violence brings – numbers vary, but up to one in 5 or one in 6. A specific panel discussed the growing risk to children in these environments of grooming, recruitment and exploitation with the emerging technological advances heightening the scope and potential of armed groups to reach out and enlist children. It concluded that is not acceptable to pose a dichotomy between security and child rights. The conclusion was that is needed a focus on prevention to provide children with alternatives; investment in tackling those who recruit children and ways to grant rehabilitation and reintegration.

c) Digital developments – WWW has the same anniversary as the CRC and four billion people are now connected. One in three users is a child. The digital environment is having a huge impact on the lives of children around the world and it is not just about being online – rather we are all increasingly living in a digitalized world. Digital world affects virtually all rights, for example:

• Participation, freedom of expression and association, play, and culture, education, health, birth registration, issues for children with disabilities, non-discrimination

• Protection – the risks children can experience online are complex. They include: content (pornography, violence, suicide cultures, and hate); contact (grooming, extortion, extremist recruitment); and conduct (cyberbullying, harassment, incitement to harm). Privacy (problems arise with children's own sharing of data, parental use and abuse of children's data and images, surveillance in schools, and the tech companies harvesting data)

The challenge is how to balance all these rights, while seeking to provide protection, and not to close children's access to the digital world.

Conclusion

The Conference was extremely rich, and many other specific topics were discussed. Here we presented only those that are most presented in our daily procedures in the judiciary system.

The final thought is that the CRC still needs implementation in various aspects and that it has settled the roots to a rights-based approach to children when dealing with the new issues that technology and political changes present us today.

7.4. STUDY TOUR TO LONDON, ENGLAND – JUNE 2020

AYFJM´s former President, Avril Calder,

and Chronicle´s Editor in Chief, Eduardo Rezende Melo, in partnership with the International Visits & Information Manager of the Royal Courts of Justice, Chistopher Deighton, are organizing a 4 day study tour to London, England, beginning on June the 16th. The tour will include both Family and Youth Courts (probably East and West London Family Courts, the Family Division at the Royal Court of Justice and a youth court, may be at Highbury Mags).

All members have been invited for a pre inscription due to a limited number of people allowed in Court (9 persons). We had 20 members interested in joining the tour and the selection process will begin in the following weeks, as soon as all procedures are settled with the English Courts.

New study tours will be soon announced. Members who wish to organize a tour in their respective countries should make contact with the Editor in Chief on the following email address: IAYFJM-chronicle@gmail.com.

8. A REGIONAL PERSPECTIVE ON JUSTICE AND CHILDHOOD -NEWS FROM THE REGIONAL SECTIONS AND CONSULTIVE BOARDS

8.1.MEETING EUROPEAN SECTION OF THE IAYFJM AT OCTOBER 4TH 2019 IN SKOPJE (NORTH MACEDONIA)

By Aleksandra Deanoska[112]

Present: Isabelle Soenen (Belgium), Lana Peto Kujundzic (Croatia), Joseph Moyersoen (Italy), Margreeth Dam (the Netherlands), Aleksandra Deanoska and Olja Ristova (North Macedonia), Katarzyna Kosciow-Kowalczyk and Magdalena Arczewska (Poland), Anne-Catherine Hatt (Switzerland).

Three presentations were held by our Macedonian hosts and professor Gordana Lazetic:

-the Macedonian law on justice for children,

- the Macedonian juvenile system in practice

-the amendments in the law on Justice for children.

It became clear that there is a big gap between theory and practice. There is a lot to win in practice just by upholding the laws and rules and by investing in the quality and education from juvenile judges, prosecutors and lawyers. Lana suggested North Macedonia can follow the example of Croatia by starting an association for Youth judges to strengthen their influence on politics and government.

It also became clear that the youth or juvenile judge has little status among the other judges in North Macedonia and to place a judge in the youth section is sometimes a form of degradation. This lack of status was recognized by several participants and was suggested as topic for next year's meeting.

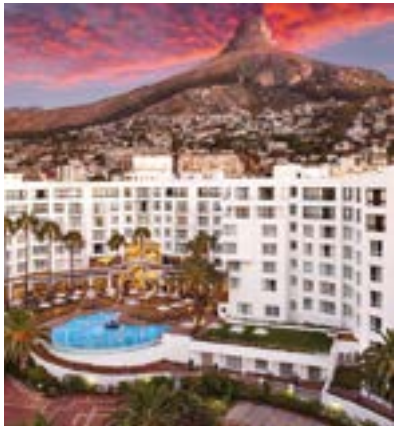
Training on judges for children. All the participants had filled in the questionnaires hand out by the Chronicle (and after that again by Aleksandra and Margreeth). Belgium is the only country where the (basic) training, with legal, pedagogical and psychological aspects for youth judges is mandatory. This is considered to be a good practice. Another good practice from Belgium is that their system of education is transparent, so that lawyers and other participants in the process can get informed by the curriculum of education from the judge.
All participants agree that a minimum standard should be that a basic multidisciplinary training is available for every youth judge and should not be limited to certain numbers of participants.

Implementation of the Guidelines. The participants do know that the guidelines have been hand out to officials, but do not know if they really use them. Croatia and Italy have had their associations translate the Guidelines so that all the people who work with these should be able to understand them.

Working language European Section. It is decided to use English as the working language of the European section because only a small part of the members is able to communicate in French. This requires a basic understanding of English for all the members of the European section. At the meetings their will allways be participants present who comprehend both English and French (as for example Isabelle Soenen and Alice Grunewald) and can help out those members who need help.

Meeting 2020, in 2020 the European section will meet in Warsaw (Poland) at the 2nd and 3rd of October. Everybody is grateful that the Polish members offer to organize the next meeting. Some topics that are mentioned for next year are NGO's, can we work together and if yes how, and the status of the youth judge.

8.2. STRENGTHENING ALLIANCES IN AFRICA – TOWARDS AN IAYFJM ´S REGIONAL SECTION. CONFERENCE IN SOUTH AFRICA – MARCH 2020



The organization of the Committee´s meeting in South Africa express a double challenge both for the Executive Council and the Chronicle´s editorial board: establishing a closer relationship with the members in different parts of the world and helping to organize a more solid structure in each region, able to contribute with the discussions and activities developed by IAYFJM.

With the support of the University of Western Cape, specially Professor Julia Sloth-Nielsen, and Miller du Toit legal office, IAYFJM will participate of the 23rd annual Family Law Conference in Cape Town, South Africa, from March the 11th till the 13th.

On March the 11th, there will be a study tour to local Court and a detention center for juveniles. It´s part of IAYFJM efforts to provide to their members the

112. Faculty of Law "Iustinianus Primus", University Ss.Cyril and Methodius, Skopje, Republic of North Macedonia

opportunity to have a closer knowledge and experience of different systems.
The conference (March the 12 and 13th) will focus on various important subjects such as the Hague Children's Conventions and the work of the Hague Conference on parentage/surrogacy; the intersection between domestic violence and international parental child abduction; LGBTQI rights and family law; Surrogacy and Alternative Reproduction; Children's Rights; customary law, among others.

IAYFJM will participate in a discussion on juvenile justice and will have a space for a meeting with African members, who are specially invited to attend in order to build the basis of a regional section of IAYFJM.

The meeting with the Committee will be on March the 13th at 11 a.m, in President Hotel.

For inscriptions look at
https://www.mdtcinc.co.za/conference/#register

9. AGENDA FOR UPCOMING EVENTS

9.1. OPEN FOR APPLICATIONS: MASTER OF LAWS (LL.M) – ADVANCED STUDIES IN INTERNATIONAL CHILDREN'S RIGHTS – LEIDEN UNIVERSITY

Universiteit Leiden
The Netherlands

The Department of Child Law is now welcoming applications for the upcoming academic year 2020-2021 of the LL.M. programme Advanced Studies in International Children's Rights at Leiden Law School (Leiden University) (the Netherlands), starting in September 2020. The programme is a small-scale international programme that provides in-depth specialization and teaches students how to respond to the increasing international, regional and national legal developments in relation to children. The programme is fit for legal professionals and graduates from all over the world, with a full law degree (offering access to legal practice) or with a degree at an equivalent level in another discipline with a sufficient background in or understanding of law. Visit our Facebook-page to learn more. Read our latest newsletter here.

9.2. OPEN FOR APPLICATIONS: MASTER OF LAWS (LL.M) – ADVANCED STUDIES IN INTERNATIONAL CHILDREN'S RIGHTS – LEIDEN UNIVERSITY

Universiteit Leiden
The Netherlands

Applications are welcome for the 2020 Frontiers of Children's Rights Summer School, taking place from 29 June - 3 July in Leiden and The Hague. This Summer School provides a comprehensive children's rights course, which takes a close look at contemporary children's rights issues from a legal perspective accompanied by reflections from other academic disciplines, legal systems, local perceptions and realities. This summer school is aimed at law students (who have completed at least three years of their degree), young graduates and professionals with a background in law. Applicants with a background in other relevant disciplines that are relevant to the theme of the summer school will be considered as well. The tuition fee for the Summer School is € 950. We offer a special early bird fee of € 800 to the participants who register before 1 March 2020.

9.3. CHILDREN'S ACCESS TO JUSTICE UNIVERSITY OF OTTAWA, MAY 21-22, 2020

LRIDE IRLRC

Access to justice has been a topic of concern in many countries. It has been over four decades since Cappelletti and Garth (1978) distinguished three waves of access to justice, and discussions have been ongoing since then in order to determine how to bring justice closer to people who need it. Questions related to access to justice are often dealt with from the point of view of costs related to judicial procedures, the complexity and the slowness of procedures, and the lack of available information. Justice is also of interest to children, who find themselves involved in judicial procedu-

res in different ways. Yet, efforts to improve people's access to justice generally ignore children and their particular problems. Problems often relate to the lack of adaptation of justice systems and procedures to children. For about ten years, efforts have been made at the international level, including the Council of Europe's Guidelines on Child-Friendly Justice (2010), the Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on Access to Justice for Children (2013), or the Committee on the Rights of the Child's General Comment No. 12 on The Right of the Child to be Heard (2009). While there are now multiple sources of recommendations on how to adapt justice for children, current efforts by researchers and practitioners remain limited and more questions still need to be asked. This conference, organized by the Interdisciplinary Research Laboratory on the Rights of the Child (IRLRC/LRIDE) and partner organizations, supports efforts in favour of children's access to justice, such as the Call for Action to achieve Sustainable Development Goal No. 16 for children. This conference seeks to define children's access to justice in a global way, by addressing current challenges, asking questions that have not yet been asked and by bringing new answers to existing problems. We are calling for proposals of papers that will be presented orally, and that will contribute to the widening of our understanding of access to justice as it concerns children.

FOR INFORMATION:

Line C. Bissonnette, M.A.Manager, International and Community Relations
Faculty of Law, Civil Law Section University of Ottawa
Fauteux Hall 57 Louis-Pasteur Private, Room 209 Ottawa, Ontario K1N 6N5

Telephone: 613-562-5800 extension 1736 Fax: 613-562-5121

E-mail: lbisson@uOttawa.ca

10. TREASURER'S COLUMN

Call for Subscription payments 2020

The General Assembly in Paris in May 2018 has agreed to adapt the annual subscriptions after 8 years. It is new: GBP 45; Euros 50; CHF 60 for the year 2019 for individual members.
May I take this opportunity to remind you of the ways in which you may pay:
1. by going to the website of the IAYFJM—click on membership then subscribe to pay online, using PayPal. PayPal will do the conversion to GBP;

2. directly to the following bank accounts:
GBP: to Barclays Bank, Sortcode 204673, SWIFTBIC BRCGB22, IBAN GB15 BARC 2046
7313 8397 45, Account Nr. 13839745
CHF: to St.Galler Kantonalbank, SWIFTBIC
KBSGCH22, BC 781, IBAN CH75 0078 1619
4639 4200 0, Account Nr. 6194.6394.2000
Euro: to St. Galler Kantonalbank, SWIFTBIC
KBSGCH22, BC 781, IBAN CH48 0078 1619
4639 4200 1, Account Nr. 6194.6394.2001
If you need further guidance, please do not hesitate to email me (treasurer@IAYFJM.org).

It is, of course, always possible to pay in cash if you should meet any member of the Executive Committee.
Without your subscription it would not be possible to produce this publication.
Thank you very much in advance!
Anne-Catherine Hatt, Treasurer IAYFJM

11. CONTACT CORNER

From	Topic	link
WHO (World Health Organization)	WHO Report on Disabilities	http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/index.html
Prison fellowship international Centre for Justice and Reconciliation (restorative justice on line)	Ministry of Justice New Zealand Reoffending Analysis for Restorative Justice Cases: 2008 and 2009	http://www.restorativejustice.org/10fulltext/ministryofjusticenewzealand2011/view
United Nations Human Rights Council	Report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict	http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/443/70/PDF/N1144370.pdf?OpenElement
Children and Justice During and in the Aftermath of Armed Conflict	http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_1957.pdf	
Resolution on sexual orientation and gender identity	http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G11/141/94/PDF/G1114194.pdf?OpenElemen http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/148/40/PDF/G1114840.pdf?OpenElement t	
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure		
draft programme for the 19th session of the Human Rights Council	http://www.crin.org/docs/Revised%20PROGRAMME%20OF%20WORK%2012-12-2011.pdf	
IDE Seminar		www.childsrights.org
ISPCAN International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect	12th Annual ISPCAN Global Institute: Preventing Child Exploitation and Abuse - Working with Children and Families Affected and Displaced by Disasters	http://www.ispcan.org/events/event_list.asp
Chadwick Center for Children and Families 23 – 26 January 2012	26th Annual San Diego International Conference on Child and Family Maltreatment	www.ChadwickCenter.org
Centre for the Study of Childhood and Youth, University of Sheffield 16 May 2012	'Exploring Childhood Studies in the Global South – Africa in Focus'	http://www.cscy.group.shef.ac.uk/events/index.htm
The Child Rights Information Network (CRIN)	CRIN's website offers child rights resources which include information in four languages (Arabic, English, French and Spanish).	Email: info@crin.org www.crin.org
Interagency Panel on Juvenile Justice (IPJJ)	Newsletter	newsletter@juvenilejusticepanel.org
International Juvenile	Website	http://www.ijjo.org

12. THE CHRONICLE – IAYFJM'S VOICE AND ITS EDITORIAL BOARD

The Chronicle is the voice of the Association. It is published bi-annually in the three official languages of the Association—English, French and Spanish. The aim of the Editorial Board has been to develop the Chronicle into a forum of debate amongst those concerned with child and family issues, in the area of civil law concerning children and families, and juvenile justice throughout the world.

As an expression of IAYJFM large representation in the world, with members in more than 60 countries, the Chronicle is an important portrait of the diversity of practices around the world to grant children´s rights, to improve the Judicial System in this field, always concerned with a deeper understanding of the rights of the child.

With the support of all members of the Association and their connections to research being undertaken in their own country into issues concerning children and families, or the preparation of new legislation, a great network has been built up for publication in forthcoming issues. All these contributors provide us with articles, new and good practices, bibliography reviews, case law and comments on new legislation.

Besides articles focusing general topics, each edition will have a space to develop a deepened analysis on a subject proposed by the Editorial Board, the Regional Consultative Council or any member.
Contributions from all readers are welcome. Articles for publication must be submitted in English, French or Spanish. Although the Editorial Board undertakes to have articles translated into all three languages—it would obviously be a great help if contributors could supply translations.

Articles should, preferably, be 2000 - 3000 words in length. Comments on those articles already published are also welcome. Articles and comments should be sent directly to the Editor-in-Chief in the following email (chronicle@IAYFJM.org). However, if this is not convenient, articles may be sent to any member of the editorial board at the e-mail addresses listed below, to whom we express our gratitude and recognition for its valued contribution to our Association.

Aleksandra Deanoska – Macedonia
(aleksandra_deanoska@yahoo.com)

Andrew Becroft – New Zealand
(a.becroft@occ.org.nz)

Gabriela Ureta – Chile
(gureta@vtr.net)

Jean Trépanier – Canada
(jean.trepanier.2@umontreal.ca)

Julia Sloth-Nielsen – South Africa
(jsloth-nielsen@uwc.ac.za)

Leonard Edwards – USA
(judgeleonardedwards@gmail.com)

Madan Lokur – Indis
(madanlokur@gmail.com)

Magdalena Arczewska – Poland
(Magdalena.arczewska@uw.edu.pl)

Mary Beloff – Argentina
(mabeloff@retina.ar)

Nadira Patherya – India
(patherya@gmail.com)

Taghreed Jaber – Jordan
(tjaber@penalreform.org)

Viviane Primeau – Canada
(viviane.primeau@judex.qc.ca)